

Manuel Aguilar Mora
Claudio Albertani
(coordinadores)



La noche de Iguala

y el despertar de México

Textos, imágenes y poemas contra la barbarie

Segunda edición

La noche de Iguala y el despertar de México

Textos, imágenes y poemas
contra la barbarie

Manuel Aguilar Mora
Claudio Albertani
(coordinadores)

La noche de Iguala y el despertar de México

Textos, imágenes y poemas
contra la barbarie

Textos de

Manuel Aguilar Mora • Claudio Albertani • Flaviano Bianchini
Ramón Espinosa Contreras • Carlos Fazio • Flor Goche
Enrique González Rojo Arthur • Luis Hernández Navarro
David Huerta • Rafael Miranda Redondo • Román Munguía Huato

Imágenes de

Norberto Hernández • Mario Marlo
Omar Reséndiz, *Chirín*



JUAN PABLOS EDITOR
México, 2015

La noche de Iguala y el despertar de México : textos, imágenes y poemas contra la barbarie / Manuel Aguilar Mora y Claudio Albertani, coordinadores. - - México : Juan Pablos Editor, 2015

1a edición

382 p. : ilustraciones ; 14 x 21 cm

ISBN: 978-607-711-300-3

T. 1. México - Participación política T. 2. México - Justicia
T. 3. Democracia - México T. 4. Derechos Humanos - México

JC421 N63

LA NOCHE DE IGUALA Y EL DESPERTAR DE MÉXICO
TEXTOS, IMÁGENES Y POEMAS CONTRA LA BARBARIE
de Manuel Aguilar Mora y Claudio Albertani (coordinadores)

Primera edición, julio de 2015

D.R. © 2015, Manuel Aguilar Mora y Claudio Albertani

D.R. © 2015, Ilustraciones de Norberto Hernández
y Omar Reséndiz (*Chirín*)

D.R. © 2015, Fotografías de Mario Marlo

D.R. © 2015, Juan Pablos Editor, S.A.
2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19
Col. del Carmen, Del. Coyoacán, 04100, México, D.F.
<juanpabloseditor@gmail.com>

Imagen de portada: Norberto Hernández

Diseño de portada: Daniel Domínguez Michael

ISBN: 978-607-711-300-3

Impreso en México
Reservados los derechos

Juan Pablos Editor es miembro de la Alianza
de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI)
Distribución: TintaRoja <www.tinraroja.com.mx>

ÍNDICE

Nota editorial	
<i>Manuel Aguilar Mora y Claudio Albertani</i>	13
La noche de Iguala y el despertar de México	
<i>Manuel Aguilar Mora y Claudio Albertani</i>	17

PRIMERA PARTE EL CRIMEN

Sobre los hechos de Ayotzinapa/Iguala. A propósito de los que sobran y el Estado terrorista	
<i>Carlos Fazio</i>	59
Desaparecidos: violencia, impunidad y terror de Estado. “México es una fosa clandestina”	
<i>Román Munguía Huato</i>	99
La matanza de Iguala y el Ejército	
<i>Luis Hernández Navarro</i>	123
Ayotzinapa y la voz de los padres	
<i>Luis Hernández Navarro</i>	127

SEGUNDA PARTE EL CONTEXTO

Ayotzinapa: la resistencia que se impone al exterminio	
<i>Flor Goche</i>	133

Mi vida en Ayotzinapa	
<i>Ramón Espinosa Contreras</i>	145
La noche de Iguala (fotografías)	
<i>Mario Marlo</i>	161
Guerrero entre la violencia y la pobreza	
<i>Ramón Espinosa Contreras</i>	169
Minería y violencia	
<i>Flaviano Bianchini</i>	181

TERCERA PARTE
EL MOVIMIENTO

El colapso de cierta “izquierda”	
<i>Manuel Aguilar Mora</i>	195
En defensa de l@s anarquistas	
<i>Claudio Albertani</i>	217
Anarquismo, provocación y protesta	
<i>Luis Hernández Navarro</i>	231
Cápsulas para salir del laberinto	
<i>Enrique González Rojo Arthur</i>	235
Ayotzinapa y la sociedad que queremos	
<i>Rafael Miranda Redondo</i>	253

ANEXOS
CRONOLOGÍAS

El regreso de la guerra sucia en México (1994-2014)	
<i>Claudio Albertani</i>	277
Las normales rurales y la lucha por la educación pública (1917-2015)	
<i>Claudio Albertani</i>	305
Crónicas de represión y resistencia (26 de septiembre de 2014-26 de junio de 2015)	
<i>Claudio Albertani</i>	323

POEMAS

Ayotzinapa	
<i>David Huerta</i>	357
Y vivos los queremos	
<i>Enrique González Rojo Arthur</i>	361
Posfacio. ¿Despertó México?	
Un balance de las elecciones del 7 de junio	
<i>Manuel Aguilar Mora y Claudio Albertani</i>	365
SOBRE LOS AUTORES	379

**¡VIVOS SE LOS LLEVARON
VIVOS LOS QUEREMOS!**



Norberto

*La verdadera calma sólo existe para aquellos
que conocen la mecánica del mundo
en marcha hacia los cataclismos,
de cataclismo en cataclismo.*

Víctor Serge

Blanca

NOTA EDITORIAL

*Dedicado a los estudiantes de Ayotzinapa
y de todas las normales rurales del país.
A los exterminados y a los desaparecidos,
pero también a los que
siguen vivos y resisten.*

Éste no es un libro académico. Tampoco es únicamente una denuncia inflamada de los hechos que han conmovido a México desde la noche del 26 de septiembre de 2014. Es, en primer lugar, un esfuerzo colectivo y plural para entender qué sucedió, más allá de la indignación inicial. ¿Por qué Ayotzinapa? ¿Por qué esa furia criminal contra los estudiantes normalistas? ¿Qué intereses están en juego? Y por otro lado: ¿qué futuro tiene el movimiento social que ha surgido en respuesta a la noche de Iguala? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? Estudiar, analizar y comprender los planes del poder; actuar en consecuencia: he aquí el horizonte en el que se inscribe nuestro esfuerzo.

Los dos coordinadores provenimos de tradiciones políticas distintas. Manuel Aguilar Mora es actualmente miembro de la organización marxista revolucionaria Liga de Unidad Socialista (LUS) y Claudio Albertani es un escritor y militante que reivindica la teoría y práctica política anarquista. Ambos nos respetamos mutuamente y aceptamos nuestras diferencias porque hemos coincidido en diferentes momentos y nos une la lucha contra la opresión y la explotación de los trabajadores. Ambos compartimos una convicción: México se en-

cuentra en un parteaguas y no habrá solución en el marco de las instituciones políticas actuales.

El ensayo “La noche de Iguala y el despertar de México” fija nuestras posiciones comunes y pretende ser una suerte de introducción general a los tres diferentes bloques que integran el libro.

En el primero, “El crimen”, Carlos Fazio analiza los hechos que nos ocupan en el contexto más amplio de las políticas terroristas del Estado mexicano, y Román Munguía Huato aborda sus antecedentes históricos. Hemos considerado pertinente añadir dos artículos de Luis Hernández Navarro, aparecidos originalmente en el periódico *La Jornada*, por tener un valor histórico, ya que se encuentran entre los primeros que denuncian sin tapujos el papel del ejército en el crimen de Iguala. Agradecemos a Luis habernos permitido incluirlos. En el segundo bloque, “El contexto”, el ensayo de Flor Goche trata el tema de la normal rural de Ayotzinapa desde la óptica del periodismo de investigación, mientras que Ramón Espinosa Contreras ofrece su testimonio como ex alumno de la escuela. En “Guerrero entre la violencia y la pobreza”, el mismo autor analiza la estructura socioeconómica de la entidad, y Flaviano Bianchini investiga la relación estructural que hay entre las compañías mineras —muy activas en Guerrero— y la violencia, tema muy poco abordado, que nos parece de enorme relevancia.

Más político, el tercer bloque aborda la situación actual del movimiento social desde la óptica personal de cada uno de los autores y el lector sabrá diferenciar las diversas posturas. Manuel Aguilar Mora analiza el estruendoso colapso de la izquierda institucional antes y después de la noche de Iguala. Luis Hernández Navarro (en un texto importante, también originalmente publicado en *La Jornada*) y Claudio Albertani discuten el tema candente de la violencia supuestamente anarquista; el poeta y escritor Enrique González Rojo nos comparte sus cápsulas, en las cuales, con el estilo sobrio y lapidario que le es propio, señala los grandes desafíos políticos del momento. Y por último, Rafael Miranda examina el movimiento a la luz de algunas experiencias del pasado, particularmente el 68 y los movimientos autónomos europeos.

La edición cuenta, asimismo, con dos estupendos poemas, escritos *ex profeso* a raíz de los hechos de Iguala: “Ayotzinapa”, de David Huerta, “Y vivos los queremos”, de Enrique González Rojo. En anexo, hemos añadido las cronologías recopiladas por Claudio Albertani: una sobre el regreso de la guerra sucia en México, otra sobre la historia de las normales rurales y otra más sobre los hechos que han sacudido al país entre el 26 de septiembre de 2014 y el 26 de marzo de 2015. Las fotos son de Mario Marlo, del colectivo *Somos el medio*, y las ilustraciones están a cargo de dos jóvenes artistas: el caricaturista Omar Reséndiz, *Chirín*, y el pintor muralista Norberto Hernández.

Manuel Aguilar Mora y Claudio Albertani
Abril de 2015



DESAPARICIÓN FORZADA



CHIRÍN

LA NOCHE DE IGUALA Y EL DESPERTAR DE MÉXICO

Manuel Aguilar Mora
Claudio Albertani

*Porque el hombre, cada hombre,
al igual que México, debe luchar sin tregua
por alcanzar las alturas.
¿Qué era la vida sino un combate
y el paso por el mundo de un extraño?
También la revolución ruge
en la “tierra caliente”
del alma de cada hombre.*

Malcolm Lowry

La noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, en Iguala, Guerrero, ocurrió un crimen atroz que —sin exageración— conmocionó a México y al mundo entero. Policías municipales de ese municipio, gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y de Cocula, regido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), agredieron y ametrallaron a un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, mientras realizaban una colecta. El saldo fue de seis muertos, tres normalistas y tres transeúntes, 25 heridos (dos de los cuales permanecen heridos de gravedad: Aldo Gutiérrez Solano, quien se encuentra hospitalizado con muerte cerebral, y Edgar Andrés Vargas) y 43 desaparecidos. En el más puro estilo mafioso, uno de los estudiantes asesinados, Julio César Mondragón, fue torturado, ejecutado y luego abandonado a pocos metros del lugar de la matanza, con el rostro desollado para que sus compañeros lo vieran. A pesar de que el gobierno se empecina en negar

lo, informes testimoniales e investigaciones independientes documentan que la policía estatal, la policía federal y el ejército también participaron activamente en la masacre. A través del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), al que tienen acceso fuerzas estatales y federales, militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y policías federales monitorearon desde el principio la ruta que seguían los normalistas y estuvieron al tanto de la persecución y cacería que sufrieron.

¡FUE EL ESTADO!

¿Cómo explicar una violencia tan desmedida contra muchos desarmados? Está, en primer lugar, el odio de las clases dominantes contra la educación pública en general y las normales rurales en particular. Herencia de la Revolución mexicana, dichas escuelas nacieron con el proyecto de ofrecer a las comunidades pobres del campo una educación digna, que ayudara al mejoramiento de sus vidas. El abandono progresivo de este modelo hizo que muchas de ellas desaparecieran y que las restantes (15 en total) lucharan por sobrevivir. En la actualidad, el gobierno, la iniciativa privada (en especial los grandes capitalistas) y los medios de comunicación masiva las tildan de vestigios del pasado y las acusan de detener las reformas privatizadoras, cuando no abiertamente de ser focos de guerrillas. Lo cierto es que en el sistema económico actual no hay lugar para los jóvenes y menos para jóvenes campesinos que quieren vivir una vida digna y libre.

En la cronología “Las normales rurales y la lucha por la educación pública (1917-2015)” mostramos que la violencia acompaña dichos establecimientos educativos prácticamente desde su fundación y que se ha recrudecido en los últimos tiempos. Uno de los puntos candentes es el presupuesto y, al igual que sus compañeros de otras regiones, los estudiantes de Ayotzinapa suelen completar los magros subsidios que les sigue otorgando el Estado con colectas para sufragar los gastos de investigación, transporte, hospedaje, medicinas,

etc., lo cual los expone a la furia represiva de los cuerpos policiales. Todavía está vivo el recuerdo de la masacre del 12 de diciembre de 2011, cuando dos jóvenes de la misma normal fueron arteralmente asesinados en Chilpancingo por corporaciones policiales estatales y federales. En esa ocasión cayeron los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; tres más fueron heridos por impactos de proyectil de arma de fuego y 24 fueron privados arbitrariamente de la libertad, hechos que hasta la fecha permanecen impunes.

Es claro, sin embargo, que la añeja violencia contra las normales no lo explica todo. Poco a poco fueron conociéndose más y más hechos que mostraban el panorama de una realidad pavorosa prevaleciente en todo el país, pero que en Guerrero, por su peculiar historia, se mostraba en una forma extrema y descarnada. El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), estaban coludidos con unos criminales llamados Guerreros Unidos que controlaban la policía municipal de varias regiones del estado y eran acusados de ser los autores materiales de la masacre del 26 de septiembre y de la desaparición forzada de los estudiantes.

La PGR conocía los vínculos de Ángeles Pineda con dicho grupo, ya que Salomón Pineda Bermúdez y María Leonor Villa Ortoño, padres de Ángeles, fueron detenidos el 6 de mayo de 2009, acusados de ser integrantes del cártel de los Beltrán Leyva. Después del asesinato de Arturo Beltrán Leyva, a manos de elementos de la marina en Cuernavaca, Morelos, el 16 de octubre de 2009, el cártel se fragmentó en diferentes bandas: Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barredora, el Cártel de la Sierra y el Cártel Independiente de Acapulco. Al frente de Guerreros Unidos quedaron los hermanos Salomón y Ángeles Pineda Villa, luego de que el primero fue detenido y sucesivamente liberado por “error” de un juez en Tamaulipas.¹

¹ Anabel Hernández, “Los Pineda Villa. El clan fundador de la mafia guerrerense”, *Proceso*, núm. 1918, 19 de octubre de 2014.

En mayo de 2013 la prensa local señaló al alcalde de Iguala como responsable del secuestro, tortura y asesinato de tres dirigentes de una organización social opositora, la Unión Popular Emiliano Zapata: Arturo Hernández Cardona, Ángel Román y Rafael Bandera. Sin embargo, frente a las protestas de los afectados, el entonces gobernador Aguirre Rivero, ex priísta pasado al PRD, hizo saber que apoyaba a Abarca y que no aceptaría “ningún tipo de presión política”. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, el procurador, Murillo Karam y las direcciones estatal y nacional del PRD, no podían ignorar hechos tan notorios. Tampoco es creíble que desconocieran que Abarca disponía de un grupo parapolicial integrado por unos cien elementos armados hasta los dientes. Asimismo, sus vínculos y los del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, con Guerreros Unidos eran de dominio público.

Por si fuera poco, el alcalde de Iguala ostentaba un historial de cuantiosas riquezas mal habidas que tendría que haber despertado suspicacia. Nacido en Arcelia, Guerrero, y procedente de una familia humilde, vendía huaraches y sombreros, hasta que se volvió un próspero comerciante de oro. Al momento de su detención, era dueño de 17 propiedades, además de seis puestos en el Centro Joyero de Iguala y un rancho en Cocula. En enero de 2008 anunció una inversión de 300 millones de pesos para la construcción de la Plaza Tamarindos, inaugurada ocho meses después, en octubre. Éste es el único y ostentoso centro comercial que hay en Iguala, mismo que cuenta con supermercado, salas de cine, tiendas de lujo y área de comida.² Para su construcción, el entonces gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, Rubén Figueroa, viejo cacique priísta del estado, y Lázaro Mazón, dirigente perredista, gestionaron ante la Secretaría de la Defensa

² “Hay 17 propiedades a nombre de José Luis Abarca Velázquez”, 10 de noviembre de 2014, disponible en <<http://aristeguinoticias.com/1010/mexico/iguala-el-alcalde-que-vendia-oro-y-construyo-su-plaza-comercial/>>.

Nacional (Sedena) la donación de un predio de cuatro hectáreas, ubicado justo frente al 27 Batallón.³

De manera que las autoridades estatales y federales fueron dos veces omisas: 1) porque dejaron que los Abarca actuaron con toda impunidad antes de la noche de Iguala, a pesar de conocer sus vínculos con la criminalidad organizada y 2) porque después del crimen, las primeras siguieron encubriéndolos y las segundas —concretamente la PGR— no intervinieron inmediatamente, lo cual dio a los asesinos la oportunidad de borrar sus huellas. El ex general Francisco Gallardo ha señalado, además, la estrecha relación entre los mandos locales del ejército y los ayuntamientos de Iguala y Cocula.⁴ Entre 2011 y 2014 estuvieron a cargo de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Cocula dos militares en retiro, el teniente Tomás Bibiano Gallegos, ejecutado por sicarios en noviembre de 2012, y el mayor Salvador Bravo Bárcenas, actualmente detenido por sus presuntos vínculos con la desaparición de los estudiantes normalistas. Un tercer militar, César Nava, subdirector de Seguridad Pública de ese ayuntamiento, también se encuentra detenido por los mismos hechos. En entrevista con Federico Mastrogiovanni, Gallardo añadió:

[...] fue el Ejército el que realizó la desaparición porque hicieron una maniobra militar. Yo platiqué al día siguiente con gente que presencié los hechos. Vinieron a mi oficina y platicaron conmigo. Estoy seguro que fue el Ejército, porque la policía en México está militarizada. [...] Todo este *show* —agarrar al presidente municipal, encontrar a un único culpable— es para que no se concentre la mirada en el Ejército.⁵

³ Ángel Cabrera, “Los Abarca tuvieron apoyo político para construir Galerías Tamarindos”, disponible en <<http://www.24-horas.mx/los-abarca-tuvieron-apoyo-politico-para-construir-galerias-tamarindos/>>.

⁴ José Francisco Gallardo Rodríguez, “La verdad: Ayotzinapa”, *Diarrio de Colima*, 5 de enero de 2015.

⁵ Federico Mastrogiovanni, “Caso Ayotzinapa. El Ejército participó en la desaparición de los normalistas: General Gallardo”, *Variopinto*, 18 de noviembre de 2014, disponible en <<http://www.revistavariopinto.com/nota.php?id=4292&rel=aldia&titulo=p-caso-ayotzinapa-el-ej-and>>.

Las declaraciones de Gallardo apuntan a que, al margen de su evidente naturaleza criminal, los dos sujetos podrían haber sido usados para encubrir a otros culpables. Y es que distintos testimonios involucran al ejército. El alcalde priísta de Cocula, César Miguel Peñaloza —detenido y sucesivamente liberado por la PGR— declaró ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que el comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, general Alejandro Saavedra Hernández, recomendó personalmente a los militares que ocuparon los cargos de director de Seguridad Pública de Cocula. Uno de los detenidos, Felipe Rodríguez Salgado, apodado *El Cepillo* —supuesto integrante de Guerreros Unidos y presuntamente uno de los autores materiales del crimen—, declaró que el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Vázquez, y el propio César Nava González, fueron quienes les entregaron a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre. Otros tres ex policías con pasado militar: Honorio Antúnez, Ignacio Hidalgo Segura y Wilber Barrios, también presos, prestaron servicio en el 27 Batallón de Iguala o en la 35 Zona Militar.⁶

Detenidos el 4 de noviembre, en la ciudad de México, los Abarca se encontraban prófugos desde el 30 de septiembre, cuando se esfumaron gracias a la complacencia de Aguirre Rivero. Hasta la fecha, la PGR no les imputa el delito de desaparición forzada —lo que implicaría admitir la responsabilidad del Estado—, sino únicamente los de secuestro, delincuencia organizada y homicidio. Por su parte, los padres de los 43 desaparecidos acusan al general Saavedra de haber ordenado a elementos del 27 Batallón mantenerse al margen de las agresiones que sufrieron los normalistas la noche del 26 de septiembre pasado. Es de señalar que ya había habido casos notorios de la participación del ejército en hechos atroces. El 22 de

ecute-rcitip-particip-and-oacute-en-la-desaparici-and-oacute-n-de-los-normalistas-general-gallardo-p>.

⁶ Alfredo Méndez, “Edil: mando de Sedena impuso los 2 últimos jefes policiacos en Cocula”, *La Jornada*, 30 de diciembre de 2014.

junio de 2014, en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México (muy cerca de la franja limítrofe con Guerrero, y no lejos de Iguala), se registró un enfrentamiento entre militares y una presunta banda de narcotraficantes que, según fuentes del gobierno mexiquense y la Sedena, dejó 22 muertos. Las notas periodísticas detallaban que los agresores formaban parte de una organización criminal denominada Guerreros Unidos, la misma que luego sería inculpada por los hechos de Iguala.

Si bien desde un principio algunos medios ventilaron sospechas sobre la credibilidad de la versión oficial, la verdad se supo meses después, gracias a la información de parientes de los ejecutados proporcionada a una revista estadounidenses. Los militares ejecutaron a las víctimas de manera extrajudicial y luego simularon un enfrentamiento repitiendo un guión ya empleado en otras ocasiones. Para colmo, la información comenzó a circular a nivel nacional unos cuantos días antes de los hechos de Iguala. El 26 de septiembre —¡el mismo día de la matanza de Iguala!—, *La Jornada* publicó en primera plana y a ocho columnas una fotografía en la que aparecen los cadáveres de dos de las víctimas de Tlatlaya, una menor de edad y un joven, que presentaban señales de haber sido asesinados con disparos a menos de 30 centímetros.

El escándalo fue mayúsculo y la espiral de violencia, muerte y acontecimientos ominosos no ha cesado, desde entonces, de afectar la imagen del país. Y mientras todo esto se conocía, surgían nuevos datos macabros que calentaban aún más el clima de exasperación y descontento. Y es que al buscar a los 43 desaparecidos, la policía comunitaria, la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), organizaciones independientes y los propios padres de familia fueron descubriendo decenas de fosas clandestinas en los alrededores de Iguala y Cocula con cientos de cadáveres sin nombre, personas que de la noche a la mañana no habían llegado a sus hogares, lo cual evidenciaba la terrible realidad que vive México.

LOS ENREDOS DE LA PGR

En una conferencia de prensa ofrecida el 7 de noviembre, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, afirmó que los 43 estudiantes habían sido secuestrados por la banda de sicarios mencionada, asesinados esa misma noche, incinerados, y sus cenizas echadas al río San Juan, en las inmediaciones de Cocula. Ésta era la pretendida “verdad histórica”, que el mismo funcionario reiteró el 28 de enero cuando, increíblemente, afirmó que el caso estaba resuelto. Ese día añadió lo siguiente: “Qué bueno que el ejército no salió a las calles de Iguala [...] porque hubiera sido peor”, declaración cínica, por parte de quien se ostentaba como jefe de la procuración de justicia federal.⁷ Por demás, ¿quién puede creer que el ejército —un ejército que tiene sitiado a Guerrero desde hace más de cuarenta años— no se haya percatado de un crimen tan horrendo, consumado en sus narices? ¿Quién puede creer que el 27 Batallón, ubicado en las inmediaciones del lugar de los hechos, y con un historial de represión largo y siniestro, no haya tenido noticia de nada?

¿Qué ocurrió en realidad? Orientarse en el mar de información existente no es fácil, pues trozos de verdad se mezclan con mentiras groseras: nada más al digitalizar la palabra “Ayotzinapa” en el buscador de Google, el resultado alcanza ¡12 900 000 entradas! Aun así, hay algunos puntos firmes gracias a los testimonios de los sobrevivientes y a las valientes investigaciones de periódicos y sitios independientes como *La Jornada*, *El Sur de Acapulco*, *Proceso*, *Contralínea*, *Desinformémonos*, *Animal Político*, *Sin Embargo*, entre otros.⁸ La

⁷ Gustavo Castillo García, “Guerreros Unidos asesinó a los 43 normalistas: Murillo”, *La Jornada*, 28 de enero de 2015.

⁸ La reconstrucción que sigue se basa especialmente en las siguientes fuentes: las crónicas del periódico *El Sur de Acapulco* de los días 27 y 28 de septiembre; Marcela Turati, “Inacción militar que olió a complicidad”, *Proceso*, núm. 1984, 9 de noviembre de 2014, y el informe al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU redactado con fecha 8 de enero de 2015 por el Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan”; el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Mo-

tarde del 26 de septiembre, un centenar de estudiantes de primer semestre salieron de la normal Isidro Burgos con rumbo a la ciudad de Iguala. Viajaban en tres autobuses que habían “tomado” con el objetivo de hacer actividades de boateo, llevar a cabo prácticas de campo en la costa y acudir a la manifestación del 2 de octubre en la ciudad de México. Es necesario precisar que la “toma” de camiones es una práctica relativamente común que los estudiantes suelen realizar de manera pacífica y, a menudo, con el acuerdo tácito de los choferes.

Hacia las 19 horas, los muchachos —todos entre los 18 y los 22 años— llegaron sin novedad a la central de autobuses de Iguala, en donde después de haber realizado sus actividades, tomaron otros tres camiones para regresar a Chilpancingo. Mientras tanto, la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, presentaba su informe en calidad de presidenta del DIF de Iguala. Pretendía postularse como la sucesora de su marido por el periodo 2015-2018 y había organizado una fiesta. La acompañaba el propio Abarca y varios funcionarios entre los que destacaba el coronel de caballería Juvenal Mariano García, cuya silueta se aprecia en la foto publicada por *Proceso*, núm. 1984. Algunas fuentes señalan que los normalistas venían a boicotear el evento por orden de Los Rojos, un cártel rival de Guerreros Unidos, lo cual es absurdo, pues cuando los muchachos llegaron a la ciudad, el informe ya había concluido. Otros alegan que uno de los camiones secuestrados llevaba oculto un cargamento de 35 kg de goma de opio que habría sido depositado en la unidad para ser enviado a la frontera norte, algo que es imposible de demostrar, pues nunca se encontró nada.

El informe de Pineda concluyó a las 20:30 horas; entonces empezó el baile, escribe Marcela Turati, reportera de *Proceso*.

relas y Pavón, A.C.; la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), <<http://www.tlachinollan.org/informela-desaparicion-forzada-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-frente-al-ced/>>.

Hacia las 21:00 los camiones con los estudiantes transitaban por la calle Juan Álvarez, frente a la tienda Bodega Aurrerá, en el Periférico Norte. De repente, varias patrullas municipales cerraron su paso, disparando con armas de alto poder, al tiempo que llegaban más de 30 agentes que se apostaron en posición de tiro en distintas direcciones. Cuando los estudiantes descendieron de los autobuses, Aldo Gutiérrez Solano cayó gravemente herido (en la actualidad sigue con muerte cerebral) y murió Daniel Solís Gallardo. Uno de los sobrevivientes mencionó que alcanzó a identificar las patrullas 018, 020, 027 y 028. Se inició entonces la desbandada y los hechos se vuelven más confusos. Sin embargo, los muchachos lograron comunicarse por celular con sus compañeros y una delegación del comité estudiantil salió enseguida hacia Iguala.

Hacia las 23:30, cuando grupos de normalistas y maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) improvisaban una conferencia de prensa en la calle, llegó una camioneta de la que descendieron varios policías con el rostro cubierto disparando con armas largas. En ese momento murieron el normalista Julio César Ramírez Nava, Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer de un autobús que conducía al equipo de fútbol Los Avispones a Chilpancingo, el jugador David Josué García Evangelista, de tan sólo 15 años y Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi colectivo que pasaba por el rumbo. La balacera duró unos 15 minutos. Los sobrevivientes empezaron a correr en diferentes direcciones y varios de ellos se refugiaron en casas particulares. Es cuando ocurrió la detención de los 43 por parte de policías (*policías*, no sicarios de Guerreros Unidos) de Coacahuacán, municipio, como ya señalamos, gobernado por el PRI, lo cual indica que diferentes actores políticos estuvieron involucrados en el crimen.

A unos 500 metros de donde ocurrió el primer ataque fue encontrado a las 11 de la mañana del día siguiente el cuerpo desollado de otro estudiante, Julio César Mondragón, a quien sus compañeros llamaban *El Chilango*, padre de una niña recién nacida. Unos sobrevivientes relataron a Turati que en-

contraron a dos batallones cuando llevaban a uno de los heridos, el estudiante Edgar Andrés Vargas, al hospital privado Cristina para solicitar que lo atendieran. El médico de guardia se negó y llamó a los policías municipales para que detuvieran a los jóvenes, pero en su lugar llegaron unos 20 soldados. En otras palabras, el ejército no salió cuando se escucharon los disparos, pero sí acudió cuando el doctor llamó al 066 para denunciar que unas personas habían ingresado a la clínica. Los militares llegaron apuntando con sus armas y, acto seguido, sometieron a los estudiantes, los fotografiaron para ficharlos, anotaron sus nombres y les dijeron: “Ustedes se lo buscaron”. Los hechos no dejan lugar a dudas: los militares agredieron a los estudiantes y, además, impidieron que los heridos fueran atendidos.

En un video grabado por celular se aprecian las voces de normalistas gritando a los policías: “¡No disparen, no tenemos armas! ¡No somos narcotraficantes!”. Del otro lado no se oye ninguna respuesta. Posteriormente, los muchachos piden una ambulancia, sin duda para Edgar Andrés. En vano.⁹ “Los policías sabían que eran estudiantes a los que estaban masacrando y no se detuvieron, al contrario, los persiguieron para matarlos, no paraban de disparar, aparecieron de la nada”, expresó el mismo día 27 el normalista Guillermo Hernández Castro al *Sur de Acapulco*. Otro testigo presencial, Omar García, declaró a Carmen Aristegui que, en ese mismo momento, intentó enlazarse con periodistas locales, pero todos contestaron que no podían llegar porque la presidencia municipal y policías estatales no les dejaban pasar, lo cual es otra evidencia de que sí hubo una conspiración que involucró a diferentes actores. Y añade: “A Julio César Mondragón lo desollaron porque, al ser agarrado vivo, tuvo el valor de escupirles en la cara. Un compañero lo vio, pero no quiere dar su nombre, por temor a represalias”. ¿Qué hizo el ejército durante las dos horas que corren entre la primera y la

⁹ “Dramático video de estudiantes de Ayotzinapa”, disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=qfdYUh2b8Ls>>.

segunda balacera? “Nada. Porque eran cómplices de los policías asesinos”, sentenció Omar.¹⁰

Existen otros dos testimonios importantes. El primero es el de un automovilista que declaró que esa noche militares y policías federales retenían a todos los autobuses de pasajeros y vehículos particulares en la entrada a Iguala por la autopista. Esto muestra que, contrario a las afirmaciones del procurador, el gobierno sí tenía conocimiento de los ataques de la policía municipal, pues las fuerzas federales acordonaron el área para impedir la presencia de testigos, mientras en la ciudad ocurrían los hechos de sangre. Aun así, el comandante del 27 Batallón de Infantería del Ejército, coronel José Rodríguez Pérez, tuvo el valor de afirmar que sólo tuvieron noticias de los acontecimientos al último momento, cuando el crimen ya se había consumado.¹¹

El segundo es de Rafael López Catarino, padre de Julio César López, uno de los desaparecidos, quien aseguró que de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.¹² En el mismo sentido va el citado reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher, quienes, sobre la base de testimonios, videos tomados con los celulares de los normalistas, declaraciones ministeriales y documentos de juzgados, muestran que la Policía Federal participó activa y directamente en el ataque contra los jóvenes. “El ataque —concluyen— fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la Escuela, y 10 eran activistas políticos en formación del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI)”.¹³

¹⁰ “La verdad al descubierto. ¿Quién mató a los normalistas?”, disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=HPgljfbS5k>>.

¹¹ “El Ejército estuvo en Iguala y no evitó el ataque y la desaparición de los normalistas, dice un testimonio”, 15 de octubre de 2014, disponible en <<http://suracapulco.mx/archivos/216543>>.

¹² Shaila Rosagel “Padres de los 43 irrumpen en cuartel”, 12 de enero de 2015, disponible en <<http://www.sinembargo.mx/12-01-2015/1216504>>.

¹³ Anabel Hernández y Steve Fisher, “La historia no oficial”, *Proceso*, núm. 1989, 14 de diciembre de 2014.

Las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), un organismo independiente invitado por la propia PGR a asistirle, propinaron otro golpe a la versión oficial. En un documento fechado el 7 de febrero de 2015, el EAAF, que goza de una gran reputación internacional, denunció varias irregularidades. En primer lugar, las imágenes satelitales del basurero en llamas, con los supuestos cadáveres de los estudiantes, no correspondían a la fecha de los hechos y, por si fuera poco, los restos humanos encontrados podrían no pertenecer a los normalistas, ya que su recolección por parte de la PGR se llevó a cabo fuera de los acuerdos establecidos. A la postre, las conclusiones del EAAF resultaron demolidoras para el gobierno: las supuestas “pruebas” no probaban nada, faltaba procesar una gran cantidad de evidencia y mientras tanto no se podía llegar a ninguna conclusión. Se necesitaba mayor tiempo para analizar los restos óseos y toda la evidencia asociada con ellos, lo cual llevaría varios meses más de trabajo.

Dos acreditados académicos, Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, manifestaron, por su parte, que la posibilidad de que los estudiantes desaparecidos hubiesen sido cremados en el basurero de Cocula era nula. Tras señalar que en los terrenos aledaños no se encontraron restos de ADN, como sangre, cabellos o pedazos de piel, los dos científicos calcularon que para incinerar los 43 cuerpos se hubiesen requerido 33 toneladas de leña de cuatro pulgadas de diámetro o 995 neumáticos, para lo cual se hubiesen necesitado 540 metros cuadrados, un espacio 10 veces más grande que el señalado. La pira, además, habría tenido dimensiones tales que no podría haber pasado desapercibida en toda la región. Hay que añadir que esa noche llovía, lo cual hace todavía más improbable la versión oficial.

En entrevista con Sanjuana Martínez, Montemayor y Vélez afirmaron que de existir dicha incineración, tendría que haber tenido lugar en los hornos crematorios del propio ejército. Frente a las refutaciones de la Sedena, la reportera obser-

vó que la propia dependencia ofrece servicios de incineración a sus empleados, a través de su página de internet, y Gallardo certificó que vio uno a espaldas de la cocina de la prisión del Campo Militar Número Uno.¹⁴ Así las cosas, los familiares de los desaparecidos exigieron que el gobierno abriera las puertas de los cuarteles para investigar directamente el papel de los militares. Sucedió entonces algo inaudito. Sin que nadie se lo preguntara, Enrique Solana, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, declaró que rechazaba enfáticamente la apertura de los cuarteles, y lo mismo hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.¹⁵ La cúpula empresarial cerraba filas en torno al ejército mostrando que la casta gubernamental enriquecida y directamente vinculada con el gran capital necesita cada vez más de la custodia militar para mantenerse en el poder.

El “Día del Ejército” (19 de febrero) fue más bien lúgubre, ya que tanto el presidente Enrique Peña como el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, no tuvieron más remedio que hacer alusión al desprestigio de las fuerzas armadas. El primero tuvo que aclarar que la honorabilidad del Ejército “está por encima de cualquier sospecha de duda”, y el segundo intentó una inverosímil defensa de los soldados acusados de violar los derechos humanos afirmando que “en ocasiones se nos ha señalado sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias, para tratar de desprestigiarnos y con ello dañar la confianza en nosotros depositada”.¹⁶

El gobierno sufrió más reveses. Los principales organismos defensores de los derechos humanos exigieron al gobierno más seriedad en las investigaciones y en el castigo a los cul-

¹⁴ Sanjuana Martínez, “Los 43 pudieron haber sido incinerados en crematorios del Ejército”, *La Jornada*, 4 de enero de 2015, y “Sí hay crematorios en las instalaciones del Ejército, afirma el general Gallardo”, *La Jornada*, 11 de enero de 2015.

¹⁵ Juan Carlos Miranda, “La IP no permitirá que padres de los 43 entren en sedes del Ejército”, *La Jornada*, 14 de febrero de 2015.

¹⁶ Jesús Aranda y Rosa Elvira Vargas, “Hay quienes buscan desprestigiar al Ejército, advierte Cienfuegos”, *La Jornada*, 20 de febrero de 2015.

pables. Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) se involucraron de inmediato lamentando que el caso no se abordara como desaparición forzada, calificando de irresponsable su cierre y exigiendo a la PGR tomar en consideración la probable participación del ejército. Perseo Quiroz, representante de AI en México, consideró lamentable que el gobierno intenté deslegitimar las demandas de los padres presentándolos como violentos e intransigentes.¹⁷ El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) —un tribunal ético, no gubernamental, que se encarga de denunciar las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos— sesionaba en México durante los días del crimen de Iguala. Su audiencia final contó con el testimonio de tres representantes de los estudiantes desaparecidos y el veredicto fue demoledor:

En ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.¹⁸

Lo peor vino de las agencias oficiales. La Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea cuestionó la veracidad de las investigaciones, exigió a las autoridades mexicanas no darlas por concluidas y propuso que parte de los recursos que la UE destina a México se utilizaran para llevar a cabo una investigación independiente y proteger a los sobrevivientes de la masacre.¹⁹ Por su parte, la Comisión Interamericana de

¹⁷ *La Jornada*, 23 de enero de 2015; Fernando Camacho Servín, “Irresponsable y preocupante el cierre del caso, dicen HRW y AI”, *La Jornada*, 29 de enero de 2015.

¹⁸ Véase el texto completo en <<http://www.tppmexico.org/wp-content/uploads/2014/11/Sentencia-final-TPP-Cap%C3%ADtulo-México.pdf>>.

¹⁹ Ciro Pérez Silva, “Verdad oficial sobre Ayotzinapa no convence al Parlamento europeo”, *La Jornada*, 6 de febrero de 2015.

los Derechos Humanos envió un equipo de expertos independientes que después de una acuciosa investigación llegó a la conclusión de que el caso de los estudiantes normalistas debería de ser indagado como desaparición forzada —lo cual implica la responsabilidad del Estado— y no sólo como secuestro y homicidio atribuible a la delincuencia organizada.²⁰

El asunto llegó hasta Naciones Unidas, en donde México fue sancionado por los dos organismos más importantes en el rubro de los derechos humanos: el Comité contra las Desapariciones Forzadas —CED, por sus siglas en inglés— y el Comité contra la Tortura, CAT. Después de haber escuchado el testimonio de los padres de familia, el CED sentenció que la desaparición de personas es un fenómeno generalizado en México, que ocurre en gran parte del territorio y que en muchos casos se lleva a cabo con la complicidad de los servidores públicos. Juan Méndez, relator del CAT, afirmó que la tortura también es una práctica generalizada en México, no sólo por la cantidad de casos reportados, sino por el patrón de detenciones arbitrarias, violencia, ocultamiento e impunidad, atribuible a servidores públicos de todos los niveles. Como era de prever, el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores rechazaron *categóricamente* dichas recomendaciones aduciendo que, según ellos, “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”. Una vez más, el gobierno había quedado en ridículo.

¿JAQUE AL REY?

La noche de Iguala ha cambiado radicalmente la realidad política de México. El principal afectado es el presidente Enrique Peña Nieto, quien antes del 26 de septiembre había logrado un alto nivel de aceptación en los medios financieros nacionales e internacionales apareciendo en la portada de la revista *Time* con un rostro radiante junto al título: “Salvando

²⁰ Fernando Camacho Servín, “El tema Ayotzinapa, desaparición forzada: expertos de la CIDH”, *La Jornada*, 20 de marzo de 2015.

a México”.²¹ Hasta entonces el discurso oficial se había fincado en las maravillas del Pacto por México entre el “centrista” Partido Revolucionario Institucional (PRI), el “derechista” Partido Acción Nacional (PAN), y el “izquierdista” Partido de la Revolución Democrática (PRD). Recordemos que —como señala Jaime Avilés— gracias a ese pacto, Peña vendió Pemex con el apoyo del PAN y puesto que Pemex aportaba 40 centavos de cada peso que gastaba el gobierno, para tapar ese hoyo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, subió los impuestos, con el apoyo del PRD, y contrató deuda pública adicional.²²

Destacaba, entre los goles anotados por el gobierno, la aprobación en el Congreso de la Unión del paquete de las llamadas “reformas estructurales de tercera generación”, tan demandadas por el capital nacional y extranjero, en los rubros de la energía, las comunicaciones, el trabajo y la educación. Empleando el lenguaje de la mercadotecnia política, vivíamos en pleno *Mexican moment*. El 23 de septiembre de 2014, a sólo tres días de la noche de Iguala, el rabino Arthur Schneider, de la Fundación Appeal of Conscience, entregó a Enrique Peña Nieto el Premio Estadista Mundial 2014, por “su sólido liderazgo, su visión innovadora, su participación en la responsabilidad y el compromiso con el desarrollo económico y social, la paz y la cooperación internacional e intercultural basada en los derechos humanos de la libertad y la tolerancia”.²³

A partir del día 27, el espejismo se esfumó y la credibilidad del presidente fabricado por Televisa también. Todos los actos de Peña Nieto parecían orientados a mostrar una incompetencia descomunal, insensibilidad y crudo cinismo. Durante más de una semana, la justicia federal consideró la tragedia de los 43 desaparecidos como un mero asunto de “carácter

²¹ Patrick Witty, “Saving Mexico. How Enrique Peña Nieto’s sweeping reforms have changed the narrative in his narco-stained nation”, *Time Magazine*, 24 de febrero de 2014.

²² Jaime Avilés, “Príncipe y mendigo”, 5 de marzo de 2015, <<https://desfiladero132.wordpress.com/>>.

²³ Citado en Roberto González Villarreal, *Ayotzinapa. La rabia y la esperanza*, México, Terracota, 2015, p. 114.

local”, responsabilidad de la policía de Iguala. Después, cuando en forma tardía la Procuraduría General de la República (PGR) resolvió atraer el caso, el gobierno incurrió en maniobras de una torpeza inaudita con el único afán de encuadrar el papel de la policía federal y —como ya señalamos— ante todo, del ejército, un guión que ya se había ensayado en el caso de Tlatlaya (y que se volverá a repetir en enero de 2015, con la matanza de 16 personas en Apatzingán).²⁴ A pesar de todo esto y más, el presidente optó por emprender un viaje a China y a Australia exponiéndose a una nueva andanada de repudio. El influyente diario francés *Le Monde*, por ejemplo, publicó una serie de artículos resaltando las numerosas marchas en la ciudad de México con el título significativo de “Re-vuelta contra el *Estado mafioso* en México”.²⁵

En medio de la agitación y la cólera desatadas por los crímenes de Tlatlaya e Iguala, la ira subió a niveles aún mayores cuando el noticiero de Carmen Aristegui denunció que el presidente y su esposa, Angélica Rivera, ocuparían una mansión —pronto conocida como la “Casa Blanca”— situada en uno de los barrios más elegantes de la ciudad de México y con un valor superior a los siete millones de dólares. Para colmo, la mansión resultó ser propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, perteneciente al Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú. Éste fue el principal contratista cuando Peña era gobernador del Estado de México, luego rentó helicópteros al PRI para la campaña presidencial de 2012 y por último ganó, junto con China Railways, la multimillonaria licitación del Tren de Alta Velocidad de Querétaro, uno de los proyectos más ambiciosos del sexenio actual. La difusión de esta información y de otras relacionadas con escándalos gubernamentales llevó a la rescisión del contrato de Aristegui —una de las pocas periodistas independientes de la radio— con MVS Noticias, lo cual dio pie a una nueva anda-

²⁴ Laura Castellanos, “Las ejecuciones de Apatzingán: policías federales, los autores”, *Proceso*, núm. 2007, 18 de abril de 2015.

²⁵ Frédéric Saliba, “Révolte contre l’«Etat-mafia» au Mexique”, *Le Monde*, 22 de noviembre de 2014.

nada de juicios negativos sobre el gobierno mexicano en la prensa mundial.²⁶

Los escándalos no paraban. El diario estadounidense *The Wall Street Journal* dio a conocer que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, poseía una mansión en Malinalco, también adquirida a Hinojosa Cantú. Más tarde, el mismo medio reveló que, en 2005 —cuando era gobernador del Estado de México—, Peña Nieto había comprado una casa en un exclusivo club de golf de Ixtapan de la Sal, propiedad de Roberto San Román Widerkehr, un empresario que recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares durante su sexenio.²⁷ CNN señaló que, de los 25 integrantes del gabinete presidencial, 21 poseen en conjunto 102 propiedades y, de los cuatro miembros del gabinete restantes, uno no hizo públicos sus datos patrimoniales —Jesús Murillo Karam— y tres no reportaron información de inmuebles a su nombre: Aurelio Nuño Mayer, jefe de la Oficina de la Presidencia; Rosario Robles Berlanga, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y Juan José Guerra Abud, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).²⁸

A principios de febrero, *The New York Times* denunció que el ex gobernador de Oaxaca, José Murat y su hijo Alejandro —respectivamente, coordinador legislativo del Pacto por México y director del organismo de vivienda, Infonavit (además de haber sido miembro del equipo de transición de Peña)— resultan ser dueños de lujosos departamentos conseguidos de modo nada transparente, en Manhattan, en un condominio cuyos propietarios son, en gran parte, extranjeros que han

²⁶ El 16 de marzo, *The New York Times* publicó una nota de Randal C. Archibold: “Mexican journalist is fired after report about First Lady”, disponible en <http://www.nytimes.com/2015/03/17/world/americas/mexican-journalist-is-fired-after-report-about-first-lady.html?_r=0>.

²⁷ Juan Montes, “Mexico finance minister bought house from government contractor”, *The Wall Street Journal*, 11 de diciembre de 2014, y “Mexico leader under new scrutiny”, 20 de enero de 2015.

²⁸ José Roberto Cisneros Duarte, “La casa de Malinalco de Videgaray y más de 100 propiedades del gabinete”, disponible en <<http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2014/12/15/la-casa-de-malinalco-de-videgaray-y-las-otras-100-propiedades-del-gabinete>>.

hecho su dinero fuera de Estados Unidos y han sido objeto de investigaciones.²⁹

Una consecuencia inmediata de esta ola de escándalos ha sido que el proyecto de tren rápido entre la ciudad de México y Querétaro, ya contratado con las mencionadas constructoras, se canceló fulminantemente, para enojo de los capitalistas orientales. Otros dos proyectos igualmente cuestionados, el acueducto que llevaría agua del río Pánuco (Veracruz) al área metropolitana de Monterrey —una obra costosísima e inútil, también encargada a la empresa Higa— y el nuevo aeropuerto de la ciudad de México que, de construirse, devastaría la zona lacustre del lago de Texcoco, correrán probablemente con la misma suerte. Así las cosas, el propio Peña no tuvo más remedio que reconocer —en una entrevista al diario británico *Financial Times*— que su gobierno enfrenta una pérdida de confianza y que en México florecen la incredulidad, la sospecha y la duda ante las acciones y los discursos oficiales.³⁰

De manera que, en tan sólo seis meses, el presidente de México se convirtió de héroe en villano de los principales medios de comunicación que cuentan en el nivel internacional, mismos que le reclaman no solamente la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa, sino también la inocultable corrupción de su régimen. El resultado es claro. El grupo gobernante, con Peña Nieto a la cabeza, se hundió en profundidades de impopularidad y desprestigio, como pocas veces se ha visto en la política mexicana. Si comparamos el desempeño de Peña Nieto con el de Carlos Salinas de Gortari —uno de los presidentes más odiados de los tiempos recientes—, está claro que, a dos años de su toma de posesión, este último

²⁹ Louise Story y Alexandra Xanic von Bertrab, “Una familia mexicana conectada al PRI, y con propiedades en los Estados Unidos”, *The New York Times*, edición digital en español, 10 de febrero de 2015, disponible en <http://www.nytimes.com/2015/02/11/nyregion/una-familia-mexicana-conectada-al-pri-y-con-propiedades-en-los-estados-unidos.html?_r=0>.

³⁰ Jude Webber, “Mexico plagued by ‘incredulity and distrust’, admits president”, *The Wall Street Journal*, 2 de marzo de 2015.

había logrado afianzarse en el poder; el actual mandatario, en cambio, ha perdido toda legitimidad, tanto en el interior como en el exterior, lo cual da pie a una situación política inédita.

Las repercusiones internacionales del desprestigio del gobierno mexicano llegaron a nuevas cumbres a finales de febrero de 2015 con motivo de los comentarios de Alejandro González Iñárritu, el popular cineasta mexicano. “Ya no es que los gobiernos sean parte de la corrupción, sino que el Estado es la corrupción”, aseveró, y al recibir el Oscar en Hollywood como director de la mejor película del año, insistió, volvió sobre el tema al afirmar que “México no tiene el gobierno que merece”. Poco común en esos medios, la declaración fue escuchada por cientos de millones de espectadores en todo el mundo. Incluso un personaje que sabe medir sus palabras, como el papa Francisco, escribió a un legislador argentino que en México “la cosa es de terror” y “ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización (de Argentina)”. Estas palabras trascendieron a la opinión pública y provocaron tal molestia al gobierno de Peña Nieto que su secretario de Relaciones Exteriores cometió la torpeza de tomarlas como declaraciones oficiales y pidió oficialmente explicaciones al Vaticano por ellas.

A todo esto hay que añadir los escándalos que afectan al resto de la (muy desprestigiada) clase política mexicana. Tan sólo para citar los ejemplos más candentes: el ex gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y su hermano Carlos Mateo (conocido como el “Señor 20 por ciento”, pues ése era el porcentaje que pedía a los empresarios para obtener contratos de obra pública del gobierno estatal) son inculcados de fraudes multimillonarios; el gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés —el mismo que mantiene encarcelados a Mario Luna y Fernando Jiménez Gutiérrez, líderes yaquis falsamente acusados de secuestro y cuyo único delito es luchar contra un acueducto que despojaría a su pueblos del vital líquido—, y su hermano Miguel, son acusados de recibir millones de dólares de un empresario ligado a compañías que ganaron contratos del gobierno, y el Partido Verde

Ecologista difunde impunemente anuncios publicitarios ilegales que ponen en entredicho la imparcialidad del recién estrenado Instituto Nacional Electoral (INE).³¹

¿POR QUÉ?

La pregunta sigue obsesionando a millones de personas y a nosotros también: ¿por qué un crimen tan espantoso? ¿Cómo explicar el artero asesinato de seis personas y la desaparición de 43 más? Nosotros no pretendemos tener una respuesta concluyente, pero sí podemos acercarnos a ella. Sabemos, por ejemplo, que el gobierno y la PGR mienten. Sabemos que la pretendida “verdad histórica” no es más que un burdo montaje. Y sabemos que estamos frente a un crimen de Estado, probablemente el más aberrante desde la matanza de Tlatelolco en 1968. Aun así, quedan muchas dudas. La noche de Iguala, ¿es tan sólo un episodio más de la terrible narcoguerra mexicana? Y si no, ¿de qué se trata?

Es necesario asentar, una vez más, que estamos frente a un crimen de desaparición forzada, lo cual evidentemente involucra al Estado mexicano en su conjunto y no solamente a los gobiernos municipales de Iguala y de Cocula. En *Ayotzinapa, la rabia y la esperanza* —un libro notable, el primero que a nuestro entender se escribió sobre el crimen de Iguala—, Roberto González Villarreal se pregunta: ¿qué es la desaparición? Y contesta:

[...] un conjunto de acciones, de técnicas, de procedimientos, de saberes e instituciones que tiene como objetivo desaparecer al adversario, de borrarlo de los circuitos políticos. [...] La desaparición es una tecnología eminentemente política, racional, burocrática. No se produce por los excesos de policías y militares, sino por las disposiciones y las acciones

³¹ Ezequiel Flores Contreras, “El hermano incómodo de Ángel Aguirre. El señor del 20%”, disponible en <<http://www.proceso.com.mx/?p=395608>>; José de Córdoba, “Mexico investigating opposition governor of Sonora”, *The Wall Street Journal*, 5 de marzo de 2015.

de los agentes de seguridad y oficinas burocráticas. Y, sí, sobre todo por las decisiones estratégicas de los políticos en una contienda.³²

La desaparición forzada es parte del cruel arsenal de la llamada guerra sucia, una guerra en la que el escenario principal no es el campo de batalla, sino el frente interno. En los años setenta del siglo pasado, el objetivo principal eran las guerrillas y más ampliamente la población insumisa que está en todas partes y no tiene uniforme. Para el Estado, la clave de la victoria era la información, por lo cual recurrió a los escuadrones de la muerte, a los centros de detención clandestinos, al uso sistemático de la tortura y, por supuesto, a las desapariciones forzadas. No está por demás recordar que esta panoplia infernal fue inventada con poco éxito por militares franceses en Indochina y Argelia. Sucesivamente fue trasladada a América del Sur y Centroamérica, en donde se usó en la lucha contra “la subversión” (Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, etc.) como consecuencia de la contraofensiva que el gobierno de Washington y sus satélites emprendían para impedir el contagio de la experiencia revolucionaria cubana.

En México, la desaparición forzada empezó después de la masacre de Tlatelolco en 1968, cuando la represión se puso a tono con lo que sucedía en el resto de América Latina. Se practicó especialmente en Guerrero contra las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, pero también contra los movimientos insurgentes de campesinos y trabajadores urbanos que nacieron en todos los rincones del país y que, en algunos casos, se mantienen hasta la fecha. Antes del 26 de septiembre de 2014, este terrible crimen de lesa humanidad era denunciado únicamente por un puñado de periodistas valientes, unos pocos defensores de los derechos humanos y una de las más dignas y ejemplares agrupaciones contra la represión: las madres, esposas, hijas, hermanas, familiares de las víctimas de la guerra sucia, organizadas en el Comité Eureka (y ahora en HIJOS México, su continuador y heredero)

³² Roberto González Villarreal, *op. cit.*, pp. 136-137.

que fundó la infatigable Rosario Ibarra de Piedra. Conocidas cariñosamente como “las doñas”, fueron ellas las que mantuvieron el dedo en la llaga durante más de 40 años haciendo de la memoria una bandera de lucha: la memoria de los desaparecidos y también la memoria de sus desaparecidos.

En el caso del crimen de Iguala, González Villarreal insiste:

[...] hay que repetirlo una y otra vez, hasta que lo entiendan los comentaristas y los académicos: la desaparición forzada no es un evento, sino un proceso, un ensamble de acciones, omisiones, confusiones, en el que intervienen muchos agentes, desde los que detuvieron a los estudiantes, los que los secuestraron, los que borraron sus rastros, los que no investigaron, los que confundieron, los que callaron, los que aplazaron, los que minimizaron, todos esos, en distintas instancias de gobierno, con distintas responsabilidades y acciones.

El autor concluye que, al desaparecer a los normalistas, el Estado intentó desconocer su lucha, las condiciones de su existencia y las razones de sus batallas. La desaparición se aplicó a un grupo, pero buscaba efectos mayores: producir miedo, gobernar los instintos básicos de los individuos y poner en marcha un ordenamiento del temor.³³

Todo esto es cierto, pero también lo es que la fase actual de la guerra sucia no se limita a reproducir el patrón de los años setenta. Si en el pasado el principal objetivo fueron las guerrillas, en la actualidad las muertes, los secuestros y las desapariciones forzadas se han disparado numéricamente, carecen de motivos aparentes y en la mayoría de los casos las víctimas no son guerrilleros, sino ciudadanos inocentes. Tal parece que ahora el enemigo es la población en su conjunto. En un ensayo consagrado al análisis de la guerra contra el crimen organizado desatada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), Carlos Illades y Teresa Santiago formulan algunas hipótesis interesantes. El primer efecto de dicha guerra —señalan los autores— fue que la violencia se extendió a nivel

³³ Roberto González Villarreal, *op. cit.*, pp. 138 y 143.

nacional llegando hasta lo más profundo de la sociedad, sin conseguir el objetivo de derrotar a los cárteles y reducir el tráfico de drogas. Otro, no menos importante, fue que se recrudesció la añeja violencia contra activistas, líderes y movimientos sociales, especialmente en estados con altos índices de pobreza como Chihuahua, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

El poder —llámese Estado, delincuencia organizada, capital o caciques— castiga y sega las dirigencias populares intentando convencer a todo el cuerpo social que cualquier resistencia organizada es inútil, además de multiplicar la impunidad, en la medida en que actúa con la certeza de que estos crímenes ni siquiera se indagarán y menos serán sancionados, al quedar ocultos en el manto de la impunidad tendido por la guerra dentro del cual cada vez se cobijan más casos de tortura. Frecuentemente los criminales y otras tantas veces los policías son la punta de lanza de las empresas (el caso de las mineras canadienses es ilustrativo al respecto) para apropiarse de los bosques, el agua y la tierra.³⁴

La conclusión es evidente: la violencia que vivimos se relaciona directamente con la voracidad del gran capital —particularmente el que opera en el sector extractivo— y no únicamente con el narcotráfico.

En *Ni vivos ni muertos*, un libro-reportaje sobre el nuevo ciclo de desapariciones forzadas que comienza con los gobiernos del PAN (2000-2012), Federico Mastrogiovanni señala que, además de ser un país en donde prospera el tráfico y la producción de drogas, México posee una gran cantidad de recursos estratégicos como gas, agua, petróleo y todo tipo de minerales. Detecta, acto seguido, un nexo entre el aumento de la violencia, la importancia geopolítica de dichos recursos y las grandes empresas extractoras. Si en el pasado éstas sostuvieron a gobiernos genocidas, en la actualidad no descartan alianzas con el crimen organizado. ¿Con qué objeti-

³⁴ Carlos Illades y Teresa Santiago, *Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra*, México, Era, 2014, pp. 15, 153 y 155-157. Véase también la cronología “El regreso de la guerra sucia en México (1994-2014)” incluida en esta edición.

vo? Despoblar regiones enteras y adueñarse de tierras en cuyos subsuelos se encuentran los recursos que se buscan. Mastrogiovanni ofrece el ejemplo de la llamada Cuenca de Burgos, donde se encuentra la cuarta reserva mundial de gas de lutita o gas de esquisto (*shale* gas en inglés). Esta región, conformada por los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el norte de Veracruz, en la que abundan las desapariciones forzadas y los asesinatos masivos, está bajo el control de los Zetas, uno de los cárteles más violentos de México, integrado en gran parte por ex militares.³⁵

Las desapariciones forzadas, las decenas de miles de asesinatos, el terror, las decapitaciones, las torturas, son parte de lo que Raúl Zibechi nombra “la masacre como forma de dominación”, una guerra de exterminio para apropiarse de los bienes comunes y acabar con toda forma de resistencia. Las porciones de la humanidad que obstaculizan el robo de esos bienes, ya sea porque viven encima de ellos, porque se resisten al despojo, o simplemente porque “sobran”, merecen ser aniquilados. El meollo —sigue Zibechi— no es el narco, sino los negocios que forman parte de los modos de acumular/robar de la clase dominante. De manera que no estamos frente a “excesos” policiales esporádicos, sino ante un modelo de dominación que hace de la masacre el modo de atemorizar a las clases populares.³⁶

Dichas hipótesis nos permiten entender muchas cosas que, a primera vista, carecen de sentido. Tomemos el ejemplo de “Rápido y furioso”, el operativo aparentemente incomprensible que el gobierno estadounidense puso en marcha cuando introdujo ilegalmente miles de armas a nuestro país. El objetivo oficial era detener a los traficantes, pero ningún criminal fue a parar en la cárcel, y en cambio, una cantidad descomunal de armas de asalto terminaron en manos del crimen organizado. Después se comprobó que en algunos casos sirvieron

³⁵ Federico Mastrogiovanni, *Ni vivos ni muertos. La desaparición forzada en México como estrategia del terror*, prólogo de Jaime Avilés, México, Grijalbo, 2014, pp. 17, 30-35, 199-201.

³⁶ Raúl Zibechi, “La masacre como forma de dominación”, *La Jornada*, 31 de octubre de 2014.

para cometer masacres, como la terrible matanza de 16 jóvenes en Salvarcar, Ciudad Juárez, en enero de 2010. Si el objetivo era aumentar los niveles de violencia, el operativo fue todo un “éxito”, aun cuando pareció ser un fracaso. Añadimos que la venta de armas es un gran negocio y estadísticas recientes documentan que, de los 15 millones de armas que circulan ilegalmente en el país, unos 12 millones, es decir, el 80 por ciento, provienen de Estados Unidos.

Los nexos entre crimen organizado y políticas gubernamentales presentan otras facetas inquietantes. Insight Crime, una prestigiosa fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe, ha documentado las relaciones entre las empresas mineras y el narcotráfico en al menos cinco estados de México: Tamaulipas, Chihuahua, Morelos, Michoacán y, por supuesto, Guerrero.³⁷ No se trata de desestimar el tráfico de drogas que, al contrario, sigue incrementándose. Según datos de la ONU, desde 2008 se duplicó en México el número de hectáreas de amapola, al pasar de 6 900 a 15 mil, mientras que la producción aumentó de 150 toneladas a más de 325. En Guerrero se concentra 60 por ciento de la amapola y goma de opio de México, y sabemos que la disputa por las rutas de la droga siempre causa violencia. Generalmente, los cultivadores son campesinos pobres que viven en localidades remotas y venden sus cosechas a la organización de traficantes dominante en su región, lo cual los convierte en víctimas de violencia en caso de disputas entre cárteles.

Al mismo tiempo, es claro que los cárteles han diversificado sus actividades y que la minería puede ser un negocio tan próspero como las drogas, el secuestro o la extorsión. En *Batallas de Michoacán*, José Gil Olmos muestra que el cártel de Los Caballeros Templarios ha obtenido sus ganancias traficando mariguana y goma de opio, extorsionando a los productores de aguacate y limón, pero también vendiendo a empresarios

³⁷ Charles Parkinson, “Crimen organizado de México controla minería en cinco estados”, disponible en <<http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/crimen-organizado-de-mexico-controla-mineria-en-cinco-estados>>.

chinos el hierro extraído clandestinamente de las riquísimas minas de la región. Detalla que en tan sólo seis años, las exportaciones ilegales del mineral han pasado de 1.5 millones de toneladas en 2006 a cuatro millones de toneladas en 2012. El hierro sale del puerto de Lázaro Cárdenas con rumbo a China, país que emplea este mineral para la fabricación de acero, del cual produce 45 por ciento del total mundial. Al mismo puerto entran cantidades enormes de insumos químicos procedentes de China para la elaboración de drogas sintéticas. El negocio es redondo.³⁸

¿Y Guerrero? Según el Servicio Geológico Mexicano, un organismo federal coordinado por la Secretaría de Economía, la entidad es rica en oro, plata, cadmio, cobre, plomo y zinc. La producción de oro, que en 2005 era de poco más de 900 toneladas, había llegado a 10 219 toneladas en 2010, mientras que la de zinc, equivalente a 14 901 toneladas, había alcanzado 44 512, y la de plata había brincado de 31 783 a 61 743.³⁹ La zona de Iguala se encuentra en el llamado “cinturón de oro”, un auténtico El Dorado, enclavado en una región de terrible pobreza y altísimo riesgo social. El sitio *DesInformémonos* precisa: Guerreros Unidos, Los Ardillos, Los Rojos, Los Granados, La Barredora y Cártel Independiente de Acapulco son algunas de las bandas con más fama que operan en los mismos lugares donde se encuentran Goldcorp, Minaurum Gold, Zhong Ning Mining Investment de China, Vedome Resources, Hoshild Mining, en territorios originarios de los pueblos nahuas, me’ phaa, ñu savi, comunidades campesinas mestizas y afrodescendientes.

La investigadora Violeta R. Núñez Rodríguez ha documentado que en los últimos 20 años se ha extraído en México cuatro veces el oro y casi el doble de plata que durante los tres siglos de la Colonia, y que 20 por ciento de la inversión nacional y extranjera en ese sector se concentra en el estado de Gue-

³⁸ José Gil Olmos, *Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto*, México, Ediciones Proceso, 2015, pp. 58-63.

³⁹ Servicio Geológico Mexicano, Panorama minero del estado de Guerrero, disponible en <<http://www.sgm.gob.mx/pdfs/GUERRERO.pdf>>.

rrero.⁴⁰ El texto de Flaviano Bianchini incluido en esta edición aporta elementos adicionales sobre la relación entre las empresas mineras, la violencia y el crimen organizado. Nosotros agregamos que Abarca, el alcalde asesino, hizo su fortuna con el oro. Asimismo, en Nuevo Balsas, municipio de Cocula —el mismo poblado cuyos policías participaron en el secuestro de los normalistas— la minera de oro Media Luna, filial de la transnacional canadiense Torex Gold, ha tenido graves conflictos con los lugareños desde 2009, algunos de los cuales han derivado en secuestros y asesinatos. Una nota de prensa informa que dicha compañía pagaba un millón de pesos al mes al crimen organizado.⁴¹

Más al sur, en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, región de Mezcala, se ubica la mina de oro más grande de América Latina. Pertenece a la también canadiense Goldcorp que en 20 años pretende extraer unos 60 millones de toneladas de oro, a pesar de las protestas de los ejidatarios por la devastación ambiental. El 11 de octubre pasado, *Proceso* publicó una nota informando que un grupo de sicarios había salido la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre de la ciudad de Iguala para refugiarse en Carrizalillo, “donde permanecen escondidos desde hace dos semanas cuando al menos 100 delincuentes se posesionaron del poblado”.⁴² La información nunca ha sido desmentida y hay otros indicios de que merece ser valorada. En el mes de noviembre varios periódicos publicaron la noticia de que los muchachos se encontraban esclavizados en las minas de la sierra de Guerrero.

⁴⁰ Violeta R. Núñez Rodríguez, “Minería en el capitalismo del siglo XXI: despojo de territorios rurales”, *La Jornada del Campo*, 19 de julio de 2014.

⁴¹ Alejandro Guerrero, “Minera canadiense pagaba un millón de pesos al mes al crimen organizado en Cocula”, *El Sur/Sin Embargo*, 12 de febrero de 2015, disponible en <<http://www.sinembargo.mx/12-02-2015/1248830>>.

⁴² Ezequiel Flores Contreras, “Señalan a pandilleros de *Los Peques* como agresores de normalistas”, *APRO*, 11 de octubre de 2014, disponible en <<http://www.proceso.com.mx/?p=384480>>.

Carlos Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los desaparecidos, nos comentó que en el mes de noviembre él y otros padres fueron a la mina de Carrizalillo en busca de sus hijos. No los encontraron, pero la violencia siguió en las minas. El 6 de marzo de 2015, un comando armado secuestró a cuatro trabajadores de Goldcorp, tres de los cuales fueron después encontrados muertos y sepultados en una fosa clandestina con signos de tortura. El 27 del mismo mes, 10 sicarios irrumpieron en una tienda de Carrizalillo matando a tres personas, y el 5 de abril el diario *La Jornada* informó que más de la mitad de las 500 familias de la comunidad huyeron por la violencia provocada presuntamente por la disputa del territorio entre Los Rojos y Guerreros Unidos. ¿Cuál es el balance? Por un lado es difícil comprobar una relación directa entre las mineras y el crimen de Iguala. Sin embargo, el vínculo entre cárteles y empresas extractivas ha sido reconocido incluso por el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Manuel Reyes, en una entrevista.⁴³ Llama la atención, por otro lado, la escasa atención proporcionada a este tema incluso por los medios alternativos y por investigadores independientes.

EL DESPERTAR DE MÉXICO

Imposible de negar en Tlatlaya y sólo con sofismas cuestionada en Iguala, la actuación del ejército, la cual se ha convertido en uno de los aspectos más espinosos de la controversia política que plantea retos insuperables al régimen. Es claro que la masacre de Iguala no representa más que una fracción de la cruel aritmética del terror: tan sólo entre agosto y octubre de 2014 se registraron 1 281 desapariciones forzadas, sin

⁴³ “Mineros de México confirman contactos entre empresas y cárteles para operar”, disponible en <http://www.laguiagratis.com/23_mexico/3045892_mineros-de-mexico-confirman-contactos-entre-em-presas-y-carteles-para-operar.html>.

que hubiera protestas mayores.⁴⁴ Sin embargo, mientras en otras ocasiones los crímenes de Estado se cometían sin causar demasiado ruido, la protesta contra la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa estalló con una magnitud tal como para hacer tambalear al gobierno y a sus sostenedores. Hoy vivimos el desbordamiento de la ira y la rabia acumuladas durante décadas por los miles de mexicanos y mexicanas desaparecidos, hecho que por primera vez es hoy clara y masivamente reconocido por la sociedad mexicana.

En octubre se iniciaron grandes movilizaciones que llegaron a un pico durante noviembre, cuando se volcaron a las calles cientos de miles de personas, tal vez millones, aunque las cifras exactas nunca se sabrán, dado que ningún medio se atrevió a publicarlas. Se gritaban las consignas que ahora están en todas partes: ¡Fue el Estado!, ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos! (esta última creada por las “doñas” en los años setenta). Desde la Revolución mexicana raramente se había visto un movimiento tan grande, de carácter independiente, integrado por multitudes de ciudadanos exasperados, no sólo en la capital del país, sino también en la provincia. Un movimiento que exige abiertamente la renuncia del presidente de la República: ¡Fuera Peña! Del mismo modo, la reacción internacional fue inmediata e impresionante: entre octubre de 2014 y febrero de 2015 se llevaron a cabo movilizaciones en países de América del Sur y del Norte, de Europa y de Asia: las acciones globales por Ayotzinapa, es decir manifestaciones de la solidaridad comparables a las que se dieron en su momento con el movimiento neozapatista (véase al respecto la cronología “Crónicas de represión y resistencia”). En la actualidad, el nombre Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la injusticia que priva en México, pero también en un paradigma de lucha social.

El gobierno está en jaque. La difícil situación de un ejecutivo pasmado que no ha logrado concebir una estrategia para solucionar los enormes problemas que enfrenta, así como

⁴⁴ Fabiola Martínez “Entre agosto y octubre hubo 1 281 personas desaparecidas”, *La Jornada*, 18 de enero de 2015.

las consecuencias políticas que se atisban en el horizonte, inaugura una nueva etapa en el país. El gobierno de Barack Obama, siempre tan cuidadoso, no tuvo más remedio que pedir una investigación “transparente” sobre la desaparición de 43 estudiantes en México.⁴⁵ En México, hasta un personaje tan conservador como el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Flavio Galván Rivera, admitió que “existe una crisis de credibilidad de las instituciones nacionales, incluidas las electorales”.⁴⁶ Y lo dijo abiertamente también el ex presidente panista Vicente Fox, quien agregó que, si no actúa a tiempo, Peña puede caer en “jaque mate”.⁴⁷ La frivolidad del personaje podría conducir a considerar esta declaración como una simple habladería. Pero en este caso, no se encuentra lejano de la realidad. Le hace eco la patronal. En pleno cónclave del organismo cúpula más importante de los grandes burgueses mexicanos, el Consejo Coordinador Empresarial, Lorenzo Servitje, el fundador y dueño del Grupo Bimbo, la octava corporación más rica del país, advirtió con preocupación a sus pares capitalistas que Peña Nieto atraviesa por su peor momento como dirigente del país y urgió a cerrar filas con él.⁴⁸

La arbitrariedad y la corrupción descaradas del grupo gobernante no tienen límites. Un ejemplo es el nombramiento de Virgilio Andrade en la Secretaría de la Función Pública. Virgilio Andrade Martínez es hijo de Virgilio Andrade Palacios, miembro del equipo de abogados defensores del corrupto líder petrolero Carlos Romero Deschamps, uno de los artífices del Pemexgate. Entre 1989 y 1990, Andrade Martínez fue asesor de Salinas. Ahora tendrá la tarea de investigar los contratos públicos de su jefe, Peña Nieto, con Higa y San Román;

⁴⁵ “La Casa Blanca, preocupada por la desaparición de estudiantes en México”, *El País*, 28 de octubre de 2014.

⁴⁶ Emir Olivares Alonso, “Crisis de credibilidad afectará los comicios de junio: Flavio Galván”, *La Jornada*, 24 de febrero de 2015.

⁴⁷ Ulises Gutiérrez Ruelas, “Peña Nieto, ‘en jaque’, y en riesgo de recibir el mate: Fox”, *La Jornada*, 21 de febrero de 2015.

⁴⁸ Mario Alberto Verduzco, “Lorenzo Servitje pide a la IP apoyar a Peña Nieto”, *El Universal*, 28 de enero de 2015.

dictaminará si existe un conflicto de interés en las compras de la “Casa Blanca” y de la residencia de Ixtapan de la Sal; decidirá si fue transparente la adquisición de la mansión de su amigo Luis Videgaray en Malinalco y un largo etcétera. Esta desfachatez se ha vuelto intolerable incluso para muchos grandes capitalistas como lo muestra la ruptura que se ha dado entre el grupo encabezado por el hombre más rico del mundo, Carlos Slim —accionista de *The New York Times*— y el régimen priísta.⁴⁹

La pugna se abrió de par en par con motivo de la publicación de las investigaciones de un diario neoyorquino sobre las cuentas bancarias de grandes capitalistas en Suiza, en la cual salen a relucir los enormes montos de dinero atesorados en las arcas de dichos bancos por capitalistas de muchos países, incluidos mexicanos notoriamente vinculados, “la mayoría de ellos”, con el círculo priísta gobernante.⁵⁰ Los analistas financieros no dejaron de percibir en dichas investigaciones la mano de Slim, quien de esta manera dejó traslucir su enojo con la política del gobierno de Peña y sus constantes amenazas en contra de su centro de actividades financieras. Ha sido un golpe que puso al gobierno contra las cuerdas. En los círculos más altos del poder hay una pugna y se está dando una discusión que ya se refleja en los medios de comunicación masiva, a pesar de la dificultad que supone la ausencia casi total de medios de comunicación críticos. Pero el contorno internacional no ha podido blindarse y está afectando poderosamente al ejecutivo.

Si, por otro lado, la meta era acabar con las normales rurales, el fracaso es rotundo, ya que, a pesar de haber buscado por todos los medios satanizar y castigar a los estudiantes, el propio gobierno tuvo que aceptar que dichas escuelas seguirían existiendo. El sacrificio de los estudiantes de Ayotzinapa fortaleció la lucha por la defensa de la educación pública en

⁴⁹ “Slim destapa cloaca de corrupción en México”, 11 de febrero de 2015, disponible en <<http://www.narcoviolenca.com.mx/2015/02/el-poderoso-esta-molesto-slim-destapa.html>>.

⁵⁰ <<http://elacorazado.mx/el-poderoso-carlos-slim-helu-esta-furioso-y-pone-en-jaque-al-gobierno-mexicano/>>.

México, pues despertó muchas dudas sobre la viabilidad de las políticas públicas en ese rubro, reviviendo los movimientos estudiantiles y magisteriales en todo el país. Uno de sus frutos es la victoria del movimiento de los estudiantes del Politécnico que estalló a finales de septiembre de 2014, pocos días antes de la masacre. Acorralado y severamente cuestionado dentro y fuera del país, el gobierno ya no pudo darse el lujo de volver a reprimir un movimiento estudiantil.

Es indudable que la noche de Iguala seguirá teniendo graves consecuencias en la política nacional. Para las elecciones intermedias de junio de 2015 habrá un abstencionismo mayor al de siempre. De hecho, el boicot electoral es el terreno principal en el que se está librando la lucha, especialmente en Guerrero. El movimiento nacional continúa, aunque se enfrenta, en su séptimo mes, a la elaboración de una estrategia que lo sostenga y que lo mantenga unificado. Si bien es cierto que ya no se han producido manifestaciones como las de noviembre, la resistencia permanece y traspasa las fronteras con las marchas a Estados Unidos y Canadá, así como visitas a la Unión Europea, organizadas por delegaciones de estudiantes, padres de familia y defensores de los derechos humanos.⁵¹

Lo cierto es que estamos frente a una situación inédita en la que la radicalización de amplios sectores de la población prosigue planteando cuestiones muy difíciles pero que apuntan indefectiblemente a una total renovación de la lucha social en México. La fisura abierta por el crimen de Iguala se está ensanchando como una grieta que ahora mismo es reto principal que enfrenta el régimen, un reto que puede desatar todos los demonios en el país. La reciente rebelión de los jornaleros del valle de San Quintín, Baja California, que viven en condiciones de semiesclavitud, es otra señal de que el México de abajo se está despertando.

⁵¹ Fernando Camacho Servín, "Padres de normalistas de Ayotzinapa recorrerán ciudades de EU", *La Jornada*, 13 de marzo de 2015, edición en línea, disponible en <<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/13/padres-de-normalistas-de-ayotzinapa-partiran-en-caravana-a-eu-4449.html>>.

Así las cosas, en el seno de ese espacio gelatinoso que se suele denominar “la izquierda”, o más confusamente, “las izquierdas”, la discusión ha subido de tono llegando a temperaturas candentes. La orientación radical contra el gobierno que auspicia el grupo de familiares ha propuesto el boicot a las elecciones de este año, táctica por completo lógica y entendible, ante la opción agónica que es votar por los candidatos de los partidos mayoritarios del PRI, el PAN, de sus comparsas minoritarios y del PRD, la organización que durante los últimos 25 años ha sido publicitada por los medios oficiales y considerada por amplios sectores populares como “el partido más importante de la izquierda” en México. No es posible entender la situación política nacional y en particular la de Guerrero sin aquilatar el papel de éste, que es el partido gobernante en dicho estado y cuya influencia en el mismo ha sido clave desde su surgimiento en 1989.⁵²

El hecho de que el gobernador de Guerrero y el alcalde de Iguala hayan sido miembros del PRD significó una debacle irreversible para el partido, igual que la patética e impresentable conducta de la dirección nacional partidaria, conocida como “Los Chuchos”, que primero otorgó “todo su apoyo político” a Abarca y luego intentó exculpar a Aguirre Rivero. Como si fuera un trueque, Carlos Navarrete, actual presidente del PRD, sostuvo que si el gobernador de Guerrero renunciaba con motivo de la desaparición de los normalistas, también debería hacerlo Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, por la masacre de Tlatlaya.

¿Qué sucedió desde el surgimiento del “partido más importante de la izquierda” hasta la capitulación que representó el Pacto por México y el desastre actual? Es una pregunta que ciertos sectores todavía perredistas o recientemente renunciantes necesariamente se hacen. En 1988, año del quiebre político protagonizado por la corriente escisionista del PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros dirigentes priístas, la izquierda socialista constituida por varias organizaciones era una fuerza todavía considera-

⁵² Véase más adelante el texto “El colapso de cierta ‘izquierda’”.

ble. Las expectativas electorales despertadas por estos personajes eran muy grandes, lo cual, aunado a que en su mayoría dichas organizaciones estaban orientadas por concepciones reformistas y frentepopulistas, tuvo como consecuencia que acabaran aceptando su participación en un frente electoral bajo la dirección de los ex priístas, que de modo natural condujo a la fundación del PRD utilizando el registro que había conseguido el viejo partido comunista (PCM) en 1979.

Este bautizo con estos progenitores y asociados es la marca que determinó el curso electoralista, caudillesco, por completo encuadrado en las coordenadas de un partido burgués que de inmediato se convirtió en uno de los pilares del nuevo sistema político que comenzó a surgir con motivo de la crisis terminal del PRI. Contrario a lo que piensa, por ejemplo, Elvira Concheiro, ésta no es “una anécdota irrelevante”, sino que significó por parte de los sectores de izquierda socialista que la protagonizaron, “al reconocer generosa y congruentemente la dirección de los ex priístas”, una auténtica capitulación política e ideológica frente a una dirección de claro corte nacionalista y burgués.⁵³ El trato hostil que recibieron Cuauhtémoc Cárdenas y sus acompañantes durante una de las primeras manifestaciones de octubre simboliza el fin del régimen de alternancia surgido en 1988.⁵⁴ Como atinadamente señala González Villarreal, la masacre de Iguala se llevó consigo los últimos vestigios de un partido opositor, ahora convertido en “un comité de negocios político-criminales”.⁵⁵ Semanas después, el propio Cuauhtémoc Cárdenas anunció su renuncia al PRD, pero fue demasiado tarde para ser creíble.

⁵³ Elvira Concheiro Bórquez, “La izquierda ante sus derrotas”, *Memoria*, núm. 253, 2015-1. Antigua militante del PCM, Elvira Concheiro realiza un incisivo y descarnado análisis de la trayectoria del PRD, pero al considerar como “anécdotas irrelevantes” las críticas al origen mismo del PRD, no logra percibir las razones por las cuales los disidentes del PRI terminaron cooptando a los sectores que mantenían posiciones socialistas, independientes y revolucionarias.

⁵⁴ J. Gil Olmos, A. Rodríguez y M. Tourliere, “Turba agrade a Cárdenas, Gilly y Nava en el Zócalo”, disponible en <<http://www.proceso.com.mx/?p=384204>>.

⁵⁵ Roberto González Villarreal, *op. cit.*, pp. 150-152.

Indubitablemente algunos sectores solidarios con el movimiento de Ayotzinapa consideran a Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), el nuevo partido encabezado por López Obrador (AMLO), como una alternativa. Pero su línea básicamente electoralista, así como los métodos puestos en práctica por su dirección, no anuncian ningún cambio significativo con respecto a los métodos tradicionales puestos en práctica por los otros partidos “registrados” en el INE. Y claro, las recientes declaraciones del propio AMLO en el sentido de que “si no se vota o se anula el voto se le hace el juego a la mafia del poder”, no ayudan su causa a los ojos de los miles de guerrerenses enardecidos por los sucesos de Iguala. La (casi) segura transformación del Partido Morena en un PRD bis lo elimina como una alternativa real y todos los días se va confirmando con las elecciones de sus candidatos y la estrechez de sus objetivos.

Es verdad que no se ha logrado una estrategia adecuada para unificar a un movimiento tan disperso, desigual en su desarrollo y con diversos niveles de concientización. Encabezados por la CETEG, los padres de familia y los propios normalistas, los sectores más radicales han experimentado un notable proceso de radicalización que ha culminado en los meses de noviembre y diciembre en la toma de decenas de palacios municipales. Innegablemente, esto ha producido cierto distanciamiento con el movimiento de solidaridad nacional que mantiene una fuerte presencia estudiantil, pero con composición heterogénea, que no parece compartir las prácticas ni la orientación de confrontación violenta con los cuerpos represivos.

Esta situación plantea un reto, puesto que sin el apoyo solidario de la sociedad civil urbana, el movimiento popular en Guerrero, aun cuando sea apoyado en Oaxaca y Chiapas por otras secciones del sindicalismo magisterial disidente, podría quedar aislado, facilitando su represión por el Estado. Al mismo tiempo, activistas y personajes connotados de los movimientos civiles y políticos que son solidarios con la causa de Ayotzinapa han convocado a discutir la estrategia de combinar el boicot a las elecciones con la propuesta de pre-

parar un movimiento por una Asamblea o un Congreso Constituyente. Aquí podría perfilarse una alternativa, aunque está claro que las asambleas constituyentes son el resultado de las transformaciones revolucionarias y no al revés. Llama la atención, por otro lado, que son minoritarios entre los actores involucrados en el movimiento los que proponen una estrategia con base en la huelga general.

Recordemos, por último, que México ha sido, desde su nacimiento, un país de una desigualdad proverbial, y esto se ha recrudecido dramáticamente durante los últimos 30 años de aplicación de las políticas neoliberales. Casi 70 por ciento de sus habitantes se encuentra en diferentes niveles de pobreza y nueve millones de jóvenes no tienen acceso a la escuela ni al trabajo.⁵⁶ Pero el hombre más rico del mundo es mexicano y los ricos de México tienen atesorados en el extranjero más capitales que el monto de la deuda pública del país. Los bancos y los grandes negocios tienen ganancias supermillonarias, pero los salarios son de hambre. La elite política es escandalosamente privilegiada: 7.3 millones anuales los magistrados de la Suprema Corte de Justicia; 4.6 el presidente de la República; 4.6 el presidente del INE; 3.8 el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI); 3.1 millones los senadores; 2.2 millones los diputados.⁵⁷

En la vida diaria reina la corrupción y la impunidad, 92 por ciento de los delitos que se cometen no se persiguen ni se castigan. Los políticos gobernantes tienen fama de ladrones y criminales: son proverbialmente conocidos las arbitrariedades y los hechos delictivos de gobernadores como los de

⁵⁶ Véanse Eric Urías Romero, Darío Ibarra Zavala y Carlos Mora Jurado, "Pobreza y desigualdad en México en el siglo XX y principios del siglo XXI", *Debate Económico. Revista del Laboratorio de Análisis Económico y Social*, núm. 8, mayo-agosto de 2014; Julio Boltvinik y Araceli Damián (coords.), *La pobreza en México y el mundo*, México, Siglo XXI y Gobierno de Tamaulipas, 2004, consideraban que en el año 2000 había poco más de 80 millones de pobres (76.9 por ciento de la población total).

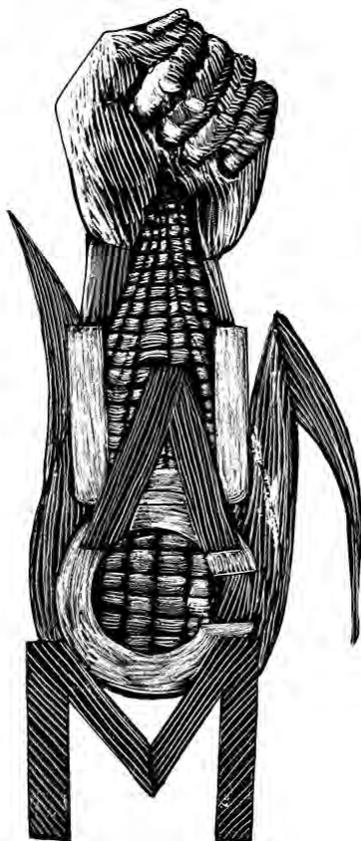
⁵⁷ Fabiola Núñez, "Ministros y magistrados ganan 2 millones de pesos más que Peña Nieto", *La Jornada*, 3 de mayo de 2014.

Chihuahua, Puebla, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Sonora, Coahuila, Michoacán, Aguascalientes. El ejército ejecuta extrajudicialmente a personas en Tlatlaya y sus acciones están plagadas de arbitrariedades y de actos de represión. Es notoria la venalidad de la justicia. El respeto a los derechos humanos es una quimera y eso ha elevado exponencialmente los índices de inseguridad: cada dos horas desaparece un mexicano, se roban miles de autos y se cometen miles de plagios y extorsiones diariamente. Sólo en 2014 los cálculos de los asesinados en el territorio de la República varían entre más de 23 mil y más de 34 mil.⁵⁸

Es ante este país que los acontecimientos de septiembre de 2014 en Iguala detonaron una situación que anuncia la toma de conciencia de amplísimas capas de la población mexicana. Son 115 millones de mexicanos que están en el umbral de una nueva senda, una senda que los pueda conducir a un nivel superior de su evolución social. Es un momento de grandes oportunidades que se ha abierto para luchar por un México nuevo, plural, emancipatorio, democrático e igualitario, que junto con los pueblos de América Latina, en un proyecto internacionalista forje una federación de repúblicas democráticas, libertarias y socialistas.

⁵⁸ Homero Campa, “El país de los desaparecidos. Investigación basada en datos oficiales: con Peña Nieto, el promedio, un mexicano desaparece cada dos horas”, *Proceso*, núm. 1997, 8 de febrero de 2015.

**A
Y
O
T
Z
I
N
A
P
A**



**S
O
M
O
S
T
O
D
O
S**

Norberto

PRIMERA PARTE

EL CRIMEN

SOBRE LOS HECHOS DE AYOTZINAPA/IGUALA
A PROPÓSITO DE LOS QUE SOBРАН
Y EL ESTADO TERRORISTA

Carlos Fazio

Fue un crimen de Estado. Los hechos de Iguala del 26 de septiembre de 2014, donde seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes, hubo 20 lesionados —uno con muerte cerebral— y resultaron detenidos-desaparecidos de manera forzada 43 jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, configuraron crímenes de lesa humanidad. Los ataques sucesivos de la policía municipal y un grupo de civiles armados contra estudiantes, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada tumultuaria y la tortura, desollamiento y muerte de Julio César Mondragón —a quien con la modalidad propia de la guerra sucia le vaciaron la cuenca de los ojos y le arrancaron la piel de su rostro— fue un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada. No se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Los crímenes de Iguala venían a confirmar la regla y formaban parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista y racista de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) hacia los estudiantes de Ayotzinapa, la normal enclavada en el municipio de Tixtla, Guerrero.

En ejercicio de sus funciones —o con motivo de ellas—, agentes estatales actuaron con total desprecio por los derechos humanos, violando el derecho a la vida de seis de sus víctimas y una fue antes torturada de manera salvaje. Asimismo, los 43 desaparecidos fueron detenidos con violencia física por agentes uniformados del Estado y trasladados en vehículos oficiales, seguido de la negativa a reconocer el acto

y del ocultamiento de su paradero, lo que configuraba el delito de desaparición forzada.

De acuerdo con el artículo 149 bis del Código Penal Federal, también podría configurarse el delito de genocidio, dado que se procedió a la destrucción parcial de un grupo nacional (los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa), quienes de tiempo atrás habían sido sometidos a un hostigamiento sistemático, continuado y prolongado con la participación directa de funcionarios públicos en la planeación y perpetración de los hechos, y su amplificación a través de los medios de difusión masiva, como reproductores serviles de la “verdad oficial”.

Al respecto, cabe recordar que el 12 de diciembre de 2011, dos estudiantes de esa normal rural —Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría— fueron ejecutados de manera sumaria extrajudicial por agentes de civil en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero; cuatro más resultaron heridos y 24 fueron sometidos a torturas y tratos crueles y degradantes por funcionarios policiales. Capturado en el lugar de los hechos, el estudiante Gerardo Torres fue aislado, incomunicado y trasladado a una casa abandonada en Zupango, donde lo desnudaron y torturaron. Después, con la intención de fabricar un culpable o chivo expiatorio, le sembraron un arma AK-47 de las llamadas *cuernos de chivo* y lo obligaron a disparar y tocar los casquillos percutidos para impregnar sus manos de pólvora, con la intención de imputarle la muerte de sus dos compañeros.¹

Entonces se determinó que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado y las armas de fuego —es decir, se actuó con armamento de alto poder y al margen de los protocolos antimotines—, con el objetivo de contener una manifestación pública. Dos agentes policiales sindicados como autores materiales de los homicidios fueron dejados en libertad un año después, lo que demuestra la colusión de la justicia del estado de Guerrero con la estructura de mando de los organismos de seguridad pública. Con

¹ Carlos Fazio, “Ayotzinapa”, *La Jornada*, 23 de enero de 2012.

una consecuencia lógica, consustancial al ADN del sistema político mexicano: los autores materiales e intelectuales de las dos ejecuciones extrajudiciales, y las torturas y tratos crueles y degradantes, gozan en la actualidad de protección e impunidad.

Por otra parte, existían evidencias testimoniales de que a dos años y medio de aquellos hechos, policías, ministerios públicos, militares y profesionistas del estado de Guerrero habían manifestado un desprecio y odio criminal contra los estudiantes de Ayotzinapa. Incluso el médico cirujano Ricardo Herrera, quien denunció a los estudiantes que entraron a su clínica privada Cristina en demanda de atención para un estudiante al que un balazo le había destrozado el rostro, dijo que los jóvenes normalistas eran “violentos y agresivos” y por eso les volvió la espalda.²

Ahora, como en 2011 —y como tantas veces antes desde 1968, cuando la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas—, se asistía a una acción conjunta, coludida, de agentes del Estado y escuadrones de la muerte, cuya “misión” era *desaparecer* lo disfuncional al régimen de dominación capitalista; lo prescindible, lo que sobra. Huelga decir que la figura de la detención-desaparición forzada, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control sino una tecnología represiva adoptada de manera racional y centralizada, que entre otras funciones persigue la diseminación del terror.

El terrorismo de Estado encarna una filosofía que aparece cuando la normatividad pública autoimpuesta por los que mandan, es incapaz de defender el orden social capitalista y contrarrestar con eficacia necesaria la contestación de los de abajo. Por ende, debe incorporarse una actividad permanente y paralela del Estado mediante una doble faz de actuación de sus aparatos coercitivos: una pública y sometida a las leyes (que en México tampoco se cumple) y otra clandestina, al margen de toda legalidad formal.

² Véase Marcela Turati, “Contra los ‘ayotzinapos’ odio criminal”, *Proceso*, núm. 1980, 11 de octubre de 2014.

Es un modelo de Estado público y clandestino. Como un Jano bifronte. Con un doble campo de actuación, que adquiere modos clandestinos estructurales e incorpora formas no convencionales (irregulares o asimétricas) de lucha. Un instrumento clave del Estado clandestino es el terror como método. El crimen y el terror. Se trata de una concepción arbitraria pero no absurda. Responde a una necesidad imperiosa del imperialismo y de las clases dominantes. Aparece cuando el control discrecional de la coerción y la subordinación de la sociedad civil ya no resulta eficaz. Cuando el modelo de control tradicional se agota y el sistema necesita una reconversión. No tiene que ver con “fuerzas oscuras” enquistadas en los sótanos del viejo sistema autoritario. Tampoco con grupos de incontrolados, ovejas negras o algunas manzanas podridas dentro del Ejército y las distintas policías. Ni con ajustes de cuentas desestabilizadores entre bloques de poder o dentro de grupos delincuenciales.

Tiene que ver, fundamentalmente, con la reconversión del modelo de concentración del capital monopólico y la imposición de políticas de transformación del aparato productivo acorde con la nueva división internacional del trabajo. Con un modelo que implica altísimas cotas de desocupación, pérdida del valor del trabajo, desaparición de la pequeña y la mediana empresa industrial y agraria. Y con la imposición de todo un paquete de contrarreformas neoliberales que incluye la apropiación de la tierra mediante el despojo, por grandes latifundistas y corporaciones transnacionales que profundizarán el saqueo de los recursos geoestratégicos, en particular los energéticos y biodiversos.

Pero el terror del Estado es también una respuesta al ascenso de las luchas políticas y reivindicativas de las masas populares; a la protesta de los de abajo. Frente a la resistencia y la contestación, los plutócratas y sus tecnócratas necesitan una adecuación del Estado represivo. Entonces aparece el terror como fuerza disuasoria. La otra faz del Estado, la clandestina; la que recurre a fuerzas paramilitares, a los escuadrones de la muerte, a los grupos de limpieza social y al sicariato. A la *guerra sucia*. A los fantasmas sin rostro ni ras-

tro que ejecutan operaciones encubiertas de los servicios de inteligencia del Estado. A fuerzas anónimas que gozan de una irrestricta impunidad fáctica y jurídica; amparadas por un poder judicial cómplice y temeroso.

Aparece la otra cara de un Estado que construye su poder militarizando la sociedad y desarticulándola mediante un miedo y un horror reales. De manera selectiva o masiva, según las circunstancias. Pero siempre con efectos expansivos. Haciéndoles sentir al conjunto de las estructuras sociales que ese terror puede alcanzarles.

El viejo método de la cadena: “de la periferia al centro organizado”. La cara oculta de un Estado que hace un uso sistemático, calculado y racional de la violencia, de acuerdo con una concepción y una ideología que se enseña en las academias militares. Que forma parte de una doctrina de contrainsurgencia.; de la guerra psicológica que experimentó Estados Unidos en Vietnam, cuando la “Operación Ojo Negro”, desplegada por escuadrones clandestinos de los *Boinas Verdes*, puso en práctica la fórmula: contraaguerrilla = demagogia + terror. Después vendrían “La Mano Blanca” en Guatemala, el “Comando Caza Tupamaros” de Uruguay, la “Triple A” argentina y muchos más. Métodos: cartas y llamadas telefónicas anónimas, la detención-desaparición forzada, la tortura. El tiro en la nuca. O en la sien, como el que en octubre de 2001 un militar disparó para dar muerte a la luchadora humanitaria Digna Ochoa.

SOBRE EL PAPEL DE LAS FUERZAS DEL ORDEN

Ante la gravedad de los trágicos sucesos de Iguala y el escrutinio mundial —el gobierno de Enrique Peña Nieto cayó en una aguda crisis de imagen, credibilidad y gobernabilidad, producto de las presiones a que fue sometido por la ONU, la OEA, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comunidad Europea y distintas organizaciones humanitarias que demandaron la aparición con vida de los 43 muchachos desaparecidos—, desde un principio las autoridades estatales

y federales trataron de posicionar mediáticamente la hipótesis de que detrás de los hechos estaba el “crimen organizado” con sus “fosas comunes”, coartada que de manera recurrente había sido utilizada como estrategia de desgaste, disolución de evidencias y garantía de impunidad desde comienzos del sexenio de Felipe Calderón.

Se trataba de una lógica perversa que, en el caso de Iguala, buscaba difuminar responsabilidades y encubrir complicidades en las cadenas de mando oficiales, y jugaba con el dolor y la digna rabia de los familiares de las víctimas y sus compañeros. Como dijeron desde un principio las madres y los padres de los 43 desaparecidos, “las autoridades andan buscando muertos, cuando lo que queremos es encontrar a nuestros muchachos vivos”.

No era creíble que los hechos hubieran respondido a una acción inconsulta de un grupo de efectivos de la policía municipal. Asimismo, resultó en extremo sospechoso que desde un principio los investigadores de la fiscalía estatal no contemplaran la cadena de mando del Operativo Guerrero Seguro, vigente en el momento de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, donde participaban diversas corporaciones de seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República), y que incluso se facilitara las fugas del director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares y de su jefe, el alcalde José Luis Abarca, de quien después muchos dijeron que “sabían” que estaba vinculado al grupo delincuenciales Guerreros Unidos, responsabilizado por las autoridades, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, de la autoría intelectual y material de los crímenes.

Según la fiscalía de Guerrero, 16 de los 22 policías municipales procesados dieron positivo en la prueba de rodizomato de sodio —es decir, dispararon sus armas—, y entre ellos podrían estar los autores materiales de los seis asesinatos registrados en Iguala la noche del 26 de septiembre. Pero ninguno de los comandantes que operaron los dispositivos de seguridad esa noche fue detenido. Por lo que más allá de la responsabilidad atribuida al ex alcalde de Iguala, y debido

a los antecedentes de los organismos de seguridad pública de Guerrero y los del propio gobernador Ángel Aguirre Rive-ro —crecido al amparo del “viejo PRI” y de sus peores prácticas y amigo de Peña Nieto—, quedaban muchos hilos sueltos e interrogantes acerca de quiénes eran los verdaderos responsables intelectuales y cuál fue el verdadero móvil de los hechos, incluidas las 43 desapariciones forzadas.

Según consignó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el 27 de septiembre y los días subsiguientes —que en todo caso de desaparición forzada resultan clave para la búsqueda—, las autoridades ministeriales del estado de Guerrero no procedieron a realizar un interrogatorio profesional y exhaustivo a los policías municipales detenidos, que diera elementos para localizar con prontitud a los jóvenes.³ Agentes del Ministerio Público actuaron con negligencia e insensibilidad, y de existir condiciones para una investigación apegada al Estado de derecho, podrían resultar cómplices en la acción de manipular evidencias y enturbiar y enredar los hechos. De allí que Amnistía Internacional calificara la investigación judicial como “caótica y hostil” hacia los familiares y compañeros de las víctimas. Hostilidad que se hizo extensiva a las y los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en quien familiares y estudiantes depositaron su confianza y a quienes vieron como único mecanismo de certeza en el caso de una eventual aparición de restos.

Igual que en el asesinato de dos estudiantes de la normal rural en 2011, había ahora un uso desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado; por lo que investigar la cadena de mando resultaba clave. Desde un principio fue evidente que los hechos ocurrieron en presencia de elementos de las policías estatal y federal y con el conocimiento de sus superiores, debido a que, como denunció el autor en *La Jornada* y en diferentes entrevistas y conferencias a comienzos de oc-

³ Gloria Leticia Díaz, “Caso Ayotzinapa. Ultimátum de la CIDH al gobierno de Peña Nieto”, *Proceso*, núm. 1979, 5 de octubre de 2014.

tubre,⁴ desde que salieron de las instalaciones de la normal rural de Ayotzinapa la tarde del 26 de septiembre, los jóvenes eran monitoreados por agentes del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de Chilpancingo.⁵

Un informe de la fiscalía guerrerense confirmaría después que desde las 17:59 horas, el C-4 había informado que estudiantes de Ayotzinapa partían rumbo a Iguala. A las 20:00 horas, agentes de la Policía Federal y la Policía Estatal arribaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, y reportaron que los jóvenes realizaban una colecta. A las 21:22, Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la Policía Federal, informó que los estudiantes habían entrado a la central camionera de la localidad y a las 21:40 el C-4 de Iguala reportó el primer tiroteo.⁶

En adición a lo anterior, Anabel Hernández y Steve Fisher consignaron en el reportaje “La historia no oficial”, que José Adame Bautista, coordinador operativo de la región norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, asentó en la tarjeta informativa número 02370, fechada el 26 de septiembre, que “a las 17:59 horas reportaron vía telefónica desde el C-4 Chilpancingo, sobre la salida de dos autobuses de la línea Estrella de Oro con números económicos 1568 y 1531 con estudiantes de la escuela rural Ayotzinapa con dirección a la ciudad de Iguala”.⁷ La información de Adame coincidía con la del C-4 de Chilpancingo, incluido el dato de que a las 20:00 horas los dos autobuses de línea comercial llegaron a la caseta de cobro número tres de Iguala. Según reportó el funcionario, un camión se quedó allí y otro

⁴ Carlos Fazio, “Ayotzinapa, terror clasista”, *La Jornada*, 13 de octubre de 2014, y “Ayotzinapa, terror clasista”/II, *La Jornada*, 27 de octubre de 2014.

⁵ La información fue confirmada en diciembre de 2014, cuando en un reportaje periodístico Anabel Hernández y Steve Fisher hicieron alusión a un informe del gobierno de Guerrero, fechado en octubre, entregado a la Secretaría de Gobernación con posterioridad. Véase “La historia no oficial”, *Proceso*, núm. 1989, 13 de diciembre de 2014.

⁶ *Idem.*

⁷ *Idem.*

se estacionó frente al restaurante La Palma, adonde llegaron elementos de las policías estatal y federal. El propio Adame consigna que él y otros tres agentes se dirigieron allí y se coordinaron con personal de la Policía Federal, sector Caminos, al mando del oficial Víctor Colmenares, quien con otros tres elementos federales procedieron “a monitorear las actividades” de los estudiantes.⁸

No se trataba de un dato baladí, porque los C-4 de Iguala y Chilpancingo forman parte de la red del Sistema Nacional de Seguridad Pública, controlado por la Secretaría de Gobernación, y los monitoreos de imagen y voz llegan de manera simultánea y en tiempo real a la Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Iguala, pero también al Ejército, y por la cadena de mando la información llega a los comandos centrales de cada cuerpo en el Distrito Federal. Es decir, también tuvieron conocimiento de los hechos los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política del gobierno federal), en Guerrero, y sus superiores en la ciudad de México, y los mandos del Batallón de Infantería 27, en Iguala, que depende de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo. En particular, la información de lo que estaba ocurriendo tuvo que ser monitoreada por miembros del denominado Tercer Batallón, una unidad de *fuerzas especiales* a cargo, entre otras, de las tareas de inteligencia. Además de que en el estado de Guerrero existen 52 Bases de Operaciones Mixtas (BOM), que suelen ser coordinadas por las fuerzas armadas (Ejército o Marina de Guerra).

Por otra parte, si como declaró públicamente el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, había informado con anterioridad a los hechos del 26 de septiembre a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Cisen y a la Procuraduría General de la República, sobre los presuntos nexos del edil de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de los Guerreros Unidos, era de suponer que también la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) debía tener bajo la lupa a ese municipio. Otro dato incuestionable era que, en

⁸ *Idem.*

Guerrero, desde la *guerra sucia* de los años setenta el control territorial lo tiene el Ejército. Un Ejército que actúa bajo la lógica de la contrainsurgencia —es decir, del “enemigo interno”—, y que desde comienzos de 2013 vivía obsesionado con una reaparición activa de la guerrilla (cuatro de las cuales, por cierto, se manifestaron a raíz de los trágicos hechos de Iguala: EPR, FAR-LP, Milicias Populares y ERPI).

También resultó incuestionable que el Ejército participó en los hechos la noche del 26 de septiembre, porque como denunció el joven Omar García, representante del comité estudiantil de Ayotzinapa —y quien estuvo esa noche en el lugar de los hechos—, luego de ser agredidos a balazos por la policía municipal, “efectivos castrenses” sometieron a los normalistas. García narró que al hospital Cristina —adonde llevaron al estudiante Édgar Andrés Vargas herido con un balazo en la boca— “los soldados llegaron en minutos, cortando cartucho, insultando. Nos trataron con violencia y nos quitaron los celulares. Al médico de guardia le prohibieron que atendiera a Édgar”.⁹

Según el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 30 de abril de 2014, por sus características —“entrenamiento, disciplina, inteligencia, logística, espíritu de cuerpo, movilidad y capacidad de respuesta y de fuego”— las Fuerzas Armadas son el estamento “necesario” e “indispensable” para reducir la violencia y garantizar la paz social en México. Como se dijo antes, desde las 20:00 horas del 26 de septiembre el gabinete de Seguridad Nacional recibió reportes y comunicaciones sobre qué estaba ocurriendo en Iguala. La detención-desaparición de los 43 normalistas ocurrió con el conocimiento, en tiempo real, de los mandos de la PGR, el Cisen y la Sedena. No se podía argüir fallas de “inteligencia”; tampoco dudar de la “movilidad y capacidad de respuesta” del Batallón de Infantería 27, bastión de la contrainsurgencia acantonado en esa ciudad desde los años setenta. Y era previsible, también, que alguien habría informado al responsable de la cadena de mando y comandante supremo, el presidente de la República.

⁹ Carlos Fazio, “Ayotzinapa, terror clasista”, *op. cit.*

ARDE GUERRERO

En ese contexto, cabe señalar que entre las inconsistencias o lagunas del caso está el papel real desempeñado por el Batallón 27, pero es bien sabido que los usos y costumbres de los aparatos de seguridad del sistema político mexicano operan con la lógica del silencio y las complicidades mutuas en el ámbito civil y militar, y que ambos circuitos están imbricados con organizaciones delincuenciales. Más allá de ello, en los días inmediatos posteriores a los hechos resultaba evidente que, por acción u omisión, los mandos castrenses de la 35 Zona Militar tenían algún tipo de responsabilidad en torno a los sucesos. Además de que, como quedó demostrado una vez más, en Iguala existió una delegación parcial del monopolio de la fuerza del Estado, en un grupo paramilitar y/o delincencial. Asimismo, existían indicios que sugerían el montaje de una gran provocación. Pudo tratarse de un crimen mayor para ocultar otro: la ejecución extrajudicial de 22 personas por el Ejército en Tlatlaya, Estado de México, y el encubrimiento de los responsables por la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2006, las Fuerzas Armadas habían venido exterminando “enemigos” en el marco de un Estado de excepción permanente de facto. Los hechos de Iguala no eran un hecho aislado, confirmaban la regla: fue un crimen de Estado. Una lógica elemental llevaba a cuestionar: si la Sedena había mentido en el caso Tlatlaya, todas las autoridades podían estar mintiendo ahora sobre los crímenes de Iguala.

Avanzado octubre, cada día la lumbre devoraba edificios públicos, sedes partidarias y automóviles. Se multiplicaban las manifestaciones y los cortes de carreteras. El 10 de noviembre el aeropuerto de Acapulco fue bloqueado durante cuatro horas. Dos días antes, la ira, la rabia, el coraje social habían llegado a las propias puertas del Palacio Nacional, en la ciudad de México, y ardió la puerta Mariana que data del siglo XIX. Todo México era un hervidero. En una multitudinaria marcha en el Distrito Federal un grupo de jóvenes pintó en la explanada del Zócalo una consigna con letras blancas: “Fue el Estado”. Desde un edificio alguien le tomó una foto.

Circuló masivamente, causó gran impacto y la frase se volvió viral en las redes sociales. El *hashtag* #FueElEstado fue multiplicado miles de veces en Facebook, Twitter e Instagram y se convirtió en un lema unificador.

La insurgencia ciudadana iba en ascenso. En su epicentro, Guerrero, la revuelta popular agrupó a los normalistas de Ayotzinapa y a los padres y madres de los muchachos lesionados, asesinados y desaparecidos, policías comunitarias, maestros de la combativa coordinadora del magisterio disidente (CNTE) y organizaciones campesinas y urbanas. El pantano de Iguala sumió en una profunda crisis al Estado mexicano. En Iguala había quedado exhibida, una vez más, la violencia de un Estado terrorista asentado en la cadena corrupción-impunidad-simulación. Con su sistema de tapaderas y su fachada seudodemocrática, el pacto de impunidad de la clase política le reventó en la cara a Enrique Peña Nieto, el “estadista del año” 2014. La catástrofe humanitaria heredada del calderonismo, profundizada en lo que iba de su mandato, obligó al jefe del Poder Ejecutivo a encomendar apresuradas operaciones de control de daños. ¿Objetivo? Eludir su responsabilidad en los crímenes de Estado y lesa humanidad configurados tras las ejecuciones sumarias de seis personas, la práctica de la tortura y la desaparición forzada de 43 estudiantes.

MURILLO KARAM Y LA SOLUCIÓN FINAL

Durante el sexenio de Felipe Calderón, la narrativa gubernamental había sido que la violencia no afectaba de manera negativa a la economía del país. Los dos primeros años de gobierno de Peña Nieto estuvieron dedicados a gestionar las contrarreformas estructurales y su imagen de “reformador” y “estadista” creció en el exterior. La revista *Time* le dedicó una portada con el título “Saving Mexico” (“Salvando a México”), que ahora, ante la chamusquina de edificios públicos y vehículos, resultaba patética.

Ante los hechos de Iguala, la revista británica *The Economist* dijo que “México está lejos de ser un país de leyes”. *The*

Washington Post describió a la sierra de Iguala como un “basurero humano”. El diario concluyó que eso había “destrozado la campaña de relaciones públicas” de Peña Nieto, al desviar la atención internacional hacia los fracasos en materia de seguridad. Y sentenció: “Se ha pasado del *Mexican moment* al *Mexican murder*”. En la coyuntura, la envoltura o marca Peña Nieto, fabricada por Televisa y los poderes fácticos los años precedentes, se desvanecía y emergía la verdadera consistencia del presidente. Entre contradicciones y lagunas, y bajo la presión internacional, sus hombres de confianza tuvieron que salir a hacer esfuerzos desesperados para refutar que se trató de un crimen de Estado.

El 7 de noviembre, la víspera del viaje del presidente Peña Nieto a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, el informe del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, confirmaba el peor de los escenarios: dijo que los normalistas estaban muertos. Mezcla de ficción y realidad, la representación mediática del procurador fue concebida por los estrategas del *marketing* político de la presidencia de la República como una puesta en escena para la “solución final” del régimen a la detención-desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En su papel de hechicero mayor de la aldea, Murillo anunció que los muchachos habían sido quemados y sus restos óseos triturados, lo que haría muy “difícil” la extracción de ADN para la identificación genética. *Ergo*, nunca aparecería el cuerpo del delito de los 43 homicidios y se consumaría la “segunda desaparición” de los desaparecidos, prolongando de manera indefinida la “tortura” (como la llamó Felipe de la Cruz) sobre los familiares, a quienes no se les permitiría hacer el trabajo de duelo. Interrogado sobre el papel del 27 Batallón de Infantería de Iguala, la respuesta del procurador Murillo exhibió la esquizofrenia del régimen. Dijo: “Qué bueno que el Ejército no salió, pues obviamente hubiera apoyado a la autoridad constituida [...] hubiera sido un problema mucho mayor”. Es decir, “de haber salido” —como apuntó Carlos Ímaz—, los militares habrían colaborado con los policías municipales que dispararon a mansalva, torturaron y desa-

parecieron a los 43 normalistas indefensos y el saldo sería aún mayor. Pero Murillo agregó que “el Ejército sólo se mueve por órdenes”. Lo cual dejaba implícita la pregunta: ¿quién ordenó las ejecuciones de Tlatlaya? Y en el caso de Iguala, ¿quién ordenó que salieran del cuartel del 27 Batallón? ¿Fue el coronel José Rodríguez Pérez? ¿Lo consultó con algún mando superior?

Pensada para el consumo de masas, la novelesca actuación del procurador —con sus dislates histriónicos y el carpe-tazo del caso incluidos— remitía al “Decreto Noche y Niebla” (*Nacht-und-Nebel-Erlass*) del Führer Adolfo Hitler, del 12 de diciembre de 1941, reconocido como el primer documento de Estado con órdenes para detener-desaparecer personas de manera furtiva o secreta, bajo el cobijo/ocultamiento de la oscuridad y la niebla. El decreto fue complementado por otros del mariscal Wilhelm Keitel, que especificaban cómo debían “hacer desaparecer” a personas sospechosas de resistir la ocupación nazi en Europa: sin “dejar rastro” de su paradero, ninguna pista, ningún atisbo de esperanza y “sin proporcionar información alguna” a sus parientes. El cadáver debía ser inhumado en el sitio de muerte y el lugar no sería dado a conocer. El objetivo, instruyó Keitel, era generar “un efecto aterrorizante” (*abschreckende Wirkung*), eficaz y perdurable sobre los familiares y la población, que debería permanecer con la “incertidumbre” sobre el destino de los detenidos.

En esos decretos que los ideólogos nazis preconizaban como “innovación básica en la organización de Estado”, el propósito era “paralizar” a la población a través del “terror”. Los desaparecidos eran un medio; el objetivo principal era desarticular cualquier forma de resistencia y mantener a la población en una incertidumbre duradera. Un esquema que parecía repetirse ahora en México a través de la simulación e instrumentalización de la búsqueda de los 43 desaparecidos, con el objetivo encubierto —pero hasta el presente no logrado— de aniquilar psíquicamente a los familiares y compañeros de las víctimas y a la población en general, e inhibir cualquier oposición o resistencia a la colonización, ocupación y despojo del territorio que habitan.

La finalidad del Estado terrorista es el disciplinamiento del cuerpo social. Ese “ocultar mostrando”, perverso y deliberado (que no logra *hacer desaparecer* el negacionismo oficial), obedece a una técnica de sometimiento y dominación social. Como indican muchos análisis sobre prácticas de violencias extremas, hay un proceso previo de clasificación y simbolización que impregna a la sociedad y la divide en *ellos* y *nosotros*. Es un proceso previo de deshumanización del *otro* a exterminar; de deshumanización y polarización extremas. Es necesario llevar al máximo las tensiones sociales para crear la sensación de que ningún proceso de diálogo es posible y lo único que cabe es una solución final que resuelva la cuestión. Porque al exterminio se llega. Se llega de manera premeditada a través de un proceso minuciosamente preparado; muchas veces por años. Y en eso, los medios de difusión masiva tienen una función específica en la demonización y estigmatización del “grupo objetivo”. En la fabricación de una víctima que, según la ideología de la criminalización del disenso (Vattimo), es clasificada como una “amenaza” social.

Reproductores y amplificadores de la violencia simbólica (Bourdieu) y todo un sistema de mentiras clasista y racista, los medios son usados para acelerar el proceso de deshumanización y des-individualización del otro, considerado enemigo; para la manipulación de la información y la simbolización de la violencia asimétrica—invisible, implícita o subterránea— del poder y la organización del exterminio. Y luego, para la negación.

EL TERROR DE ESTADO Y LOS MATABLES

En general, y más allá del *outsourcing* o subrogación de la violencia oficial en boga con fines exculpatorios, los responsables de las desapariciones forzadas son los aparatos estatales. Es el mismo Estado, que lo puede hacer de modo directo o indirecto, como ocurrió en Iguala y antes en Oaxaca, Acteal, Aguas Blancas, Tlatelolco y un largo etcétera. Los estudiantes de Ayotzinapa fueron baleados por agentes del Estado, seis

murieron y luego 43 fueron detenidos y entregados a personal tercerizado. A Julio César Mondragón lo detuvieron, lo torturaron y lo ejecutaron. Lo desollaron y vaciaron los ojos de sus cuencas. Su cuerpo fue encontrado por el Ejército y reportado al Ministerio Público a las 9:30 horas del 27 de septiembre. El cuerpo no fue ocultado sino expuesto, abandonado en una calle de Iguala. La técnica utilizada no se planificó y ejecutó para no ser vista. Sus torturados quisieron enviar un mensaje. Alguien le tomó una foto y circuló en las redes sociales. Quien lo hizo quiso enviar un mensaje de terror.

En México se libra una guerra contra los que sobran, los jóvenes. Agamben los llamó “matables” (*uccidibiles*), como se dice en Colombia. El pretexto es la lucha contra las drogas. Su destino: la fosa común, clandestina, sin nombre. Sin nada de nada. Los jóvenes sobran, el sistema del Estado los descarta. Vivimos la sociedad del descarte guiada por su razón cartesiana: descartar lo que sobra. Artaud señaló que Hitler haría lo que hoy hacen los carteles tercerizados del Estado: el capitalismo produce sobras y ellos los eliminan por su goce herético. La pregunta que se repite es por qué los estudiantes de Ayotzinapa. Porque el sistema no soporta el estilo de vida de los jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y se los eliminó con la anuencia de la clase política, sus partidos e intelectuales orgánicos.

Ya señalamos que en diversos discursos políticos y periodísticos se había venido denigrando de manera sistemática a los estudiantes de Ayotzinapa. En lugar de abordar los discursos como descriptivos y comunicativos de cierta realidad existente, pueden concebirse como creadores y organizadores de una realidad imaginaria que sólo existe en virtud de los mismos discursos. Es ahí, en esa realidad imaginaria generada por un sistema simbólico donde, como dice el psicólogo David Pavón-Cuéllar, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron presentados como “parásitos inútiles y prescindibles”, que no rinden ahora ni rendirán jamás ningún servicio a la sociedad, pero que “son costosos y dispendiosos, y además ávidos e insaciables, pues quieren más y más, sin dar nada a cambio”.

Lo que se descubre, agrega Pavón-Cuéllar, es que lo que se dice literalmente: que “los estudiantes son demasiado lo que son, que lo son en exceso, que son más de lo que deberían ser, que están de más, que sobran”. Esa condición intrínsecamente sobrante de los estudiantes se confirma en sus caracterizaciones como inútiles y prescindibles. “Los estudiantes de Ayotzinapa son algo que sobra, y cuando algo sobra, es normal que se le deba eliminar, limpiar, tirar al cesto de la basura, o, en este caso, a una fosa común”. De allí que la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa no sea más que la conclusión de un silogismo sencillo: los estudiantes sobran, y lo que sobra debe desaparecer; por lo tanto, los estudiantes deben desaparecer.

Al matar a los estudiantes, los policías concluyeron el trabajo de los políticos y los periodistas. Hicieron además únicamente lo que les fue indicado por el gobierno y por la televisión. Es ahí donde se tejió esa trama discursiva en la que no había ya lugar para los estudiantes, en la que no cabían, sobraban y debían descartarse, desecharse. Una vez más debemos buscar la verdad en la mentira, en la estructura de ficción, en los “cuentos verdaderos” de los que nos hablaba Marx. Si los estudiantes de Ayotzinapa debían morir o desaparecer, fue también y quizá fundamentalmente porque el gobierno y los medios redujeron toda su existencia real a lo que son para el sistema capitalista: pura vida pulsional quizá gozable, pero indisciplinada e incontrolada, y por tanto inútil e inexplorable. Una vida como ésta solamente puede causar problemas. De ahí que deba ser eliminada o al menos desactivada, marginada o expulsada del sistema.

Para el sistema, la existencia de los normalistas no sería entonces más que vida pulsional inútil o inexplorable, pero además peligrosa, esencialmente disruptiva y subversiva. Esa vida no tendría ningún derecho a seguir viviendo. En sentido contrario, para no terminar en una fosa común como los estudiantes de Ayotzinapa —fue el mensaje del procurador Muriello Karam—, debe hacerse el trabajo del sistema capitalista, ya sea cumpliendo con labores ideológicas o bien estrictamente económicas.

EL NEGACIONISMO Y LA DESTRUCCIÓN DE LA MEMORIA

Pero la puesta en práctica del exterminio no es el último paso. Viene luego la etapa de la negación. El negacionismo trata de la negación, de la mentira y las manipulaciones. Negacionismo como expresión de un mundo turbio donde lo verdadero y lo falso se confunden, donde el sentido de las palabras se transforma o se invierte. En el caso de Iguala, la esquizoide negación gubernamental estuvo dirigida desde un principio a intentar eludir toda responsabilidad en lo que ha sido calificado como un crimen de Estado. De allí que en la fabricación de la solución final del caso Iguala/Ayotzinapa, la única hipótesis en las investigaciones haya estado dirigida a fortalecer la liga “crimen organizado-fosas comunes”, complementada con otro mecanismo perverso, luego desechado: la inversión de la acusación. Esto es, las pretendidas víctimas (los normalistas asesinados, lesionados y desaparecidos) eran “culpables”, ya que en el expediente se les quería presentar como “parte” o “auxiliares” de un grupo criminal: Los Rojos. Esa inversión de la acusación es el argumento más cínico de la negación, y consiste en invertir los roles.

México configura hoy un Estado macabro, donde la imbricación de violencia, corporaciones oficiales que devastan y despojan en complicidad con grupos de la economía criminal, empuja para que nada se aclare, para que todo se sumerja en un *no lugar* y en un *no tiempo*, coludidos contra la esperanza de la gente. El Estado y sus instituciones se han convertido en baluarte del crimen, la decadencia y el espanto, donde lo bárbaro y sus atrocidades reinan. Dice el poeta Javier Sicilia que México se parece cada vez más a “un rastro, a una inmensa fosa clandestina, a un campo de concentración al aire libre”. En ese contexto, debemos recordar que un Estado perpetrador de crímenes contra la humanidad rechaza siempre reconocer su evidencia. Desvanece datos, fabrica testimonios, disimula hechos a la justicia y sustrae criminales a una sanción; por eso es un delito. Además, el negacionismo es un acto deliberado de destrucción de la memoria y una ofensa a las víctimas, a los sobrevivientes y sus familias. Enfrentar la realidad

implica aceptarla en toda su crudeza, y con Georges Bernanos podríamos decir que la verdadera esperanza comienza cuando hemos aprendido a desesperar de todo.

LA VIOLENCIA Y LA RAZÓN DESESPERADA

En el México actual se vislumbran tres de los factores que Nicos Poulantzas detectó como síntomas indicativos de todo proceso de fascistización: la “radicalización de los partidos burgueses hacia formas de Estado de excepción”, una distorsión característica entre “poder formal” y “poder real, y, por último, “la ruptura del vínculo representantes-representados”. Mediante una violencia estatal camuflada como guerra a las drogas, Felipe Calderón introdujo primero la excepción, luego la convirtió en rutina y después la transformó en regla. Todo régimen de excepción se origina en una crisis política o ideológica, o en ambas a la vez. México vive hoy una crisis profunda. Pero la crisis venía de atrás, y se profundizó en la coyuntura de los hechos de Iguala.

Acorralados por las consignas masivas pronunciadas *urbi et orbi*: “Fue el Estado”, “Fuera Peña Nieto”, el presidente de la República se enojó y el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, también. Mala cosa. El coraje les nubló la visión y el entendimiento de lo que estaba aconteciendo en México, y los llevó a emitir pronunciamientos irresponsables. Pero la furia los podía empujar, también, a tomar decisiones equivocadas dramáticas. Como en crisis anteriores reaparecía ahora el vocabulario maniqueo del poder, bordado con base en un manojo de contradicciones tales como paz/violencia, orden/anarquía, Estado de derecho/caos desestabilizador. Se trató de una sintaxis enmohecida que contenía un tufo autoritario y represivo diazordacista; amenazador. La violencia no tiene nada de ambigua. La violencia es. Ahí están Auschwitz, Hiroshima, Tlatelolco. O la violencia de Iguala, con sus torturados, asesinados y los 43 detenidos-desaparecidos. Pero también, en la vida cotidiana, en la relación opresor-oprimido, la violencia supone el sometimiento de éste por aquél.

Ante las circunstancias de la hora cabe recordar que no se puede desprender la violencia de su contexto político, erigirla aisladamente, presentarla como un monstruo abominable y predicar en torno a ella las viejas mentiras. Exponentes de la antigua forma de hacer política, el presidente Peña, su gabinete y los tarifados papagayos mediáticos pronunciaron los meses finales de 2014 palabras sin contenido social, que no podían apoyarse en realidades; usaron un lenguaje caducado y hablaron de la violencia como si fuese algo distinto del poder del Estado y de las artes de la política. Olvidaron —o pretendían olvidar— que la “ley” y el “orden” son el disfraz de la violencia del sistema. La definición que ellos aplicaron a una conducta que consideran como antisocial, desestabilizadora, vandálica, es la racionalización de todo un proceso de descomposición de la sociedad, que ellos mismos —gobierno y medios— han llevado a cabo, enmascarado en una ideología justificadora de las situaciones violentas que han creado.

Remedo del antiguo régimen, el “nuevo PRI” trató de convencer a la sociedad mexicana que la subversión es siempre el peligro latente que justifica el orden social a cualquier precio. La subversión, o sea, la “acción de trastornar, revolver, desordenar, destruir...”, siempre ha sido definida en términos negativos. El subversivo es el enemigo de la sociedad. Sin embargo, por paradójico que parezca, la gran subversiva de nuestro tiempo es la plutocracia. Los verdaderos antisociales y antihistóricos son los que mandan, los poderes fácticos, los grandes capitalistas agremiados en el Consejo Coordinador Empresarial, que el 29 de octubre de 2014 impulsaron un Pacto para el Fortalecimiento del Estado Mexicano, con su llamado a “acometer con energía el reto de garantizar seguridad y la vigencia plena del Estado de Derecho”. Lo hicieron como hacen siempre, en nombre de la “modernización” y el “progreso”. Palabrería hueca, simple retórica. El poder, el poder real, está empecinado en que nada cambie. O hacen algunos cambios que les aseguren mantener las formas de poder que detentan. Cambiar algo para que todo quede como

está. Y para eso cuenta con la “violencia organizada”; con la fuerza bruta.

La vieja política ha cambiado de afeites muchas veces pero no ha modificado su rostro. En ocasiones, como la derivada de los crímenes de Iguala, se hace visible la violencia estructural del sistema. Hasta septiembre de 2014, Peña Nieto había podido absorber los conflictos por medio del acondicionamiento sociológico, la propaganda y la manipulación. El régimen había exhibido parcialmente la violencia latente; había usado el miedo y la violencia institucionalizada como herramientas para el disciplinamiento social, logrando una cierta adhesión pasiva de sectores de población que más bien se asemejaba a una sumisión servil.

Ortega y Gasset llamaba a la violencia la “razón desesperada”. Sin embargo, la violencia practicada desde el poder para conservar las injustas estructuras en beneficio de unos pocos, es producto de la falta de razón. De la sinrazón. La violencia institucionalizada es la irracionalidad social exacerbada. Atrapado, desenmascarado por los hechos de Tlatlaya e Iguala, el régimen había quedado desnudo. Las llamadas fuerzas del orden, exhibidas. Con base en recursos demagógicos, sofismas y mentiras, Peña y sus acólitos en los medios pretendieron dividir a México entre buenos y malos, pacíficos y violentos. Llamaron orden al desorden, paz al miedo, justicia al hambre y desarrollo al desempleo.

Buscaron seducir, persuadir, ablandar, y usaron agentes provocadores y *propaganda negra* como bandera falsa para “legitimar” detenciones arbitrarias y sembrar un terror paralizante entre los jóvenes. Quisieron desactivar el descontento, la protesta, la rebeldía; la digna rabia y la contraviolencia de los de abajo, que ante la violencia estructural y su corolario, la violencia institucionalizada, esgrimieron la razón desesperada. La revuelta juvenil en ascenso expresó que cada día eran más los que comprendían que el caos y la anarquía se habían institucionalizado, y se rebelaban contra ese estado de cosas. Los jóvenes saben, instintivamente, que hay algo que se llama derecho a la vida y que cuando no es contemplado hay algo que se llama derecho a la resistencia.

TLATLAYA-IGUALA: MODELO NECRÓFILO

Fue el Estado. El “operativo especial” en 36 alcaldías de Tierra Caliente, anunciado a comienzos de diciembre y que abarcaría espacios territoriales de Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México, no podría hacer desaparecer la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos de Tlatlaya e Iguala. En ambos casos, agentes del Estado, en su carácter de servidores públicos, participaron de manera directa en la comisión de ejecuciones extrajudiciales y en la práctica de la tortura y la detención-desaparición forzada de 43 normalistas, lo que configuran crímenes contra la humanidad sancionados por el Estatuto de Roma, del que México es signatario desde 2005. Por lo que dichos actos caían bajo la competencia de la Corte Penal Internacional (ONU, 1998).

La ejecución sumaria de 22 jóvenes sometidos por miembros del Ejército en Tlatlaya, y los homicidios de seis personas y la detención-desaparición de 43 normalistas en Iguala, exhibieron el carácter necrófilo del capitalismo: la compulsión por subordinar la vida social al imperativo de la ganancia económica, de convertir lo viviente en oro (muerte). El neoliberalismo como una fábrica de muerte; la acumulación por apropiación-desposesión, mediante programadas políticas de exterminio de población sobrante, que se combinan con otras formas de disciplinamiento social ejercidas por agentes estatales y grupos criminales subrogados.

La palabra “necrófilo” para designar un rasgo de carácter, fue utilizada por el filósofo Miguel de Unamuno en 1936, a raíz de un discurso pronunciado por el general nacionalista Millán Astray en la Universidad de Salamanca. Empezaba la Guerra Civil española y la divisa favorita de Astray era “¡Viva la muerte!”. Uno de sus seguidores la voceó durante su alocución. Cuando el general terminó, Unamuno, rector de la Universidad, se levantó y dijo: “Acabo de oír el necrófilo e insensato grito ‘¡Viva la muerte!’. Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como experto en la materia, que esa ridícula paradoja me parece repelente”. Ante eso, incapaz

de reprimirse, Astray gritó: “¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte!”. Los falangistas aclamaron su réplica. Pero Unamuno prosiguió: “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha”.

El pasaje fue recuperado por Erich Fromm en su *Anatomía de la destructividad humana*. Allí señala que el carácter necrófilo es una forma extrema donde la necrofilia es el rasgo dominante. Según Fromm, la necrofilia puede describirse como “la atracción apasionada por todo lo muerto, corrompido, pútrido y enfermizo; es la pasión de transformar lo viviente en algo no vivo, de destruir por destruir [...] es la pasión por destrozarse las estructuras vivas”. Queda para psicólogos y psiquiatras definir un eventual carácter necrófilo en el ex presidente Felipe Calderón, quien basado en un Estado de excepción permanente *de facto*, puso en práctica una violencia exterminadora sin límites, que facilitó una caótica y devastadora política de desposesión y arrasamiento de las mayorías en beneficio de la acumulación de capital de los amos de México, convirtiendo al país en un gran cementerio clandestino de seres humanos, en su abrumadora mayoría jóvenes y pobres.

Ahora, cuando afloraban otras ridículas y repelentes paradojas, como el grito de “¡Todos somos Ayotzinapa!” que hizo suyo de manera inmoral y demagógica el presidente Enrique Peña Nieto,¹⁰ había que repetir que podía emplearse la fuerza bruta vía la militarización y la paramilitarización del país, pero eso no convencería a una gran parte de la población mexicana, que era ahora consciente de que a la clase dominante y sus administradores de turno no les asistía ni la razón ni el derecho. Impelido por el gran capital tras sendos encuentros furtivos con emisarios del Consejo Coordinador Empresarial, Peña Nieto ordenó un raído decálogo de medidas de

¹⁰ Rosa E. Vargas, Fabiola Martínez y Alonso Urrutia, “Peña Nieto hace suyo el grito: ‘¡Todos somos Ayotzinapa!’”, *La Jornada*, 28 de noviembre de 2014.

fuerza dirigido a profundizar el proceso de militarización iniciado por Calderón en Tierra Caliente. Exhibidos en la coyuntura signos de ofuscación, enojo y una cierta alteración emocional; desnudado, acotadas sus capacidades para la simulación y la seducción, con su decisión de crear enclaves (“zonas económicas especiales”) para el saqueo de recursos geoestratégicos y la explotación neocolonial de mano de obra, y de mantener y reforzar a las Fuerzas Armadas en el control territorial de regiones donde han florecido históricos movimientos de resistencia popular al despotismo y la barbarie, el ilusionista de Los Pinos podría verse tentado a acentuar el carácter necrófilo del actual modelo de dominación. Lo cual significaría “mover a México” hacia una pendiente resbalosa, que podría derivar en el surgimiento de un Estado autoritario de nuevo tipo.

El nuevo pacto en las sombras entre las elites del poder económico y político, apostaba una vez más por sofocar con terror, sangre y fuego la resistencia social. Cuando crecían las demandas de verdad, justicia y aparición con vida de los 42 normalistas que faltaban —tras la confirmación en un laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, de que análisis de ADN permitían concluir que uno de los restos investigados correspondían al estudiante Alexander Mora—, la decisión gubernamental de enviar al general Enrique Dena a Tierra Caliente mandaba un mensaje de mayor violencia represiva. La *Ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales* —como se le llamó— era un ardid que pretendía encubrir la estructural e histórica cohabitación y/o colusión entre grupos subcontratados de la economía criminal y las fuerzas institucionales de disciplinamiento social (el Ejército, la Marina de Guerra y las distintas policías) en todo el país. El decálogo de Peña Nieto tenía como propósito seguir administrando de manera violenta la lucha de clases; era un plan desmovilizador policiaco-militar que buscaba desarticular el actual proceso de lucha democrática, en redes, de los de abajo; la rebelión de las víctimas. También era un intento por invisibilizar la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad de Tlatlaya e Iguala.

LA IMPOTENCIA DE LA FUERZA

Afirmaba Vicente Leñero que el periodismo no está para resolver las crisis, está para decirlas. También decía que el objetivo del periodismo es “gritar qué se esconde, qué se oculta o simula, cómo duele la llaga, por qué y cómo y a qué horas, desde cuándo y por dónde se manifiesta el yugo que oprime la vida social”. La realidad —la realidad a secas— presenta conflictos, signos, contradicciones. Y según el entrañable Leñero, más que ir en busca de la verdad, el objetivo del periodismo es indagar en el desgarrado cuerpo social y presentar la realidad “desnuditita y completa; monda y lironda”. Guste a quien guste, enoje a quien enoje, podríamos agregar.

La oscura realidad de los últimos días de 2014 estaba signada por los trágicos hechos de Tlatlaya e Iguala. Con sus ocultamientos y simulaciones, con sus significados y contradicciones, ambos sucesos habían generado indignación mundial, y exhibido el accionar criminal de agentes de los aparatos de seguridad del Estado. Tlatlaya e Iguala desnudaban una realidad que dolía, sí. Pero lo que era peor, no fueron hechos aislados. Formaban parte estructural del sistema de dominación capitalista; develaban un patrón de conducta, que utiliza a las instituciones armadas del Estado en defensa de los intereses de la plutocracia.

A propósito de la realidad, cabe consignar que el 10 de noviembre de 2014, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, había dicho en Monterrey, Nuevo León, que él y sus hombres no estaban “amedrentados por juicios injustos [...] erróneos [...] malintencionados que la institución armada nacional no se merece”.¹¹ No era la primera vez que ese profesional de la “violencia legítima” del Estado, intentaba poner punto final a las indagaciones judiciales y periodísticas sobre los hechos de Tlatlaya, donde el 30 de junio de ese año efectivos del 102 Batallón de Infan-

¹¹ Erick Muñoz, “Militares: no nos amedrentan juicios injustos”, *La Jornada*; Sandra González Cortés, “Está en juego el desarrollo del país: Cienfuegos”, *Milenio*, 11 de noviembre de 2014.

tería del Ejército ejecutaron de manera sumaria a 21 jóvenes sometidos e inermes. Investigaciones posteriores demostraron que la Sedena mintió al informar que los civiles fueron “abatidos en un enfrentamiento”. También fue develado que los militares que intervinieron en la matanza manipularon la escena del crimen, sembraron los cuerpos de las víctimas y desaparecieron evidencias; es decir, hicieron un montaje para intentar hacer creíble la versión oficial. Ya antes, el 24 de octubre, debido a la presión ejercida desde Washington sobre el presidente Enrique Peña Nieto, el divisionario mexicano había tenido que afirmar que los integrantes de las Fuerzas Armadas “no pueden rebajar sus actos a niveles que son propios de los delincuentes”. Dijo: “No se debe combatir la ilegalidad con ilegalidad”.

El 8 de diciembre, a más de dos meses de los que llamó “incomprensibles acontecimientos” de Iguala, cuando la protesta social no menguaba y persistía la demanda de aparición con vida de los 42 jóvenes detenidos-desaparecidos, el general Cienfuegos señaló que “la mentira, el reproche, la crítica infundada, la violencia, la intolerancia poco abonan”. Y tras abogar por la “unidad nacional”, dijo que era un “problema de Estado, no de gobierno”. El 10 de diciembre, cuando todavía no se apagaban los ecos de los enigmáticos señalamientos del general secretario, su homólogo en las Fuerzas Armadas, el almirante Vidal Soberón, titular de la Secretaría de Marina, afirmó que algunos actores sociales y grupos políticos (que no identificó) estaban “mintiendo” y “manipulando” a los padres de los jóvenes desaparecidos, y que le “enojaba” que se buscara desacreditar al gobierno y al gabinete de seguridad nacional (la Procuraduría General de la República, el Ejército, la Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional), cuando quienes fallaron fueron las autoridades municipales de Iguala y Cocula, en las que “se infiltró la delincuencia organizada”.¹²

Los dos mandos castrenses deberían saber que entre los innumerables monopolios que tiene y mantiene la plutocra-

¹² Ignacio Alzaga, “Manipulan a padres de los 43, acusa Soberón”, *Milenio*, 11 de diciembre de 2014.

cia, hay uno que el pueblo no tiene interés en expropiarle, y es el monopolio de la mentira, de la calumnia, de la hipocresía. Ésas no pueden ser nunca las armas de quienes luchan por una sociedad democrática. La mentira sirve a veces para ganar la escaramuza, la reyerta soez; nunca para alcanzar la liberación definitiva. Aunque se mimetice, y hasta se rodee de verdades y semiverdades, todo embuste acaba por desmascararse, por quedar desnudo cuando es iluminado por la implacable luz de la historia.

Sumido en una confusión estratégica, el gobierno había perdido la batalla de la información pública. La PGR de Jesús Murillo se negaba a abrir otras líneas de investigación. La defensa política que Cienfuegos y Soberón hacían de su comandante en jefe, Enrique Peña Nieto, no abonaba a la búsqueda de la verdad. La opacidad militar, tampoco. Como decía Leñero, la realidad duele. Pero el general y el almirante no se debían enojar; en un régimen vertical y autoritario como el mexicano, algún subalterno podría decodificar el mensaje como el llamado a una mayor represión. Antes bien, ambos podrían ayudar a resolver la actual crisis de gobierno y Estado, respondiendo algunas simples preguntas: ¿Quiénes, en la cadena de mando, ordenaron que se llevaran a cabo los hechos de Tlatlaya e Iguala con los trágicos saldos conocidos? ¿Dónde estaban los 42 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos? ¿Quiénes y para qué, desollaron al joven Julio César Mondragón, y por qué no se investigaba ese crimen de Estado?

El gobierno de Peña Nieto parecía no estar preparado para la realidad sino para la ficción. Napoleón, que tenía por qué saber algo de las grandezas y las miserias del poder, escribió: “Lo que me extraña de este mundo es la impotencia de la fuerza. De los dos poderes, fuerza e inteligencia, es siempre la fuerza la que acaba por ser vencida”. A tan atinado parecer, cabía agregar que en el plano de las tozudeces, nada ni nadie puede ser más porfiado que los hechos, que suelen tener y seguir sus propias leyes, que por supuesto no siempre se ajustan a los decretos presidenciales y la mano dura.

PEÑA A WASHINGTON A PROFUNDIZAR LA ENTREGA

El 6 de enero de 2015, el presidente Enrique Peña realizó una visita oficial a Estados Unidos. Llegó a su encuentro con Barack Obama con su legitimidad por el piso y políticamente debilitado. La crisis humanitaria heredada del régimen de Felipe Calderón, profundizada durante los primeros dos años de su gobierno y en esa coyuntura por los crímenes de Estado de Tlatlaya e Iguala/Ayotzinapa exhibían ante el mundo con crudeza la violencia del sistema. A ello se agregaban escándalos de opacidad, corrupción y conflicto de interés desatados por la llamada “Casa Blanca” de la pareja presidencial Peña/Rivera y la concesión del tren rápido México-Querétaro, que vinculaba en un nudo de complicidades a Televisa y el Grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa con los negocios turbios del presidente y la consorte. Para colmo de males, Luis Videgaray, “ministro de finanzas del año” y “pensador global”, también había sido descubijado por *The Wall Street Journal*, cuando reveló una transacción entre el secretario de Hacienda y el “empresario incómodo” del sexenio (Juan Armando Hinojosa), para la compra de una propiedad en Malinalco, Estado de México.

El encuentro Peña/Obama fue otra puesta en escena de la política como espectáculo. Pero la realidad les había cambiado de manera radical a ambos. A partir de enero Obama gobernaría con un Congreso bajo control republicano, lo que acotaría sus márgenes de maniobra. Y en cuanto al “valiente modernizador” de Davos (Suiza); “estadista mundial 2014” de la Appeal of Conscience Foundation y “salvador” de México (*Time Magazine* dixit), la crisis Tlatlaya/Iguala/“Casa Blanca” le estalló en la cara y lo había mantenido desde hacía tres meses en una virtual condición de pasmo. Debido a las circunstancias, en esa ocasión Obama tuvo que controlar los dislates escénicos y el carisma que exhibió en México en mayo de 2013, cuando en una operación de mercadotecnia con fines de legitimación publicitaria en favor de su anfitrión, asumió la nueva épica del entonces naciente gobierno peñista, y transformó discursivamente, como por arte de magia, un país sacrificado

por el terror y una violencia fratricida sin fin, en una nación próspera, de clase media urbana en expansión y con jóvenes nacidos para triunfar.

Aquel México falazmente idealizado por Obama exhibía ahora a una población enojada hasta el hartazgo, que se manifestaba cada día a raíz de los crímenes de lesa humanidad de Iguala/Ayotzinapa. Pero el naufragio del otrora tan aplaudido *Mexican moment*, no distraería el abordaje de la agenda oculta del encuentro Obama/Peña en la otra Casa Blanca. La agenda encubierta tuvo como punto nodal la consolidación de Norteamérica como un espacio geográfico integrado por Canadá, Estados Unidos y México, bajo el control económico-militar de Washington, para la competencia intercapitalista en los mercados y la apropiación/despojo de los recursos geoestratégicos mundiales. En la etapa, la acentuación de la crisis estructural del sistema llegaba acompañada de guerras económico-energéticas, convulsiones geopolíticas y operaciones de desestabilización del eje Pentágono/OTAN en zonas de influencia de Rusia y China; y en el plano subregional estaba marcada por el giro histórico, de signo incierto, contenido en el anuncio de una próxima reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En ese contexto cabía recordar las “recomendaciones” que en octubre anterior diera a conocer el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), poderoso gobierno mundial en las sombras con sede en Nueva York. En su informe *América del Norte: hora para un nuevo enfoque* —reseñado por David Brooks en *La Jornada*—, el CFR (por sus siglas en inglés) insistió en que para fortalecer a Estados Unidos y su presencia en el mundo (*ergo*, para preservar la hegemonía imperial), se debía profundizar la “integración” con Canadá y México, vía “el desarrollo e implementación de una estrategia para la cooperación económica, energética, de seguridad, ambiental y social”.

El reporte abogaba por “una estrategia de seguridad unificada” para América del Norte. Pero mientras se llega a esa meta, Obama deberá apoyar los esfuerzos de Peña por fortalecer la “gobernación democrática” (un giro semántico a la otrora “seguridad democrática” de Álvaro Uribe en Colombia,

auspiciada por Washington). También recomendaba profundizar la estrategia transfronteriza con México, mediante la combinación de la protección del “perímetro de seguridad” con un mayor uso de inteligencia, evaluaciones de riesgo, capacidades compartidas y acciones conjuntas; claro está, con la subordinación de las Fuerzas Armadas de México al Comando Norte del Pentágono, que desde 2013, a través de la Iniciativa Mérida, había intensificado los cursos de entrenamiento a militares y civiles nativos en guerra irregular, contraterrorismo y contrainsurgencia.

Otra recomendación era apoyar “las reformas históricas de México” en materia energética. El CFR insistió en la necesidad de una “estrategia regional” que incluyera una ampliación de las exportaciones, el fortalecimiento de infraestructura y la promoción de mayores conexiones transfronterizas de energía. Y como dijo el ex presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick —firmante del informe junto con el general retirado David Petraeus, ex director de la CIA—, dado “que la reforma energética en México aún no se ha implementado, es muy importante que Estados Unidos ayude en esa implementación”. Allanada la contrarreforma al 27 constitucional, el botín estaba en las aguas profundas del Golfo y en la infraestructura hidrocarburífica transfronteriza con eje en las cuencas de Burgos y Sabinas. A eso había sido llamado Peña a Washington: a profundizar la entrega.

EL ARRIBA NERVIOSO Y EL ABAJO QUE SE MUEVE

Al despuntar 2015 la situación en México era grave, muy grave. La novedad era que podría ponerse peor. El discurso público de los hombres fuertes del Gabinete de Seguridad Nacional se había endurecido, aunque comenzaban a aparecer contradicciones en su seno. La decisión del gobierno federal de abrir al escrutinio público las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala, había generado animosidad en altos mandos castrenses y se manifestaba ya con mensajes no tan cifrados en los medios. El 8 de enero, estu-

diantes de la normal rural de Ayotzinapa tomaron una estación de radio en Chilpancingo y exigieron al gobierno de Peña Nieto se les permitiera entrar a instalaciones militares para buscar con vida a sus 42 compañeros detenidos-desaparecidos. Insistieron que la Policía Federal y el Ejército eran “corresponsables” o habían tenido algún tipo de “participación” en los hechos de Iguala. El lunes 12 la protesta social se exacerbó y derivó en un zafarrancho entre elementos de las policías militar y estatal con padres de familia y normalistas en el interior de la base del Batallón 27. El enfrentamiento dobló a las autoridades, y en un hecho inédito, el martes 13 la Secretaría de Gobernación anunció que el gobierno accedía a abrir los cuarteles, e invitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a recorrer las instalaciones del polémico batallón.

Desde octubre pasado autoridades federales habían intentado reducir el caso a los límites de Iguala y Cocula, y a la presunta colusión entre el ex alcalde José Luis Abarca y policías de ambos municipios con un grupo de la economía criminal. Ésa había sido la única línea de investigación del procurador Jesús Murillo Karam, quien se “cansó” pronto de las pesquisas y prácticamente decidió cerrar el caso con base en la teoría de la incineración: los muchachos fueron reducidos a cenizas, dijo. *Ergo*, estaban muertos. Y váyanse con su música a otra parte parecía ser el mensaje institucional. “Supérenlo ya”, había dicho Peña Nieto.¹³

Pero el tesón en la búsqueda de las madres, los padres y los normalistas no cejó, y junto con sus abogados habían seguido insistiendo desde diciembre anterior que se abriera otra línea de investigación. Arguyeron que en la indagatoria y en el expediente había elementos que señalaban la participación de militares y miembros de la Policía Federal (PF) en los hechos. Existían varios indicios al respecto, entre ellos, que soldados del 27 Batallón de Infantería, con apoyo de elementos de la PF, habían acordonado un perímetro de Iguala

¹³ Rosa Elvira Vargas, “Llama Peña a un cambio de fondo para superar la etapa de dolor”, *La Jornada*, 5 de diciembre de 2014.

la noche del 26 de septiembre; que realizaron una operación de “escudo y contención” en las tres salidas de la ciudad, y “rastrillaron” la ciudad. Había pruebas documentadas y contundentes, nunca desmentidas, de que soldados hostigaron y desalojaron normalistas del hospital Cristina. Después, ante la magnitud de los hechos y la visibilidad que cobraron, la operación se les salió de control.

Según el secretario de Gobernación, Osorio Chong, esos señalamientos carecían de sustento y obedecían a afanes “provocadores”. Pero como señaló Vidulfo Rosales, del Centro Tlachinollan, “no corresponde a las autoridades políticas exonerar (a los militares)”; los encargados de establecer si hay o no elementos para una consignación o para fincar responsabilidades deben ser un juez y el Ministerio Público. Como en el caso Tlatlaya, en el de Iguala la estrategia del gobierno de Peña Nieto había sido encubrir a agentes del Estado; en particular, del Ejército y la Policía Federal. Ahora como entonces, Murillo Karam y Osorio Chong descalificaban, tergiversaban, ocultaban, exoneraban por adelantado y sin investigación de por medio a los presuntos responsables.

En el caso Tlatlaya ambos salieron chamuscados. Vamos, hasta el propio general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tuvo que aceptar que soldados del 102 Batallón de Infantería ejecutaron de manera sumaria a 21 personas. Las fusilaron, pues. Pero en una operación de control de daños, la Sedena limitó la responsabilidad del hecho a un teniente y siete soldados rasos “desobedientes” e “indisciplinados”. Nunca se aclaró quién ordenó matar en caliente a los presuntos delincuentes; si la orden vino de “arriba” y bajó por la cadena de mando. Tampoco se sabía en qué punto se rompió la disciplina y el protocolo militares, ni por qué los altos mandos castrenses mintieron y ocultaron la matanza durante casi tres meses, con la complicidad del Ministerio Público.

Entonces, Osorio Chong dijo que había que “entender” Tlatlaya como un caso de “excepción” o una “acción aislada”. Sólo que el camino del Ejército está empedrado de muchas excepciones. Además, como se dijo antes, ¿si se mintió en Tla-

tlaya, por qué creerles ahora en el caso Iguala? La lucha tenaz de los padres y compañeros de los 43 desaparecidos había logrado la apertura de instalaciones militares y eso generó nerviosismo y contradicciones en el Gabinete de Seguridad Nacional. La tensión aumentaría con la llegada de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Juan Ibarrola, vocero oficioso de las Fuerzas Armadas, escribió que “el Ejército mexicano no era moneda de cambio en ningún tipo de negociación” (*Milenio*, 17 de enero de 2015). Afirmó que Peña Nieto sabía que el general Cienfuegos y el almirante Vidal Soberón son “sus dos hombres de mayor confianza” y jamás ordenará el “dislate” de abrir cuarteles. Que el mensaje enviado por el secretario de Gobernación, Osorio Chong, fue “confuso” y “tendencioso”, y que no se podía negociar la seguridad nacional con un grupo de “culeros” que controlaban cuatro o cinco municipios. Y advirtió a los “asesores” del presidente, que a los militares no se les puede dar trato de policías ni someterlos al escrutinio público: “Habrá que preguntarles a gobiernos anteriores cómo les fue cuando ofendieron a las Fuerzas Armadas”. ¿Amenaza velada? ¿Llamado al golpismo? ¿Dónde quedaba la búsqueda de la verdad en el presunto Estado de derecho proclamado por el comandante en jefe?

PEÑA NIETO, ATRAPADO Y SIN SALIDA

Enrique Peña Nieto había quedado atrapado. Atrapado, atrapado y sin salida. Por más esfuerzos que habían hecho él y su gabinete de seguridad por “superar” la crisis de Estado provocada por los crímenes de lesa humanidad de Iguala, no habían podido. Al ex gobernador mexiquense le había quedado grande la presidencia de la República. Y el tan publicitado “momento mexicano” se les había esfumado: el país estaba empantanado. La credibilidad del régimen, con su estela de corrupción, intercambios de favores, opacidades y escándalos varios, estaba por el piso y se había multiplicado la indignación popular. Nadie le creía al gobierno. Murillo Ka-

ram, político de la vieja guardia del Partido Revolucionario Institucional, había recurrido a todas las argucias, supercherías y malas artes del pasado —tratándose de una “tragedia” (Peña Nieto *dixit*) que combinaba la aplicación de la tortura, la detención-desaparición forzada de 43 estudiantes y la ejecución extrajudicial de seis personas más—, y echado mano de los propagandistas de Estado en los medios para tratar de darle carpetazo al caso. Vamos, hasta fabricó una “verdad jurídica” con “pruebas científicas”, y una “verdad histórica”.

En realidad, Murillo y el policía Tomás Zerón habían ido construyendo y perfeccionando el caso poco a poco, casi sin salirse del guión inicial. En una gran maniobra de simulación judicial y jurídica, desde un comienzo actuaron con base en una sola y exclusiva hipótesis destinada a tratar de exculpar al Estado mexicano de la comisión de crímenes contra la humanidad, misma que remitía a un grupo de la economía criminal (identificado como Guerreros Unidos) como presunto perpetrador de los hechos delictivos de Iguala. Con tozudez autoritaria, ambos funcionarios se negaron a abrir otras líneas de investigación, en particular, la que involucraba a otros actores clave que integraban la cadena de mando de la estructura de seguridad del Estado a nivel federal, y que en el estado de Guerrero incluye territorialmente, de manera predominante, a las Fuerzas Armadas. Centrados en ese único objetivo: exonerar al Estado mexicano de toda responsabilidad, los sabuesos del procurador, la Marina y el Ejército capturaron, apremiaron, torturaron y confesaron “culpables”, encontraron el “móvil”, un “*modus operandi*” y hasta una “lógica causal”. Incluso confeccionaron un video con la narrativa a cargo de un locutor profesional y apuntables para obtener y grabar algunas declaraciones autoinculpatorias.

Maquiavélicos los tipos. Y no se trataba, como señalaron algunos panegiristas del régimen como Jorge G. Castañeda Gutman, de un problema de “incredulidad” frente a la versión oficial. Además, decir que el caso Iguala era “atípico”, como afirmó Zerón, exhibía un cinismo contumaz y supino. Ese ci-

nismo que permeaba al gobierno de Peña Nieto y a las clases política y empresarial, aludido por *The Economist*, cuando dijo que Peña Nieto “no entiende que no entiende”. Según argumentó el equipo de abogados que asesoraba a los padres de los 43 desaparecidos, del montaje mediático teledirigido por el dúo Murillo/Zerón no se podía concluir que existiera plena certeza jurídica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. Además de que existían dudas científicas sobre la versión de la PGR, era bien conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y coaccionar y chantajear detenidos, y hasta los tribunales de justicia internacionales saben que la tortura es una herramienta sistemática y endémica en México, como empezaba a supurar del caso Iguala.

Tal vez debido al cansancio provocado por la confección de la trama mediática, al fabulador Murillo se le escapó aclarar su teoría sobre el cruento homicidio de Julio César Mondragón, encontrado desollado (*ergo*, torturado) por soldados del 27 Batallón. Con respecto a la fórmula oficial de que a los 43 “los confundieron, los secuestraron, los mataron, los incineraron y los tiraron al río” —como aseveró el procurador el 27 de enero—,¹⁴ sólo había certeza de la muerte de Alexander Mora, pero no existía certeza jurídica ni prueba técnica sobre la muerte de los otros 42 (no había prueba genética del ADN, por lo que no estaba acreditado el cuerpo del delito de manera científica) ni sobre el lugar donde eso pudo haber ocurrido; las cenizas de Alexander pudieron haber sido *sembradas* en el río San Juan. Tampoco se podía cerrar el caso ni decretar una “verdad histórica”, porque no se había indagado la responsabilidad del Ejército a partir de los indicios que existían en el expediente, y que apuntaban a una complicidad y protección de la delincuencia organizada por mandos castrenses del 27 Batallón desde 2013. A propósito, nunca se supo qué pasó con las declaraciones de los 36 militares que formaron parte de las indagatorias, según había afirmado Tomás Zerón ante los medios.

¹⁴ Gustavo Castillo García, “Guerreros Unidos asesinó a los 43 normalistas: Murillo”, *La Jornada*, 28 de enero de 2015.

Resultaban truculentos, también, los malabares del procurador para acreditar y limitar el delito de desaparición forzada de personas, la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos de Iguala. Normalmente, en la desaparición forzada existe una cadena de mando en la que se ven involucrados varios sujetos perpetradores. En ese caso la responsabilidad penal recae en quien sigue órdenes, pero también en el o los superiores jerárquicos que pudieron haber ordenado la conducta delictiva, o bien, conociéndola, no la impidieron. Lo que conllevaba una responsabilidad, por acción u omisión, de los mandos del Ejército, la Marina y la Policía Federal la noche de los hechos, o a una total negligencia también sancionable. En conclusión, existían muchos cabos sueltos y lo único cierto era el interés deliberado y la intención política de cerrar el caso y garantizar la impunidad de los eslabones superiores de la cadena criminal que operó esa noche en Iguala.

MURILLO KARAM Y SU VIERNES 13

El viernes 13 de febrero, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CDF-ONU) puso en duda la “certeza jurídica” y la “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam sobre los hechos de Iguala. Al referirse a los ataques contra los estudiantes de la normal de Ayotzina-pa, el comité con sede en Ginebra, Suiza, dijo que el caso “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado (mexicano) en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas”. Afirmó, también, que en México la desaparición forzada es un tipo de delito “generalizado” en gran parte del país y sus perpetradores, incluidos servidores públicos, gozan en su inmensa mayoría de total impunidad, reflejada en “la casi inexistencia de condenas por ese delito”.

El comité constató “una serie de obstáculos” en el acceso a la justicia en casos de desaparición, incluido el hecho de que las autoridades no inicien de inmediato la investigación penal (la procuraduría de Murillo Karam se tardó diez días

en atraer el caso), o “clasifiquen” hechos de desaparición forzada “como otro delito”. El señalamiento no era menor, dado que en el derecho internacional humanitario la desaparición forzada es una noción que comprende varios crímenes, incluidos la detención ilegal y la negación del debido proceso, lo que por lo general implica la tortura y los tratos crueles e inhumanos, y a menudo también el asesinato (ejecución extrajudicial). Además, según el Tribunal Penal Internacional (Roma, 1998), si se practica de forma “generalizada” o “sistemática” (incluso en tiempos de paz), la desaparición es considerada un crimen contra la humanidad, continuado e imprescriptible, sin posibilidad de indulto o amnistía y debe ser investigado en el fuero común.

Los crímenes contra la humanidad se consideran parte del *ius cogen*, las normas legales internacionales de más alto rango y, por lo tanto, constituyen una regla no negociable del derecho internacional; lo que implica que esos crímenes están sujetos a jurisdicción universal. De allí los esfuerzos de Murillo Karam por reclasificar los delitos de Iguala (con figuras jurídicas menos graves y atribuyéndoselos a un grupo de la economía criminal), con la intención de sustraer al Estado mexicano de toda responsabilidad en los hechos. México ratificó en 2008 la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y es uno de los 44 Estados parte. De allí que, como le recordaba ahora el CDF-ONU, tiene la “obligación de investigar” de manera efectiva “a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación” ante hechos de desaparición forzada, recomendación que recogía una demanda central de los abogados, padres y compañeros de las víctimas de Ayotzinapa.

Al respecto, el Comité recordó la obligación de sancionar a “los superiores jerárquicos en la cadena de mando” de acuerdo al artículo 6 de la Convención, que establece la responsabilidad penal del mando superior que “haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer

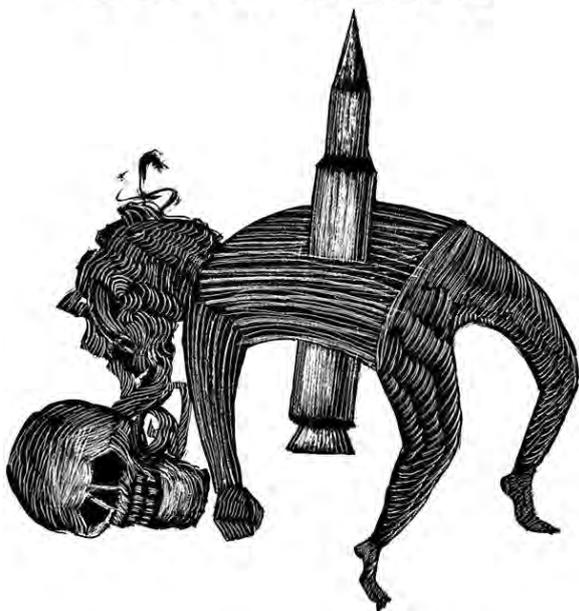
un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente”, y teniendo responsabilidad sobre actividades relacionadas con la desaparición, “no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese” o “para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes”. Dicha recomendación es crucial para romper el ciclo de impunidad en México. Como se dijo antes, en el caso Iguala/Ayotzinapa, resulta evidente que los “superiores jerárquicos” en la cadena de mando de los organismos de seguridad del Estado (Sedena, Semar, Gobernación, Policía Federal, Cisen, SEIDO, PGR, Brigadas de Operaciones Mixtas, Policía Estatal de Guerrero), fueron informados en tiempo real por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Chilpancingo y el C-4 subregional de Iguala, y sus respectivos agentes en la entidad también (verbigracia, las bitácoras del 27 Batallón de Infantería que intervino en tareas de contención y rastrillaje, y los respectivos informes de fatiga de las policías estatal y federal), sobre qué hacían elementos del eslabón más débil de la cadena: las policías municipales de Iguala y Cocula.

Ya sea por acción, omisión, negligencia, colusión, protección o complicidad, existe algún grado de responsabilidad en distintos niveles de la cadena de mando de los aparatos de seguridad del Estado en torno a las ejecuciones extrajudiciales de cinco personas, la tortura y asesinato del estudiante Julio César Mondragón y la detención-desaparición de 43 normalistas. Pero el procurador Murillo se negó a abrir esa línea de investigación, y de esa forma alimentó y perpetuó la impunidad castrense en materia de violaciones a los derechos humanos. Evidenciado antes por el Equipo Argentino de Antropología Forense, Murillo Karam tuvo en Ginebra su viernes 13. En ese contexto, y en el de una crisis ideológica —hegemónica, diría Gramsci— en la coyuntura, de alteración profunda del bloque en el poder y también de una grave crisis de representación de los partidos políticos, no pasó desapercibida la reunión de la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial con los mandos de las Fuerzas Armadas, general

Salvador Cienfuegos (Sedena) y almirante Vidal Soberón (Semar), en el Club de Industriales.

Huelga decir que el aparato represivo constituye el núcleo central del Estado y que la clase o fracción hegemónica detenta, en general, el poder de ese aparato. Aunque con contradicciones en la coyuntura, quienes pusieron a Peña Nieto en Los Pinos recurrían ahora a las Fuerzas Armadas y pedían ¡orden! Como sugirió la *Rayuela* de *La Jornada* del 14 de febrero, ¿asistimos a una privatización de los cuarteles? ¿Transitamos hacia una suerte de bonapartismo a la mexicana?

PIENSO, LUEGO ME DESAPARECEN



**MI HIJO NO
SE VENDE CON VIDA
X AYOTZINAPA**



Norberto

DESAPARECIDOS: VIOLENCIA,
IMPUNIDAD Y TERROR DE ESTADO.
“MÉXICO ES UNA FOSA CLANDESTINA”

Román Munguía Huato

*A todos los padres y madres
de los desaparecidos*

Empecemos por preguntarnos: ¿por qué han desaparecido y desaparecen decenas de miles de personas durante las últimas décadas en México? Más aún: ¿cómo inició esta historia de horror interminable? ¿Por qué desaparecieron decenas de jóvenes estudiantes en la Noche de Iguala? ¿Cuáles son las causas principales de la extrema violencia social imperante en México? ¿Tlatlaya y Ayotzinapa son crímenes de Estado? ¿Por qué existe tanta impunidad y casi nula aplicación de las leyes? ¿Por qué tanta corrupción, especialmente en las altas esferas del poder político? ¿Por qué existe tan elevada inseguridad pública en todo el país? ¿Por qué existen tantos y poderosos cárteles de narcomafiosos? ¿Cómo explicar el contubernio entre autoridades gubernamentales de todos los niveles y las bandas del crimen organizado? ¿Por qué continúa desatada la violencia social pese a la presencia de las tropas militares en regiones de los cárteles de narcos? ¿Por qué están presos injustamente quienes han optado por defender su propia vida, la de sus familiares y la de sus conciudadanos? ¿Por qué están libres los capos más poderosos de los grandes cárteles del narco? ¿Por qué existen grandes territorios del país bajo estricto control por estos cárteles? ¿Por qué continúa habiendo violencia, crímenes e inseguridad no obstante la política gubernamental de combate a las drogas? ¿Por qué existe un creciente y floreciente tráfico y mercadeo

de armamentos de todo calibre en el país? ¿Quiénes son sus principales beneficiarios? ¿Por qué pese a la crisis económica prevaleciente en México siguen enriqueciéndose muchos políticos de todos los rangos y partidos, y bastantes funcionarios públicos de todos los niveles de poder? ¿Por qué hemos permitido o tolerado los mexicanos que se llegue a esta situación aberrante y terrible? ¿Cómo frenar la actual violencia social y cuáles son las alternativas viables y deseables? ¿Es el Estado —el representante del poder y del dinero— quien debe ser responsable de las acciones contra la violencia o es el pueblo mexicano en el poder quien debe asumirlas? ¿Por qué durante el gobierno de Enrique Peña Nieto han desaparecido más mexicanos en el país: 13 cada día? ¿Por qué el gobierno federal no crea bases de datos nacionales sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados? ¿Por qué hay una legislación interna inadecuada para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas? ¿Es necesario cambiar el actual modelo de desarrollo social, económico, político, cultural y educativo del país? ¿Qué hacer? “A tantas historias, tantas preguntas”, diría Bertolt Brecht.

A *LA HISTORIA UNIVERSAL DE LA INFAMIA* de nuestro admirado Jorge Luis Borges le falta, es un decir, un capítulo muy extenso, el capítulo sobre los desaparecidos forzados en el mundo. Con seguridad lo hubiera escrito magistralmente de haber vivido él en estos tiempos de una *Medianoche en el siglo*, evocando a Víctor Serge, cuando la oscuridad de la humanidad es palpable en casi todos los rincones del mundo. La historia de los desaparecidos forzados, de los desaparecidos políticos —en la sociedad moderna, la del presente siglo—, es una historia ominosa implícita en lo que algunos pensadores, como Michael Löwy, denominan la barbarie civilizada o la civilización de la barbarie.¹ Como bien decía Marx: “[...] el capital nace chorreando sangre y lodo, desde los pies a la cabeza”. Y sigue haciéndolo a sangre y fuego, y lodo... de fosas clandestinas. La lucha de clases misma, como expresión

¹ <<http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-22/la-dialectica-de-la-civilizacion-barbarie-y-modernidad-en-el-siglo-xx>>.

de la conflictualidad social, es la forma que asume la violencia estructural de los antagonismos clasistas y la manifestación del poder político dominante. Si “la guerra es la continuación de la política por medio de las armas”, diría Clausewitz, la política es “la expresión más condensada de la economía” diría Lenin. Y la guerra es la forma más extrema de la violencia social. La violencia social es inherente a la lógica férrea del desarrollo del capital, es parte de su naturaleza histórica; está en su código genético, cual ADN orgánico para su reproducción económica y social. Y la mayor y más alta expresión de esa violencia estructural reside en el Estado, el instrumento político para ejercer la represión como forma de dominación de una clase sobre otra. La violencia es consustancial al capitalismo, especialmente al proceso de desarrollo del capitalismo salvaje revestido neoliberal de nuestros días. Ciertamente es que la violencia social ha existido desde tiempos muy remotos, desde cuando la sociedad devino históricamente en una sociedad dividida en clases sociales; pero también es muy cierto que la violencia despliega toda su potencialidad aniquiladora con el capitalismo; es en esta sociedad burguesa donde despliega históricamente toda su energía destructiva tanto de la humanidad misma como de la propia naturaleza. El capital es una relación social de explotación de una clase por otra: en la relación capital-trabajo asalariado se halla el origen de todas las formas posibles de violencia social; es el núcleo esencial que detona todas las violencias habidas y por haber.

Es dentro de esta relación económica —en el proceso de producción inmediato— donde se encuentra la génesis de la violencia en todas sus dimensiones sociales y magnitudes. El salario mínimo, precario, miserable, es violencia económica del capital contra la fuerza de trabajo. La opresión laboral, la explotación misma, es una forma directa de ejercer la violencia. La violencia asume muchas formas sociales, desde las propiamente económicas hasta las de naturaleza política, militar, ideológica-simbólica, y cada una de éstas tiene su intensidad de coerción para el sometimiento y la aniquilación. La violencia extrema es el crimen, el aniquilamiento físico en

sus diversas manifestaciones y el genocidio es la violencia más terrible de exterminio, dentro del cual se encuentra el terrorismo de Estado en sus diversas manifestaciones. Entonces, desde esta perspectiva, debemos analizar el crimen sobre los desaparecidos políticos y desapariciones forzadas. “La violencia muestra una presencia casi ubicua en la vida social actual asumiendo diversas y múltiples expresiones, la mayoría con muy graves consecuencias, al punto que entidades multinacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la han declarado como el principal problema de salud pública. En los países capitalistas, la violencia estructural, sistémica, se acompaña de múltiples expresiones de violencia interpersonal; la política exterior de la mayor potencia capitalista se fundamenta en el uso sistemático de la violencia”; así lo plantea Mario A. Solano Solano en su ensayo sobre *Capitalismo y violencia*.² La violencia está presente en todas las esferas de la vida social; penetrando en todos los poros de la sociedad. Decimos enfáticamente que en las últimas décadas el poder y el dinero han venido imponiendo un capitalismo salvaje neoliberal; no es una mera ocurrencia retórica o simple metáfora sino una cruda realidad económica con base en una intensa explotación —en sí misma violenta— de la fuerza de trabajo asalariada, arrojando a decenas de millones de mexicanos a sobrevivir en la miseria, pero además, lo peor de todo, dentro de un escenario social cruento, dramático, por la consecuencia de una extrema violencia social con decenas de miles de muertos, desaparecidos, familias dolientes, huérfanos, viudas, feminicidios, infanticidios, etcétera. Si esto no es una sociedad en estado salvaje, una barbarie social, una sociedad en pudrición, entonces ¿qué es? ¿El prometido paraíso celestial primermundista o el infierno dantesco terrenal neoliberal? Estamos viviendo una sociedad desgarrada cuya anomia y degradación social es producto de la absoluta impunidad de los criminales, de una simulación democrática, de una profunda corrupción del poder político por un capitalismo carroñero con sus buitres financieros lo-

² <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66661110>>.

cales y extranjeros con su política de tierra arrasada, dejando un páramo, una devastación brutal de la naturaleza y lo social. La inseguridad va de la mano con la profunda corrupción en las altas esferas del poder.

EL CRIMEN QUE SE COMETE al privar de su libertad a una persona o a varias de ellas —desaparición aislada o en masa— bajo la modalidad de secuestro como desaparición forzada, sea por motivos políticos o lucrativos para obtener dinero a cambio de su vida es una forma extrema de violencia y puede terminar fatalmente con la vida del secuestrado o del desaparecido. Una definición, entre otras, que podemos emplear³ es:

Desaparición forzada, o desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad,⁴ siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o, particularmente en América Latina, como detenidos desaparecidos (DD. DD.). El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la

³ <http://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada>.

⁴ Estatuto de Roma de 1998 y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994. “En febrero de 1975, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había empleado por primera vez el término *persons unaccounted for*..., expresión retomada junto con la de *missing people*, ‘personas desaparecidas’, en las dos resoluciones de la Asamblea General adoptadas en diciembre de 1975 con respecto a Chipre y Chile”.

persona. Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Estos últimos, y especialmente, por su vulnerabilidad, los niños que puedan ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen.

En 1989 se formuló

[...] la primera sentencia de condena a un Estado (Honduras) por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentando las bases para la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1992, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, la tipificación universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 y la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” de la Asamblea General de Naciones Unidas,⁵ cuya firma fue celebrada en París el 6 de febrero de 2007, estableciendo una serie de obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los Estados signatarios.⁶

Con el fin de recordar a todas las naciones y gobiernos del mundo la existencia de la realidad de los desaparecidos, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), declaró el 30 de agosto como el “Día Internacional del Detenido Desaparecido”.

Podemos suponer que el Estado mexicano ha suscrito tales acuerdos internacionales pero, como suele suceder, hace caso omiso de los compromisos político-jurídicos contraídos; el Estado mexicano no se considera a sí mismo con la obligación jurídica vinculante para cumplirlos, salvo en algunos aspectos parciales, pero nunca reconoce ni reconocerá su participación directa o indirecta en los hechos criminales, como es precisamente el caso de los asesinados y desaparecidos jóvenes estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre

⁵ Resolución A/RES/61/177, de 20 de diciembre de 2006.

⁶ <http://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada>.

de 2014 en Iguala, Guerrero. Generalmente el gobierno tiende a minimizar los hechos, a subestimarlos para aparentar un régimen respetuoso de los derechos humanos. Por ejemplo, en febrero de 2015 se reunió en Ginebra una delegación gubernamental mexicana con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para analizar la situación prevaleciente en este país a partir de un informe presentado por dicha delegación. A su vez, el informe final del Comité (11 de febrero), entre otras cosas resuelve que:

La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Convención. El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas.⁷

Por supuesto, el gobierno de Enrique Peña Nieto respondió semanas después rechazando que exista un contexto de desapariciones generalizadas, afirmando que son inexactitudes, y es renuente a seguir las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas. Es una práctica recurrente del gobierno el desconocer las recomendaciones de organismos internacionales sobre derechos humanos,⁸ pero sí acepta servilmente las de los organismos financieros mundiales.

La desaparición forzada es un delito complejo, múltiple y acumulativo, ya que atenta contra un conjunto diverso de derechos fundamentales: derecho a la vida; derecho a la libertad y a la seguridad personal; derecho a trato humano y respeto a la

⁷ <<http://www.hchr.org.mx/index.php/2014-06-30-19-00-75/2014-06-30-19-00-78/item/694-comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico>>.

⁸ <<http://www.idheas.org.mx/comunicado-de-prensa-practica-recurrente-del-gobierno-mexicano-desconocer-recomendaciones/>>.

dignidad; derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; derecho a la identidad y a la vida familiar, especialmente en el caso de los niños; derecho a reparación, incluso mediante la indemnización; derecho a la libertad de opinión, expresión e información; derechos laborales y políticos.⁹

La historia de la desaparición forzada en el mundo, en América Latina, en México mismo, es una historia infame, abominable, y en la mayoría de los casos este crimen es perpetrado por las propias autoridades gubernamentales, por lo que podemos hablar sin duda de crímenes de Estado. Todos sabemos que el principal terrorista de Estado en el mundo desde hace muchas décadas es el gobierno de Estados Unidos de América (EUA), y para tal efecto, a inicios de la llamada Guerra Fría, creó en 1947 el Consejo de Seguridad Nacional, como instrumento práctico de la doctrina de “seguridad nacional”, entendiendo tal doctrina imperialista como una ideología intervencionista en países extranjeros, especialmente los latinoamericanos, creando la Escuela de las Américas en Panamá y la US Special Warfare Center & School de Fort Bragg (Carolina del Norte) para el adiestramiento a oficiales de los ejércitos de los gobiernos latinoamericanos con el objetivo de reprimir y asesinar a los sectores opositores, especialmente revolucionarios, a tales gobiernos, muchos de los cuales llevarían al extremo esta doctrina represora en sus propios países, como fue el caso de las feroces dictaduras policiaco-militares centro y sudamericanas. Fue con estas dictaduras iniciadas en los años sesenta y setenta que tuvo lugar un fuerte despliegue de represión criminal con las decenas o centenas de miles de desapariciones forzadas de opositores políticos y ciudadanos inocentes, muchos de ellos asesinados por los militares de estas dictaduras y con la complacencia y complicidad del gobierno de Estados Unidos. “La desaparición forzada es un instrumento de dominación política”, afirma Ana Lucrecia Molina

⁹ <<http://www.hchr.org.mx/index.php/2014-06-30-19-00-75/2014-06-30-19-00-78/item/694-comite-contr-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico>>.

Theissen.¹⁰ Lo que sucedió en septiembre en Iguala no puede verse como un hecho aislado y reciente. Debe considerarse como parte de una larga historia de represión estatal contra las movilizaciones populares, campesinas, obreras, desde los años sesenta y setenta, especialmente en el estado de Guerrero.

En México, el periodo conocido como Guerra Sucia (en las décadas de 1960 y 1970) fue caracterizado por una dura política represiva del gobierno con la intención de romper la unidad del tejido social y desmovilizar la resistencia armada, que se estaba difundiendo rápidamente en las zonas rurales del país. Sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca se registraron más de 1 300 casos de desapariciones forzadas.¹¹

Esta política gubernamental forma parte de un proceso histórico que va generando mayores tensiones y agudizándose en el marco de una profunda crisis política y económica a partir de las medidas neoliberales iniciadas en los años ochenta, acompañada de un crecimiento jamás visto del narcotráfico y de sus poderosos cárteles mafiosos. La actual situación de violencia en México es resultado de un largo y profundo proceso histórico.¹² Esta ola de violencia se viene larvando desde finales de los años cincuenta, teniendo una eclosión genocida en octubre del año 68 con la matanza en Tlatelolco,

¹⁰ Ana Lucrecia Molina Theissen, *La desaparición forzada de personas en América Latina*, <http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/biblio_theissen_01.htm>.

¹¹ <<http://desaparecidos.espora.org/spip.php?article898>>.

¹² Este proceso social de mayor violencia social es producto de un particular desarrollo del capitalismo mexicano. Sin llegar a tener ninguna idea de ningún fascismo local, ni de ningún fatalismo histórico, la dinámica social en este país da lugar a formas de represión estatal más extensas y sistemáticas. En tal sentido nuestra perspectiva histórica se apoya en el trabajo de Enzo Traverso: *La violencia nazi. Una genealogía europea*, Madrid, FCE, 2003. La violencia fascista alemana no fue solamente el resultado de la propia historia alemana posterior a la Primera Guerra Mundial sino que es consecuencia de una genealogía de la violencia europea desde el siglo XIX e incluso desde el siglo XVIII con las guerras coloniales.

un verdadero crimen de Estado, con toda la impunidad del poder político de una *Democracia bárbara*, para emplear el término de José Revueltas o de un *bonapartismo sui generis*, según lo definía Trotsky.

LA VIOLENCIA HOY DÍA EN MÉXICO, como hemos mencionado, si bien tiene sus antecedentes desde hace seis décadas, su agravamiento lo empieza a manifestar desde mediados de los años ochenta con la instauración del neoliberalismo rampante y del ascenso del llamado crimen organizado. Se inicia un proceso que podemos denominar de *lumpendesarrollo* por una *lumpenburguesía*¹³ —siguiendo hasta cierto punto los planteamientos de André Gunder Frank— en el contexto de una mundialización del capital. Lumpendesarrollo porque no solamente ha habido tres décadas perdidas de crecimiento económico —desde 1982 hemos tenido sexenios de crecimiento cero— y vamos por la cuarta década; sino además porque se ha generado un gravísimo problema de descomposición social y también porque la economía doméstica incluye un componente importante de producción de enervantes que alimenta a diversos sectores económicos productivos y comerciales.¹⁴ La burguesía criolla ha sido totalmente incapaz de construir procesos democráticos para impulsar un desarrollo social menos inequitativo de la riqueza social y desde hace décadas está subordinada completamente a los intereses económicos y políticos de los grandes capitales extranjeros; existe una extrema dependencia al imperialismo estadounidense. La situación de hiperviolencia tiene que ver con la indiferencia de una oligarquía local ajena a los graves problemas nacionales y tratar de resolverlos o atenuarlos, al menos. *Desarrollo del subdesarrollo lumpen* en una condición de degradación social con su violencia latente y manifiesta. Lumpenburguesía porque sectores importantes de la clase dominante se han venido asociando a los grandes y poderosos

¹³ André Gunder Frank, *Lumpenburguesía: lumpendesarrollo. Dependencia, clase y política en Latinoamérica*, México, Era, 1972.

¹⁴ “Los ‘tentáculos’ de ‘El Chapo’ llegan a 288 empresas”, <<http://www.adnpolitico.com/ciudadanos/2014/03/02/los-tentaculos-de-el-chapo-llegan-a-288-empresas>>.

cárteles del narcotráfico. ¿*Lumpen-Estado*? ¿Narco-Estado? Es posible, toda vez que una franja significativa de la alta burocracia estatal está coludida directa o indirectamente con los negocios “ilegales” del crimen organizado y está inmersa en una visible y profunda corrupción. El Estado, para aplicar las políticas neoliberales privatizadores de los bienes públicos, para llevar a cabo sus “reformas estructurales”, requiere de un mayor autoritarismo con su violencia concomitante, y esto presupone diversas formas represivas contra la población trabajadora inconforme y opositora, incluyendo la práctica criminal de desaparición forzada de los activistas políticos de izquierda. Desde luego, esta violencia de Estado se entrecruza con la violencia de los narcos; además de que los propios cárteles mafiosos son expertos criminales en la práctica de la desaparición forzada de ciudadanos inocentes ajenos al activismo político. Desaparecidos forzados, muchos de ellos secuestrados con fines de lucro para el pago del rescate por sus familiares o con propósitos de intimidación política a la población en general, tiene que ver con las políticas de contrainsurgencia para amedrentarla y orillarla a la resignación pasiva de los hechos dramáticos de su condición miserable.¹⁵

¹⁵ “Una nueva modalidad de guerra sucia se impone actualmente al pueblo mexicano, en la modalidad de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’. Utilizo el término de ‘guerra sucia’ para definir un tipo de crimen de Estado que —al margen de la Constitución y las leyes— tiene como propósito el aniquilamiento de los considerados ‘enemigos internos’ por medio de su localización, seguimiento, captura, interrogatorio a través de la tortura, mantenimiento en cárceles clandestinas, *desapariciones forzadas* y ejecuciones extrajudiciales, todo ello llevado a cabo por integrantes de las fuerzas armadas, agentes de policía y de inteligencia, grupos paramilitares (que actúan bajo las órdenes —usualmente— de la Sección Segunda del Ejército, Inteligencia Militar), o pandillas del crimen organizado que constituye la cara ilegal, clandestina, supletoria y complementaria de la acumulación capitalista en nuestro país”, Gilberto López y Rivas, *Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos: manuales, mentalidades y uso de la antropología*, octubre de 2012, <www.rebellion.org/noticia.php?id=157900>. Una nota periodística informa que EUA impartió 7 678 cursos a militares mexicanos de elite. Fue una inversión mayor a 50 millones de dólares en esas fuerzas especiales en cinco años. El Pentágono ha influido durante los gobier-

En síntesis, a la oligarquía local y extranjera le beneficia un Estado de mano dura altamente represivo con su violencia extrema, incluso sus crímenes y desapariciones forzadas, para continuar con su política de saqueo de los bienes patrimoniales y despojo de tierras comunitarias y un proceso de acumulación de capital salvaje.

EL PRIMER DESAPARECIDO de México fue el profesor Epifanio Avilés Rojas, secuestrado en 1969. A partir del crimen cometido contra el profesor Avilés, cientos de mexicanos han sido desaparecidos por el Estado mexicano, sin que a la fecha alguno de los responsables haya sido juzgado. La impunidad imperante se convierte en una garantía para que este crimen de lesa humanidad se siga cometiendo en estos días. El destacado periodista José Reveles, cuando trabajó en el diario *Novedades*, publicó en mayo de 1969 el caso de Epifanio Avilés Rojas, primer desaparecido político en México cuyo caso se ha documentado, inscrito en las listas del Comité Eureka, encabezado por doña Rosario Ibarra de Piedra.¹⁶ Desde entonces a la fecha ha habido decenas de miles desaparecidos. Reveles afirma que el Estado simula la búsqueda de los miles de desaparecidos, pues no han dado ninguna muestra de voluntad política para encontrar a los estudiantes en Iguala y a todas las víctimas de desaparición forzada. Señaló que las estadísticas oficiales siempre están a la baja, subestimando

nos de Calderón y Peña en la educación y perfeccionamiento de una nueva generación de soldados, <http://www.milenio.com/policia/EU-impartio-cursos-militares-mexicanos_0_493150716.html>.

El semanario *Proceso* documentó en su edición con fecha de 29 de marzo de 2015, número 2004, que: “Aun cuando México no se encuentra en estado de guerra, como ocurría en el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha comprado a Estados Unidos equipo bélico por más de 1 300 millones de dólares en menos de un año, al margen de la Iniciativa Mérida. Lo más reciente: un lote de helicópteros artillados provistos de la más nueva tecnología. Según documentos del Pentágono cuya copia tiene *Proceso*, este equipo ha sido abastecido por el Departamento de Defensa y sus contratistas privados. Jubiloso, lo celebra el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses”.

¹⁶ Esta página contiene los nombres de 561 desaparecidos mexicanos de los archivos del Comité ¡Eureka! y datos extras recabados con el tiempo: <<http://www.hijosmexico.org/index-desaparecidos>>.

la cantidad real más abultada, la cual se puede estimar por las cifras que proporcionan los propios familiares de los desaparecidos. En la llamada Guerra Sucia, la cual ocurrió en la misma época de los regímenes militares del Cono Sur —dice Reveles—, “algunos documentan más de 1 500 desaparecidos, y si pasamos a los desaparecidos actuales, se juntan los viejos dolores y las nuevas represiones”, sólo que “de desaparecer a ex guerrilleros o militantes, se pasó a desaparecer al ciudadano común y corriente”. Señaló que las cifras de los desaparecidos son muy cambiantes, y depende si la cifra la dan las autoridades o si la dan organizaciones civiles. Desde el sexenio de Calderón a la fecha los desaparecidos rondan casi los 28 mil. Desde la *guerra fracasada*, como la llama Reveles, “México produce más drogas que antes” y el gobierno se ha dedicado hasta la fecha a “capturar capos pero no desmantelan a las organizaciones”. Las leyes no van a actuar ni hacer la chamba por sí solas; se necesita que actuemos en conjunto, pues “estamos encabronados, pero desorganizados”, sentenció Reveles.¹⁷

El país se ha vuelto “una macrotumba donde vivimos entre los muertos”, dijo de manera rulfiana una madre de los 43 desaparecidos. Las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en México con una impunidad casi total; ésta sí es una verdad histórica. Parafraseando a Mario Vargas Llosa nos preguntamos como uno de sus personajes novelescos, en *Conversación en La Catedral*: ¿En qué momento se jodió México? Difícil la respuesta porque hay varios momentos en su historia posrevolucionaria en los que se ha jodido. Cierto es que se ha jodido más en unos que en otros. Por ejemplo, una respuesta podría ser a inicios de los años cuarenta, especialmente a partir del periodo presidencial (1946–1952) de Miguel Alemán Valdés —un sexenio que prefiguró al salinato—, “el cachorro de la revolución”, como lo llamó con zalamería el nefasto Vicente Lombardo Toledano. Un cachorrito estalinista muy depredador. Sin duda, también a partir de Adolfo López Mateos, un gobierno muy represivo, antecedente del geno-

¹⁷ <<https://es-es.facebook.com/periodismo.transversal>>.

cida Gustavo Díaz Ordaz, precedente, a su vez, del gobierno criminal de Luis Echeverría Álvarez. Pero, con el neoliberalismo rampante con Carlos Salinas de Gortari fue el momento atroz en que se jodió fatalmente nuestro país. Aclaremos: esto no significa que no haya solución, pues todo depende de la lucha emancipadora del pueblo trabajador. Aquí es necesario señalar que durante el salinato, el auge del narcotráfico empezó a tener una dimensión mayúscula. El terrible problema de los desaparecidos, por cualquier lado que se vea, es muy difícil explicarlo sin analizar el papel de los cárteles mafiosos, igual de sanguinarios que los aparatos represivos gubernamentales.¹⁸ El capitalismo salvaje, a partir de entonces, ha venido despedazando a la nación; y con la docena trágica (los sexenios panistas), de mal en peor. Con la restauración priísta en el poder en 2012 cobra vigencia la caracterización de Vargas Llosa: *la dictadura perfecta*. Con el salinato la imbricación de la mafia narcotraficante y grupos del gobierno federal fue en ascenso. Eso explica en gran medida la extrema violencia social hoy imperante. Desde luego, la historia del vínculo entre los negocios del narcotráfico emprendidos por la mafia con gobiernos locales y federales se remonta, al menos, desde la década de los años treinta. Tal nexo se fortaleció con el ascenso del mercado de enervantes durante la Segunda Guerra Mundial por el consumo de heroína de los soldados heridos estadounidenses que fomentó el cultivo de la amapola, especialmente en Sinaloa; un cultivo que se remonta fines del siglo XIX. Pero décadas después en las regiones montañosas de *El Triángulo Dorado* (Sinaloa, Durango y Chihuahua), Michoacán y Guerrero estalló la violencia a causa de un mayor cultivo de la amapola, de su procesamiento en laboratorios clandestinos y porque son punto de partida

¹⁸ Véase <http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_%28organizaci%C3%B3n_il%C3%ADcita%29>. Igualmente, de José Reveles: *Levantones, narcofosas y falsos positivos*, México, Grijalbo, 2011; *Las historias más negras de narco, impunidad y corrupción en México*, México, Debolsillo, 2009. Véase también, en relación con la *guerra sucia*: Informe final de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero, <http://congresogro.gob.mx/files/InformeFinal_COMVERDAD.pdf>.

al mercado estadounidense. Debemos añadir el nexo de las mafias mexicanas con las colombianas para el extraordinario negocio de la cocaína, en muchos casos bajo la protección del gobierno en sus diversos niveles. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que siendo el estado de Guerrero uno de los más militarizados del país sea uno de los principales bastiones del narcotráfico y sus mafias? El genocidio de estudiantes de Ayotzinapa no es algo incidental, sino que responde a una doble lógica del poder económico y político: demostración de la fuerza mafiosa y su dinámica mercantil por un lado y, por otro, paralizar y reprimir los reclamos y reivindicaciones justas y legítimas de los diversos movimientos sociales en lucha de resistencia anticapitalista, especialmente los del estado de Guerrero. Los viejos cacicazgos priístas, particularmente los caciques campesinos, se han modernizado con el neoliberalismo en verdaderas asociaciones del crimen organizado.

En México, desde hace muchas décadas, ha habido mafias del crimen organizado, pero también existen mafias políticas, empresariales, sindicales, universitarias. El viejo corporativismo propio de un Estado *bonapartista sui generis* en su contemporización ha devenido en un mayor corporativismo gansteril. El escritor y periodista italiano Roberto Saviano sostiene la tesis de que en México tenemos “un capitalismo armado”, un capitalismo armado hasta los dientes generando una violencia social sin límites a causa de la asociación entre la mafia y las altas esferas del poder político dominante. La violencia impune de la mafia, entonces, es una forma de extensión gansteril del Estado dentro de ciertos límites permisibles; una violencia que no desborde el monopolio de la violencia estatal. La violencia también tiene que ver con el mercado de armas estadounidenses; un mercado muy rentable, sea el particular o el del gobierno estadounidense.

Kurt Rudolf Mirow escribió *La dictadura de los cárteles* en 1977; se refería a las grandes corporaciones capitalistas;¹⁹ décadas después tenemos la dictadura de los cárteles mafio-

¹⁹ Kurt R. Mirow, *La dictadura de los cárteles: una anatomía del subdesarrollo*, México, Siglo XXI, 1982.

sos asociados con las grandes multinacionales, especialmente con aquellos poderosos corporativos financieros que pueden lavar dinero, como es el caso del banco HSBC.²⁰ “Cocaína, el petróleo blanco”: en su reciente libro *CeroCeroCero. Cómo la cocaína gobierna el mundo*, Saviano demuestra la asociación entre mafia y Estado en México.²¹ A su vez, Salvatore Lupo, un gran historiador siciliano cita en *Historia de la mafia*: “florece bajo la piel de la mafia la fuerza de la política, y bajo la piel de la política la fuerza de la mafia [...] más que ‘negligencia’ [...] hay crimen organizado en la administración de la justicia, hay una justicia cómplice y protectora de asesinos, hay infamia y deshonor”.²²

DESDE HACE AÑOS, en México, cualquier ciudadano común y corriente puede desaparecer de manera forzada en cualquier momento y en cualquier lugar. En la historia de los desaparecidos forzados en México hay un punto de inflexión: el año 2006, cuando el presidente panista Felipe Calderón inicia la llamada “Guerra al narcotráfico”. A partir de entonces, la cantidad de desaparecidos empezó a crecer de manera alarmante.

Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico propuesta por el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en 2006 hasta la administración de Enrique Peña Nieto 2014, se han denunciado 22 mil casos de desapariciones forzadas según lo registrado en actas de las diferentes entidades del país comprendidas en el periodo de 2006 a 2014, víctimas que se suman a los desaparecidos de las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta.²³

Como bien señala Reveles, las cifras sobre los desaparecidos a partir de 2006 hasta la fecha son variantes, una registra

²⁰ <http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/07/120717_hsbc_mexico_narco_lavado_dinero_irm.shtml>.

²¹ Roberto Saviano, *CeroCeroCero. Cómo la cocaína gobierna el mundo*, Barcelona, Anagrama, 2014. Véase también la entrevista en <<http://www.jornada.unam.mx/2014/06/22/sem-fabrizio.html>>.

²² Salvatore Lupo, *Historia de la mafia. Desde sus orígenes hasta nuestros días*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009, p. 185.

²³ <<http://www.jornada.unam.mx/2014/08/30/politica/003n1pol>>.

22 mil, otra 28 mil y otra hasta 30 mil. Por supuesto, siempre las cifras a la baja son las que proporcionan las autoridades gubernamentales, sean éstas federales, estatales o municipales. Un informe muy bien elaborado metodológicamente —no por la cantidad de casos— es el realizado en febrero de 2013 por Human Rights Watch: *Los desaparecidos de México*. En dicho informe se señala que las casi 250 desapariciones documentadas

[...] no representan la totalidad de los casos registrados en el país desde 2007. Por el contrario, las estadísticas oficiales prácticamente no dejan dudas de que hay miles de casos más. En noviembre de 2012, se filtró a los medios una lista provisoria elaborada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación sobre más de 25 000 personas desaparecidas o que se denunciaron como extraviadas desde 2006.²⁴

En este documento se analizan varios aspectos como: las desapariciones forzadas perpetradas por miembros de la Marina; las perpetradas por miembros de la policía local; por miembros de la Policía Federal; la complicidad entre miembros de las fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada en casos de desapariciones. En más de 60 casos, Human Rights Watch encontró evidencias de que agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares. Por ejemplo, las evidencias indican que policías locales en Pesquería, Nuevo León, detuvieron arbitrariamente a 19 trabajadores de la construcción en mayo de 2011 y los entregaron a la delincuencia organizada. Desde entonces se desconoce el paradero de estos hombres. Además, se mencionan las graves y serias falencias de las investigaciones oficiales: Las autoridades no intervienen durante las detenciones arbitrarias ni en el periodo inmediatamente posterior; no se realizan búsquedas de las víctimas ni se inician investigaciones inmediatamente; se culpa a las víctimas

²⁴ <<http://www.hrw.org/node/113783/>>.

por lo sucedido; presunciones infundadas sobre el paradero de las víctimas; no se actúa oportunamente para localizar el teléfono celular, los movimientos bancarios u otros rastros inmediatos de las víctimas; negligencia, demoras, errores y conjeturas. Cómo no investigar contribuye directamente a que se produzcan nuevas desapariciones; renuncia de responsabilidades por parte del Ministerio Público, remisiones y falta de coordinación; se delegan tareas de investigación a familiares de las víctimas; corrupción entre agentes del Ministerio Público y pérdida de la confianza de las familias. Pero un capítulo muy importante de este informe, a mi juicio, es el que analiza el impacto en familiares de personas desaparecidas: el derecho a la verdad y la angustia indefinida de no saber qué sucedió; impacto emocional y psicológico; impacto psicológico en los hijos; amenazas, hostigamiento y agresiones contra familiares de personas desaparecidas; el impacto económico; y las serias deficiencias en la asistencia prestada a las víctimas por PROVÍCTIMA.

La cuestión —poco analizada en la mayoría de los informes e investigaciones al respecto— del impacto psicológico en los familiares de las víctimas desaparecidas debe valorarse significativamente; sin duda, los propios familiares también son víctimas de este crimen, y a veces los “daños colaterales” llegan a sufrirlos toda la vida. En su estudio sobre *La desaparición forzada de personas en América Latina*, Ana Lucrecia Molina Theissen afirma que la práctica de las desapariciones tiene efectos destructivos no sólo en la víctima directa, sino también en su familia y, aún más, en el conjunto de la sociedad, el que ha sido profundamente afectado. La angustia y desestructuración emocional es uno de los efectos perversos en la familia:

La desaparición de un ser querido también significa tortura psicológica para su familia. Ésta crea, como efecto inmediato, una situación de angustia sostenida causante de profundas transformaciones en la vida y la psique de los afectados. Provocados por el terror, la ambigüedad y el dolor —surgidos debido a la certeza del sufrimiento del desaparecido— se presentan saturados de sentimientos de hostilidad por la

impotencia ante la comisión del crimen. Al no ser muerte, la desaparición crea una zona de ambigüedad psicotizante, desestructuradora de la identidad de cada uno de los miembros y del grupo familiar en sí, al no poderse resolver objetivamente las contradicciones de presencia-ausencia y existencia-no existencia. El no saber el destino y estado del ser querido, provoca en los familiares fantasías angustiantes sobre las torturas que probablemente esté sufriendo, creadoras, a su vez, de temores sobre la propia integridad que son terreno adecuado para generar enfermedades y muerte; deseos de liberar al desaparecido de los tormentos; ilusiones de reencuentro expresadas en situaciones concretas en que parece verlo entre la gente. Es tan grave el estado de desestructuración emocional y confusión provocados que toda la energía se concentra en dilucidarlo. Los familiares de los desaparecidos son convertidos en seres incapaces de dar y recibir en términos de afectividad. Esta situación genera problemas de identidad y adaptación; de aprendizaje (no se reconoce la realidad, no se puede aprender); depresiones nerviosas; ansiedad y dispersión; temores nocturnos y aislamiento familiar y social.²⁵

En muchas ocasiones, las desapariciones forzadas forman parte de la guerra psicológica como de la utilización de métodos terroristas por el Estado con su guerra de baja intensidad, según Molina Theissen.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL de la inseguridad, la delincuencia y las desapariciones. De acuerdo con el Centro de Análisis Fundar, de los más de 22 mil casos de desaparición que se tienen documentados, alrededor de 12 500 corresponden a la administración de Felipe Calderón y 9 700 a la de Peña Nieto. Lo anterior quiere decir que en sólo dos años de la actual administración ya se tiene registro de 78 por ciento de los casos de desaparición forzada que se registraron en los seis años de gobierno de Calderón.²⁶ El gobierno de Peña Nieto nunca ha definido una estrategia para investigar y evitar las desapariciones. Es un verdadero desastre la labor de las autoridades, por ejemplo: la PGR tiene muestras genéticas de 1 398

²⁵ A.L. Molina T., *La desaparición forzada de personas...*, op. cit.

²⁶ <<http://www.jornada.unam.mx/2014/08/30/politica/003n1pol>>.

cadáveres sin identificar. La cifra, de 2000 a febrero pasado; la mayor parte de restos proviene de Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Jalisco e Hidalgo, otras entidades donde se han localizado cadáveres.²⁷

Tal aseveración la reconfirma una investigación de *Proceso*:

Nunca como en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto han desaparecido más mexicanos en el país: 13 cada día. Uno cada hora con 52 minutos. Y 40 por ciento de ellos son jóvenes de entre 15 y 29 años [...] Dos bases de datos —una elaborada por el gobierno de Felipe Calderón, otra por el de Peña Nieto— arrojan cifras y tendencias estremecedoras en torno a los desaparecidos en México [...] Durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 384 personas, lo que equivale a 40 por ciento de los 23 272 casos de desaparición oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014. Es decir, cuatro de cada 10 desapariciones en los últimos siete años ocurrieron durante los dos primeros de la actual administración. Si entre 2007 y 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, desaparecieron seis mexicanos al día; entre 2013 y 2014, en el de Peña Nieto, desaparecieron más del doble: 13 al día. Con Calderón se extraviaba o desaparecía un mexicano cada cuatro horas con cinco minutos; con Peña Nieto ello ocurre cada hora con 52 minutos (véase la gráfica 1).²⁸

Las dos bases de datos muestran que a partir de 2007 hubo un crecimiento sostenido de las desapariciones, que alcanzó un pico en 2011. La del gobierno de Calderón indica que ese año desaparecieron o se extraviaron 7827 personas; la de Peña Nieto señala 3312 personas (gráfica 2). En el primer

²⁷ *La Jornada*, 2 de abril de 2015.

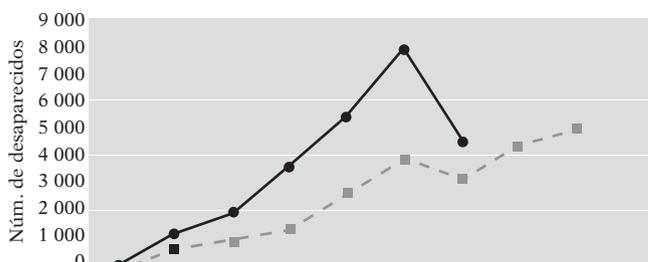
²⁸ Éstas son algunas de las cifras que arroja la base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) correspondiente al periodo de enero de 2007 a octubre de 2014. Dicha base de datos fue elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) después de “depurar” una previa: la heredada del gobierno de Calderón y en la cual hay 26 569 casos de personas extraviadas o desaparecidas, <<http://desaparecidos.proceso.com.mx/2/>>.

GRÁFICA 1
DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EXTRAVIADAS
O DESAPARECIDAS (RNPED)



FUENTE: *El país de los desaparecidos*, <<http://desaparecidos.proceso.com.mx/>>.

GRÁFICA 2
DESAPARECIDOS POR AÑO



	Anterior a 2007	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
● RNPED (2007-2012)	551	1 283	2 097	3 707	5 425	7 827	4 617	0	0	1 060
■ RNPED (2007-2014)	233	745	857	1 326	2 721	3 942	3 312	4 448	4 936	751

FUENTE: *El país de los desaparecidos*, <<http://desaparecidos.proceso.com.mx/>>.

caso el crecimiento respecto a 2007 fue de 510 por ciento; en el segundo, de 429 por ciento. Ambas coinciden en que hubo un descenso en 2012, pero ese año termina el registro por parte de la administración de Calderón (RNPED 2007-2012), mientras el del gobierno de Peña Nieto (RNPED 2007-2014) continúa dos años más y muestra que hubo un nuevo incremento

a partir de 2013; 2014 fue el de más desaparecidos o extraviados de los últimos siete años: 4 936 de enero a octubre.²⁹

Un dato que llama la atención es que durante el gobierno de Peña Nieto uno de cada diez desaparecidos (11.3 por ciento) es un niño de entre cero y cuatro años. Más aún, se estima en medio millón los niños desaparecidos en México desde 2009. Según datos suministrados por Organizaciones no Gubernamentales (ONG), instituciones gubernamentales y organizaciones civiles señalan que

[...] desaparecen entre nueve y diez infantes cada hora, de los cuales, 58 por ciento tiene entre cuatro y 12 años de edad y casi dos terceras partes son del sexo femenino [...] el Senado de la República ha difundido que de 2007 a 2011 el número de niños desaparecidos en el país ascendió a 150 mil, esto es, de tres a cuatro niños cada 60 minutos.³⁰

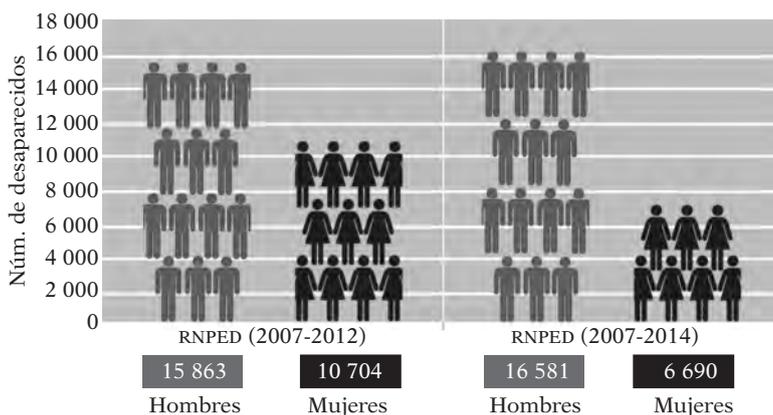
Sin duda, nuestra sociedad regida por un capitalismo salvaje, es una especie de sociedad herodiana, donde la vida de los pequeños no vale nada. Éste es un ejemplo terrible de un avanzado proceso de descomposición social, de una absoluta y profunda deshumanización en el marco histórico de una barbarie social más patente. Entre los jóvenes desaparecidos en el rango de 15 a 29 años sobresale otro dato: el RNPED de Calderón indica que más de la mitad (54 por ciento) son muchachos y muchachas de entre 15 y 29 años; en el de Peña Nieto ese dato desciende a 40.6 por ciento (véase la gráfica 3). A su vez, la base de datos del gobierno de Calderón muestra que el Distrito Federal es, con mucho, la entidad federativa donde desaparecieron más mexicanos entre 2007 y 2012: siete mil casos (29 por ciento); en cambio, en la del gobierno de Peña Nieto la entidad con más desaparecidos entre 2007 y 2014 es Tamaulipas: 5 293 casos (23 por ciento).³¹

²⁹ *Idem.*

³⁰ <<http://www.yometirolmonte.es/2015/03/05/medio-millon-ninos-desaparecidos-mexico-trafico-organos-prostitucion-infantil/>>.

³¹ <<http://desaparecidos.proceso.com.mx/2/>>.

GRÁFICA 3
NÚMERO DE DESAPARICIONES POR SEXO



FUENTE: *El país de los desaparecidos*, <<http://desaparecidos.proceso.com.mx/>>.

No obstante la extrema gravedad del problema de las desapariciones, después de casi una década, es hasta principios de abril de 2015 que apenas los senadores y diputados acuerdan dar “prioridad”, en lo que resta del periodo ordinario de sesiones, a la iniciativa de ley sobre la desaparición forzada. No existe una legislación específica en la materia.³² Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es incapaz de hacer su trabajo y solapa al Estado. La propia CNDH descarta que en las desapariciones hayan participado autoridades, según afirma su presidente Raúl Plascencia Villanueva, quien aseguró que en el transcurso del año no se ha repor-

³² *La Jornada*, 7 de abril de 2015. Véase: “La Desaparición Forzada de Personas en México”, de José Luis Nieto Moiré (septiembre de 2008), <<http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CVI-39-08.pdf>>. Solamente se ha reformado y adicionó —en el año 2001— al título Décimo del Código Penal Federal un capítulo III bis denominado “Desaparición Forzada de Personas”, creando los artículos 215A, 215B, 215C, y 215D. Existe un proyecto de *Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición de personas* redactada en este año 2015, pero hasta el momento duerme el sueño de los justos: <<http://www.idheas.org.mx/proyecto-de-ley-sobre-personas-desaparecidas/>>.

tado ningún desaparecido con intervención de la autoridad. Esto es el colmo del cinismo, pues tal declaración la hizo a los pocos días de la desaparición de los jóvenes de Ayotzina-pa, cuando todo mundo conocía ya el involucramiento de las autoridades municipales perredistas en este crimen.³³

EPÍLOGO

En una sociedad que no está en guerra con ningún país vecino o lejano, donde se afirma que no existen grupos terroristas de ninguna especie y cuyo gobierno enfatiza que es ejemplo democrático en el mundo, especialmente en la región latinoamericana; donde también se afirma que existe un profundo respeto por los derechos humanos en general; un país cuyo gobierno proclama que la educación es un condición fundamental para el progreso social; etc.; las preguntas que nos volvemos a hacer son: ¿por qué desaparecieron 43 jóvenes estudiantes? ¿Por qué puede desaparecer cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar? ¿Cuándo terminará este infierno dantesco?

Está muy claro, entonces, que mientras exista una sociedad como la nuestra con un régimen político putrefacto como el prevaleciente tendremos una situación ominosa y terrible y también la amenaza peligrosa que nos hace vivir una pesadilla real cotidiana. La alternativa es muy clara: la lucha por la transformación social profunda, radical, de todo lo realmente existente.

³³ *La Jornada*, sábado 30 de agosto de 2014.

LA MATANZA DE IGUALA Y EL EJÉRCITO

Luis Hernández Navarro

El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 Batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último, dijo.

Esa noche, el militar estuvo presente en el informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca. Y, según declaró el general Salvador Cienfuegos Zepeda a la comisión legislativa que investiga la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, él no vio nada en el evento; incluso se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no pasó nada.

El coronel Aranda Torres asumió el mando del 27 Batallón de infantería el 5 de octubre de 2011. Llegó allí después de servir en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona en la que el narcotráfico campea, y de estar al frente del octavo batallón de fuerzas especiales en Guadalajara. En Iguala entabló una magnífica relación con José Luis Abarca. Aparecieron juntos encabezando diversos actos cívicos. Sin embargo, a pesar de su experiencia, el militar pareció no darse cuenta de la enorme cantidad de fosas clandestinas que se cavaron en su zona de influencia, ni del intenso trasiego de goma de opio que tiene en esa ciudad un punto central de distribución.

No es exageración. Gustavo Castillo publicó en este diario [*La Jornada*] que en Guerrero se produce más de 60 por ciento de la amapola y goma de opio de México. Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas refieren que en el país, desde 2008, se duplicó el número de hectáreas de este cultivo ilícito, al pasar de 6 900 hectáreas a 15 mil, y aumentar la producción de 150 toneladas a más de 325. Iguala y Chilpancingo se han convertido en los principales centros de acopio de goma del narcótico.

Los vínculos estrechos de José Luis Abarca con el Ejército son anteriores al arribo del coronel José Antonio Aranda al frente del batallón. El 22 de enero de 2008, el entonces senador Lázaro Mazón colocó la primera piedra de Plaza Tamarindos, una ambiciosa inversión de 300 millones de pesos, propiedad de su amigo, el antiguo vendedor de sombreros y joyero José Luis Abarca.

La Plaza se ubica frente a las instalaciones del 27 Batallón de infantería, en un terreno regalado por las fuerzas armadas. Según la crónica de la ceremonia de inicio de las obras del centro comercial, publicada en *Diario 21*: en su participación, el senador Mazón Alonso agradeció al ex diputado Rubén Figueroa su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quien donó ese terreno. La información nunca fue desmentida.

El diputado, ex senador suplente y empresario transportista Rubén Figueroa Smutny es hijo y nieto de ex gobernadores y caciques del estado. Su padre, Rubén Figueroa Alcocer, fue responsable de la matanza de Aguas Blancas en 1995, y controla la distribución de fertilizante en amplias regiones de Guerrero y Michoacán. Figueroa Smutny es también sobrino del cantante Joan Sebastian y de Federico Figueroa, señalado como uno de los altos mandos de *Guerreros Unidos*.

Especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las drogas, el 27 Batallón de infantería tiene tras de sí un negro historial de violación de derechos humanos. Como documentó el blog especializado en cuestiones de defensa Estado Mayor, el batallón participó activamente en *la guerra sucia* de la década de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo

pasado, dejando a su paso un largo historial de atrocidades, incluidas centenares de desapariciones forzadas.

Las tropelías perpetradas por el batallón no cesaron con el paso de los años. Apenas en marzo de 2010 desapareció a seis jóvenes en Iguala. El caso fue documentado por Human Rights Watch. En su informe *Ni seguridad, ni derechos*, publicado en noviembre de 2011, el organismo advierte: existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito.

La noche del 26 de septiembre, el 27 Batallón de infantería no hizo nada para evitar la matanza y desaparición de los estudiantes. No resguardó la zona. Dos horas después, del primer ataque, se produjo uno nuevo, sin que los militares hicieran nada para evitarlo. Fue hasta entonces que aparecieron militares, agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada.

Los soldados —contó el normalista Omar García a TeleSur— “nos dijeron: ‘ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, *amárrensen* los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar”. Luego los fotografiaron.

La mañana del 31 de octubre una *narcomanta* apareció colgada en la reja de la entrada a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, cerca del cuartel de la 35 zona militar. Estaba dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. La firmaba *Gil*, es decir *el cabo Gil*, señalado como uno de los operadores de la desaparición de los estudiantes y lugarteniente de Sidronio Casarrubias, uno de los líderes de *Guerreros Unidos*, hoy preso.

El mensaje señalaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, había dos oficiales del 27 Batallón de infantería: el teniente Barbosa y el capitán Crespo, involucrados con la organización.

A pesar de que las evidencias en su contra se van acumulando, hasta el momento las pesquisas oficiales han dejado

de lado a las fuerzas armadas. Los normalistas que sobrevivieron al ataque tienen sus sospechas de que algo tienen que ver los militares en el asunto. “Acuérdense —dice Omar García— que en la *guerra sucia*, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el Ejército”.

Originalmente publicado en *La Jornada*,
18 de noviembre de 2014

**Me quitaron el rostro pero
hoy los que marchan son
mi nueva cara**



AYOTZINAPA Y LA VOZ DE LOS PADRES

Luis Hernández Navarro

Pasan los días y sus hijos no aparecen. Un día las autoridades les dicen una cosa y al siguiente otra. Y las versiones que les dan no concuerdan con las evidencias disponibles. ¿Por qué los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa le van a creer al gobierno?

En un primer momento, los funcionarios aseguraron que los muchachos estaban escondidos como presión política. Afirmaron que se encontraban a salvo en algún lugar de la sierra o en un rincón de su escuela. Así transcurrieron días valiosos para encontrarlos con vida, sin que se les buscara en serio. Muy pronto quedó claro que eso no era cierto. Pero ninguna autoridad se disculpó con los padres por esa mentira. Nadie tuvo la humildad de confesar que se equivocó.

La noche del 5 de octubre la historia oficial cambió. Iñaki Blanco, procurador de Guerrero, informó que dos detenidos habían confesado el asesinato de 17 de los 43 normalistas. Según él, Martín Alejandro Macedo Barreda, vendedor de narcóticos, y Marco Antonio Ríos Berver, sicario de *Guerreros Unidos*, revelaron que ellos los *ejecutaron* por órdenes de un personaje apodado *El Choky*.

Días más tarde, los testimonios de los homicidas se filtraron a la prensa. *El Gaby*, uno de los verdugos, declaró ante el Ministerio Público: “Yo participé matando a dos de los *ayotzinapos*, dándoles un balazo en la cabeza, y no son de los que quemamos, están enteritos [...] la forma de matarlos fue *ancados* y les disparamos por un lado de la cabeza”. Esto —dijo otro— por andar de revoltosos.

Uno de los homicidas, Martín Alejandro Macedo, reveló:

Recibí la instrucción de dispararles (a los normalistas) por parte del Choky; los disparos que les realizamos fue en el centro de Iguala [...] El Choky pidió apoyo a la policía municipal, por lo que supe que El Choky sí alcanzó a chingar a varios ayotzinapos, ya que se estaban poniendo muy locos; una vez que se comienzan a bajar los estudiantes comienzan a correr y logramos asegurar a 17, los cuales subimos a nuestras camionetas y los llevamos a la casa de seguridad donde los matamos inmediatamente, ya que no se querían someter y como eran más que nosotros, El Choky dio la instrucción que les diéramos piso [...].

Pero casi un mes después, mientras aparecían cadáveres y más cadáveres sin nombre en multitud de fosas clandestinas alrededor de Iguala y las autoridades buscaban que las cifras de los normalistas muertos cuadraran, la versión gubernamental de los hechos volvió a modificarse. Las autoridades nunca aclararon por qué quienes confesaron los asesinatos mintieron. Simplemente hicieron borrón y cuenta nueva.

El 7 de noviembre, en una conferencia de prensa, el procurador Jesús Murillo Karam informó que, según tres nuevos testimonios, los 43 jóvenes fueron conducidos al basurero del municipio de Cocula, ultimados, calcinados y sus cenizas arrojadas en bolsas de plástico a un río.

El nuevo relato gubernamental de la masacre presenta los resultados provisionales de una investigación en curso como si fueran casi definitivos. Pero, además, está lleno de huecos, explicaciones poco creíbles y contradicciones evidentes. En *La Jornada*, *Telesur* y *Proceso* se han documentado las opiniones de varios especialistas que ponen en duda la tercera versión oficial de los hechos, la última (hasta el momento).

Repasemos algunas de las críticas que se han hecho al informe oficial. Por principio de cuentas, no debió ser nada fácil para los sicarios someter a un grupo de 43 jóvenes, aguerridos y rebeldes, y trasladarlos dócilmente, sin dejar huella alguna, a varias decenas de kilómetros de distancia de donde

fueron apresados por la policía. En la explicación se asegura que algunos se ahogaron en el camino. Sin embargo, los vehículos en que fueron transportados (un camión de 3.5 toneladas y una camioneta de carga) no tenían una cabina cerrada que impidiera la entrada de aire. ¿Por qué entonces se asfixiaron?

El basurero donde supuestamente fueron incinerados los estudiantes es un lugar al aire libre, en el que es muy difícil alcanzar las temperaturas necesarias para quemar sus cuerpos. Más aún en un día de lluvia, como fue ése. Evitar que la lumbre se propale a otros rincones del vertedero es tarea llena de riesgos. Sin embargo, los pistoleros manejaron la fogata magistralmente. Un incendio de esa magnitud y una peste como la que emiten los cuerpos al consumirse devorados por las llamas difícilmente habría pasado desapercibido en la región. Pero nadie se dio cuenta de lo sucedido.

Curiosamente, no se encontraron en el terreno quemado tiras de acero con las que se refuerzan los neumáticos que se usaron para alimentar el fuego. Tampoco hebillas de metal de cinturones y huaraches, cremalleras de pantalones y chamarras, relojes, medallas o amalgamas de piezas dentales de los alumnos. En cambio, sí se hallaron restos de vegetación que sobrevivieron milagrosamente a los calores infernales de la hoguera.

Sorprende también que, según la declaración de los detenidos, hayan podido destruir los huesos con pericia y recogido los residuos a escasas dos horas y media de que la pira fúnebre se extinguió. Las cenizas son un aislante térmico muy eficaz, que pueden conservar el calor durante muchas horas después de apagado el fuego. Es imposible meterlas en bolsas de plástico sin que se derritan.

Finalmente llama la atención la razón por la que los sicarios aventaron las cenizas al río en bolsas de plástico, cuando de lo que se trataba era de no dejar rastro del crimen. Y, más sorprendente aún, es que uno de esos empaques no se hubiese roto al chocar con el fondo pedregoso de un río de corriente vigorosa.

La negativa de los padres de familia de los desaparecidos a reconocer la versión gubernamental como válida proviene no sólo del natural rechazo a admitir un hecho tan doloroso sino, fundamentalmente, a que la consideran un torpe guión para dar carpetazo a la tragedia, y exculpar al Estado mexicano de su responsabilidad en el crimen.

Para esos padres ya pasó demasiado tiempo sin que sus hijos aparezcan. Están hartos de engaños, maniobras y del intento del gobierno de ganar tiempo.

Originalmente publicado en *La Jornada*,
25 de noviembre de 2014

SÁBADO NEGRO



SEGUNDA PARTE
EL CONTEXTO

AYOTZINAPA: LA RESISTENCIA QUE SE IMPONE AL EXTERMINO

Flor Goche

Luis, José, Carlos y Osvaldo, hijos de campesinos, comparten vivienda. Es un espacio de 80 metros cuadrados que antes la hacía de cuarto de ducha de la alberca, pero que ante la escasez de dormitorios estudiantiles fue adaptado como tal. En tiempos de lluvia, pequeñas esferas líquidas traspasan el desgastado techo sin impermeabilizante. Botes reutilizados colocados de forma estratégica sobre el despostillado piso de concreto impiden que las dos habitaciones —que incluyen mingitorios, lavabos y retretes en mal estado— se encharquen.

El hogar temporal de estos jóvenes, futuros profesores rurales, se encuentra en la parte posterior de la escuela-internado ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, que alguna vez albergó a personajes como Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas. Es común encontrarse con una manada de caballos pastando por el lugar o bebiendo del líquido que se desparrama por una añeja fuga de agua. Son equinos salvajes que, sin embargo, sortean con exquisita diplomacia el inminente trato humano: si intentas acercarte, viran en la dirección contraria y, con trote firme, emprenden la huida.

Para llegar al improvisado dormitorio que aún conserva huellas de su propósito original —deterioradas y antiguas regaderas cuelgan de su techo— es preciso cruzar las instalaciones educativas de esquina a esquina: traspasar el acceso principal del recinto sellado con portón metálico y muros de empedrado sobre los que se lee: “Escuela Normal Rural Raúl

Isidro Burgos. Ayotzinapa cuna de la conciencia social”, y caminar hacia la izquierda en dirección diagonal.

Otra forma de llegar a este punto es a través del oído: dejarse llevar por el relinche de los caballos o por el repiqueteo de los Halcones Dorados, la banda de guerra estudiantil que ensaya con regularidad en una cancha de fútbol rápido contigua al área de la alberca. El cuarto de ducha modificado se encuentra justo antes de arribar al terrero pastoso en el que se practica el deporte predilecto de los estudiantes de Ayotzinapa: el fútbol.

Con extraordinario ingenio, los alumnos de esta escuela-internado han aprendido a paliar las carencias propias de una institución concebida para hijos de pobres. Lo mismo que las otras 15 normales rurales que aún existen en el país, Ayotzinapa es herencia de la Revolución mexicana que se propuso abrir el sistema educativo a los sectores sociales históricamente excluidos. Por ello, entre otros requisitos de ingreso, a sus aspirantes se les solicita una constancia de bajos ingresos económicos familiares y de procedencia campesina.

Una estructura armada con tres tambores de cama oxidados (dos en posición horizontal y uno en vertical), un poste de red de voleibol y una lona de comida rápida, es muestra de este ingenio. Juntos conforman las paredes del espacio que los inquilinos del ex cuarto de ducha de la alberca edificaron para su aseo personal. La puerta es una cortina de tela estampada en cuadros naranjas y amarillos; las jaboneras, dos retazos de loseta; la regadera, que suministra agua fría a chorros, un tubo sin cabezal anclado al techo que se activa al jalar un trozo de piola.

En el contexto de las condiciones en que se vive en Ayotzinapa, *Luis, José, Carlos y Osvaldo*, estudiantes del último año de la licenciatura que los forma como maestros, pueden considerarse “privilegiados”. Su techo que en tiempos de lluvia se convierte en coladera, su improvisado cuarto de aseo, sus retretes y mingitorios abollados, en nada se comparan con las “cavernas”, nombre con el que se conoce a los espacios de tres por tres metros, de paredes húmedas y escasa ventilación, en los que viven los alumnos de primer ingreso.

Además de las condiciones de hacinamiento en que habitan, estos últimos pernoctan en el piso, a diferencia del resto de la población estudiantil que lo hace en literas utilizadas por cinco generaciones y en colchones otorgados por el gobierno desde hace una década.

LAS EXPRESIONES DEL EXTERMINIO: ABANDONO, CIERRE,
OLVIDO, SATANIZACIÓN Y EMBATE FRONTAL

Aunque la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa inició operaciones en marzo de 1926, la primera piedra de su construcción fue plantada siete años después sobre la ex hacienda de San Juan Ayotzinapa, un terreno de más de dos hectáreas. De la antigua estructura aún hay restos. El más significativo es el caso de la ex hacienda que se alza muy cerca del acceso principal.

Tanto en su organización como en su pedagogía, las normales rurales reflejaban las ideas del nuevo orden revolucionario. El que algunas normales fueran establecidas en antiguas haciendas les otorgaba un aire de justicia poética. La imagen resulta sumamente significativa: las instituciones que durante el porfiriato acaparaban las tierras de los campesinos y explotaban su mano de obra, ahora serían el lugar en donde se formaría una nueva generación de maestros hijos de campesinos. Simbólicamente se revertía el antiguo orden social y la educación rural se establecía como una prioridad para el nuevo gobierno,

apunta Tanalís Padilla, experta en temas de disidencia campesina en México, en su artículo “Las normales rurales: historia y proyecto de una nación”.

Trascurrió poco tiempo antes de que las normales rurales dejaran de ser prioridad. A partir de la gestión de Manuel Ávila Camacho, presidente de México de 1940 a 1946, éstas empezaron a ser pesadumbre para los gobernantes.

Uno de los mayores golpes contra este sistema educativo data del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, luego de la represión

contra el movimiento estudiantil de 1968, cuando 15 de las 29 escuelas normales rurales que entonces existían fueron cerradas violentamente.

Diversos mecanismos de exterminio han caído sobre estas instituciones educativas: sus muros y moradores. Van desde el abandono, el cierre y el olvido de las instalaciones y sus sistemas de internado, hasta la satanización y el embate frontal contra sus estudiantes que, a la fecha, se encuentran agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la organización estudiantil más longeva del país.

Ayotzinapa es tan sólo un botón de esta historia de exterminio. El antiguo nicho de caciques agoniza. Las instalaciones educativas no han sido objeto de una remodelación profunda desde 1933, año en que comenzó su edificación. El deterioro es evidente. Capas de pintura fungen como parches de desperfectos. Puertas abolladas, vidrios rotos, pisos quebrados, techos carcomidos por la humedad, paredes impregnadas de moho ya son parte del paisaje de esta escuela-internado exclusiva para varones.

Indudablemente el área de dormitorios es la más deteriorada, asevera *Guillermo*, integrante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la normal de Ayotzinapa. Algunos de ellos, detalla, han tenido que ser resanados por los propios alumnos con pedazos de cartón, madera o con lo que encuentren.

Por si esto fuera poco, la red de agua de la escuela colapsa constantemente por lo que ha sido objeto de diversos remiendos, comenta José Luis Hernández Rivera, director de esta normal. El edificio que concentra la mayoría de las aulas, habría igualmente llegado al fin de su vida útil. Basta con que un estudiante golpee la pata de su butaca para que el inmueble de dos niveles se cimbre, refiere el funcionario.

El recinto sede de la Secretaría de Educación Pública, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de México, aún conserva en una de sus paredes a *La maestra rural*, mural a cargo de Diego Rivera que, como refiere Tanalís Padilla, ejemplifica el papel que debía jugar la educación dentro del nuevo orden revolucionario: una mujer impartiendo clases

en el campo; un círculo de alumnos en derredor; un grupo de campesinos labrando la tierra; un guardia civil con el rifle en alto, símbolo de “un Estado que vigila y protege”.

Hoy esta imagen de tintes cálidos es tan sólo una reliquia. La realidad de las normales rurales es otra. Las expresiones gráficas esbozadas sobre los muros de concreto de Ayotzinapa *hablan* del sínfin de reprimendas gubernamentales y de cómo estudiantes y población les han hecho frente.

Pablo, egresado de la normal de Ayotzinapa en 2013 y quien se desempeñó como secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón, brinda datos más puntuales al respecto. El primer episodio de represión que el joven recuerda data del 11 de febrero de 1998, y coincide con el periodo en que Ángel Aguirre Rivero se desempeñó como gobernador interino de Guerrero. Entonces cientos de policías antimotines arremetieron contra los estudiantes de Ayotzinapa, quienes mantenían un cerco en el Palacio de Gobierno para exigir la liberación de uno de sus compañeros.

Después vendrían las represiones de noviembre de 2007, con Zeferino Torreblanca como gobernador. Los normalistas rurales se manifestaban en contra de la intentona de suprimir la licenciatura en educación primaria cuando fueron desalojados del Congreso local por la misma fuerza antimotines, mientras coreaban la consigna de su invención: “La educación primaria es algo primordial, que no desaparezca de la normal rural”.

El 12 de diciembre de 2011, día en que en México se festeja a la virgen de Guadalupe, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos de Ayotzinapa, fueron asesinados por servidores públicos cuando, en una actividad colectiva realizada sobre la Autopista del Sol, exigían audiencia con Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador, para resolver sus demandas estudiantiles.

Dos años después, en enero de 2014, Eugenio Tamarit Huerta y Freddy Vázquez Crispín perecieron mientras participaban en una actividad de *boteo* (colecta económica) en favor de la escuela que entonces los cobijaba. Un tráiler los arrolló. A decir de sus compañeros normalistas, el conductor habría

comprado el discurso de odio que en contra de los “*ayotzinapos*” suministran los medios de comunicación masiva, “mecanismo activado desde el Estado”, señalan.

Finalmente, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, también con Ángel Aguirre como gobernador, otros tres jóvenes normalistas fueron ejecutados (a uno de ellos le desollaron el rostro y le vaciaron las cuencas de los ojos), dos heridos de gravedad y 43 detenidos-desaparecidos por agentes del Estado. Los hechos violentos que tuvieron lugar en Iguala —a 246 kilómetros de Ayotzinapa— involucran a policías municipales y, de acuerdo con los reportes oficiales, a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.

DERECHO A LA EDUCACIÓN, SUJETO A CABILDEO

Año con año, los estudiantes de las 16 normales rurales que existen en el país emprenden procesos de cabildeo con las autoridades educativas locales. La subsistencia de estas instituciones es el objeto de la negociación.

Durante los últimos meses del año, los estudiantes entregan a los gobernantes sus pliegos de demandas. Piden que la matrícula sea garantizada y que no se reduzca y, en consecuencia, la publicación de la convocatoria de nuevo ingreso. Piden que se incrementen los montos de las becas y el recurso destinado para su alimentación. Piden mantenimiento de máquinas de tortillas y de lavandería y del sistema de alumbrado. Piden mobiliario, cobertores, uniformes y medicamentos. Piden la construcción de dormitorios y aulas. Piden el respeto a su organización estudiantil.

Las demandas de los normalistas rurales son tan sólo las esenciales para ejercer con dignidad su derecho a la educación consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales de derechos humanos. No obstante, éstas son atendidas y cumplimentadas a regañadientes, dependiendo del nivel de movilización alcanzado o del contexto político y social en que se desarrolla la negociación.

Al igual que el monumento de losetas verdes sobre el que fueron implantadas las placas en memoria de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús —éste se ubica en el casco de la ex hacienda de San Juan Ayotzinapa—, la construcción más reciente de la escuela normal, un edificio de tres niveles de paredes guindas y amarillentas que se divide en 57 dormitorios para estudiantes, recuerda el asesinato, a manos del Estado mexicano, de estos jóvenes.

Y es que su edificación fue posible luego de que, a raíz de estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigiera su mirada hacia el sur y emitiera la Recomendación 1VG/2012 en la que, entre otras, conmina al poder ejecutivo y al legislativo local a instrumentar un programa emergente que atienda las necesidades de las escuelas normales rurales del estado, especialmente, la de Ayotzinapa.

De su recorrido por aulas, dormitorios, instalaciones sanitarias, comedores y diversos espacios comunes de la normal, los visitantes de la CNDH destacaron como asunto de “especial preocupación”, el hecho de que

[...] las áreas asignadas para dormitorios y servicios sanitarios reflejan el abandono institucional del que han sido objeto las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y su personal, y como a pesar de existir ciertas acciones las políticas públicas implementadas para atender la problemática prevaleciente en la multicitada institución educativa, han sido insuficientes y en algunos casos omisas para garantizar cualquier tipo de derecho humano referido a la educación, protección a la salud, desarrollo y vivienda digna.

Se refirieron, asimismo, a la forma en que las autoridades educativas han atendido las demandas estudiantiles: “Es inadecuada, ya que las acciones emprendidas representan solamente un paliativo, pero de ninguna forma han contribuido a resolver en definitiva la problemática que padece la institución desde hace décadas”.

A decir de Ana Isabel Jorge Alarcón, jefa del Departamento de Normales de Guerrero, dicha recomendación se ha atendido

de manera muy puntual. Prueba de ello es la edificación del inmueble de dormitorios. Dado que esta tarea fue encomendada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, la funcionaria dice no tener información respecto de cuándo se concluirán las otras tres obras comprometidas y que están a medio construir: un segundo edificio de dormitorios, un nuevo sistema de drenaje y la pavimentación de un tramo de la escuela.

En 2012, durante su gestión como secretario general del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, *Manuel*, ahora egresado, se enfrentó a las dificultades que implica la gestión de las necesidades básicas ante el Estado.

La situación aquí es bien complicada. Todo lo que se ha logrado en la escuela, como el cambio de literas en 1990 o el cambio de colchones en el 2005, ha sido gracias a las movilizaciones, porque no ha habido voluntad por parte de los gobiernos [dice. Y agrega] Sabemos que siempre es la misma situación: nos traen de un día para otro; un día nos dicen que sí resuelven y al otro que no, que no está en sus posibilidades, que no hay recursos de la federación.

—¿Consideras que esta situación atenta contra el derecho a la educación? —se le pregunta.

—Sí. Nosotros siempre lo hemos hecho ver ante las autoridades, ante los de derechos humanos, que es una violación a los derechos que tenemos todos porque nos niegan la posibilidad de tener las mejores condiciones para salir mejor preparados. Completamente son violaciones que nos hacen y que nos afectan como estudiantes y futuros profesores.

EN 2014 DISMINUYE EL PRESUPUESTO PARA AYOTZINAPA

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Educación de Guerrero, para 2014 el presupuesto anual destinado a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que alberga a 522 jóvenes, ascendió a 49 255 817 pesos. El 70 por ciento de estos dineros van para servicios per-

sonales; el resto, para gastos de operación, desde becas estudiantiles hasta infraestructura y material de limpieza.

El de 2014 es el presupuesto más bajo que la normal ha recibido en los últimos cuatro años. En 2011 se invertían 103938 pesos por alumno; en 2012, 121 674; en 2013, 127 637. En tanto, en 2014, el subsidio fue de tan sólo 94 360 pesos.

El rubro más afectado es el pago de servicios asistenciales, que en 2011 fue de 9 020 981 pesos y en 2014 de 6 506 692. Éste incluye alimentos, gastos de operación, material de limpieza, pre y premios.

En servicios asistenciales están englobados también los 17 mil pesos que cada mes recibe la dirección de la normal para satisfacer, entre otras necesidades, los gastos por servicios de internet, teléfono, papelería, tóner, taxis, comisiones, comida y pasajes para los maestros que asisten a cursos. Dineros que, a decir de José Luis Hernández Rivera, director de esta institución educativa, “no alcanzan”.

Al respecto, Bardomiano Martínez Astudillo, subdirector académico de Ayotzinapa, señala que aunque la red de internet se financió en un principio con recurso federal, a partir de agosto pasado son ellos quienes tienen que asumir ese gasto.

En el tema de becas y apoyos estudiantiles, los alumnos de primero a sexto semestres de la licenciatura tienen acceso al “pre”, nombre que se da a los 33 pesos que reciben mensualmente. En tanto, los de séptimo y octavo semestre son acreedores de dos becas, una federal y una estatal, que buscan solventar los gastos propios de las prácticas que realizan fuera de la escuela. Cabe destacar que en abril y diciembre, por periodo vacacional, los 1 725 pesos de ambas becas se reducen a la mitad.

Dado el sistema de internado que caracteriza a la institución, los alumnos son, asimismo, financiados en cuestión alimentaria, monto que asciende a 50 pesos por persona y que contempla las tres comidas diarias.

Al respecto, *Guillermo*, integrante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, precisa que estos apoyos son siempre insuficientes. Por ejemplo, dice, la comida no alcanza para todos, además de que las raciones son muy pequeñas. A pro-

pósito de los 1 725 mensuales pesos que reciben para sus prácticas docentes, el estudiante comenta que ese dinero dura “si acaso, dos semanas”, puesto que los gastos son diversos: transportación, hospedaje, comida, materiales y, en algunas ocasiones, hasta uniformes.

Falta de materiales didácticos, libros de texto (entre ellos, de literatura mexicana e investigación), proyectores, butacas, mesas, herramientas para trabajar la tierra son, a decir de *Guillermo*, algunas de las principales carencias de la normal de Ayotzinapa, rematadas por la constante saturación del servidor de internet con que cuenta la escuela, no obstante que las tecnologías de la información y la comunicación ya forman parte del plan curricular.

“Nosotros estamos en el abandono total. Es algo muy triste lo que está pasando en la escuela, a pesar de que de aquí han salido grandes maestros”, lamenta el joven.

El presupuesto destinado a esta institución educativa y los detalles de su ejercicio han permanecido en la opacidad. El mismo director de la normal de Ayotzinapa dice desconocer el monto total que se le otorga. En el pliego de demandas que anualmente entregan a las autoridades educativas, los estudiantes han pedido saber a cuánto asciende este recurso.

AUTORIDADES EDUCATIVAS: “LA PRETENSIÓN NUNCA HA SIDO EL CIERRE DE LA NORMAL”

En el contexto del movimiento estudiantil y popular que se gestó en Guerrero a raíz de los hechos de Iguala de finales de septiembre de 2014, Ana Isabel Jorge Alarcón, jefa del Departamento de Normales de Guerrero, aseguró que la pretensión nunca ha sido cerrar Ayotzinapa.

Prueba de su dicho es que, según refiere, esta normal es la de mayor matrícula en Guerrero (140 lugares, de los cuales 100 son para educación primaria y 40 para educación primaria intercultural bilingüe), la primera en emitir su convocatoria de nuevo ingreso y la única que ha logrado conservar su licenciatura en educación primaria.

La representante de la Secretaría de Educación de Guerrero explica que, aunque la situación económica de la entidad no ha permitido transformar la infraestructura de esta institución educativa, “se han venido mejorando algunas cuestiones”. Tal es el caso de la reciente construcción de un inmueble en el que hay un taller de idiomas y uno de matemáticas. Además, dice, de que “se tenía la idea” de entregar a los estudiantes 225 literas y 525 colchones ortopédicos a finales de septiembre pasado, así como “una cantidad de material didáctico”.

“A veces lo *poquito* que se hace no se nota porque es más la carencia que las necesidades que estamos cubriendo”, señala la funcionaria.

Isabel Jorge comenta que para transformar la escuela, tanto autoridades como estudiantes deben hacer su trabajo, pues “una cosa es que no se tengan todas las condiciones y otra es la limpieza, la situación salubre que hay que tener, y creo que ahí tenemos que trabajar con estos *chicos*”.

Para la jefa del Departamento de Normales de Guerrero resulta imperativo contar con un plan emergente que priorice el mantenimiento pero sobre todo la construcción de nuevas habitaciones y baños, así como las necesidades sanitarias de la escuela por encima de las “peticiones individualizadas” que anualmente plantean los estudiantes, tales como la dotación de uniformes o computadoras personales, mismas que, dice, “no nos permiten atender lo general, lo que es para todos, para el beneficio común”.

—¿El gobierno del estado cuenta ya con algún plan emergente que contemple la remodelación profunda de las instalaciones educativas? —se le pregunta.

—No. Por el momento no tenemos un plan. El señor Ángel Aguirre había presentado incluso una maqueta con planos de una transformación a la escuela, pero a lo mejor va muy lenta, no es con la rapidez que se requiere. Pero también es la cuestión de los recursos económicos lo que impide que esto se lleve a cabo.

¿DÓNDE
ESTÁN LOS
43
ESTUDIANTES.
DE
AYOTZINAPA,
MÉXICO?



Noberfo

MI VIDA EN AYOTZINAPA*

Ramón Espinosa Contreras

*Si el poder convierte a la ley en tiránica,
los pueblos tienen el derecho
a la revolución para su liberación.*

José María Morelos y Pavón

I

Ayotzinapa forma parte de las 33 normales rurales fundadas por el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México (1934-1940). Se encuentra ubicada en el municipio de Tixtla en el estado de Guerrero. Forma parte del sistema de escuelas normales concebidas como parte de un ambicioso plan de masificación educativa implementado por el Estado mexicano a partir de la década de 1920, para ser exactos, cuando Narciso Bassols era el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el periodo 1924-1933, y subsecretario Moisés Sáenz. Sáenz fue uno de los primeros pioneros de la Escuela Rural conjuntamente con Rafael Ramírez, quienes entendieron y señalaron dos grandes preocupaciones en ma-

* El presente texto es parte de un libro en preparación que con el título *Guerrero entre la pobreza y la violencia* será publicado en los próximos días y en el cual abordaré con amplitud el origen de las escuelas normales rurales, en especial de la de Ayotzinapa, en el contexto de la violencia estructural y pobreza extrema de Guerrero que explica la matanza de estudiantes y la desaparición forzada de los 43 alumnos de Ayotzinapa en los días 26 y 27 del septiembre negro de 2014 en Iguala.

teria educativa en esa época: incorporar al indígena al resto de la población mexicana por medio de la escuela y hacer que los campesinos amen el campo, ya que es parte integrante de su vida y de sus valores, por encima de la vida urbana. Para hacer esto posible, era necesario impulsar la educación rural en todo el país.

Sáenz se caracterizó por una gran mística educativa, como funcionario de la Secretaría de Educación, como también lo hicieron Rafael Ramírez, Vasconcelos y Bassols, estos últimos secretarios de Educación. Vasconcelos inicia la obra, Sáenz la termina, el primero impulsa las escuelas rurales, basándose en la filosofía de la educación de Justo Sierra, pero carecía de una orientación pedagógica definida producto de la realidad social mexicana. Era necesario elaborar un programa educativo completo e integral. En cambio, Sáenz, quien era una persona que había salido de la cruda realidad mexicana, realista, idealista y radical, diseña un método para explicar la realidad sustentado en la antropología social y en la filosofía de la educación de John Dewey, en la *“escuela de la acción”* y en la metodología de *“aprender haciendo”*, que considera al niño como el agente de su propia educación y al profesor el coordinador y orientador de sus acciones; estos principios fueron aplicados por Sáenz en la escuela rural mexicana.

En la perspectiva de Dewey, en esta concepción filosófica y pedagógica la educación es una modalidad de la acción política en la medida en que permite y obliga a la reflexión crítica de los problemas sociales, políticos, económicos, culturales y morales de la sociedad. El modelo seguido por Sáenz fue criticado por Vasconcelos.

El proyecto de las normales tuvo un fuerte componente de transformación social, basado en la *educación socialista* propuesta por el Partido Nacional Revolucionario (PNR), propuesta surgida del Plan Sexenal del Congreso Partidario de Querétaro en 1933 y del impulso a la reforma del artículo 3° de la Constitución el 10 de octubre de 1934 que hizo el Partido Comunista Mexicano (PCM).

El nuevo modelo educativo se establece con el artículo 3° reformado en 1934 de la Constitución, en el cual se plasma que la educación será obligatoria, gratuita, laica y *socialista*, y combatirá los fanatismos. Sólo el Estado, en sus tres niveles, federación, estados y municipios, impartirán educación primaria, secundaria y normal. Las actividades de enseñanza en los planteles particulares deberían ajustarse, sin excepción alguna, a las disposiciones legales establecidas en el citado artículo.

La educación socialista, según la visión de Cárdenas y los propios reformadores, debía impulsar la educación rural en todo el país a todos los niveles. Se abrirían 33 internados de educación indígena y 33 normales rurales en el país. De la misma manera, 33 internados de primera enseñanza en las ciudades más importantes de los estados y lo mismo el internado del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los planes y programas de estudio los elaboraba la SEP a través de sus instancias correspondientes. En los planes de estudio y en los programas de las escuelas normales rurales no existía ninguna materia relacionada con el socialismo o marxismo, por ejemplo: materialismo histórico y dialéctico o lógica dialéctica. Por esta razón fundamental, en las normales rurales no se forman marxistas o guerrilleros, esto es totalmente falso, aunque lo digan hoy los epígonos del Estado que tratan de criminalizarlas por todos los medios. Se formaban los estudiantes, fuera de ellas, en la *praxis* política como marxistas o los que optaban por la guerrilla, como los hermanos Gámez, Lucio Cabañas Barrientos, Carmelo Cortés o Genaro Vázquez Rojas, este último formado en la Escuela Nacional de Maestros de la ciudad de México.

II

Mi niñez fue de hambre y miseria. El sostén de la familia fue mi madre que tenía que alimentar, vestir, educar y cuidar la salud de sus cuatro hijos, yo el mayor. Para cubrir tales necesidades vitales del ser humano tenía que trabajar arduamente:

lavando y planchando ajeno, vendiendo verduras y comida en la plaza del pueblo de Villa Jiménez, Michoacán. Fue encarcelada por luchar por una parcela, que le fue arrebatada a la fuerza por sus cuñados. Esta lucha la tuvo que dar ante las autoridades del municipio, del Departamento Agrario en la ciudad de Morelia y luego en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, siendo su jefe Castulio Villaseñor Luquin (1952-1958) en la ciudad de México y en la Confederación Nacional Campesina (CNC). Duró seis años luchando por dicha parcela; no logró recuperarla, la burocracia era fatal, tal como lo es actualmente.

El primer día que llegamos a la ciudad de México tenía escasamente seis años de edad y nos instalamos en la Casa de los Agraristas, ubicada en la calle Sor Juana Inés de la Cruz número 116 en la colonia Santa María la Ribera. La Casa fundada por Adolfo Ruiz Cortines, con una capacidad para hospedar a 250 campesinos e indígenas de todo el país que llegaban a la ciudad para resolver sus problemas de tenencia de la tierra; muchos de ellos se regresaban a sus estados de origen con las manos vacías. Allí nos daban alimentación y hospedaje con credencial de la CNC en la mano. Estas injusticias fueron sembrando en mi persona una conciencia de clase y me fueron llevando hacia el ateísmo, porque la libertad y la justicia se adquieren en la lucha, no en el más allá, pensé en mis adentros.

Mi madre ayudaba a las cocineras a preparar la comida y en su tiempo libre, a lavar y planchar la ropa, las sábanas de algunos campesinos e indígenas que le pagaban por este trabajo. Yo, por las tardes me iba a vender el periódico *Tabloide* al centro de la ciudad de México, dicha prensa era crítica al sistema político. Después, mi madre se fue como cocinera a la casa de los profesores Francisco Hernández y Hernández y de la profesora Leonarda Gómez Blanco, ambos normalistas. Vivían en la colonia Narvarte. El primero fue profesor y director de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” de Saucillo, Chihuahua. Después fue jefe de Misiones Culturales, conjuntamente con el profesor Raúl Isidro Burgos, quien fue senador por el PRI y secretario general de la

CNC, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, y director del Banco de Crédito Ejidal, en el periodo de Díaz Ordaz. La segunda fue profesora de la Escuela Normal Rural de Panotla, Tlaxcala, y después subdirectora de la Dirección de Normales Rurales de la SEP, durante los dos últimos años de Adolfo Ruiz Cortines, y jubilada. Mi madre se salió del trabajo de la casa de los Hernández y se fue a trabajar de cocinera a una casa de huéspedes ubicada en la calle Mitla 17, colonia Narvarte. En lo particular, no perdí la relación con esa familia, en mis vacaciones finales llegaba con ellos y ayudaba a los quehaceres del hogar.

En la Casa de los Agraristas conocí, en 1959, a un profesor egresado de la Escuela Normal Rural “Raúl I. Burgos” de Ayotzinapa. Caminando por los pasillos de los jardines me llamó a platicar, recuerdo que me preguntó: “¿oyes cría ya terminaste tu primaria?”, le contesté que sí, “perfecto”, me dijo. Luego me hizo otra pregunta: “¿quieres estudiar para profesor como yo?”. Le contesté que sí, entonces me dijo: “¿por qué no te vas a estudiar a Ayotzinapa, allí estudian los pobres, hijos de campesinos y de indígenas”. Al final de la plática me dijo: “allá en la normal me apodaron *El Cuchillo* y soy de Chiapas”, eso se me quedó grabado en la memoria tal vez porque esa frase fue el preludio de mi viaje a Ayotzinapa. A esas normales íbamos los hijos de esos Méxicos profundos de que hablara Guillermo Bonfil, o de esos condenados de la tierra de quienes hablará Frantz Fanon, o de *Los miserables* de Víctor Hugo. Entonces preparé una cajita de cartón con una muda de ropa, la amarré con un mecate y le dije a mi madre que iba a estudiar a la normal de Ayotzinapa, y me preguntó: “¿dónde queda eso?”. Le contesté que en Guerrero, se negó, pero al fin y al cabo me acompañó a la terminal de la Flecha Roja, que estaba ubicada en la Calzada de Tlalpan, hoy estación del metro Chabacano. Mi madre nada más me dio la bendición, me dijo cuídate mucho, pórtate bien y aplícate.

Después, a los tres meses mi madre fue a la normal para saber cómo estaba, y en otra ocasión a los dos años, fue la última vez que la vi, murió el 7 de septiembre de 1965, sola, en el Hospital Juárez de la ciudad de México, estando ya por ter-

minar mis estudios de profesor normalista. A los pocos días también mi abuelita falleció, la madre de mi madre. Sentí que todo se derrumbaba, al mismo tiempo adquirí fortaleza, porque Ayotzinapa era mi casa, en ese momento tenía todo, hospedaje, alimentación y vestido. Las tías nos lavaban la ropa y nos daban de comer, estudiantes y profesores éramos una comunidad de hermandad y aprendizaje integral, tal como lo sigue siendo hoy. Reflexioné, diciéndome a mí mismo: la muerte es parte de la esencia humana y la vida no es eterna. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere, es la ley de la vida. La muerte de mis dos seres queridos me reveló la conciencia de la muerte como un acontecimiento perturbador que lleva en sí, por el hecho de que es una conciencia realista, la conciencia de la realidad transmutada de la muerte como parte de la existencia del ser humano.

Llegué a la terminal de Chilpancingo ya en la noche. Afortunadamente, allí mismo estaban los camiones que salían a Tixtla y varios estudiantes iban a la normal. Bajamos y llegamos al dormitorio llamado “El Palomar”, ya estaba lleno de estudiantes, había algunos colchones deshechos y tomé uno y allí me tiré a dormir.

El día lunes 19 de agosto de 1960, a las 4.30 hrs., comenzó a tocar el sonido de la dirección de la normal, con los acordes de la orquesta de Glenn Miller ejecutando la melodía *Patrulla americana*, que le gustaba poner al entonces profesor Manuel Pali Uc, director de la normal, y después la banda de guerra que era el llamado a los alumnos a formarse en la explanada de la institución para el pase de lista y rendir honores a la bandera y entrar a las seis de la mañana a clases. De los 350 alumnos inscritos 20 no éramos becados, no teníamos derecho a entrar a clases, ni a alimentación, cama, cobija, ni al llamado “pre” (mensualidad de 15 pesos). Los compañeros estudiantes nos decían las “gaviotas”.

Las “gaviotas” éramos los alumnos no becados. Fuimos a los tres días al Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón”, donde Lucio Cabañas Barrientos era su secretario general, nos recibió con amabilidad y atención con la sonrisa en los

labios y nos preguntó “¿crías, a qué vienen?”. “¡Ha, ha! —exclamó—, ¿ustedes son las mentadas gaviotas?”. Contestamos que sí y nos preguntó: “y ¿qué desean?”. Le dijimos que nos ayudara para que los profesores nos permitieran entrar a clases; que la persona encargada del almacén nos diera cama, colchón y cobija, y con quién acudiríamos para que nos dieran de comer. Nos contestó: “es que no son becados, ¡sino gaviotas!”. “Pero no se preocupen, van a llevar un oficio firmado por el Comité, se lo presentan a los profesores para que les den permiso de entrar a sus clases, al tío encargado del almacén y a la tía, o sea la ecónoma, encargada del comedor para que los atiendan”. En el caso de la alimentación, nos dijo Lucio, les van a decir que se formen al último y esperen a que sus compañeros salgan del comedor, para que coman las sobras. En el caso de la cama y sus componentes, en el almacén hay colchones viejos y cobijas viejas, escojan lo mejor.

Al final de la charla con Lucio, nos dijo: “no se preocupen, crías, les vamos a conseguir la beca, pero con una condición: aplíquense, estudien mucho y sean puntuales en sus clases, en sus talleres y en el trabajo de campo, y a los seis meses ya tendrán su beca”. Y así fue efectivamente. Siguió dándonos consejos. “Nuestro estado y el país —nos decía— están llenos de pobres y pocos ricos, necesitamos gente preparada como los profesores rurales, como los que se preparan aquí en esta normal y en otras del país, que vayan a enseñar a los campesinos e indígenas que están en las regiones más apartadas del estado, en donde existe la marginación, la pobreza y la miseria”. Era patente ese humanismo que siempre caracterizó a Lucio hasta su muerte. Esto me impactó como un martillo que golpeó mi cerebro para que despertara mi conciencia de clase.

Lucio Cabañas nació el 12 de diciembre de 1938 en el seno de una familia campesina en El Porvenir, una ranchería cerca de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Su abuelo paterno había sido zapatista y su tío Pablo había participado en la guerrilla de los hermanos Vidales en la década de 1920. Cursó su edu-

cación básica en la localidad de El Cayaco. Posteriormente, en febrero de 1958, ingresó a la normal de Ayotzinapa a la edad de 20 años y terminó como profesor normalista a los 26 años en 1964.

Durante su estancia en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue líder estudiantil y secretario general del Comité de la Sociedad de Alumnos "Ricardo Flores Magón" e ingresó en las Juventudes Comunistas del PCM. Su formación política inició en la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), que dirigía Genaro Vázquez Rojas. Posteriormente fue secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) para el periodo 1962-1963. Lucio decide separarse de la ACG por diferencias políticas e ideológicas con Genaro, ya que éste pertenecía al Partido Popular Socialista (PPS) de Lombardo Toledano, pero después renuncia al PPS porque no lo proponen como candidato a diputado por el distrito de Iguala. Lucio, por su parte, se acerca más al PCM y se dedica a la organización popular; ante todo campesina, teniendo como centro la ciudad de Atoyac de Álvarez, en la costa grande. La matanza de 1967 en dicha ciudad obliga a Lucio a huir y durante su periplo organiza y funda el Partido de los Pobres (PDLP) convirtiéndose en su dirigente indiscutible. Como jefe de la Brigada de Ajusticiamiento del PDLP secuestró a Rubén Figueroa Figueroa, quien era el candidato priísta a gobernador del estado, pidiendo por su rescate 100 millones de pesos, que fueron a parar a las arcas del PCM en manos de Arturo Martínez Nateras, entonces secretario general del PCM, sin acuerdo de Lucio.

A fines de septiembre de 1960 inicia el movimiento estudiantil y popular por la autonomía del Colegio del Estado, que más tarde se convertiría en la Universidad de Guerrero. Sus dirigentes más importantes, entre otros, fueron Jesús Araujo Hernández, Israel Olivares Hernández y Pablo Sandoval Cruz, este último representante popular. El Comité Estudiantil del Colegio del Estado, encabezado por su líder estudiantil Jesús Araujo Hernández, y otros grupos estudiantiles, convoca a una serie de movilizaciones exigiendo que el Colegio se convirtiera en Universidad Autónoma de Guerre-

ro, con el objetivo de que estudiantes pobres del estado fueran a estudiar. El Comité de Huelga hace estallar la huelga el 21 de octubre, poniendo las banderas rojinegras a la entrada del Edificio Docente. En esa fecha llega a Ayotzinapa Genaro Vázquez Rojas, miembro del PPS, para platicar con Lucio sobre el movimiento que se estaba gestando. Éste convoca a una reunión del Comité Estudiantil, con la finalidad de organizar la participación de la normal en el movimiento; de inmediato citaron a una Asamblea General de alumnos para formar el Comité de Huelga y planificar y organizar la logística, formando comisiones y brigadas de estudiantes para ir a todo el estado a informar sobre el movimiento estudiantil-popular e invitar a los trabajadores y campesinos a participar.

El movimiento demanda la transformación del Colegio del Estado en Universidad Autónoma y la destitución del rector impuesto por el gobierno. La respuesta fue la represión por parte del Ejército mexicano, masacrando a 19 ciudadanos guerrerenses el 30 de diciembre de 1960 en la capital del estado, Chilpancingo. El responsable del genocidio fue el general y gobernador del estado Raúl Caballero Aburto. El presidente de México era Adolfo López Mateos. El premio al general fue de inmediato nombrarlo embajador en Guatemala.

Participamos como estudiantes en el movimiento, en las marchas en Tixtla, en Chilpancingo, en las guardias en la normal y en el edificio docente de la universidad. La participación en dicho movimiento como *praxis* política fue esencial en mi formación como activista que se comenzaba a formar como marxista. El genocidio de las 19 personas cometido por Raúl Caballero Aburto fue uno de los primeros crímenes de Estado de lesa humanidad que se cometerían en Guerrero a partir de entonces. Los genocidios, la represión a los movimientos sociales y la desaparición forzada en Guerrero van a constituirse en la dialéctica de la historia de la violencia en estas tierras del sur y la tónica de los distintos gobiernos del PRI y después del PRD en el poder.

Lucio, como dirigente de la FECSM, el 15 de noviembre de 1963 hace la invitación a los estudiantes a la conferencia que impartió Othón Salazar Ramírez, dirigente del Movimiento

Revolucionario del Magisterio (MRM), en donde expuso su experiencia como preso político, la importancia del movimiento magisterial en la lucha en defensa de su salario y el papel que jugaban las normales rurales del país en la lucha nacional.

En 1964, Ramón Danzós Palomino, miembro del PCM y candidato independiente a la presidencia de la República por el Frente Electoral del Pueblo (FEP), contienda en la que enfrentaba al priísta Gustavo Díaz Ordaz, llegó a Tixtla a una concentración de cientos de campesinos para promover su candidatura. Días antes llegó el Comité de la Sociedad de Alumnos “Ricardo Flores Magón” acompañado de tres brigadistas del FEP, para hacernos la invitación de asistir al mitin a realizarse en la explanada de la Plaza “Vicente Guerrero”, en la ciudad de Tixtla. En la comitiva que lo acompañaba iban Othón Salazar, dirigente del MRM, Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del PCM y Gilberto Rincón Gallardo como secretario de Organización del Frente Electoral del Pueblo (FEP). Estas acciones organizadas por el Comité Estudiantil y Lucio Cabañas como su dirigente, indudablemente influyeron en mi formación política.

En la normal, nuestra comunidad del saber no se encontraba aislada del país ni del mundo, y no lo está en la actualidad. Sus estudiantes tenían y tienen información de los movimientos sociales y de los conflictos y revoluciones en el mundo, todo lo cual influye poderosamente en sus estudiantes. Influyeron poderosa y decisivamente en mi formación marxista y en mi vocación docente.

El 7 de septiembre de 1958, cuando el Movimiento Revolucionario del Magisterio se proponía realizar una manifestación para exigir el reconocimiento de la nueva dirigencia sindical y apoyar las demandas de los ferrocarrileros, los maestros fueron reprimidos en forma violenta. Antes de realizar el mitin, Othón Salazar y los principales dirigentes fueron aprehendidos, encarcelados y torturados.

En el contexto social nacional, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se registraron un conjunto de movimientos sociales que fueron reprimidos por el Estado; entre los

más sobresalientes están el movimiento ferrocarrilero y el movimiento magisterial. En el mes de abril de 1959 fueron reprimidos, encarcelados y cientos de ferrocarrileros despedidos de su centro de trabajo. Entre ellos estaba el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrilero, Demetrio Vallejo.

El movimiento ferrocarrilero de 1958-1959 me hizo comprender las principales causas sociales, políticas y económicas que impulsaron a los ferrocarrileros a la lucha democrática por sus demandas laborales, encabezados por su líder sindical, Demetrio Vallejo. De la misma manera las luchas emprendidas por los profesores del MRM y su líder Othón Salazar.

Al siguiente mes se realizaron una serie de movimientos en apoyo a los ferrocarrileros: obreros, estudiantes, maestros, telefonistas, ferrocarrileros. Este movimiento fue liquidado mediante la represión por parte del Estado. Lo mismo sucedió con el dirigente agrario Rubén Jaramillo y su familia, quienes fueron asesinados en 1961 en el estado de Morelos. En este mismo sentido, en el primer año de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, fue reprimido el movimiento médico en 1964-1965.

Estos hechos influyeron no en toda la comunidad estudiantil de Ayotzinapa, pero sí en un sector importante de la misma. Se preguntaría uno: ¿cómo es que llegaba la información a un lugar tan apartado desde la capital de México? La información nos llegaba a través de Lucio Cabañas como líder de la FECSM, organizando conferencias y a través de los periódicos *El Día* y *Excélsior* y las revistas *Política* y *Siempre!*, que estaban disponibles en la biblioteca de la normal.

Lo que sí influyó en un gran número de estudiantes fue la Revolución cubana de 1959 y los discursos de Fidel Castro, que escuchábamos por la radio, a las 12 de la noche. Muchos se dejaron crecer la barba como Fidel y después como el Che, e imitábamos su voz de acento cubano en concursos de oratoria.

Dichos acontecimientos me impactaron mucho durante los seis años que estudié en la normal de Ayotzinapa, los cua-

les fueron el hilo conductor de mi formación política como activista marxista, que se consolidó con la teoría y la práctica, relacionadas entre sí. Inicié la lectura de cuatro libros que me regaló Lucio: de Lenin, *La alianza de la clase obrera y el campesinado*; de Máximo Gorky, *La madre*; de Braulio Maldonado, *Los inconformes*, y de Nicolai Ostrovski, *Así se templó el acero*.

Durante dichos seis años de mi vida en Ayotzinapa aprendí a ser solidario con mis compañeros y principalmente con los movimientos sociales de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes y de los maestros en su lucha por sus demandas, participando con ellos. Solidario con las clases explotadas, oprimidas y marginadas. Con los pueblos de América Latina en la lucha por su liberación, sometidos por el imperialismo norteamericano. Comprendí que la justicia y la libertad de los pueblos y la clase explotada se adquiere en la lucha permanente, como, según afirmó Hegel:

Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad, se prueba que la esencia de la autoconciencia no es el *ser*, no en el modo *inmediato* como la conciencia de sí surge, ni es su hundirse en la expansión de la vida, sino que en ella no se da lo que no sea para ella un momento que tiende a desaparecer, que la autoconciencia sólo es puro *ser para sí*. El individuo que no ha arriesgado la vida puede sin duda ser reconocido como *persona*, pero no ha alcanzado la verdad de este reconocimiento como autoconciencia independiente (W. G. Hegel, *Fenomenología del espíritu*, FCE, 1973:116).

La conciencia de clase no se adquiere en forma inmediata ni por generación espontánea, ni en el hundirse en sí mismo, en otros términos, hundirse en la enajenación, en el escepticismo y en el estar al margen de los acontecimientos sociales y políticos. La conciencia por la vida, la libertad y la justicia se adquiere en la lucha como *praxis* política. Valores que son la esencia de la existencia del ser humano y son los forjadores de la historia, como sujeto mismo de toda la historia de la humanidad.

En esa lógica descrita están evolucionando las madres y los padres de los tres estudiantes muertos y los 43 desaparecidos forzados por el ejército, los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Desde esas fechas han luchado permanentemente para que sean liberados con vida y se incorporen a sus casas habitación y vuelvan a su normal de Ayotzinapa, porque sus hermanos de clase los están esperando con la finalidad de que terminen su carrera de profesores normalistas y se reúnan en sus hogares con sus familiares.

La lucha que han emprendido a nivel estatal, nacional e internacional con el apoyo de cientos de miles de hombres y mujeres y cientos de organizaciones, se ha dado en un contexto de violencia, represión y muerte por parte del Estado encabezado por Enrique Peña Nieto, presidente de la República, y por Rogelio Ortega, gobernador de Guerrero. Ejemplo de ello, el día 24 de febrero del presente año, el violento desalojo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y del SUSPEG del Bulevar de las Naciones en la Zona Diamante de Acapulco, con más de 100 detenidos, dos maestras violadas y un profesor inválido muerto por los constantes golpes que recibió por parte de la policía, pues los federales golpearon a manifestantes cuando ya estaban sometidos. Represión sufrida por el simple hecho de demandar la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pago de sus quincenas y certeza laboral. La violencia de Estado se ha venido incrementado para intimidar a los padres de familia, a los normalistas, a los profesores de la CETEG y a las organizaciones sociales que están de acuerdo con el boicot a las elecciones, para que no se opongan a que se realicen el 7 de junio.

Otro caso fue el ataque de 600 policías a 50 normalistas que tomaron una pipa el 28 de marzo del presente año. El primer hecho fue por la mañana, en Tierras Prietas, un barrio de Chilpancingo: los uniformados lanzaron gases, pedradas y golpes, resultaron dos normalistas lesionados y dos encarcelados por tres horas. La respuesta no se hizo esperar, en la tarde de ese mismo día, en Tixtla, los jóvenes destruyeron la co-

mandancia de la policía y una patrulla. Los padres de familia reportan seis heridos, dos de ellos hospitalizados.

Los nueve candidatos a gobernador para competir en las próximas elecciones de junio y sus respectivos partidos, oportunamente se han querido montar en el movimiento, ofreciéndoles a los familiares hasta candidaturas municipales, como en el caso del PRD, Movimiento Ciudadano, o como el cinismo de Morena en voz de su líder Manuel López Obrador, el día 28 de marzo, cuando ofreció a los padres de los 43 desaparecidos que propongan cómo integrar el gobierno estatal, en caso de que las votaciones del 7 de junio favorezcan a su partido. La respuesta de los padres de familia fue categórica: ¡no a las *elecciones*, *sí al boicot!* hasta que aparezcan con vida los 43 estudiantes. Esta contestación fue una cachetada a López Obrador, a su cinismo, por parte de los padres de familia. O como le contestó Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan:

No podemos estar fijando una postura, pero la lógica del movimiento de los padres es la presentación con vida de los estudiantes, y nosotros no compartimos la vía de las elecciones. Consideramos que las elecciones es apostarle al olvido de los estudiantes, de los 43 [Y por último pregunta:] ¿qué pasa con los ayuntamientos infiltrados?, ¿qué pasa con los candidatos y sus relaciones con la delincuencia? (*La Jornada de Guerrero*, 29 de marzo de 2015:3).

Esa actitud es una lección de dignidad y responsabilidad ética para aprender que la conciencia y la dignidad no tienen precio, no son mercancías de valor de uso y valor de cambio.

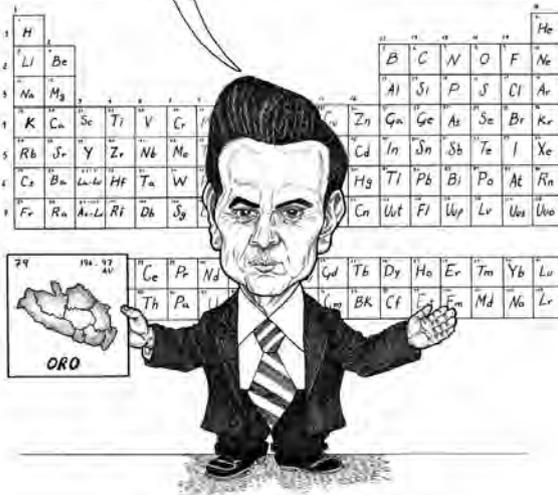
En suma, este acontecimiento de barbarie de Iguala, cometido por el Estado mexicano, ha quedado sellado en la memoria de la historia de los mexicanos a nivel general, y en particular en las mentes y las conciencias de los guerrerenses como un crimen en contra de la humanidad. Acontecimiento que me hizo escribir estas líneas de mi vida como antiguo estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Casa de estudios que me formó como profe-

sor normalista con conciencia de clase. Por esta razón y otras, tengo el compromiso moral y político de estar a su lado en a la lucha hasta que aparezcan con vida los 43 normalistas desaparecidos por el Estado.

¡Por la aparición con vida
de los 43 estudiantes desaparecidos!
¡Si vivos se los llevaron, vivos los queremos!

HACIA UN NUEVO MÉXICO

Y LA PREGUNTA QUE MUCHA GENTE
ME HACE ES: ¿QUÉ SIGUE? LO QUE SIGUE ES
CONTRAREFORMAR LA TABLA PERIÓDICA Y
PRIVATIZAR SUS ELEMENTOS ECONÓMICOS.
EL CAMBIO NO SERÁ INMEDIATO PERO YA INICIAMOS
EL CAMINO HACIA UN NUEVO MÉXICO.



CHIRÍN

Todos los días en México
es día de muertos





Cientos de granaderos realizan valla frente al Palacio de Bellas Artes en la Acción Global por Ayotzinapa, Toma de la ciudad el 6 de diciembre de 2014. Fotografía de Mario Marlo.



Maestros de la CNT amenazan con enfrentarse a un grupo de granaderos del Gobierno del DF que no permiten el ingreso al Zócalo durante la toma de la ciudad el 6 de diciembre de 2014. Fotografía de Mario Marlo.



Padres de los desaparecidos de Ayotzinapa hacen presencia en el inicio del Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeliones en Xochicuautla. Fotografía de Mario Marlo.



A tres meses de la desaparición de los estudiantes normalistas. Fotografía de Mario Marlo.



Padres de los normalistas desaparecidos, el 31 de diciembre del 2014, durante el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías. Fotografía de Mario Marlo.



Padres de los normalistas desaparecidos, el 2 de enero de 2015, en el CIDECI, durante el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías. Fotografía de Mario Marlo.



Padres de los normalistas desaparecidos, el 2 de enero del 2015, en el CIDECI, durante el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías. Fotografía de Mario Marlo.



Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, queman el Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero manifestando así su inconformidad ante las declaraciones del Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, 8 de noviembre de 2014. Fotografía de Mario Marlo.



Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, queman el Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero manifestando así su inconformidad ante las declaraciones del Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, 8 de noviembre de 2014. Fotografía de Mario Marlo.



Normalistas recolectan diésel en la autopista a Chilpancingo, se mantienen firmes con la exigencia de la presentación con vida de sus 43 compañeros. Fotografía de Mario Marlo.



A 45 días de impunidad padres y normalistas bloquean el aeropuerto de Acapulco. “El cierre del aeropuerto no se compara con la desaparición de 43 estudiantes y tres asesinados, eso sí es violencia”. Felipe, padre de familia. Fotografía de Mario Marlo.



A 45 días de impunidad padres y normalistas bloquean el aeropuerto de Acapulco. “El cierre del aeropuerto no se compara con la desaparición de 43 estudiantes y tres asesinados, eso sí es violencia”. Felipe, padre de familia. Fotografía de Mario Marlo.



A 45 días de impunidad padres y normalistas bloquean el aeropuerto de Acapulco. “El cierre del aeropuerto no se compara con la desaparición de 43 estudiantes y tres asesinados, eso sí es violencia”. Felipe, padre de familia. Fotografía de Mario Marlo.



A 45 días de impunidad padres y normalistas bloquean el aeropuerto de Acapulco. “El cierre del aeropuerto no se compara con la desaparición de 43 estudiantes y tres asesinados, eso sí es violencia”. Felipe, padre de familia. Fotografía de Mario Marlo.



Padres de los normalistas en el Monumento a la Revolución a tres meses de la desaparición de los estudiantes normalistas. Fotografía de Mario Marlo.



Padres de los normalistas en el Monumento a la Revolución a tres meses de la desaparición de los estudiantes normalistas. Fotografía de Mario Marlo.

GUERRERO ENTRE LA VIOLENCIA Y LA POBREZA

Ramón Espinosa Contreras

El estado de Guerrero, al sur de la República mexicana, se encuentra inmerso en el cuadrado de la violencia conformada por la pobreza extrema, política, crimen organizado y ecológica.

El cuadrado con sus lados opuestos: pobreza/riqueza, derechos humanos/violación, narcotráfico/poder, destrucción de la naturaleza/capital maderero, formando un paralelogramo en donde participan muchas voluntades individuales y colectivas, cada una de las cuales se originan en una multiplicidad de condiciones especiales de vida en un contexto social y geográfico, en donde participa un conjunto de fuerzas e intereses que se entrecruzan entre sí en el paralelogramo, de los cuales surge la violencia como acontecimiento histórico en Guerrero. En cada ángulo de 90° del cuadrado está presente la violencia:

Violencia estructural: pobreza política y de género.

Violencia bélica: narcotráfico, armamentismo, militarismo y retenes militares.

Violencia ecológica: destrucción de la naturaleza y calentamiento global de la tierra.

LA POBREZA

La pobreza extrema es una forma de violencia que se objetiva en el hambre y en las enfermedades curables, en las muertes

silenciosas. Mueren 25 mil niños diariamente en el mundo de acuerdo con la ONU. En el caso de México, con los 112 600 583 personas que constituye su población, 51.2 por ciento son mujeres y 48.8 por ciento son varones, de acuerdo con datos oficiales dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Entre 2006 y 2008, el número de pobres se incrementó de 44.7 millones a 50.6 millones. En ese mismo sentido, se señala que los más pobres dedican a educación y ocio 5.4 por ciento de sus ingresos, muy por debajo del casi 20 por ciento que destinan a ese rubro los más ricos.

Entre 2008 y 2010, la pobreza subió a 52 millones, aumentó 3.2 millones, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), de los cuales casi 12 millones de personas viven en pobreza extrema. De acuerdo con el Banco Mundial (BM), la pobreza extrema creció y pasó de 13.8 a 18.2 por ciento de la población del país.

Según el estudio, las entidades federativas del sureste y Pacífico mexicano son las que tienen mayor número de población en pobreza de patrimonio, con Chiapas a la cabeza, con 75.7 por ciento; segundo, Guerrero, con 70.2 por ciento; Tabasco, con 59.4 por ciento, y Durango, con 59.4 por ciento. En estos estados se concentra la pobreza extrema y la indigencia educativa.

En el *Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008* del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en lo que concierne a la pobreza humana y de ingresos en países en desarrollo, México ocupa el lugar 52 con índice de pobreza de 6.8 por ciento; posibilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 40 años, 5.8 por ciento; tasa de analfabetismo de adultos (de 15 años hasta los 40 años), tres por ciento; población que no utiliza agua mejorada, tres por ciento; niños con peso menor a la media para su edad, ocho por ciento; población bajo el umbral de la pobreza de ingresos, un dólar al día, tres por ciento; dos dólares al día, 11.6 por ciento; umbral de pobreza en el país, 17.6 por ciento; clasificación según el IPH-1, menos la clasificación según la pobreza de ingresos, -7.

MÁS CIFRAS

De acuerdo con el *Informe de Actividades 2005* del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se señala que el estado de Guerrero ha ocupado los últimos lugares en México en educación, el tercer sitio más bajo del país, al ubicarse en la posición 30 en aprovechamiento educativo, con un índice de 0.7491, el tercer sitio más bajo del país, sólo superado por Oaxaca y Chiapas.

El estado de Guerrero cuenta con 3 079 649 habitantes. De esta cantidad, el 17.2 por ciento son indígenas, 529 780, concentrados en la zona de la Montaña y en menor medida en la Costa Chica, las cuales son las zonas más marginadas del estado y del país. En estas regiones se concentra la pobreza, principalmente la extrema, así como también la indigencia educativa.

El problema de alimentación es dramático: presentó un incremento de ocho por ciento comparado con 2008, cuando registraba 43.5 por ciento, y en 2010 reportó 42.6 por ciento. Las carencia sociales, según Coneval, se refieren a no tener acceso a los servicios de salud, servicios básicos en vivienda y rezago educativo. Presenta una disminución porcentual en salud, con un 31.4 por ciento, y en rezago educativo las cifras bajaron dos décimas, debido a que en 2008 tenía 28.5 por ciento y en 2007 registró 28.3 por ciento.

En lo que se refiere a la pobreza en Guerrero, el Coneval presentó las siguientes cifras: para los años 2008 y 2010 estimó que en 2008 había 68 por ciento de personas pobres contra 76.4 por ciento durante 2010, en referencia a la carencia de cualquier servicio básico y con un ingreso menor a la canasta básica alimentaria, o sea dos dólares al día.

Entre los municipios más pobres se encuentra San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente; Copalillo y Pedro Ascencio de Alquisiras, en la zona norte; Ahuacuotzingo, Zitlala, José Joaquín Herrera y General Heliodoro Castillo, en la región centro; Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, en la Costa Chica; Acatepec, Atlixac, Alcozauca, Atlamajalcingo de Monte, Copanatoyac, Malinaltepec, Metlatónoc, Iliatenco,

Tlacoapa, Xalpatláhuac, Cochoapa el Grande y Zapotitlán Tablas, en la región de la Montaña. En estas dos últimas regiones es donde se concentra la población indígena, la pobreza extrema, la desnutrición y la indigencia educativa.

LA POBLACIÓN INDÍGENA ESTÁ DISTRIBUIDA EN DOS REGIONES
Y EN CUATRO GRUPOS

<i>Región</i>	<i>Grupo étnico</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Por ciento</i>
La Montaña	Nahua	212 000	40
	Tlapaneco	116 000	22
Costa Chica	Mixteco	148 000	28
	Amuzgo	47 000	9

FUENTE: Coneval, 2010.

De acuerdo con los indicadores socioeconómicos de 2000 del Consejo Nacional de Población (Conapo), Chiapas, Oaxaca y Guerrero conforman el triángulo de la pobreza extrema en el país.

La Montaña de Guerrero forma parte de las 36 zonas prioritarias del país, que tienen como denominador común la pobreza, la marginación, la violencia y la militarización. De los 17 municipios de la Montaña, 11 son considerados como de muy alta marginación (Conapo, 2004). Metlatónoc es el municipio más pobre del país, seguido por Coicoyán, Oaxaca, municipio colindante (Conapo, 2004).

DESEMPLEO E INGRESOS

La pobreza extrema de estas regiones está articulada con desempleo y los bajos ingresos. Más de 53 mil trabajadores en el estado de Guerrero no tienen ningún ingreso, están desempleados. De esta cifra, la población indígena es la más afectada, con 46 por ciento, equivalente a 25 250 personas de más

de 15 años. Estos desempleados pertenecen a los del mundo sin trabajo, a una vida incierta.

Los 28 mil trabajadores (24 por ciento de la población indígena de más de 15 años en Guerrero) perciben menos de un salario mínimo mensual. El desempleo y el salario del miedo que perciben no les alcanzan para cubrir ninguna de las necesidades básicas para poder sobrevivir: alimentación, salud, educación y vivienda.

SALUD

El 96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y equipamiento básicos. La Montaña cuenta con un hospital general en Tlapa para atender a 300-500 personas repartidas en 17 municipios (con sólo tres ginecólogos, dos anestesiastas y un pediatra contratados para cubrir un solo turno), seis hospitales básicos comunitarios (sin especialidades ni equipamiento básicos), y unas 166 unidades de salud, de las cuales más de la mitad no cuentan ni siquiera con la presencia de un médico general (funcionan sólo con enfermeras y otro tipo de personal menos calificado).

DESNUTRICIÓN

En Guerrero hay 22 municipios con elevados porcentajes de desnutrición. La mortalidad infantil es particularmente elevada en algunos de ellos: en Chilapa, zona centro, colindando con la Montaña, mueren 89 niños por cada 1 000 nacidos vivos, mientras el promedio es de 28 en México y de seis en los países industrializados. Muchos niños mueren de enfermedades curables en países desarrollados.

En el informe de la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA), en 2006 murieron en 28 días 121 recién nacidos en la Montaña (*La Jornada del Sur*, 2 de abril de 2007). En el mismo hospital murieron 11 mujeres.

La Crónica de Hoy (20 de octubre de 2014) señala a Guerrero entre los primeros lugares con niños que nacen con malformaciones y 80 por ciento de los infantes presentan problemas de anemia; esto se debe a que son hijos de madres desnutridas.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la mortalidad materna es de las más elevadas en el mundo: 281 mujeres indígenas mueren por cada 100 mil recién nacidos, mientras el promedio es de 151 en las mujeres indígenas en México y de 51 de mujeres mestizas mexicanas.

La falta de atención a las mujeres en edad fértil es un problema constante. Por ejemplo, en México, un ginecólogo tiene que atender a 2 414 mujeres en edad fértil. En Guerrero, un ginecólogo tiene que atender a 4 432 mujeres y en la Montaña de Guerrero, a 17 654 mujeres (hay cinco ginecólogos por 88 277 mujeres en edad fértil).

A esta situación, de por sí dramática, le agregamos el *racismo e intolerancia* que padecen los indígenas de la Montaña. “Acusan en Atlamajalcingo de racismo e intolerancia al personal del sector salud”, destaca el periódico *Sur* (11 de septiembre de 2012):

Habitantes de la comunidad de San Isidro Labrador en Atlamajalcingo del Monte, informaron que trabajadores de la Secretaría de Salud Guerrero llegaron a su comunidad para revisar el caso de una muerte materna.

Tras exigirles una explicación de la finalidad de su visita, uno de ellos, José Luis González Ramos, agredió a los indígenas remarcando que lo que sucedía era su culpa por ignorantes e ineptos, el ser “indios flojos que esperan todo de papá gobierno”.

Los indígenas, quienes comunicaron a través de un escrito su inconformidad al reportero, precisan que estas personas los comenzaron a agredir verbalmente, insultarlos, reprochándoles que “todo lo que les sucede es por su culpa, por su ignorancia e ineptitud, ya que por ser indios flojos todo lo esperan de papá gobierno; sólo saben estirar la mano”.

LA ESTERILIZACIÓN FORZADA:
¿REGULACIÓN DE LA NATALIDAD O POLÍTICA ETNOCIDA?

Los problemas se entrelazan con la esterilización forzada, como sucedió en 1998, cuando 14 hombres tlapanecos, 18 mixtecos y diez mujeres fueron esterilizados bajo presión, chantaje y engaño por la Secretaría Estatal de Salud, según el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A. C. Se tiene información de que todavía se sigue practicando, pero no existen datos sobre el caso. Si fue así, estamos hablando de genocidio, de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Genocidio (1948).

El 17 por ciento de las violaciones a los derechos humanos a indígenas documentadas y denunciadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afecta el derecho a la salud, entre ellas: 1) negación de servicio de salud, 2) negligencia médica, 3) esterilización forzada y 4) violación a mujeres.

Guerrero, *primer lugar en desnutrición infantil*. Carlos Carraman Arce, gerente estatal del programa de Sedesol, informó que en el nivel nacional Guerrero se encuentra en *primer lugar en desnutrición*. Aseguró que hay presencia del gobierno federal en los municipios más marginados, como los de la Montaña y la Costa Chica, ya que se invierten un promedio de 450 mil pesos mensuales en subsidio de leche. Dijo que se está combatiendo la desnutrición y la anemia y que se cuenta con un padrón de 118 mil personas que son beneficiadas a través del programa de Liconsa. Arce señaló que la leche que se distribuye es fortificada en polvo, con un precio accesible al público de cuatro pesos.

Los datos disponibles señalan que Guerrero se mantenía en el primer lugar en desnutrición infantil hasta 2011.

VIOLENCIA EN GUERRERO

La violencia política ha sido una constante en la historia de Guerrero. Gobiernos que van y vienen han sido incapaces de frenar

este flagelo presente en las entrañas del estado. Por mencionar algunos casos, tenemos el ejemplo de la *guerra sucia* en los años setenta durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, cuando desaparecieron más de 500 personas; informes posteriores señalan que muchos de ellos fueron arrojados al mar y/o murieron en las torturas.

GENOCIDIO DE AGUAS BLANCAS: JUNIO 28 DE 1995

La matanza de Aguas Blancas del 28 de junio de 1995 fue un crimen de Estado cometido por la policía siendo gobernador Rubén Figueroa Alcocer, en el poblado de Aguas Blancas, municipio de Atoyac de Álvarez, región de la Costa Chica.

En este lugar, el 28 de junio de 1995, agentes de un agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que se dirigían a un mitin en la población de Atoyac de Álvarez, para exigir a las autoridades estatales apoyo a la producción, láminas, carreteras, escuelas, centros de salud, servicios, protección de bosques y áreas naturales y justicia para los desaparecidos de la *guerra sucia* durante el gobierno de Figueroa. La respuesta a sus demandas fue la *masacre de 17 campesinos*.

El gobierno estatal, encabezado por Rubén Figueroa Alcocer (hijo del anterior Figueroa), negó los hechos; más tarde se dieron a conocer las imágenes videograbadas por los mismos manifestantes en el momento que fueron atacados. El crimen provocó protestas y el surgimiento armado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

GENOCIDIO DE EL CHARCO: JUNIO 7 DE 1998

Después de la caída de Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas lo sustituyó Ángel Heladio Aguirre Rivero como gobernador interino de 1996 a 1999. En la madrugada del 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco,

municipio de Ayutla de los Libres, en la escuela primaria “Caritino Maldonado”, cuando estaban dormidos varios indígenas que participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades, fueron agredidos por los militares.

Según los sobrevivientes, el ejército irrumpió bruscamente disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provocó la muerte de 11 indígenas y cinco heridos, que quedaron detenidos junto con otras 22 personas y fueron trasladados a la IX Región Militar, donde los torturaron durante dos días. Ésta fue la respuesta que les dio Aguirre Rivero.

Los dos casos de genocidio concuerdan con la definición de la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), basada en los trabajos y en la concepción de Raphael Lemkin, que en el artículo II dice.

Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

- a) Matanza de miembros del grupo.
- b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
- c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear a su destrucción física, total o parcial.
- d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
- e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

A la masacre de El Charco se le denomina también como *etnocidio*, ya que se refiere a la destrucción de la cultura en su totalidad o de algún núcleo considerado estratégico para la supervivencia de la misma. La crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco es una prueba de ello.

En el lugar de los hechos se impidió la entrada de periodistas y de ONG defensoras de los derechos humanos hasta después

de dos días, tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias.

Erika Zamora Pardo, una de los sobrevivientes de la barbarie, en la declaración ministerial dice:

Mi declaración ante el MPF fue obtenida bajo presión de los agentes de Gobernación, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. *Esta declaración fue firmada bajo tortura*, ya que me vendaron los ojos, desnudaron y me dieron toques en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaración fue filmada y grabada en la Zona Militar [...] el Ejército fue el primero en disparar [...] que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdón los mataron, a algunos heridos les dieron el tiro de gracia.

En dicha declaración también se obligó a vincular a Rocío Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

ESCUELA NORMAL RURAL “RAÚL I. BURGOS”,
AYOTZINAPA, DICIEMBRE 12 DE 2011

Ángel Aguirre Rivero, que había sido gobernador interino priísta (1996-1999), nuevamente fue elegido gobernador del estado, en esta ocasión como candidato del PRD, para el periodo del 1° de abril de 2011 al 1° de diciembre de 2015, lleva sobre sus espaldas y su conciencia cuatro matanzas. La primera, la masacre de los 17 campesinos cometida durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, cuando era miembro del gabinete de éste. La segunda, el etnocidio que durante su gestión se cometió en contra de 11 indígenas en El Charco. En ambos casos los “demonios andaban sueltos” y así se han mantenido hasta la fecha. La tercera, la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, sobre la Autopista del Sol, cuando los normalistas se instalaron para demandar ante el gobierno la apertura del diálogo para resolver el pliego

petitorio que presentaron desde el mes de septiembre: 1) abrir más plazas para ejercer su profesión, 2) promedio de siete para adquirir la plaza de profesor, 3) aumento de la beca alimenticia de 35 pesos a 50 pesos diarios. Y la cuarta: la horrenda masacre de Iguala el 26 de septiembre de 2014.

En todos estos acontecimientos, registrados en los anales de la historia de la violencia en Guerrero, no faltaron voces en contra de los estudiantes. Por ejemplo, la “Marcha por la paz y la justicia” convocada por la iniciativa privada y algunas organizaciones civiles vinculadas directamente con empresarios y hombres adinerados. Esta marcha que se convirtió en una muestra de apoyo a Ángel Aguirre y en contra de los estudiantes, donde algunos contingentes portaban mantas y pancartas en las que se leía “Cierre de Ayotzinapa. Estamos hartos”, “Cierre del burdel de Ayotzinapa”, “Fuera los bárbaros y terroristas”, “Afuera Ayotzinapos. Estamos con usted, gobernador”. O aún más frontal “Señor gobernador, cierre el centro de concentración de terroristas”. Más que una “marcha por la paz y la justicia”, fue una marcha de odio en contra de la Normal de Ayotzinapa, polarizada con la mayoría de la población guerrerense.

Al mismo tiempo se distribuían panfletos que aparecieron por internet y publicados en forma masiva en Chilpancingo y Acapulco, en las que se decía, entre tantas calumnias:

Son maestros de las armas, de las bombas molotov, de la táctica guerrillera, del robo, del secuestro y del chantaje. Su ideología anarquista, marxista y socialista, propicia que actúen como verdaderos terroristas en la propia cuna que los vio nacer [...] Son como una especie de sectas diabólicas que adoctrinan a perfección al alumnado. De seguir así, pronto tendremos una filial aquí de la red terrorista Al Qaeda o por lo menos algo similar tratando de estallar coches bomba y muriendo por supuestos ideales marxistas leninistas. [Y por supuesto la conclusión de todo ello era] la condena unánime es que se cierre la normal de Ayotzinapa, porque el pueblo no desea ya seguir sosteniendo con sus impuestos el nido de delincuentes, porros y lacras sociales que cohabitan en esa institución pública (*sic*).

Este tipo de panfletos y propaganda en medios informativos locales nos recuerda la propaganda que utilizó Adolfo Hitler en contra de los judíos, gitanos y comunistas, para construir una conciencia chovinista alemana en defensa de la “raza pura”, para ir preparando las condiciones para los campos de concentración y los hornos crematorios, en donde murieron más de seis millones de seres humanos, la llamada “solución final”. Esto es una prueba de que los estudiantes de Ayotzinapa, valga la comparación, han sido tratados como lo fueron los estudiantes del movimiento de 1968. Se les difamó y se les sometió a un juicio como condenados de la tierra.

Chilpancingo, Guerrero, 4 de noviembre de 2014

Madre busca a su hijo desaparecido



MINERÍA Y VIOLENCIA

Flaviano Bianchini

Cuando nos acercamos por primera vez a la geografía y a la demografía de México no podemos dejar de observar la inmensidad de la ciudad de México. Veinte y más millones de personas se concentran en una zona urbana relativamente pequeña. ¿Por qué en un país tan grande, con un clima relativamente benévolo y una gran tradición agrícola tanta gente se concentra en una ciudad que ya no tiene nada más que ofrecer?

La respuesta, por supuesto, no es única y no es sencilla. Por un lado, es evidente que México no ha tenido una política para favorecer los asentamientos en las zonas rurales. En 1950, poco menos de 43 por ciento de la población en México vivía en localidades urbanas; en 1990 el porcentaje ya alcanzaba 71 por ciento y para 2010 se hallaba cerca de 78 por ciento.¹ Entre los factores que han favorecido la despoblación del campo está la violencia y en México los mayores índices de violencia se ubican en el campo, no en las ciudades. Resulta, sin embargo, que en los otros países que padecen este problema, la violencia es mayor en las ciudades. Tegucigalpa y San Pedro Sula, por ejemplo, encabezan las estadísticas de la violencia a nivel mundial, pero en las comunidades de provincias la situación es relativamente tranquila. Johannesburgo y Ciudad del Cabo son ciudades donde no se puede salir en la noche, pero en las zonas rurales de Sudáfrica no hay tantos problemas. En México las cosas están al

¹ INEGI, disponible en <http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P>.

revés. En la actualidad, la ciudad de México es probablemente uno de los lugares más seguros del país, mientras que en las comunidades rurales de Michoacán y de Guerrero los homicidios y la violencia son la normalidad, y en algunos pueblos el miedo es tan grande que nadie se atreve a entrar y salir.

Otra diferencia entre México y otros países es que en México la violencia no es vinculada con el microcrimen si no con el macrocrimen, es decir, con bandas organizadas a nivel regional o nacional. No es tan común escuchar que un ladrón mató a alguien para robarle unos cuantos pesos. Y es que gran parte de los homicidios son el fruto de las guerras entre bandas armadas por el control de los territorios.

A nivel mundial es posible observar que el crimen organizado prospera a partir de tres factores (más uno):

1. La ausencia o la connivencia del Estado.
2. El miedo que imponen a la población.
3. La posibilidad de generar negocios.

¿Cuáles son entonces las causas por las cuales en México estos tres factores se concentran en las zonas rurales? Es verdad que el Estado tiene más capacidad de controlar las zonas urbanas que las zonas rurales, y también lo es que para estos grupos es más fácil aterrorizar a la población rural que a la población urbana. Esto se debe a que en las zonas rurales los criminales tienen más posibilidad de pegar y esconderse y también más oportunidad para llevar a cabo acciones de terror como asesinatos y amenazas, sin ser perseguidos por los órganos del Estado.

Lo que nos interesa más es el tercer punto: la posibilidad de generar negocios. ¿Por qué en las zonas rurales los criminales pueden organizar mejores negocios?

Aclaremos, en primer lugar, que aunque conforman 90 por ciento del territorio del país, las zonas rurales de México sólo contribuyen con dos por ciento del PIB de la nación.² Enton-

² OECD, Trade and agriculture directorate. The role of agriculture and farm household diversification in the rural economy of Mexico, dispo-

ces, ¿cuáles son los intereses económicos que empujan las bandas del crimen organizado hacia estas zonas?

En México, todo el mundo sabe que las bandas del crimen organizado, aunque todavía se llamen *narcos*, ya no se ocupan únicamente de la producción y del comercio de drogas. Si bien en algunos casos ésta se mantiene como una actividad importante, los *narcos* han sido lo suficientemente hábiles como para transformar su negocio original en algo más complejo y completo. Los narcos ahora manejan un sistema económico empresarial con múltiples ingresos y las dinámicas de las grandes corporaciones. Diversifican sus inversiones, manejan los recursos y utilizan el territorio como un estado-empresa, a veces de una manera muy eficiente. También distribuyen parte de lo acumulado, garantizándose así el cuarto pilar de su poder, es decir, el soporte de la población.

Hay que tomar en cuenta que las bandas criminales suelen recibir algún tipo de sustento por parte de la población. Fue así con la mafia en Sicilia y con los cárteles de la droga de Colombia en los ochenta; es así con los grupos terroristas como el ISIS en Iraq y en Siria ahora mismo. También es así con el crimen organizado en México. Esto, por supuesto, no significa que toda la población los sostiene pero una parte de la población sí lo hace. Las manifestaciones en Sinaloa después de la detención del *Chapo* Guzmán son una clara demostración en este sentido.

Ahora bien, los que nos interesa es entender cuáles negocios favorecen la presencia de narcos en las zonas rurales de México. Una de las actividades principales del crimen organizado en todo el mundo es la extorsión a los negocios que se encuentran en su territorio. Las bandas cobran un porcentaje sobre todo tipo de transacción, garantizando seguridad a cambio. Éste es un negocio redondo, ya que dicho “impuesto” sirve para proteger a los actores económicos contra la violencia de los mismos. Así que lo único que hacen es co-

nible en <<http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/43245572.pdf>>.

brar una cuota a cambio de no hacer nada contra el comercio en cuestión. Esto es así en todas partes y desde hace siglos.

En Sicilia, por ejemplo, ésta ha sido históricamente la fuente principal de ganancias para la mafia. En los años ochenta y noventa, 80 por ciento de las empresas en Palermo (la capital de Sicilia) pagaba el llamado *pizzo*,³ garantizando así ingresos por el equivalente de unos 180 millones de dólares a los criminales.⁴ Ésta es, sin embargo, una realidad muy distinta a la de México. En Palermo, una ciudad de más de un millón de habitantes con un tejido industrial muy desarrollado, la mafia puede extorsionar a grandes empresas, bancos, industrias y negocios. En las zonas rurales de México, en cambio, el crimen organizado puede extorsionar a productores de maíz, frijol, frutas y verduras, tiendas y restaurantes. Lo hacen, sin duda, pero ¿alguien cree que de ahí nace su imperio económico? Debe haber algo más que genera ingresos o, por lo meno, interés en las zonas rurales. Entonces, ¿qué es este algo más? El negocio “típicamente” rural que genera muchos —muchísimos— ingresos es la minería. ¿Podemos señalar la existencia de una relación directa entre minería y grupos del crimen organizados? Esto es casi imposible demostrarlo de manera contundente y sería muy difícil comprobarlo sin contactos directos con los actores involucrados. Lo que sí se puede analizar es la relación existente entre minería, pobreza y violencia, lo cual revela unas coincidencias sorprendentes.

En sus orígenes, la minería se concentraba en los estados de Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Chiapas.⁵ Si se excluye San Luis Potosí, que no es un estado especialmente pobre (también gracias a las industrias automovilística y del calzado), Guerrero, Oaxaca y Chiapas ocupan, en este orden,

³ Término siciliano que indica una forma de extorsión a los comerciantes locales por parte de la mafia, por lo general, bajo coacción; también se le denomina “protección”.

⁴ Datos de la Comisión Parlamentaria Antimafia, Cámara de Diputados, Italia.

⁵ Instituto Nacional de Ecología (n.d.), Industria minera, disponible en <http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/16/parte3_12.html>.

los últimos tres lugares en la clasificación de estados con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de todo el país.⁶

En el último medio siglo la minería se ha desarrollado más o menos en todo el país. Además, en los noventa se abrió el negocio a empresas extranjeras y, con el ingreso del TLC en 1994, empresas norteamericanas (principalmente Canadá, pero también Estados Unidos) empezaron a jugar un papel muy importante; hoy las empresas extranjeras controlan 40 por ciento de la producción. En la actualidad, los estados con más presencia minera son Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Durango y Guerrero. Estos siete estados están en el listado de los diez que el Departamento de Estado de Estados Unidos considera más peligrosos y que recomienda no visitar a sus ciudadanos.⁷ Por otro lado, el único estado que ha tenido alta producción minera tanto a principios del siglo XX como ahora mismo es Guerrero. Guerrero es el estado que encabeza todas las clasificaciones de violencias en el país y el más alto índice de asesinados con respecto al número de habitantes (y el segundo en términos absolutos) y con el número más alto de desaparecidos,⁸ incluyendo los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala, a menos de 100 km de la mina de oro y plata más grande de México.

Es difícil no relacionar la violencia que afecta la zona de Mezcala y Carrizalillo con la presencia de la mina de oro y plata Los Filos de la empresa canadiense GoldCorp, una mina muy productiva y con yacimientos muy grandes. En 2014, en la sola comunidad de Carrizalillo, que cuenta con menos de dos mil habitantes, se reportaron ocho asesinados, una

⁶ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010) “El Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas”, United Nations.

⁷ US Department of State, US Passport and International Travel, disponible en <<http://www.travel.state.gov/content/passports/english/alertswarnings/México-travel-warning.html>>.

⁸ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2013*, disponible en <<http://www.inegi.org.mx/>>.

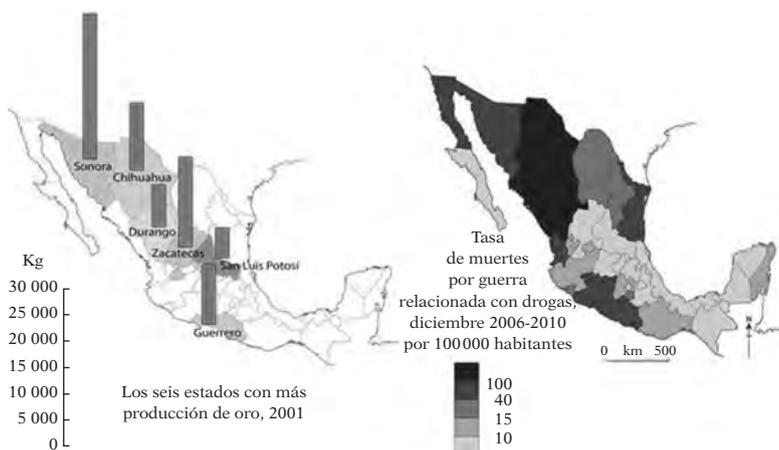
quincena de arrestados y cinco balaceras. Números aún mayores se han registrado en Mezcala, con 20 muertos en 2013, de los cuales 11 calcinados en un solo día. De hecho, el área entre Mezcala y Carrizalillo es teatro de cruentas batallas entre algunos de los grupos criminales más peligrosos de México. Allí se enfrentan el cártel de los Beltrán Leyva, los Guerreros Unidos y el Nuevo Cártel de la Sierra, un grupo que estaba al servicio de los Beltrán Leyva, pero que ahora opera por sí mismo y quiere conquistar la zona de Carrizalillo-Mezcala.⁹

¿Por qué tanta violencia y tantos muertos? La explicación de que es una región importante por el tránsito de drogas no convence en un país tan grande como México. Es verdad que por Mezcala pasa una carretera bastante importante, la 95, que conecta Iguala con Chilpancingo, pero la que lleva a Carrizalillo no sigue a ninguna parte. La propia 95 no tiene particular relevancia por el trasiego de drogas. Tampoco hay tráfico de migrantes y la producción de carrizo y mezcal —ambos rubros anteriormente muy importantes— se acabó, ya que todos los terrenos de cultivos se encuentran ocupados por la mina. Y además, ¿quién puede creer que docenas de personas mueren asesinadas a causa del carrizo? La única explicación posible es el control de la mina de oro y plata.

Esto no implica que los cárteles extorsionen directamente a la empresa minera —aunque tampoco lo podemos excluir—, pero ciertamente tienen interés de controlar un territorio en donde hay mucho más dinero que lo normal: la renta de la tierra, el pago de los honorarios o las transacciones que llevan a cabo las muchas empresas subcontratistas. Es de señalar, por otro lado, que la mina tiene muy poca seguridad armada, prácticamente sólo en la entrada principal, y que no es nada difícil acceder a las instalaciones de la empresa. Así las cosas, ¿por qué, a pesar de los altos índices de violencia, no se reportan robos de oro o plata por parte del crimen organizado en la mina? Resulta especialmente extraño, pues sí los hay en las minas de Sonora, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas, pero no en Guerrero, y menos en el complejo minero de Los Filos.

⁹ DEA, *International Narcotics Control Strategy Report*, 2014.

RELACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN DE ORO, LOS CÁRTELES DE LA DROGA Y LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN MÉXICO



FUENTE: Source International.

Guerrero no es el único estado que muestra dicha coincidencia entre narcoviolenca y minería. Sabemos, por ejemplo, que en noviembre de 2013 la Marina tomó el control del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y despidió a unos 150 policías locales, acusados de tener vínculos con los cárteles locales. Según informes de la PGR, los Caballeros Templarios (herederos de la Familia Michoacana) controlaban entonces 50 por ciento del hierro extraído en el estado de Michoacán, el estado con mayor producción de dicho mineral en el país.

Los Caballeros Templarios controlaban toda la cadena productiva, a partir de la extracción: exigían a los mineros entregarles cierta cantidad del hierro, lo mismo que a los transportistas y a los empresarios. A los funcionarios de aduanas les sobornaban para permitir el paso de mercancía ilegal.¹⁰ El grupo criminal controlaba incluso el comercio con China, que produce 50 por ciento del acero mundial, lo cual representa un

¹⁰ *El País*, disponible en <http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/11/actualidad/1389466753_576842.html>.

mercado prácticamente inagotable para lavar su dinero, diversificar sus negocios y aumentar sus ganancias. Algunos sugieren que la mafia China paga parte del hierro con químicos que son utilizados en Michoacán para la producción de metanfetaminas.¹¹

Y el hierro no es el único metal que se contrabandea en Michoacán. En octubre de 2010 la PGR dio a conocer que el cártel de La Familia Michoacana se había apoderado de una región minera en la que explotaban ilegalmente diferentes metales, entre ellos el oro, para exportarlos a China, negocio que les dejaba ganancias por 42 millones de dólares.¹² El diario *24-horas* cita una fuente anónima según la cual las empresas mineras pagan “derechos de piso” a las bandas del crimen organizado en cinco estados de la República, entre los cuales figuran Michoacán y Guerrero.¹³ La misma fuente señala que estas empresas prefieren pagar el “derecho de piso” que pagar seguridad, ya que los costos son más bajos y las empresas los consideran como una forma de subcontratación de la seguridad externa de la mina.

En Oaxaca, en el municipio de San Miguel del Progreso, la relación entre grupos criminales, empresas mineras y violencia es aún más obvia. El 15 de marzo de 2012, en la cabecera municipal, se presentó un ataque al más puro estilo narco. Una camioneta sin placas y con vidrios polarizados arrolló al coche donde viajaban Bernardo Vásquez Sánchez, su hermano Álvaro Andrés Vásquez Sánchez y su prima Rosalinda. Una ráfaga de disparos con armas automáticas mató a Bernardo e hirió a los otros dos pasajeros. El mismo día, pero en otra localidad, fue herida gravemente Abigail Vásquez Sánchez, otra vez con armas automáticas al estilo narco. Podría parecer una “normal” balacera entre cárteles del crimen organizado, pero resulta que Bernardo, Álvaro, Rosalinda y

¹¹ *El Economista*, disponible en <<http://eleconomista.com.mx/segu-ridad-publica/2014/01/03/narco-exporta-michoacan-hierro-china>>.

¹² *Excelsior*, disponible en <<http://www.excelsior.com.mx/2012/05/01/nacional/830755>>.

¹³ *24-horas*, disponible en <<http://www.24-horas.mx/controla-narco-trafico-minas-en-cinco-estados/>>.

Abigail eran dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), una organización que se opone a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Algunos meses antes otras personas de la misma organización habían sido amenazadas y asesinadas en situaciones similares. En este caso, la relación de la minería con el crimen organizado y los hechos de violencia es evidente.

La migración también tiene mucho que ver con la violencia. Los estados con más violencia son los que tienen más emigración, tanto interna como externa. Guerrero, Oaxaca y Chiapas son, históricamente, los estados que expulsan más población. Hay guerrerenses, oaxaqueños y chiapanecos trabajando en los campos de Sinaloa y las mujeres son empleadas domésticas en las casas del Distrito Federal. Lo que casi todo el mundo ignora es que Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados con más reservas de minerales inexplotadas. Mientras que estados como San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora y Chihuahua son estados históricamente mineros desde la Colonia hasta la actualidad, los estados del sur (con la excepción de la mina de Taxco en Guerrero, que fue abandonada hace un siglo) no han sido muy explotados en el último siglo.

¿Por qué? Una explicación es que dichos estados siempre han sido los de acceso más remoto y con las infraestructuras más deficientes, de manera que las empresas mineras se han concentrado en otras regiones mejor equipadas, con mejores comunicaciones y, no menos importante, más cerca de los consumidores finales, o sea Estados Unidos. Poner en función una mina en Sonora, con una buena red de transporte y con el comprador a pocos kilómetros es más fácil que explotar una mina en las montañas de Guerrero, sin carreteras ni ferrocarriles y a tres mil kilómetros de distancia de la frontera norte. El clima también no es de los más propicios, pues los estados del sur se encuentran más expuestos a los huracanes y tempestades tropicales que ponen en riesgo las inversiones mineras con respecto a los estados del norte, tendencialmente más secos.

Hay otro factor muy importante: la población. Alguna vez, en un convenio en Estados Unidos, escuché a un ingeniero minero decir que Chile es el paraíso de las empresas mineras porque ahí los minerales se encuentran en el desierto. O sea que el paraíso de las empresas es la tierra baldía. El mismo funcionario afirmó que es mucho más barato mover a las personas (léase los obreros) hacia la mina que quitar a las personas (léase los habitantes) de la mina.

Guerrero, Chiapas y Oaxaca, pero también Puebla y Michoacán, a pesar de no tener una alta densidad poblacional, tienen muchísima población rural, distribuida de manera uniforme. Además, Oaxaca, Chiapas y Guerrero ocupan respectivamente el primero, el segundo y el sexto lugar en el porcentaje de población rural, cada uno con más de 50 por ciento aproximadamente.¹⁴ Por último —aunque no menos significativo—, Chiapas, Guerrero y Oaxaca —en este orden— encabezan también la lista de poblaciones indígenas, o sea poblaciones que, por su propia cultura y situación, tienden “a ser contrarias a la explotación de los recursos naturales.”¹⁵ Además, la estructura indígena, con su tejido social fuerte y su determinación a proteger *la madre tierra* siempre bloqueó las extracciones masivas en dichas regiones. Existen miles de grupos de resistencia contra megaproyectos extractivos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y muchos son bien estructurados y con un apoyo social muy fuerte. La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán es un ejemplo.

De manera que hasta hace muy poco, las empresas mineras optaron por evitar dichos estados concentrándose en los lugares más afines al “paraíso de los mineros” de que hablaba el ingeniero chileno. Así nacieron las industrias mineras en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Sonora y en Chihuahua. En los últimos años, sin embargo, todo esto cambió. Los pre-

¹⁴ Semarnat, disponible en <http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/estadisticas_2000/compendio_2000/01dim_social/01_01_Demografia/data_demografia/CuadroI.1.2.htm>.

¹⁵ INEGI, disponible en <http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indigena/Pob_ind_Mex.pdf>.

cios de los minerales subieron enormemente: el oro quintuplicó su valor en diez años, el cobre lo ha cuadruplicado en tan sólo ocho y la plata lo triplicó en los últimos cinco.

Sucedió, al mismo tiempo, algo más: subió enormemente la demanda. La de cobre, por ejemplo, se duplicó en diez años, la de hierro se triplicó en 15. Ésta es una situación casi única en la historia económica mundial, pues el alza de la producción siempre va junto a una disminución de los precios, como lo muestra el precio del petróleo en los últimos meses, cuando el aumento de la producción, aunado a la aparición de nuevos yacimientos de hidrocarburos llevó a una baja brutal de su precio. La subida simultánea de los precios y de la demanda es algo que normalmente sucede sólo en situaciones de guerra. Sin embargo, ahora mismo es precisamente lo que está pasando con los minerales. Hay que añadir que no es una situación pasajera, sino que es así desde el principio del nuevo siglo. A todo esto hay que añadir la presencia de nuevas tecnologías que abaratan enormemente la extracción de minerales a pesar de causar graves daños ambientales.

Así las cosas, las empresas mineras empezaron a dirigir sus miradas hacia las regiones que antes no eran atractivas, como es el caso de las zonas rurales e indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero también de Michoacán y Puebla. De todas formas, el problema se queda. Históricamente estas zonas siguen estando lejos del “paraíso minero”, pero el problema es cada vez menor, ya que las zonas rurales se están despoblando progresivamente y sus tejidos sociales se encuentran debilitados a causas de las bandas del crimen organizado y de los altos índices de violencia. La pregunta es obvia: ¿existe una relación demostrable entre la violencia social y las industrias mineras?

Aclaro que soy ajeno a las visiones conspiradoras y que tengo tendencia a estudiar la realidad sin prejuicios. Sin embargo, no soy ingenuo y no creo mucho en las coincidencias. Y en este caso, hay demasiadas coincidencias... Las regiones más violentas y con más presencia del crimen organizado son las regiones donde el tejido social se encuentra empobrecido y donde, en consecuencia, las regiones rurales se despueblan.

Dichas regiones son precisamente aquellas en las que siempre hubo mucha resistencia contra las mineras y son, al mismo tiempo, las que ostentan más reservas de minerales y donde se encuentran el número más alto de concesiones a nivel nacional. Las coincidencias son demasiadas. Por otro lado, en su trabajo sobre industrias extractivas y conflictos sociales, Kenneth Omeje relaciona el conflicto armado de México (porque de esto estamos hablando: de un conflicto armado) con la economía extractivista.¹⁶

Todo lo anterior lleva a pensar que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es una “coincidencia” más. Los normalistas estudiaban para ingresar como profesores en las escuelas rurales del estado de Guerrero y no es un secreto para nadie que los normalistas no ven con buenos ojos la explotación minera. Los profesores rurales siempre han estado en primera línea contra los megaproyectos extractivos y muchos de los grupos de resistencias están encabezados por profesores de escuelas rurales. El estado de Guerrero es el que despierta más interés por parte de las empresas mineras, puesto que ya tienen la mina de oro y plata más grande del país situada justo entre Iguala y Ayotzinapa —la ya mencionada Los Filos— y se proyecta construir otras dos, entre las más grandes del mundo, en los próximos años en Cocula y Teloloapan.¹⁷ Por otro lado, Abarca, el ex alcalde de Iguala, su esposa y también el ex gobernador, todos eran promotores entusiastas de la industria minera.

¿Otra coincidencia?

¹⁶ Kenneth Omeje, *Extractive Economies and Conflicts in the Global South: Multi-Regional Perspectives on Rentier Politics*, Aldershot, UK, Ashgate, 2008.

¹⁷ *El Financiero*, disponible en <<http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/penoles-y-torex-gold-pretenden-explotar-dos-minas-en-guerrero.html>>.

TERCERA PARTE

EL MOVIMIENTO

EL COLAPSO DE CIERTA “IZQUIERDA”

Manuel Aguilar Mora

Los acontecimientos de la masacre y las 43 desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa en la noche del 26-27 de septiembre del 2014 en Iguala son el más reciente y profundo hito de la historia política de México, que ya tiene y tendrá próximamente repercusiones fundamentales. Algunas de ellas impactan ya e impactarán con fuerza más adelante en el espacio gelatinoso de eso que se llama “la izquierda mexicana”, o incluso aún mejor “las izquierdas mexicanas”. Lo son por el funesto protagonismo que ha tenido en estos trágicos y nefastos acontecimientos el Partido de la Revolución Democrática (PRD): durante los últimos 25 años, la porosa formación política considerada por el mundo oficial y una buena parte de las fuerzas de oposición como el representante de “la izquierda mexicana”. El PRD constituyó, junto con el gobierno de Peña Nieto y su partido el PRI, el trío de las instituciones principales del Estado mexicano que la *vox populi* llamó con certeza el responsable de las atrocidades cometidas esa noche en Iguala. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, dos personajes centrales directamente involucrados en el nivel estatal en la masacre, eran dos de los más relevantes miembros del PRD en ese estado. A su vez, la posición de la dirección nacional del PRD, que precisamente en esos días elegía a su nueva dirección encabezada por Carlos Navarrete, quien defendió hasta el último momento de modo ignominioso al gobernador Aguirre, cómplice principal de tales atrocidades, fue el remate de una conducta aberrante e impresentable de

este partido que ofendió y catapultó a los abismos su ya de por sí vapuleadísimo prestigio ante la opinión pública. Si-guieron de inmediato las defecciones de personajes de las cumbres partidarias (el propio fundador y durante muchos años “su líder moral”, Cuauhtémoc Cárdenas, presentó su renuncia poco después, sin hacer no obstante ninguna declaración mínimamente autocrítica) y en sus bases comenzó a darse la retirada hormiga de miles de militantes y simpatizantes perredistas que han comenzado un proceso de vaciamiento, dejando al PRD prácticamente como un cascarón burocrático sostenido con los recursos millonarios que le proporciona el INE.

ESTREMECIMIENTO DE IZQUIERDA

Las consecuencias no se han hecho esperar y es perentorio realizar un primer balance, pues éstas son de gran calado. Ciertamente, muchos ya han comenzado a hacerlo y en los medios han abundado los comentarios de todo tipo al respecto. Para nuestro objetivo viene muy a mano partir de la reciente aparición de la revista *Memoria*, que en su nueva época publica un *dossier* titulado precisamente “¿Adónde van las izquierdas mexicanas?”, con los textos de varios personajes destacados de la vida política de dichas “izquierdas mexicanas”.¹ El tópico candente de esta “crisis de las izquierdas” a raíz de los acontecimientos de Iguala se percibe en estas páginas como un verdadero estremecimiento. No es para menos.

Las contribuciones y las entrevistas a los autores y autoras incluidas dan un panorama bastante certero de la situación prevaleciente ante todo en *cierta izquierda*, a saber, la de sectores intelectuales que pertenecieron o fueron cercanos al PRD, algunos de los cuales ahora se inclinan hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dirigido por el dos veces candidato presidencial del PRD (en 2006 y en 2012)

¹ *Dossier* “¿Adónde van las izquierdas mexicanas?”, *Memoria*, núm. 253, año 2015-1.

y hoy fundador y dirigente del novísimo partido, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En efecto, se trata de personajes que constatan en forma unánime que con lo sucedido en el último año y medio, a partir del Pacto por México y culminando con los atroces acontecimientos de Iguala, ha concluido un ciclo de la izquierda mexicana. Tal y como lo dice uno de los entrevistados, Enrique Dussel: "Al PRD hay que decirle que en paz descanse, que ya hizo bastante mal para seguirse llamando de izquierda".²

Los diagnósticos que comentamos coinciden en señalar el fracaso del PRD como un verdadero partido de izquierda. No hay dudas en tales diagnósticos, son tajantes y cortantes, muy entendibles de parte de estos personajes que durante años contribuyeron con sus talentos a fortalecer y promover la causa perredista que hoy ven prácticamente colapsada sin redención posible. Por ejemplo, Enrique Semo, quien incluso fue miembro del gobierno perredista encabezado por López Obrador en el Distrito Federal en 2000-2006, sostiene que el PRD "resultó ser un partido igual a los demás".³ Dussel, aún más drástico, considera que "sufrirá una crisis muy grave si no es que desaparecerá en las próximas elecciones" de junio.⁴

Como se aprecia, la crítica es devastadora. Teniendo en cuenta el hecho antes mencionado de que todos los participantes en el *dossier* fueron miembros o simpatizantes del PRD, en éstas sus actuales conclusiones es imposible no considerar si no hay en ellas subyacentes ciertos rasgos de autocrítica. En tal situación, que no retrocede un ápice ante la nefasta realidad que ha emergido a raíz de los acontecimientos de 2014, es obvio que surja la pregunta: la debacle del PRD ¿se trata de un hecho que cayó abrupta e inesperadamente? De ningún modo, es la respuesta que parece surgir de las con-

² Enrique Dussel, "La izquierda que tenemos y la que necesitamos", entrevista en *Memoria, op. cit.*, p. 26. Junto a la entrevista de Dussel en esta sección de entrevistas del *dossier* mencionado en la nota 1 se incluyen otras con Enrique Semo e Imanol Ordorika, que citaremos más adelante. No hay en el texto el nombre (o nombres) del entrevistador(a).

³ Enrique Semo, entrevista, *ibid.*, p. 24.

⁴ Enrique Dussel, entrevista, *ibid.*, p. 27.

sideraciones de los autores y autoras. Por ejemplo, Imanol Ordorika señala que se trata de una situación que ha llegado a su “descomposición absoluta”.⁵ Una “descomposición absoluta” entendemos que presupone un proceso de descomposición rápido o paulatino, pero en todo caso un proceso que antes de llegar al grado de lo “absoluto” se desplazó en terrenos “relativos”. ¿Cuáles, sería dable preguntar, fueron los grados de descomposición “relativos” anteriores al “absoluto”? Para esta pregunta no se señalan respuestas contundentes. Ciertamente, los participantes en el *dossier* no pueden omitir lo más evidente que destaca en la actividad del PRD, o sea su caudillismo y electoralismo. Son indudablemente causas principales del desastre del PRD como “partido de izquierda”, lo cual es pertinente y correcto señalar. Pero el esfuerzo por ir a las causas más profundas y hacer el balance de tamaño desastre se queda corto ante la envergadura de la empresa. Enrique Semo llega a afirmar que no es lo mejor para aquilatar la situación en que se encuentra la izquierda “culpar a la derecha de lo sucedido”.⁶ En efecto, hay que buscar, ante todo, entre la propia izquierda las causas de la tremenda crisis. Pero ¿cuáles son esas causas profundas? Al respecto Semo no avanza ninguna respuesta de peso.

Para Imanol Ordorika el panorama que presentan hoy las fuerzas progresistas es desolador: “están desorganizadas y desarticuladas, carecen de proyectos y no representan una o varias alternativas”.⁷ Así pues, nuevamente se nos presenta un panorama desolador, en donde reina un sentimiento de decepción que como *leit motif* atraviesa toda la serie de textos que componen el *dossier*.

ORIGEN ES DESTINO

De los participantes en el *dossier*, es Guillermo Almeyra quien concluye con el veredicto más radical al señalar que el resul-

⁵ Imanol Ordorika, entrevista, *ibid.*, p. 29.

⁶ Enrique Semo, entrevista, *op. cit.*

⁷ Imanol Ordorika, entrevista, *op. cit.*

tado de la crisis perredista ha sido que "no existe una izquierda [...]. En México los obreros combaten contra el muro. No tienen otra opción a la barbarie que la resistencia, la autoorganización, la audacia".⁸

Ante tal tragedia política e ideológica de dimensiones verdaderamente nacionales que también constata crudamente Elvira Concheiro, quien sin rodeos la define como "una de las derrotas más severas en el rosario de derrotas de la izquierda" en los últimos 25 años,⁹ es evidente que es necesario para explicarla y sacar las lecciones pertinentes para hoy y para el futuro recurrir a la historia de lo que ha sido la izquierda mexicana. Los autores y autoras sólo rozan la dimensión de esta cuestión que es clave para entender la catástrofe que ha significado el descalabro colosal del PRD.

El desfondamiento del partido que durante 25 años monopolizó el "espacio de la izquierda" en el país, que con la excepción de pequeños grupos revolucionarios independientes y por completo marginales fue aceptado como tal por los sectores políticos activos, por el mundo oficial y por los amplios sectores llamados "progresistas", por igual representa una situación con muchas lecciones para la política de liberación y de emancipación de los trabajadores de México. El PRD fue integrado por la corriente neocardenista rupturista del PRI, que siempre mantuvo el liderazgo hegemónico en la organización, así como por los partidos de la vieja izquierda de origen estalinista y maoísta e incluso de jirones de la extrema izquierda castrista y guevarista y hasta trotskista. El PRD nació de ese matrimonio de conveniencia de antiguos "nacionalistas revolucionarios" que rompieron con el PRI en su giro neoliberal (encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y a quienes se unió posteriormente López Obrador) y, en especial, de una cierta izquierda socialista cada vez más huérfana ante la crisis y

⁸ Guillermo Almeyra, "Una izquierda que no existe en el Estado que no es", *Memoria, op. cit.*, p. 22.

⁹ Elvira Concheiro, "La izquierda frente a sus derrotas", *Memoria, op. cit.*, p. 6.

posterior caída de la Unión Soviética y de todo el antiguo mal llamado “campo socialista”. De esta manera se repetían hechos cuyo origen se encontraba en acontecimientos ocurridos 50 años atrás.

Este origen, nada anecdótico en absoluto, marcó con su sello indeleble al PRD: fue un origen que se remontaba a la fusión durante su auge en el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) de la vieja tradición del “nacionalismo revolucionario”, surgido de las corrientes burguesas triunfantes de la Revolución mexicana, con el estalinismo, que precisamente en esos mismos años promovió un giro derechista en los partidos comunistas para que se orientaran en la “lucha antifascista” a coaligarse con sectores “burgueses democráticos” en los “frentes populares”. Este hecho, la constitución de un frente pluriclasista, con hegemonía burguesa, determinó en gran medida el rumbo político de México a partir de entonces. Se dio así la alianza dentro del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antecedente directo del PRI, entre la corriente cardenista y la estalinista liderada por Vicente Lombardo Toledano, fundador y primer dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Con esta operación el gobierno cardenista logró la corporativización del movimiento obrero organizado vía el partido oficial, la cual diez años después va a culminar en el charrismo priísta, convirtiéndose en uno de los pilares principales de la larga estabilidad del capitalismo en México.

El Partido Comunista (PCM), fiel seguidor de la línea estalinista, asesorado por los dirigentes comunistas de la Internacional Comunista (Browder, Blas Roca, etc.), intentó integrarse orgánicamente en el PRM, el cual, según Hernán Laborde, su secretario general hasta 1940, representaba “la forma peculiar que en México adoptaba la política del Frente Popular”. Pero Lázaro Cárdenas lo impidió, permaneciendo así el PCM como un aliado malquerido del partido oficial tanto en 1940, cuando apoyó la candidatura presidencial de Manuel Ávila Camacho, como en 1946, cuando apoyó la de Miguel Alemán Valdés. La *guerra fría* rompió la alianza *de facto* con el PRI, pero no la vocación conciliadora y frentepopulista de las dos

corrientes estalinistas principales en México. Lombardo Toledano, expulsado de la CTM por sus sucesores, Fidel Velázquez y socios, que así mal le pagaron todo el apoyo que les había dado desde siempre, emprendió la construcción en 1948 del Partido Popular (nombre al cual a partir de 1960 añadió el de Socialista), partido de masas en especial campesinas, que se convirtió desde 1958, con su apoyo a la candidatura de Adolfo López Mateos, en un servil cómplice y hasta esquirol del gobierno priísta (Lombardo Toledano apoyó a los gobiernos de López Mateos y de Díaz Ordaz con motivo de las represiones cometidas contra el movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo por el primero en 1959 y contra el movimiento estudiantil-popular en Tlatelolco ordenada por el segundo el 2 de octubre de 1968).¹⁰ Por lo que toca al PCM, se desangró continuamente con purgas constantes que comenzaron en 1940 con motivo de la gran purga de ese año provocada por la intervención de los gánsters de Stalin, encargados de la liquidación de León Trotsky, reclutando cómplices para su mortífera misión dentro del propio PCM, y que siguieron a lo largo de los años cuarenta y cincuenta, impidiendo que el partido lograra convertirse en un verdadero partido proletario con influencia de masas. Esta circunstancia condujo

¹⁰ Existe una amplísima bibliografía sobre este periodo de la historia del movimiento obrero y de la izquierda comunista en los 30 años que van del gobierno de Cárdenas al gobierno de López Mateos. Señalamos algunos: Arturo Anguiano, *El Estado y la política obrera del cardenismo*, México, Era, 1975. Arturo Anguiano, Guadalupe Pacheco y Rogelio Vizcaíno, *México y la izquierda mexicana*, México, Juan Pablos, 1976. Estos dos libros son indispensables para la comprensión del cardenismo y su relación con el movimiento obrero y las dos vertientes de la izquierda mexicana, la estalinista y la trotskista. Víctor Manuel Durand, *La ruptura de la nación. Historia del movimiento obrero mexicano desde 1938 hasta 1952*, México, UNAM, 1986. Ésta es una notable investigación histórica sobre el papel del lombardismo en esas décadas cruciales de su protagonismo político de primera línea. Barry Carr, *La izquierda mexicana a través del siglo XX*, México, Era, 1996; véanse los capítulos del III a VI inclusive. Este libro es el más consultado sobre el tema de la izquierda mexicana en el siglo XX. También, en varios de mis libros trato estos temas, v. gr. Manuel Aguilar Mora, *El escándalo del Estado. Una teoría del poder político en México*, México, Fontamara, 2000, pp. 235 ss.

a uno de sus miembros críticos más inteligentes, José Re-vueltas, a declararlo como “un partido históricamente inexistente”.

FRACASO Y LECCIONES

Pero 40 años después, con la ruptura neocardenista, aunque moribundo, el estalinismo conservaba intacto su espíritu conciliador y seguidista. Irónicamente, el registro del PCM, conseguido con las luchas y sacrificios de tantos militantes fieles y honestos que formaron durante décadas sus filas, fue el que hizo que la dirección de Arnoldo Martínez Verdugo se pusiera a disposición del ex priísta Cuauhtémoc Cárdenas para conseguir el reconocimiento oficial del nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática, surgido con motivo de la crisis del fraude electoral de 1988. Como se ha dicho, los acontecimientos de Iguala en septiembre del 2014 han cerrado un ciclo. El colapso de la política conciliadora del PRD de hecho lo ha puesto en una situación límite. Su papel de contenedor y de freno de las movilizaciones populares anti-gobiernistas radicales ha sido desnudado. Sus días de auge han quedado atrás. ¿Cuál será la nueva etapa que se está abriendo?

Para algunos (como Armando Bartra, Enrique Semo y Enrique Dussel) la alternativa es Morena, pero otros no son tan optimistas con el liderazgo caudillesco de López Obrador.¹¹ El balance de las conclusiones que sacan los participantes del *dossier* apunta a un auténtico impacto paralizante, a una situación de verdadera dificultad en el delineamiento de las perspectivas. Semo, por ejemplo, descarta por completo “la

¹¹ Semo y Dussel, en sus respectivas entrevistas citadas, son explícitos en señalar a la alternativa de AMLO como la nueva esperanza de México. Por su parte, Bartra ha expresado en diversas ocasiones, en discursos, en panfletos y en libros su adhesión a la causa de AMLO. En cambio, Imanol Ordorika, en su entrevista, no escatima incisivas y fuertes críticas al liderazgo de AMLO.

posibilidad de una revolución socialista".¹² Es una crisis en la que, después de haber creído y esperado que la reanudación de la alianza entre la vieja corriente "nacionalista revolucionaria" con la izquierda socialista, sellada en 1989 con la fundación del PRD, abriría nuevos horizontes, hoy día, 25 años después, les parecen cerrados por completo los caminos revolucionarios.

En uno de los ensayos integrantes del *dossier*, Massimo Modonesi define con la fórmula gramsciana la situación existente: "una izquierda subalterna que no acaba de morir y una izquierda antagónica que no termina de nacer".¹³ La izquierda "subalterna" (el término académico elegante para denominar a las organizaciones conciliadoras y colaboracionistas como el PRD) está moribunda, pero a diferencia de la situación prevaleciente hace 25 años, no se ve todavía qué la va a sustituir. El mismo Modonesi hace más de diez años también declaró muerta a la izquierda socialista en un libro que escribió sobre la crisis de 1988-1989.¹⁴ Pero en ese momento muchos pensaban que el PRD, "el partido con cientos de miles de seguidores del 6 de julio", era "el partido de la esperanza". Modonesi también consideraba que la nueva etapa, que sucedía a la etapa por él considerada como la vieja y superada "izquierda socialista", tenía un gran futuro por delante. Hoy este pronóstico se ha demostrado por completo infundado. Prevalece una situación en la cual el panorama que se avizora es sombrío, nada esperanzador. Ante la muerte anunciada del PRD no hay augurios optimistas. Al contrario, hay más bien un sentimiento de desesperación entre estos sectores que fueron perredistas o simpatizantes perredis-

¹² "Esa izquierda [los sucesores del PCM fundamentalmente] vio en la candidatura de Cárdenas, que tuvo inmediatamente un gran efecto en buena parte por su nombre, una oportunidad para salir de la derrota y por lo tanto se sumaron". Enrique Semo, *op. cit.*, p. 24.

¹³ Massimo Modonesi, "Entre la izquierda subalterna que no acaba de morir y la izquierda antagonista que no acaba de nacer", *Memoria*, *op. cit.*, p. 12.

¹⁴ Massimo Modonesi, *La crisis de la izquierda socialista mexicana*, México, Juan Pablos, 2003.

tas. Por ejemplo, Dussel confrontado por esta realidad tan cruda, se apresura a poner sus esperanzas desmesuradas en Morena, lo cual lo lleva a declarar desesperado, “si éste [Morena] fracasa no hay más nada”.¹⁵

En efecto, el panorama que se avizoraba en México antes de septiembre del 2014 no era nada esperanzador. Se delineaba como un año de rupturas clave producidas por los acontecimientos que se iniciaron a raíz del Pacto por México que le dio, con la complicidad del PAN y el PRD, a la restauración priísta del gobierno de Peña Nieto de 2012, la fuerza necesaria para imponer una serie de (contra)reformas por completo en detrimento de los intereses populares.

EL QUIEBRE DE LA NOCHE DE IGUALA

Todo ello señaló los márgenes tan estrechos de la operación de la “transición democrática” del año 2000. Pero ha sido la masacre de Iguala y sus consecuencias la que vino a confirmar de la peor manera esa restauración priísta nefasta y también sus limitaciones. De hecho ha significado la apertura de una nueva etapa de la política mexicana. La completa insensibilidad mostrada por el gobierno de Peña ante el clamor popular interno y las numerosas críticas y denuncias internacionales de que se ha hecho merecedor, aunada con el encubrimiento de las acciones de las fuerzas represivas, en especial del ejército, representan un hito que marca al régimen con los peores atributos. Estamos presenciando no sólo el fracaso de la “transición democrática” sino la reinstalación de un priísmo avasallador: el control del INE, el fortalecimiento desmesurado de sus subordinados como el Partido Verde, el abastecimiento de armamento para el ejército en cantidades multimillonarias que superan incluso los niveles logrados con la Iniciativa Mérida durante el gobierno de Calderón, la eliminación de las voces críticas en los medios (¡el despido de Carmen Aristegui!), la colocación de incon-

¹⁵ Enrique Dussel, entrevista, *op. cit.*, p. 28.

dicionales como Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia, el anuncio de un drástico recorte del presupuesto para 2016 son un rosario de medidas que apuntan al endurecimiento de un gobierno que se acerca cada vez más a la situación de franca dictadura de un partido único *de facto*.

Es evidente que ante este panorama, en la etapa que se abre para las fuerzas de oposición verdaderamente de izquierda, se deben sacar las lecciones para no repetir más de lo mismo de este camino hacia el suicidio político. Por eso Morena, que tantas señales apuntan que se orienta hacia una reedición de un PRD bis, de ninguna forma es la alternativa para el surgimiento de un nuevo liderazgo acorde con los tiempos que se anuncian. Su liderazgo antidemocrático, su persistente electoralismo, así como su provincialismo, atraso ideológico e incapacidad de sacar las conclusiones correctas de la coyuntura que atravesamos, son todos factores contraindicados para el surgimiento de la(s) nueva(s) alternativa(s) que la situación actual urgentemente demanda.

Su líder incuestionable, López Obrador, se comportó del modo más crudo y oportunista ante la tragedia de Ayotzina-pa, dando una muestra patente de que en Morena se repite más de lo mismo. Su discrepancia ante la política de boicot electoral de los familiares de los normalistas desaparecidos, en su visita a Guerrero de marzo de 2015, convocándolos a subordinar su lucha extraparlamentaria vital a los intereses mezquinos electorales de su partido en el estado, prometiéndoles puestos gubernamentales en el caso de una posible victoria, de por sí siendo una actitud prepotente, culminó como un verdadero insulto a su lucha cuando AMLO la consideró como una postura que le hace el juego a los gobernantes priístas.

Las ilusiones de tantos militantes de buena fe que se adhieren y confían en Morena no están bien fundadas y sólo les anuncian nuevos tropiezos y decepciones.

Apostar, como hace López Obrador, a que el gobierno de Peña Nieto respetará las reglas democráticas en la arena electoral es una concepción, por lo menos, de una ingenuidad rayana en la ceguera. La construcción del polo de fuerzas opositoras al curso mortífero de la oligarquía gobernante del

capitalismo dependiente mexicano, no se dará en los próximos tiempos en la arena electoral. Ese polo de poder que desafía a la rosca de intereses mafiosos de la cúpula gubernamental con los grandes capitales nacionales y transnacionales sólo surgirá de abajo, de los combates de huelgas, paros, manifestaciones, tomas y diversas acciones que potencien la fuerza de las masas de trabajadores y sus aliados oprimidos y explotados del campo y la ciudad. La tarea de organización desde las bases, con liderazgos autónomos surgidos directamente de ellas en las diversas regiones y en sindicatos, escuelas, barriadas, asociaciones civiles y auténticos partidos de izquierda puestos en pie por su lucha y lealtad a las causas populares, y no debido a los “registros” del INE, que se doten de un programa que recoja las demandas más sentidas en el seno de las grandes masas (de salario, de empleos suficientes y formales, de educación para los jóvenes, de sistemas de salud dignos dotados de los medicamentos y los instrumentos adecuados, de viviendas decorosas, de sistemas de transportes colectivos eficientes, de seguridad y procuración de justicia transparente y honesta, entre otras) y luchen por la instauración de un verdadero gobierno que represente los intereses de los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las mujeres y la juventud con total independencia de la burguesía y de sus partidos.

Lo que fracasó en el PRD hoy se aprecia con claridad. Se trató de un partido que surgió desde un principio con una dirección hegemónica burguesa representada, como hemos dicho, por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, López Obrador y demás que venían del PRI, todos ellos políticos nostálgicos del antiguo “nacionalismo revolucionario” del viejo Cárdenas. Con la fusión con una gran parte de las corrientes de la izquierda socialista existentes en los años ochenta del siglo pasado, el PRD asimiló y liquidó al mismo tiempo en el trayecto el difícil y largo proceso de construcción de dichas organizaciones socialistas clasistas que habían superado represiones y muchos otros obstáculos en las importantes luchas de los años sesenta y setenta. El PRD, con su dirección burguesa, muy pronto se colocó, no sin antes

haber sido reprimidos durante el gobierno de Salinas de Gortari cientos de sus activistas más radicales, en especial en Guerrero y Michoacán, como uno de los partidos pilares del reacomodo del sistema gubernamental que estaba surgiendo en los años noventa y principios del siglo XXI con motivo de la aguda crisis priísta desencadenada en los años ochenta con motivo de su giro neoliberal. A partir de 1997, con motivo de la llegada de Cárdenas a la jefatura del gobierno del Distrito Federal, el puesto político más importante después del presidente de la República, el PRD se convirtió en el tercer partido del poder capitalista en México. Sin embargo, los límites de la "democratización" burguesa del sistema partidario fueron insuperables durante los fraudes que la cúpula priísta, con la complicidad del PAN, cometió contra el PRD en las elecciones presidenciales, ante todo de 2006 pero también en las de 2012. La restauración del PRI este último año, con la cauda de consecuencias ya mencionadas, es la contundente demostración de la naturaleza fraudulenta de la "transición democrática" del año 2000. De esta manera, atravesamos en estos días por la gestación de un régimen híbrido en el cual a la restauración del viejo PRI se están añadiendo nuevos y ominosos atavíos, en especial castrenses.

HACIA LA NUEVA ETAPA

Es por eso que los familiares de los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa han levantado la voz de protesta y se han negado a participar en la farsa electoral de junio próximo. ¿Cómo darle el voto a cualquiera de los partidos, incluido Morena, cuyos candidatos electos anteriormente y los que serán electos en junio son los cómplices de los verdugos de sus hijos? ¿Cómo aceptar la situación intolerable que nos oprime y explota a la abrumadora mayoría de los mexicanos y que está sancionada en la cúspide con la presidencia de Peña Nieto, su partido y todos los demás partidos aliados cómplices, tanto los mayores como los satélites: el Verde, el Panal, etc., etc.? Su rechazo y convocatoria a boicotear las elecciones es

una medida digna de apoyarse y representa la toma de conciencia de avanzada de un sector minoritario ciertamente hoy en día, pero que anuncia los tiempos por venir en los cuales será la gran mayoría de la población quien dirá la última y decisiva palabra contra el actual ignominioso sistema imperante.

México no es una isla, a pesar del etnocentrismo tan agudo de su tradición política. México es parte consustancial del subcontinente latinoamericano, algo que el neoliberalismo y la política imperialista aceptada por los gobernantes criollos de todos los partidos mexicanos “registrados” han hecho todo lo posible por subestimar o de plano negar. En el mundo globalizado de hoy ya no hay soluciones “nacionales”. El nacionalismo es una ideología que la evolución misma de la economía y la sociedad actuales en el nivel planetario ha vuelto obsoleto y sólo sirve de instrumento para que las elites reaccionarias afiancen su dominación y para mantener a las masas populares con las vendas doctrinarias de la mezquindad nacionalista sobre los ojos de su conciencia.

La crisis mexicana capitalista es parte de la crisis mayor que se da en toda América Latina, en sus diversos países y de otras maneras y por diferentes motivos. También hoy las corrientes de izquierda socialdemocratizantes latinoamericanas que tuvieron un auge hace dos décadas y lograron hacerse de los gobiernos de varios países sudamericanos, corrientes reformistas y colaboracionistas, pluriclasistas, contenedoras de los movimientos populares, están experimentando momentos críticos. El ejemplo más contundente de la crisis de estas formaciones de izquierda moderada, negociadora, modernizante e integrada por completo dentro del *establishment* burgués, es sin duda el del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, encabezado por Dilma Rousseff, que se encamina a un fin nada glorioso. Allí, a pesar de ciertos programas asistencialistas de los primeros años del gobierno del presidente anterior, Luiz Inácio *Lula* Da Silva, el PT no logró, ni de lejos, dirigirse hacia un curso realmente anti-neoliberal (o sea verdaderamente anticapitalista), y hoy se confronta con una gigantesca protesta popular, hábilmente

dirigida por sus opositores de derecha, que tiene a la presidenta del "partido de los trabajadores" en las cuerdas.

Crisis profunda, incertidumbre profunda y pelea de facciones. Si alguien llega de afuera y precisa de un retrato rápido o de una definición de Brasil en este momento, esas pocas palabras son las precisas... Una novedad, tal vez, es el hecho de que los oficialistas y petistas de primera hora, que creían o fingían creer en el "corazón valiente" de Dilma en la última corrida electoral, están cada vez más sin piso para negar lo que se puede estar insinuando como el derrite de la "hegemonía lulista". Fin de la farra con los recursos abundantes que venían más allá del mar, fin de las posibilidades de conciliación de clases. No hay más, por tanto, ocultar el grado de rendición que alcanzó un "gobierno de los trabajadores", cuando la corrupción en una de las mayores empresas públicas salta a los ojos... De hecho, éstos son reveses que no constituyen sorpresa para quien observó con alguna dosis de realismo las contradicciones impresas en el modelo de desarrollo de los últimos 12 años, con un gobierno que se equilibra entre dos puntas inconciliables... La crisis del petismo/lulismo, con la consecuente reorganización de la sociedad brasilera, apunta, sin duda, para el escenario actual de crisis política e institucional, pero también para un cambio de calidad en la lucha política. Un reposicionamiento y eventual unificación de la izquierda progresista está en el orden del día. Así como ya está en curso una reorganización de sectores expresivos de la población a la derecha, que corre paralelamente a la unificación de sectores dominantes, con vistas a humillar a la presidenta. Sangrarla hasta el fin, someterla al proceso de *impeachment* o inducir su renuncia están en el horizonte de esos sectores, y no hay posibilidad de prever lo que está por delante, lo que mucho dependerá del grado de desaceleración económica. No se pierda de vista, en tanto, que de un lado de la cuadro histórica está la derecha escrachada, conservadora, fascista y golpista, que fue el día 15 de marzo (mas no solamente ella), que jamás practicó la moralidad en las instituciones públicas, ni con la ética de la representación política. De otro lado, a la vez, está un partido que juntamente con la CUT, organizó las manifestaciones del día 13 de marzo y, justamente por denominarse "de los Trabajadores", practicó una de las mayores

imposturas históricas para un partido que nació progresista al lado de los trabajadores y a la izquierda del espectro político: usurpó la bandera de la derecha, corrompió el sistema de representación política, fragilizó en buena parte a la izquierda y desestabilizó el país.¹⁶

Pero lo más preocupante es lo que pasa en Venezuela, en donde un poderoso movimiento popular con evidentes rasgos revolucionarios se viene desarrollando desde hace más de una década, pero su conducción nacionalista y, en última instancia, también burguesa, está llevándolo a un curso que, si no se detiene a tiempo, se precipitará a una segura catástrofe. La caída estrepitosa de los precios del petróleo en 2014 ha sido la causa de una crisis económica que ha impactado al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez pero sin su talento y su capacidad. Ciertamente, la legítima y justa denuncia y repudio de la injerencionista política del imperialismo de Estados Unidos no debería engeguernarnos ante los métodos burocráticos y nada democráticos de lo que sin ningún fundamento real se autodefine como “el socialismo del siglo XXI en Venezuela”, cuando en realidad, en un proceso de una parcial modernización social y económica del país, ha surgido lo que se conoce como la “boliburguesía”, una clase que al amparo del gobierno chavista y ahora del de Maduro es la clase nacional dominante de un sistema por completo capitalista. Los trabajadores venezolanos tienen todo el derecho de ir más allá de los límites que les ha impuesto un gobierno en crisis, para así erguirse ellos mismos como los auténticos defensores de la amenazada soberanía nacional y protagonizar el avance hacia la instauración de una república de los trabajadores de la ciudad y el campo que verdaderamente enrumbe a Venezuela hacia el socialismo.

A continuación reproducimos un largo extracto de una declaración del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela,

¹⁶ “Brasil: crisis e incertidumbres”, Editorial de *Correio da Cidadania*, <<http://correiodacidadaniacom.br>>, consultado el 12 de abril de 2015.

en la cual expone el doble discurso hipócrita del gobierno de Nicolás Maduro, que convoca a la solidaridad internacional con el pueblo venezolano ante las amenazas provenientes de Washington (las cuales Obama finalmente retiró ante la oleada de repudio de los gobiernos latinoamericanos a dichas medidas) sin que su gobierno en nada sea consecuente con una verdadera política antiimperialista.

No es con acciones mediáticas, ni con la recolección de firmas sin ningún efecto concreto, ni discursos grandilocuentes, que podemos enfrentar al imperialismo norteamericano. La única forma de enfrentar el intervencionismo imperialista es con la movilización obrera y popular de los trabajadores y el pueblo venezolano, exigiendo que el gobierno tome medidas contundentes contra los intereses imperialistas.

El gobierno de Nicolás Maduro llama a firmar una carta vacía, donde no se toman medidas concretas contra el imperialismo. Mientras tanto, no sólo sigue enviando petróleo a los Estados Unidos, si no que aumenta los despachos del mismo. El pasado mes de febrero la venta de petróleo a Estados Unidos se incrementó en un 8 por ciento con respecto al mes de enero. Por otra parte, hace pocas semanas, el gobierno a través de Cencoex, otorgó 400 millones de dólares a las empresas automotrices, varias de ellas gringas. No contento con esto, el gobierno de Maduro acaba de firmar una "alianza estratégica" con la transnacional norteamericana Ford Motor. Igualmente, el pasado año el gobierno venezolano firmó acuerdos con tres de las más grandes empresas de servicios petroleros norteamericanas, la tristemente célebre Halliburton, principal beneficiaria de la invasión a Irak, Weatherford y Schlumberger. Con esta última, hace pocas semanas, el gobierno firmó una extensión de la línea de crédito aprobada en el 2014. Igualmente, en la actualidad se estaría negociando en Wall Street un canje de oro de las reservas internacionales venezolanas para obtener divisas, con un descuento de 7 por ciento con respecto al precio internacional del oro. Todo lo antes dicho nos lleva a afirmar que el gobierno de Maduro no está tomando ninguna medida real y concreta para enfrentar la injerencia imperialista. La recolección de firmas es sólo un *show* mediático para tratar de recomponer su base social, altamente descontenta debido a las penurias que sufre, producto de la crisis eco-

nómica que azota al pueblo y a los trabajadores venezolanos, al tiempo que sirve de cortina de humo para distraer la atención de la crisis social y económica, y seguir aplicando el plan de ajuste contra el pueblo. La única forma de enfrentar al imperialismo es no otorgándole dólares a las transnacionales norteamericanas, ni firmando acuerdos con ellas, ni comprándole aluminio a Alcoa [...] Estamos contra las empresas mixtas en el sector petrolero, que vulneran nuestra soberanía, para que nuestra industria sea 100 por ciento estatal sin empresas mixtas ni transnacionales; eliminando el tratado contra la doble tributación con Estados Unidos; no pagando la deuda externa a los bancos transnacionales, y expulsando a las empresas imperialistas de nuestro territorio. Los socialistas revolucionarios sí firmaríamos y apoyaríamos a fondo una carta y un conjunto de medidas antiimperialistas como las enumeradas previamente. Promoveríamos una campaña nacional e internacional de repudio a la injerencia imperialista, apoyándonos en los sindicatos y organizaciones populares.¹⁷

En Bolivia, por su parte, el gobierno del primer presidente indio, Evo Morales, se ha convertido en el modernizador del capitalismo en ese país, con las nefastas consecuencias que eso significa para su pueblo.

Así puede apreciarse que, en condiciones peculiares en cada país, también en Brasil y en Venezuela, líneas políticas conducidas por equipos gubernamentales provenientes de coaliciones y partidos pluriclasistas y colaboracionistas no permiten el avance de las luchas emancipadoras y liberacionistas de las masas trabajadoras y sus aliados populares. Los gobiernos y los partidos burgueses, con políticas que convocan a las clases populares a su apoyo para realizar acciones asistencialistas y con algunos rasgos reformistas, acaban capitulando ante los grandes capitalistas internacionales y nacionales, convirtiéndose así en una de las causas más importantes de las crisis que actualmente experimentan los pueblos del subcontinente.

¹⁷ “¿Por qué los revolucionarios no suscribimos la carta de Maduro?”, Partido Socialismo y Libertad, Caracas, 11.04.2015, <<http://web.la.clase.info>>, consultado el 12 de abril de 2015.

De hecho, ciertamente el propio destino de Cuba depende en gran medida también del curso que tomen en América Latina los combates populares contra el continuado poderío de las elites burguesas proimperialistas en América Latina. Sólo la ruptura de otras naciones del subcontinente con el Consenso de Washington, sólo la lucha anticapitalista de los pueblos de América Latina permitirá que Cuba no se adentre aún más en el curso de una restauración capitalista que los acontecimientos recientes anuncian con espectacular énfasis y que, al contrario, unida con otras naciones de tierra firme reanude y profundice su evolución no capitalista hacia un sistema genuinamente socialista.

Son las luchas desde abajo, el despertar de los explotados y oprimidos los que pondrán los fundamentos de una real política revolucionaria anticapitalista y socialista que reorienta definitivamente la política de los pueblos y que los conduzca en los próximos días, meses, años, por el camino de su liberación nacional y emancipación social. Ello será posible con el surgimiento de una masa de trabajadores consciente de sus derechos, de su papel como explotados y oprimidos en la sociedad actual y del prometedor futuro que tiene su lucha independiente, democrática e internacionalista por la construcción de un nuevo sistema basado en la solidaridad y la libertad construido en conjunto por los trabajadores de América Latina, Estados Unidos y Canadá.

Los atisbos de estos nuevos tiempos ya los estamos viendo hoy en México, precisamente seis meses después de la noche de Iguala en el despertar de los jornaleros del valle de San Quintín, en Baja California Norte, quienes con sus huelgas y movilizaciones en México y en Estados Unidos han hecho saber al mundo entero que México es el país con mayor caída en el ingreso salarial, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es también el país en el sótano en todos los índices de bienestar social existentes en los países miembros de esta organización, con las jornadas laborales más largas y menos productivas. La lucha de los jornaleros de San Quintín ha denunciado ante la opinión pública las condiciones de trabajo impues-

tas por los capitalistas nacionales y estadounidenses, condiciones que no tienen nada que envidiar a las de la esclavitud existentes hace cien años en los tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz, contra las cuales se levantó la Revolución mexicana de 1910.¹⁸

Los familiares de los alumnos normalistas desaparecidos y las decenas de organizaciones de trabajadores, estudiantes y campesinos solidarias con ellos se reunieron en la normal de Ayotzinapa el fin de semana del 10 al 12 de abril en su II Asamblea Nacional para delinear el plan de acción del combate por la presentación de los 43. El 1° de mayo de este 2015 se realizará una magna manifestación para que los trabajadores mexicanos se enteren y entren a su lucha. Se discutieron las condiciones de las acciones del boicot electoral de las elecciones de junio en los diversos estados de la República. E incluso se comenzó a preparar la organización de las manifestaciones que en todo México y en el mundo se realizarán con motivo del primer aniversario de la noche del 26 de septiembre para que Peña Nieto y su gobierno constaten que está muy lejos de haber perdón ni olvido por parte de estos abnegados familiares y de los miles y miles de hombres y mujeres solidarios con su combate en México y en el mundo entero.

El verdadero camino de la emancipación de los trabajadores y de la liberación de los pueblos de México y América Latina de la tutela imperialista, de la que es parte la lucha de nuestro pueblo mexicano, sólo puede efectuarse a través de la autoorganización del pueblo trabajador, explotado y opri-

¹⁸ La lucha reciente de los miles de jornaleros de San Quintín, que tiene antecedentes desde el año 2014, irrumpió en los medios masivos de comunicación a partir de principios de marzo cuando los jornaleros, agotadas las negociaciones con los patrones de la Driscoll, la transnacional dueña de los campos de fresa en Baja California y en California, en donde trabajan miles de jornaleros, se negó a aceptar la demanda original de una alza de salario a 250 pesos diarios, decidieron bloquear la carretera transpeninsular. Desde entonces esta lucha, con todos sus avatares de marchas en México y Estados Unidos, conflictos con la policía y negociaciones en el Distrito Federal con el gobierno federal y con el gobierno del DF, ocupa las páginas de las publicaciones y los contenidos de los noticieros televisivos.

mido bajo un liderazgo intransigentemente independiente de cualquier tutela política burguesa que enarbole un proyecto que no sea conciliador sino revolucionario, no electorero sino forjado en las luchas callejeras, no caudillesco sino democrático, no nacionalista sino internacionalista. En síntesis, el proyecto anticapitalista, rupturista y revolucionario que libere a nuestros pueblos de la tutela imperialista y los impulse a la forja de una federación de naciones socialistas de América Latina. Ése es el programa que las futuras generaciones revolucionarias latinoamericanas y mexicanas están destinadas a realizar para conseguir verdaderamente el bienestar y la felicidad de nuestros pueblos.

México, D.F., 19 de abril de 2015

**En México te asesinan
por ser estudiante**



Noberto

EN DEFENSA DE L@S ANARQUISTAS
NOTAS SOBRE LA ACCIÓN DIRECTA AYER Y HOY

Claudio Albertani

*La violencia es un problema insoluble
que me atormenta desde hace mucho tiempo.
Yo siento la violencia como antianarquista,
como autoritaria en sí misma y por otro lado
siento también que tenemos
responsabilidades ante la realidad y,
sobre todo, ante los sufrimientos de la gente.
Se presentan momentos en que no se puede
dejar de luchar, aun cuando no seamos
nosotros los que deciden cómo intervenir.
Pero también estoy convencida de que,
en el terreno de la violencia, no pueden darse
más que desgracias.*

Luce Fabbri

A partir del primero de diciembre de 2012, un fantasma recorre la ciudad de México: el bloque negro o *black bloc*, como se le conoce fuera del país. Se trata generalmente de un contingente de encapuchados que, ante la ineficacia de otras formas de lucha, arremete contra los símbolos del poder político y económico, táctica que se emplea desde hace mucho tiempo en varias partes del mundo: Alemania, Italia, Grecia, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Egipto, Corea, Chile, Brasil...

Los incendiarios —escribe con malevolencia el diario *24 horas*— en su mayoría son jóvenes. Algunos usan gorras, otros se cubren la cara, hay quienes usan lentes, y otros no tienen

temor de llevar el rostro descubierto. La mayoría son hombres aunque también hay mujeres. Sus armas: petardos, bombas molotov y aerosoles con los cuales intentan incendiar los blancos de sus ataques. Se trata de los supuestos anarquistas, identificados así de forma genérica por las personas ajenas a sus expresiones violentas, idea que ellos mismos refuerzan con su tradicional grito: ¡muerte al Estado, que viva la anarquía!

Es verdad que un sector del movimiento social ha reaccionado de manera airada a dichas prácticas señalando a los encapuchados como criminales comunes, provocadores, *lumpens* e infiltrados de la policía con el objetivo de desprestigiar al movimiento y justificar la represión. Recuerdo, por mi parte, que la policía se cuele en los movimientos sociales desde siempre, sin importar si son pacifistas o partidarios de la violencia. Es su trabajo. Una prueba de ello es el caso de Manuel Cossío Ramos, espía del Cisen en el movimiento #YoSoy132.² Señalé hace años, la legitimidad del bloque negro y también las críticas igualmente legítimas que se le pueden hacer.³ En la actualidad, la andanada contra este tipo de protestas coincide con un repunte del anarquismo y, al mismo tiempo, con un renovado intento por desprestigiarlo.⁴

Ignorado, ninguneado o dado por muerto durante décadas, el movimiento libertario florece y la prensa lo estigmatiza como el enemigo público número uno o, con suerte, el número dos, superado únicamente por la criminalidad organizada. Los temas del bloque negro, la acción directa y la llamada vio-

¹ 24 horas. *El diario sin límites*, 12 de noviembre de 2014.

² Genaro Villamil, "Manuel Cossío Ramos, el espía del Cisen en el movimiento #YoSoy132", <<http://www.proceso.com.mx/?p=343793>>.

³ Claudio Albertani, "Génova para nosotros. Bloques negros, monos blancos y zapatistas en el movimiento contra la globalización capitalista", en Claudio Albertani (coordinador), *Imperio y movimiento sociales en la edad global*, México, Universidad de la Ciudad de México, 2004, pp. 83-118.

⁴ Para un análisis del intento de criminalizar el anarquismo, véase el último número de la revista *Obra Negra*: "Lombroso ha vuelto. De cómo el Santo Oficio mediático produce monstruos en México", <http://obra-negrarevista.tumblr.com/Lombroso_ha_vuelto>.

lencia anarquista ocupan las primeras páginas de los periódicos con un claro afán persecutorio, no sólo en México, sino en todo el mundo. Sólo para citar algunos ejemplos: *The Economist*, vocero de la burguesía financiera globalizada, pregunta: ¿qué comparten un anarquista y un islamista? Y responde: “el empleo de la violencia indiscriminada”.⁵ En España, el académico Juan Avilés Farré escribe un libro de 422 páginas, *La daga y la dinamita. Los anarquistas y el nacimiento del terrorismo* (Barcelona, Tusquets, 2013), para insinuar que el anarquismo es el principal antecedente del terrorismo islamista ya que se ha caracterizado desde sus inicios por “la práctica de una forma extrema de coacción: la violencia”. En el mismo país, el director general de policía, Ignacio Cosidó, declara sin tapujos que el terrorismo anarquista se ha implantado en la península y garantiza la firmeza de la policía al respecto.⁶ En Italia se agita el espectro de la Federación Anarquista Informal, lo mismo que en Grecia se adjudica a los anarquistas la responsabilidad de la bancarrota del país.

En México, la prensa informa que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) detectó 17 grupos anarquistas, en por lo menos 14 estados del país que se caracterizan por sus acciones violentas en calles, visiblemente en la capital del país.⁷ El gobierno del DF, por su parte, filtra a la prensa un documento denominado “Análisis de grupos anarquistas”, en el cual identifica a la Cruz Negra Anarquista, al Bloque Negro, a la Coordinadora Estudiantil Anarquista y a 11 personas por su supuesto grado de violencia y participación en actos vandálicos. Con base en dicho informe, Carlos Loret de Mola —el conocido periodista de Televisa que se distingue por arremeter contra toda causa noble— insinúa que el anarquismo marcha rápidamente hacia el terrorismo en el DF y otro

⁵ “For jihadist, read anarchist”, *The Economist*, 18 de agosto de 2005.

⁶ “El terrorismo anarquista se ha implantado en España y hay riesgo de atentados”, *ABC*, 12 de junio de 2014, <<http://www.abc.es/espana/20140612/abci-terrorismo-anarquista-atentados-201406121042.html>>.

⁷ “Anarquistas operan en 14 estados del país: Cisen”, *La silla rota*, 14 de enero de 2015, <http://lasillarota.com/anarquistas-operan-en-14-estados-cisen#.VTPG_85pHCc>.

cagatintas, Ricardo Alemán, asegura que se trata de un puñado de activistas financiados por los brazos radicales de Morena.⁸ Otros más criminalizan a los estudiantes del CCH, al Frente Oriente, a la CNTE, a la CETEG y un largo etcétera.

¿Qué contestar? Observo, en primer lugar, que la furia vengativa de policías, empresarios, curas y periodistas se explica fácilmente. Vivimos tiempos de crisis; la esfera de la representación se va cerrando día tras día. Saben que su política —la política de los políticos— ya no convence: de izquierda a derecha es la misma nada que impera y, como dicen los anónimos compañeros del Comité Invisible —autores del famoso panfleto, *La insurrección que viene*— desde cualquier perspectiva que se le mire, el presente no tiene salida.⁹ Frente a esto, y al descrédito de los partidos, se asiste al florecimiento de prácticas y colectivos libertarios que actúan al margen de los canales de la política tradicional, lo cual es precisamente lo que quita el sueño a los defensores del viejo mundo.

Así las cosas, no sorprende la saña con que se insiste en atacar, insultar, denigrar y vilipendiar a los anarquistas de todo color y de toda tendencia. Aclaremos unos puntos. ¿El uso de la violencia es connatural al anarquismo? La respuesta es no y es un no rotundo. En el movimiento libertario siempre han existido —y siguen existiendo— partidarios de la no-violencia y de la resistencia pasiva, así como adeptos a la violencia, mismos que discrepan, a su vez, sobre su naturaleza, alcance y límites. Nadie puede reclamar que nuestra lucha se tenga que desarrollar en el marco de la legalidad, pero tampoco se puede alegar que la verdadera lucha —esa que ilumina la noche en la que nos movemos a ciegas— se tenga que dar fuera de ella. Insisto: el tema de la violencia no es un asunto de principios; es una cuestión táctica y siempre ha habido discordancia al respecto, así como las hubo y

⁸ Carlos Loret de Mola, “¿Quién es Lady Anarco?”, *El Universal*, 9 de abril de 2014, <<http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/04/106451.php>>; Ricardo Alemán, “Itinerario político”, *El Universal*, 24 de septiembre de 2013.

⁹ Comité Invisible, *La insurrección que viene*, Tenerife, Melusina, 2009.

las sigue habiendo sobre la lucha sindical, la pertinencia y la naturaleza de la organización, el colectivismo, etcétera.

AYER

Hagamos un poco de historia. El movimiento libertario se organizó por primera vez en el seno de la Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT, fundada en Londres un 28 de septiembre de hace exactamente 150 años. Asociación, no organización ni partido político. La idea de asociación implica la aceptación de un amplio abanico de tácticas y estrategias, al amparo de un principio unificador: la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Al principio, el accionar internacionalista no fue violento, pero las cosas cambiaron después de los 30 mil muertos, 100 mil deportados y otros tantos exiliados que dejaron como saldo los verdugos de la Comuna de París (1871). Precisamente en este contexto, algunos compañeros de Bakunin introdujeron la noción de propaganda por el hecho, con la idea de sustituir con los actos a las palabras y con las acciones a los discursos, rompiendo radicalmente con toda visión ideológica.

El siguiente paso se da en julio de 1881, cuando se celebró en Londres un congreso anarquista internacional al que asistieron unos 30 delegados —entre los cuales destacan Piotr Kropotkin, Errico Malatesta, Carlo Cafiero, Émile Pouget y Louise Michel. Se aprobaron dos mociones: la primera recomendaba la creación de una oficina de información que tendría la tarea de reavivar a la moribunda AIT, y la segunda adoptaba la violencia —y concretamente el uso de la dinamita— como táctica de lucha. Una oleada de represiones gubernamentales impidió la progresión de la nueva internacional, pero el repentino descubrimiento de las virtudes de la química encontró la aceptación entusiasta de algunos militantes ácratas.

¿Cómo explicarlo? Las razones son múltiples. En un “mundo sin evasión posible” (la expresión es de Víctor Serge), la burguesía aumentaba su arrogancia, los Estados reprimían,

los políticos engordaban y los partidos socialdemócratas se fortalecían en la medida en que abandonaban sus ideales revolucionarios. Organizados en pequeños grupos de afinidad, los anarquistas emprendieron el camino opuesto: la lucha a muerte contra el viejo mundo. Algunos vieron en la dinamita el arma perfecta, la metáfora ineludible de una revolución catastrófica y, al mismo tiempo, redentora. Otros encontraron en el robo y el asalto a mano armada el secreto al fin descubierto de la crítica de la economía política.

El primer artefacto estalló en 1882, en Lyon, pero la etapa más álgida se extendió entre el 24 de junio de 1894, cuando el anarquista italiano Sante Caserio mató al presidente francés Sadi Carnot, y el 6 de septiembre de 1901 cuando otro anarquista, León Frank Czołgosz, mató al presidente estadounidense William S. McKinley. En ese lapso, junto con una generación de luchadores, encontraron la muerte: el rey de Italia, Humberto de Saboya, ultimado el 29 de julio de 1900; el presidente del gobierno español, Antonio Cánovas del Castillo, muerto de un disparo el 8 de agosto de 1897, y la emperatriz de Austria, Elisabeth de Wittelsbach, asesinada el 10 de septiembre de 1898 en Ginebra. Luego vino el ilegalismo y las trágicas epopeyas de Clément Duval, Marius Jacob y la Banda Bonnot en la Francia de la Bella Época.

¿Cuál es el balance? En primer lugar, es claro que no se puede asimilar el terrorismo —una política de Estado que se caracteriza por amedrentar a la población civil— a la propaganda por el hecho que no buscaba *aterrorizar*, sino al contrario, *despertar* al pueblo. Con sus acciones justicieras, los anarquistas planteaban un problema urgente: la renovación de un movimiento obrero en vía de rápida burocratización. Pretendían sacudir a las masas del conformismo, rechazar la representación política y denunciar la corrupción. Hombres de su talla pasan a la historia como criminales o como santos, según la época en que viven y el mundo en que se mueven.

La guerra de clases se fue trocando en guerra privada, la cuestión social en cuestión existencial. El enemigo ya no eran las instituciones del capitalismo, sino los hombres que las encarnaban: los reyes, los funcionarios y los burgueses y después

incluso los proletarios conformistas, que se tenían por indignos y traidores. El resultado, evidentemente, fue la intensificación de la represión: los años noventa del siglo XIX vieron la multiplicación de leyes especiales que, por doquier, amenazaron la supervivencia misma del movimiento libertario organizado. Estaba además —el problema sigue existiendo— la cuestión de la clandestinidad. Rudolf Rocker decía que en el mejor de los casos, los movimientos secretos no son más que un mal necesario, pero creer que se puede producir una transformación social por tales movimientos es una ilusión peligrosa. Toda transformación espiritual y económica de la sociedad supone una amplia y constante propaganda que obre ante la más amplia publicidad, lo cual no podría hacerlo jamás un movimiento subterráneo.¹⁰ Las opiniones de Rocker son discutibles, pero el problema es real: el anarquismo debe temer una larga actividad subterránea mucho más que cualquier otro movimiento, pues ninguna otra forma de propaganda revolucionaria favorece tanto el desarrollo de ideologías autoritarias.

El espejismo de la dinamita duró poco más de dos décadas, pero fue suficiente para originar la leyenda del anarquista sanguinario, rápidamente aprovechada con el fin de criminalizar a *todos* los libertarios. A la postre, la violencia vengadora de los Estados *contra* los anarquistas fue mucho más terrible que la violencia ejercida *por* los anarquistas, algo que se puede comprobar revisando las crónicas de la época. La prensa libertaria corrió el riesgo de desaparecer; muchos militantes murieron o fueron encarcelados, y los pocos que quedaron en una precaria libertad se encontraron en la necesidad de reducir su actividad.

En esa situación, los principales militantes ácratas dejaron de sostener la propaganda por el hecho optando decididamente por la acción de masas. Algunos llegaron a la conclusión de que la violencia individual debía usarse lo menos posible y en todo caso solamente como medio defensivo y nunca ofen-

¹⁰ Rudolf Rocker, *Anarquismo y organización*, <http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/ayo/anarquismo_y_organizacion.html>.

sivo. Seguían celebrando el heroísmo de los autores de los atentados, pero ponderaban las consecuencias. “Un edificio basado en siglos de historia no se destruye con unos kilos de explosivo”, apuntó Kropotkin con una clara y sana actitud autocrítica. Muchos pensaron que de nada servía matar reyes y policías: era como cortar la cabeza de la hidra a sabiendas de que volvería a nacer.¹¹ “La violencia sólo es justificable cuando resulta necesaria para defenderse a sí mismo y a los demás contra la violencia. Donde cesa la necesidad comienza el delito [...]”, remató el mismísimo Malatesta, a quien sería injusto colgar la etiqueta de pacifista.¹²

Poco a poco se fue introduciendo una nueva sensibilidad que pronto desembocó en una modalidad distinta —y más vigorosa— del movimiento libertario: el anarcosindicalismo. Es en este contexto —el de la crisis de la propaganda por el hecho y la búsqueda de nuevas tácticas— cuando surge la práctica de la “acción directa”, lo cual no deja de ser una paradoja ya que los actuales estetas de la violencia en ámbitos libertarios aborrecen todo accionar sindical. Émile Pouget escribió en 1910 un texto famoso en el cual especificaba que la acción directa era la única y verdadera arma social contra el capital. Contrario a lo que muchos creen, ésta no implica necesariamente la violencia, sino que a diferencia de la acción parlamentaria (o indirecta), busca afirmar la autonomía de los trabajadores por todos los medios posibles, pacíficos o no. La primera condición de la acción directa es que sea pública, y la segunda que sea colectiva, de común acuerdo. Exactamente lo opuesto, por tanto, de lo que ocurre con el atraco y el atentado, actos llevados a cabo en secreto y en circunstancias particulares, cuando no con las más arbitrarias e inconfesables motivaciones.

Una de las muchas expresiones históricas de la acción directa ha sido el boicot, un medio de lucha popular típicamen-

¹¹ Piotr Kropotkin, citado en Jean Maitron, *Le mouvement anarchiste en France. I. Des origines à 1914*, París, Gallimard, 1975, p. 260.

¹² Errico Malatesta, “Anarquismo y violencia”, en Vernon Richards (compilador), *Malatesta. Pensamiento y acción revolucionarios*, Buenos Aires, Tupac Ediciones, 2007, p. 53.

te no-violento que, además, expresa la perspectiva del obrero no sólo como productor sino también en cuanto consumidor. Otra es el sabotaje, es decir la parálisis o el entorpecimiento de la máquina productiva en perjuicio de los explotadores. Según Pouget,

[...] en la guerra social, el sabotaje representa el equivalente de la guerrilla en las guerras nacionales: deriva de los mismos sentimientos, responde a las mismas necesidades y tiene las mismas consecuencias sobre la mentalidad obrera. Como la guerrilla, el sabotaje desarrolla el valor individual, la audacia y la toma de decisiones y mantiene a quienes lo practican en una constante tensión creativa.¹³

En este sentido, el anarcosindicalismo expresó la continuación y, al mismo tiempo, también la salida de la etapa de la “propaganda por los hechos”. La continuación, porque manifestaba el mismo anhelo de hacer crecer, por la vía de la imitación o por el efecto directo de los actos, una potencia revolucionaria y transformadora capaz de romper con la pasividad de las masas y con el oportunismo de los partidos socialistas. Y era también la salida, porque dejaba atrás las ilusiones trágicas de los atentados y la mitología redentora de la dinamita. En Estados Unidos, otra corriente anarcosindicalista, la Industrial Workers of the World (IWW) añadió un ingrediente importante.

En *Direct Action and Sabotage*, un panfleto de 1912, William Trautman precisaba que las acciones directas son útiles cuando debilitan el poder de las clases dominantes, no importa si quienes las llevan a cabo son personas aisladas o colectivos organizados.¹⁴ El individualista que usa explosivos —dice Trautman— puede ser aborrecido por muchos, pero sus acciones tienen que evaluarse a partir de los objetivos que se propone. ¿Logró debilitar las instituciones represivas?

¹³ Émile Pouget, *El sabotaje*, <http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/pouget/pouget.html>.

¹⁴ William E. Trautman, *Direct Action and Sabotage*, Pittsburgh, Socialist News, 1916.

¿Las reforzó? ¿Consiguió sacudir la conciencia política de las masas adormecidas? ¿Obtuvo el efecto contrario? En las respuestas a estas preguntas se encuentra, me parece, la clave para evaluar todo tipo de acción directa, al margen del moralismo pseudoizquierdista, por un lado, y de la estética del gesto, por el otro.

HOY

Cien años después, la acción directa ya no se limita a la lucha sindical. En la actualidad, la podemos definir como una práctica en la cual la solución de los conflictos se logra por parte de los individuos afectados, sin intermediarios. No es violenta ni noviolenta, sencillamente porque se mide con otros criterios. En su imprescindible *Pequeño léxico filosófico del anarquismo*, Daniel Colson aclara que la acción directa abarca la totalidad de las actividades del ser humano y de sus relaciones con el mundo, desde la lucha social hasta la pintura, desde la filosofía hasta las relaciones de cortesía. Se manifiesta también en ámbitos no obreros como el cultural y el artístico, en las ciudades y en el campo, siempre y cuando exista la voluntad emancipadora de los involucrados. La acción directa, por tanto, no conoce reglas ni formas establecidas, sino que se abre sobre una infinidad de posibilidades.

La conclusión es evidente: acción directa y anarquismo no pueden ser más que sinónimos. Si en la actualidad la acción directa se encuentra tan estigmatizada es porque la sociedad en la que vivimos requiere de espectadores pasivos, no de seres pensantes. Parafraseando a Pietro Gori —el gran poeta anarquista—, en el mundo actual, el buen trabajador; el maestro cumplido y el estudiante respetuoso deberían de ser pacíficos rumiantes, posiblemente desprovistos de sentimientos, que se dejan trasquilar tranquilamente, y sin protesta, por los que tuvieron la astucia de proveerse de un persuasivo bastón y de un par de tijeras.

Dicho esto, no podemos dejar de comentar el giro que ha tomado la práctica de la acción directa en tiempos recientes,

particularmente en la ciudad de México con los llamados *black blocs* o bloques negros. Estoy de acuerdo con Javier Hernández Alpízar ante el arrojo de los jóvenes vándalos, lo primero que deberían sentir los que los critican es vergüenza. ¿Quién tiene la autoridad moral para condenarlos? No la tiene la izquierda institucional que exhibe un siglo de traiciones, pero tampoco la tiene la llamada ultraizquierda que sólo aprueba la violencia cuando una de sus múltiples sectas la dirige.¹⁵ Por demás, el bloque negro no es un grupo y no se reclama de ninguna ideología en particular. Es, en gran parte, un indicador de la rabia que viven los jóvenes y es, específicamente, una táctica de protesta que emplean diferentes individuos y grupos —no necesariamente anarquistas— en distintas partes del mundo, no solamente en el DF. Como tal, a veces arroja resultados positivos y a veces no tanto.

¿Quién se acordaría de los acontecimientos de Seattle —esos, que doctos sociólogos señalan como un hito en la historia del movimiento contra la globalización capitalista— si no hubiese sido por los *black blocs* que con sus acciones contra los emblemas del capital (no contra personas de carne y hueso) arruinaron la fiesta de los poderosos? El aspecto atractivo de este tipo de violencia consiste en poner en crisis la presunta neutralidad de las relaciones sociales y en señalar su precariedad histórica. Sin embargo, cada gesto inscrito en este registro puede quedar atrapado en un acto de negación meramente simbólica y, más recientemente, incluso repetitiva, por lo tanto carente de imaginación. En la actualidad —y no sólo en México—, la práctica de la violencia en las manifestaciones (atacar a la policía, dañar un banco, incendiar un McDonald's) se encuentra desgastada, especialmente cuando no encuentra consenso entre los propios manifestantes. Todo esto quedó patente en las Jornadas de Acción Global por Ayotzinapa que se desarrollaron entre octubre de 2014 y marzo de 2015, y de hecho las acciones del bloque negro se han ido reduciendo.

¹⁵ Javier Hernández Alpízar, “México: violencia, capuchas y anarquismo”, <<https://zapateando.wordpress.com/2013/11/04/violencia-capuchas-anarquismo/>>.

Añado que en los últimos años se ha dado a conocer una corriente internacional conocida como “anarcoinsurreccionalista” o, a veces, como “tendencia informal anarquista”, que plantea un cambio de perspectiva en cuanto a la acción revolucionaria. Limitando su crítica a cuestiones tácticas, su aportación a la reconstrucción del movimiento libertario ha sido modesta. Muy ligada a la figuras de dos compañeros italianos, Alfredo Bonanno y Constantino Cavallieri, esta corriente tiene una fuerte presencia en Grecia y en Italia y, en el ámbito latinoamericano, en Argentina, Chile y México. Figura un tanto donquijotesca, editor comprometido con la difusión del pensamiento libertario, siempre metido en algún proceso conspirativo, Alfredo Bonanno es un viejo militante y agitador que ha sufrido múltiples encarcelamientos. Ha publicado numerosos escritos en los cuales explica que los verdaderos anarquistas deben estar en revuelta permanente pregonando el principio de la “acción insurreccional” a la manera del viejo Bakunin.¹⁶ Las acciones de la tendencia insurreccionalista —expropiaciones, sabotajes, destrucciones de tiendas de autoservicio, atentados contra símbolos del poder y del Estado— han sido contemplados por las masas inconscientes como algo ajeno y exterior. Sin embargo sería injusto no reconocer en el impulso que los ha provocado una auténtica voluntad de combate.¹⁷ Me parece claro, al mismo tiempo, que este tipo de acciones —así como las que pregonan en México la llamada Tendencia Informal Anarquista—¹⁸ se vuelven prácticas vanguardistas que todo son menos “directas”.

¹⁶ Sobre Bonanno véase el sitio: <<http://www.saboteamos.info/2014/01/07/alfredo-bonnano-el-anarquista-a-quien-mexico-prohibio-entrar/>>. Véase también, Constantino Cavalieri, *El anarquismo en la sociedad post-industrial*, <<http://metiendoruido.com/2012/09/anarquia-profesional-y-desarme-teorico-una-critica-al-insurreccionalismo-miguel-amoros/>>.

¹⁷ Véase: Miguel Amorós, “Sobre el insurreccionalismo”, <<http://metiendoruido.com/2012/09/anarquia-profesional-y-desarme-teorico-una-critica-al-insurreccionalismo-miguel-amoros/>>.

¹⁸ Gustavo Rodríguez (compilador), *¡Que se ilumine la noche! Refractarios hasta las últimas consecuencias. Génesis, desarrollo y auge de la Tendencia Informal Anarquista en México*, Santiago de Chile, Internacional Negra Ediciones, 2013.

Vale recordar que —como señala Luis Hernández Navarro en el texto incluido en esta edición— las acciones violentas que se están generalizando en el movimiento social no son monopolio de los anarquistas. En Guerrero, los actos que se han registrado después de la noche de Iguala (incendio de sedes de partidos políticos, del Congreso, etc.), fueron cometidos por individuos y corrientes que difícilmente podrían definirse anarquistas. Al margen de quienes las reivindican, para calibrar su alcance habría que volver a plantear la pregunta de Trautman: ¿lograron debilitar las instituciones represivas? ¿Las reforzaron? ¿Consiguieron sacudir la consciencia política de las masas adormecidas? ¿Obtuvieron el efecto contrario? La respuesta no me corresponde a mí, sino al movimiento social.

Sólo quiero concluir señalando que el dilema entre violencia y no-violencia es, en gran parte, falso. El propio Gandhi, el principal teórico de la no-violencia, afirmó repetidas veces que, aunque la consideraba superior táctica y éticamente a la violencia, la no-violencia no podía ser un dogma, y que, de todas formas, era preferible ser violentos que cobardes. La no-violencia —decía— es una elección válida sólo si es practicada por quienes renuncian a una violencia que *podrían* emplear. Y no es seguramente la práctica del ratón que huye del gato. La no-violencia corre el riesgo de perder su contenido crítico, ya que puede significar abstención, neutralidad o, peor, colaboración. “El fin no justifica los medios”, nos dicen los zapatistas, Y los anarquistas contestan: “hace un siglo y medio que no nos cansamos de repetirlo”. Con o sin violencia, lo esencial es que cada quien encuentre su propio camino. Y es que la revolución es precisamente esto: liberación, apertura de nuevos caminos, movimiento centrífugo, no centrípeto. La acción directa, es decir la acción autónoma de los humanos contra el capital y contra el Estado, es su único camino. Con violencia o sin ella.

TODOS AQUÍ IREMOS DESAPARECIENDO
SI NADIE NOS BUSCA, SI NADIE NOS NOMBRA

X

A
Y
O
T
Z
I
N
A
P
A



Norberto

ANARQUISMO, PROVOCACIÓN Y PROTESTA

Luis Hernández Navarro

En hilera, amarradas con un mecate, de una en fondo, con un letrero escrito a mano que dice infiltrados, 12 personas marchan por paseo de la Reforma. Son hombres y mujeres. Uno dijo ser militar, otro policía; varios son desempleados. Fueron detenidos por los maestros de Guerrero que llegaron a la ciudad de México el 6 de diciembre. Nadie los reconoció como integrantes de colectivos estudiantiles o de maestros. Dijeron que por 200 pesos aceptaron botear en nombre del movimiento magisterial.

No es el único caso de policías y militares que se han infiltrado en las protestas que han sacudido el país en los últimos dos meses. La lista de denuncias públicas sobre estos casos es enorme. En ocasiones los provocadores gubernamentales generan violencia o, vestidos de civil, detienen a manifestantes pacíficos. Por supuesto, las autoridades gubernamentales niegan cualquier responsabilidad en el asunto.

Un video de *Animal Político* captó el pasado 1º de diciembre el momento en que Israel Rodríguez, subdirector de Concertación Política y Atención Ciudadana del Gobierno del DF, lanza un tubo metálico hacia el lugar en el que granaderos y manifestantes se jalonean. El funcionario fue detenido por dos agentes, para a continuación ser liberado por otros granaderos que gritaron: ¡Espérense, es compañero! Ese mismo día *Regeneración Radio* documentó cómo un personaje obeso vestido de civil pateaba a un joven al que granaderos de la SSP mantienen sometido en el suelo, al tiempo que le grita: “¡Vete a la verga, güey, hijo de tu puta madre!”. A pesar de la eviden-

te participación de provocadores gubernamentales en hechos violentos durante las protestas, éstos son achacados por las autoridades y algunos medios de comunicación exclusivamente a grupos de anarquistas y de jóvenes encapuchados.

La infiltración y provocación gubernamentales tienen un sentido. Usualmente, la destrucción de algunas tiendas de conveniencia, vidrieras de oficinas de empresas transnacionales y cajeros automáticos durante una manifestación, y los choques entre manifestantes y policías, reciben más cobertura informativa que los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidos por militares y policías. La presencia masiva de decenas de miles de ciudadanos en las protestas y las demandas que enarbolan pasan a segundo plano.

Además, después de cada incidente de este tipo se levantan voces que exigen mano dura y cumplimiento del estado de derecho. Simultáneamente las autoridades aumentan la presencia de granaderos y policías federales en las movilizaciones. Sin embargo, achacar toda la violencia a infiltrados gubernamentales es incorrecto. Existen grupos de jóvenes radicalizados que reivindican la acción directa callejera contra los símbolos del Estado y el capital. Otros sostienen la legitimidad de la autodefensa. Su actuación en el país es evidente, al menos, desde febrero de 2001, cuando salieron a las calles de Cancún con motivo del encuentro del Foro Económico Mundial.

Esas fuerzas son parte de un movimiento planetario. Actúan con tácticas parecidas en Chile, Grecia, Brasil o Italia. Quienes en nuestro país participan en sus filas se ven como parte de una fuerza antisistémica, internacionalista, contemporánea y genuina, que les da identidad y sentido. Su existencia es un termómetro que mide la rabia que permea en sectores importantes de la juventud.

Forman un archipiélago de grupos de afinidad, federaciones, organizaciones para la acción e individualidades agrupadas para la acción en el Bloque Negro. Encasillarlos como anarquistas es un error. Algunos, como los insurreccionalistas, lo son; pero otros no. También integran esta constelación agrupaciones marxistas o colectivos ecologistas radicales.

Además, otros núcleos anarquistas no sólo no comparten esas formas de lucha, sino que las rechazan. Formados en el

anarquismo histórico proveniente del mundo del trabajo o en el anarcopacifismo, quienes se deslindan del insurreccionalismo optan por otro tipo de intervención política. Dotados de un sentido de solidaridad y cooperación, rechazan la mercantilización de la vida cotidiana y la destrucción del ambiente. Combinan el estudio, la reflexión, el arte y la acción política. Fundan bibliotecas, dan conferencias y se reúnen regularmente. Muchos consideran a la resistencia civil pacífica una forma de lucha importante.

Acusar a los grupos de jóvenes radicalizados de ser infiltrados gubernamentales para deslegitimar la protesta ciudadana es un absurdo y una ofensa. Son lo que son porque así lo decidieron ellos mismos, no por una manipulación estatal. Pero son, también, producto de la precarización generalizada de nuestra sociedad y de la crisis de representación política existente. De hecho, muchos hacen todo aquello que la izquierda partidaria abandonó hace años para dedicarse a organizar elecciones.

Sin embargo, afirmar que no son infiltrados gubernamentales en las luchas no significa justificar su accionar. Desde mi punto de vista, son contraproducentes para el crecimiento, profundización y organización del descontento ciudadano su pretensión de asumirse como vanguardia iluminada al margen de los movimientos sociales; la sustitución que hacen del protagonismo popular por acciones ejemplares minoritarias; el riesgo que sus tácticas de lucha implican para miles de ciudadanos a los que, en lugar de defender, exponen a la represión, y el temor y/o rechazo que sus iniciativas provocan en quienes no comparten sus prácticas políticas en las protestas pacíficas.

Las acciones del Bloque Negro, del archipiélago anarquista y la radicalidad juvenil son realidades políticas inocultables. Más que descalificarlas o ensalzarlas *a priori*, es hora de analizar y debatir su sentido, significado y propuestas.

Originalmente publicado en *La Jornada*,
16 de diciembre de 2014

**¡ POR UN MÉXICO DIGNO!
¡JUSTICIA!
TODOS SOMOS AYOTZINAPA
¡ YA BASTA !
DE IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN**



Norberto

CÁPSULAS PARA SALIR DEL LABERINTO

Enrique González Rojo Arthur

VÁNDALOS GUBERNAMENTALES

No por sabido deja de ser conveniente describir la estrategia que están usando el gobierno federal y las diferentes entidades federativas contra las manifestaciones populares que tienen lugar en la actualidad. Están echando mano, con constante regularidad, de lo que podríamos llamar una *ficción teatral* cuyo propósito es engañar al pueblo. Ésta consiste en infiltrar a grupos de personas encapuchadas —militares o policías vestidas de civil—, otros que ostentan falsa y tendenciosamente el nombre de anarquistas (a los cuales probablemente se suman algunos compañeros extremistas), para cometer actos de vandalismo, con varios objetivos: *a*) desprestigiar una manifestación pacífica sugiriendo que es violenta o que permite que se realicen actos vandálicos, *b*) justificar, por lo anterior, la represión contra la marcha; desmovilizarla, atemorizarla y *c*) aprehender, más que a los infiltrados y ultras que se enfrentan con las policías estatal y federal, a los compañeros que forman parte de la manifestación pacífica. Es, en efecto, una especie de *ficción teatral* que se repite y se repite y que tiene como objetivo no sólo reprimir e inhibir las manifestaciones públicas, como dijimos, sino presentar a éstas ante la opinión pública como expresiones de violencia reprobables y ocultar su significado y sus demandas sociales. Ésta es la razón por la cual las marchas y manifestaciones que se hagan en adelante deben tener, por así decirlo, un *cordón sanitario* que impida ingresar a los encapuchados y supues-

tos anarquistas ostensiblemente armados con palos, bombas, piedras a los contingentes. ¡Mucho cuidado con la *ficción teatral* armada por el gobierno!

25 de noviembre de 2014

SOBRE LA AUTOGESTIÓN

El que esto escribe ha señalado en diversos textos que la esencia de la autogestión, que es la autonomía, implica cuatro “autos”: autoorganizarse, autogobernarse, autovigilarse y autogestionarse. La célula de la autogestión es el comité. El comité —una brigada estudiantil, un consejo obrero, una comuna campesina, etc.— es la libre asociación de los individuos para realizar una o más tareas. La autoorganización presupone que los hombres y mujeres que forman una agrupación la constituyen *motu proprio*. No son la creación de un poder ajeno —el Estado, los partidos políticos, las iglesias, etc.— sino el producto de la voluntad colectiva de asociarse. Conscientes de que el poder que organiza gobierna a los organizados, ellos, al autoorganizarse, tienen la posibilidad de autogobernarse y nacer a la vida política bajo el signo de la autonomía. Como ha ocurrido con frecuencia que un colectivo autoorganizado cae de pronto bajo la tutela de un poder, el comité de marras debe *autovigilarse* para no oír el canto de sirenas de lo ajeno —que pueden prometer dinero, posición, ventajas— y sustituir el autogobierno por el de los otros sobre el colectivo. En otra parte he denominado al comité que asume los cuatro “autos” mencionados célula sin partido o *cesinpa* para indicar que se trata precisamente de un comité que se autoorganiza y autogobierna sin necesidad de un poder extraño sobre él. La autovigilancia es, entonces, la protección permanente de la independencia de la agrupación. Estos cuatro “autos” no tendrían el menor sentido si el colectivo no supiera *autogestionarse* para realizar la gestión o tarea que debe operar como motivación y empeño de la aso-

ciación. De ahí que el autogestionarse es también un factor esencial de la autonomía autogestiva.

30 de noviembre de 2014

CÓMO ORGANIZARNOS EN ESTA LUCHA

Es necesario que el movimiento estudiantil en lucha posea una estructura organizativa pertinente. A continuación enviamos una sugerencia sobre esta forma. Supongamos que una Institución Educativa cuenta con cinco planteles. En cada plantel un Consejo (donde estén representados los estudiantes y de ser posible los maestros y los trabajadores) ha de elegir a tres representantes: un maestro, un alumno y un trabajador (y sus respectivos suplentes) al Consejo del Plantel. El Consejo del Plantel designa al Comité de la Institución Educativa también tres representantes: un maestro, un alumno y un trabajador (y sus respectivos suplentes); con lo cual el Comité de la Institución Educativa tiene quince representantes (y sus respectivos suplentes), y finalmente este último Comité designa tres representantes (y sus respectivos suplentes) a la Asamblea Interuniversitaria.

Observaciones: *a)* en la lucha actual, en muchas instituciones sólo están interviniendo los alumnos. En otras los alumnos y los maestros y, al parecer, en ninguna o casi ninguna los trabajadores. Lo conveniente sería que en todas las instituciones participaran los tres sectores y que lo hicieran bajo las indicaciones organizativas indicadas. *b)* Cada representante, del nivel que sea, puede ser removido en cualquier momento por la instancia que lo eligió, debido a que no cumpla satisfactoriamente su función o porque traicione al movimiento. *c)* Esta forma organizativa se basa en una democracia cognoscitiva, en el sentido de que los representantes han de ser elegidos porque la instancia reconoce su capacidad para cumplir las tareas que se le encomiendan. *d)* Esta forma organizativa no solamente ha de ser una democracia representati-

va, sino participativa, entendiendo por tal que el representante no sólo debe estar informando y dialogando constantemente con la base que lo eligió, sino, en los asuntos graves, deliberar de nuevo con su base y tomar acuerdos con ella. e) Esta estructura organizativa, que es una democracia centralizada en que los representantes mandan obedeciendo, debe asumirse como un ideal organizativo. En ocasiones no puede cumplirse cabalmente con sus disposiciones, por la coyuntura que se vive; pero debe tenderse a realizar lo más pronto y lo mejor posible su planteamiento.

7 de diciembre de 2014

AYOTZINAPA HA ARTICULADO LOS MÚLTIPLES ATROPELLOS QUE HA SUFRIDO EL PUEBLO MEXICANO

Desde que se entronizó en nuestro país el neoliberalismo, los atropellos, agravios y despojos al pueblo de México se han multiplicado sin tregua. Antes de Ayotzinapa y Tlatlaya, las protestas eran particulares y sectoriales, y casi todas tenían un flujo y un reflujo-extinción, aunque quedaban en el inconsciente colectivo como agravios impunes, sin respuesta. Ahora, debido a la desaparición y probable exterminio de los 43 —ahora 42— normalistas rurales, las masacres, crímenes de lesa humanidad y genocidios se han ido articulando en el imaginario popular hasta formar la percepción correcta de que estamos frente a un Estado represor, tolerante con los criminales y profundamente infiltrado por el narcotráfico. Al arribar a esta conclusión, en el pueblo consciente ha empezado a generarse, sin que ello implique olvidar nunca Ayotzinapa, una sola demanda, que ha ido de menos a más y que consiste en la exigencia de que renuncie Peña Nieto y haya un cambio de régimen.

10 de diciembre de 2014

CADA DÍA NOS ACERCAMOS MÁS A LA INGOBERNABILIDAD

El síntoma más claro de que estamos aproximándonos a una plena ingobernabilidad es la enorme desconfianza que tienen los mexicanos en las instituciones. El pueblo siente que los tres poderes del Estado y las entidades federativas, los partidos políticos, las Comisiones de derechos humanos, etc., lejos de representar sus intereses, se hallan al servicio del régimen oligárquico que nos gobierna, de las transnacionales y del imperio. El hecho de que la infiltración del narcotráfico y la delincuencia organizada se dé en los tres niveles del gobierno —y no sólo en los municipios— habla del mencionado proceso creciente de ingobernabilidad. ¿Cómo combatir la corrupción y hacer frente a la continua violación de los derechos humanos, si el gobierno, en medida mucho más grande de lo que se sospecha, está infiltrado por los cárteles de la droga? La gran fábrica de pobres que es el neoliberalismo ha provocado que millones de trabajadores emigren a Estados Unidos, que se genere una economía informal (que escapa a todo gravamen) y, lo que es peor, que pase a formar parte del crimen organizado. Ante estos hechos, la incapacidad de gobernar del poder ejecutivo actual se hace visible en grado extremo. A lo anterior hay que añadir las llamadas "reformas estructurales" que buscan —y ya lo están logrando— vender al extranjero la potencialidad energética del país, perjudicar a los trabajadores y destruir la soberanía nacional. Pero hay algo más: la situación del país, desde el punto de vista económico, no cesa de deteriorarse como lo evidencian un crecimiento casi nulo, la caída del peso ante el "super dólar", el derrumbe de los precios del petróleo, etc. Todo ello hace alusión —para no hablar de la ignorancia, las torpezas y la corrupción de Peña Nieto y su esposa— de la incapacidad del gobierno de llevar por buen rumbo la nave del país. Añadamos, por último, que el descontento popular por lo ocurrido en Tlatlaya y Ayotzinapa ha generado un movimiento de tal envergadura que, sumado a todo lo anterior, nos hace concluir en que vamos directamente a una plena ingobernabilidad. Frente a todo esto, no hay otro camino que el de exigir

la renuncia de Peña Nieto y pugnar por un cambio verdadero —no de fachada— de régimen político.

11 de diciembre de 2014

POSIBLES ACCIONES DEL GOBIERNO ANTE LA FUERZA ASCENDENTE DEL MOVIMIENTO

Ante el vigor del movimiento social surgido a partir de los dolorosos hechos de Ayotzinapa, el gobierno federal puede reaccionar de las siguientes maneras: *a)* apostarle a que el movimiento se debilite y desaparezca, mientras las autoridades, llevando a cabo pequeños cambios, continúen haciendo lo que han hecho hasta ahora: tratar de sortear la crisis manejando repetidamente su versión de los hechos, puesta en duda cada vez más por los padres y la sociedad en su conjunto. *b)* Hacer cambios significativos pero inocuos: remover de sus puestos a altos funcionarios, ubicarlos en diferentes puestos, crear comisiones que supuestamente ayudarán a solucionar los problemas, etc. *c)* Reprimir al movimiento. En este punto hay que subrayar que existen dos tipos de represión: una que inmovilice y aplaste definitivamente la protesta (como en 1968) y otra, selectiva, contra individuos y grupos. *d)* Hallarse en la necesidad de prescindir de Peña Nieto por no servir ya a los intereses de la oligarquía y el imperio, y seguir el procedimiento que marca la ley para su remplazo.

En todos los casos, el gobierno probablemente no va a conseguir su propósito. En la primera alternativa se fracasará porque Ayotzinapa ha articulado los múltiples atropellos que ha sufrido el pueblo mexicano, lo cual ha dado lugar a un fuerte movimiento en ascenso. En el segundo caso el gobierno no tendrá éxito por idénticas razones. En el tercero, somos de la opinión de que la represión, sea de un tipo o del otro, lejos de atemperar la lucha la enardecería como cuando se echa leña al fuego. En la última tal vez tampoco el gobierno logre su finalidad, ya que el movimiento está consciente de

que un cambio de persona no resuelve los problemas estructurales y de fondo.

14 de diciembre de 2014

CÓMO CONTINUAR EL MOVIMIENTO

El gobierno ha decidido dar carpetazo al caso de Ayotzinapa a pesar de la incredulidad general que su versión, la misma en lo esencial desde un principio, sigue generando no sólo en los padres de los muchachos desaparecidos sino de un sector muy amplio de la sociedad civil. ¿Puede hacerlo? La respuesta está en el carácter, vigor y amplitud del movimiento. Si el movimiento flaquea, si mete freno y se deja ganar por el desánimo, esto es, si decrece paulatinamente y por último aborta, el gobierno se saldrá con la suya. Si en vez de recular, va hacia adelante y se profundiza, la situación se agravará y, al calor de la crisis, podrán surgir posibilidades de cambio inéditas.

¿Qué es lo prioritario en este momento para que el movimiento lejos de estancarse y decrecer, avance y se vigorice? Varias respuestas flotan en el aire: se habla del boicot electoral, de autoorganizarse en todas partes, de exigir al ejército la posibilidad de visitar sus cuarteles, de la formación de un gobierno de salvación nacional, de la organización de un Constituyente como el del 17 y de marchas, paros, denuncias, etc. Todos estos puntos tienen sentido, pero deben organizarse y jerarquizarse de acuerdo con un plan de acción que responda a las condiciones actuales. Todos los puntos mencionados son parte, me parece, de la misma estrategia, pero ésta tiene una *conditio sine qua non*: la huelga general. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento no sólo ha de continuar demandando el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala, sino que debe preparar, organizar desde ahora una huelga general. Cuando antes se hablaba de huelga general se pensaba en una huelga obrera fundamentalmente sindical. Ahora tiene un sentido diverso: se trata de una huelga *inicialmente* del sector educa-

tivo, acción que ha de hacer un llamado a los otros sectores obreros, campesinos, urbano-populares que se vayan adhiriendo al movimiento. Muchos de ellos, por lo demás, ya están en pie de lucha. La huelga general ha de ser preparada con marchas escalonadas y por regiones, con paros (activos) escalonados y por regiones, con un llamado general a autoorganizarse y autogobernarse en comités de lucha. El movimiento no puede convertirse en factor de cambio si no promueve la huelga general y la huelga general no es posible sin un amplio proceso de autoorganización social. Es importante subrayar que no es conveniente llamar a la huelga general cuando no han surgido las condiciones posibilitantes. Es un peligro enorme los llamados prematuros a ella. La huelga general, por lo menos en su ejercicio incipiente, es la condición esencial para que los puntos esenciales del plan estratégico de que hablaba puedan realizarse.

20 de diciembre de 2014

SOBRE LA CAÍDA DE PEÑA NIETO

Si y sólo si el movimiento social que tiene lugar actualmente en México sigue en ascenso y más aún si aumenta en intensidad, es no sólo posible sino probable la caída de Peña Nieto. La renuncia de éste a la presidencia de la República se debería a que los llamados poderes fácticos, la clase política dominante, el gran capital y, desde luego, el gobierno estadounidense, juzgaran a Peña como alguien que ya no sirve a sus intereses por el cúmulo de problemas que suscita su presencia en el Poder Ejecutivo y que conviene deshacerse de él. Si esto ocurriera, el Poder Legislativo nombraría a un presidente sustituto para estar al frente del gobierno durante los cuatro años que restan del sexenio. No hay la menor duda de que los legisladores nombrarían a una persona de igual calaña que Peña Nieto y las cosas quedarían en esencia sin ninguna modificación profunda. El movimiento social debe ser consciente de ello y lo peor que pudiera ocurrir es que la

renuncia de Peña acarrear la desmovilización de la lucha. Ojalá el movimiento pudiera fortalecerse, afinar su táctica y su estrategia y luchar por que en los cambios que requiere el país la sociedad civil interviniera de manera decisiva. Si hay que cambiar por ejemplo algunos artículos de la Constitución para que la designación del presidente sustituto no se haga única y exclusivamente por arriba, habrá que esforzarse para lograrlo. Por eso el movimiento no debe ser sólo de estudiantes y profesores sino de trabajadores, campesinos, indígenas y todos los agraviados y marginados, ya que el sistema es el causante de esta crisis global que vive nuestro país.

21 de diciembre de 2014

¿UN NUEVO CONSTITUYENTE?

El llamamiento a crear un Constituyente ciudadano-popular que se llevó a cabo en el Centro Universitario Cultural (aniversario de la Constitución de Querétaro) me parece una excelente idea y creo que todos los que aborrecemos lo que está ocurriendo en nuestro país deberíamos adherirnos a él. Si añadimos a las causas que tienen hundido al país, los casos abominables de Ayotzinapa, de Tlatlaya y la infiltración del narcotráfico en todos los niveles del gobierno, la conveniencia de realizar dicho Constituyente es más perentoria que nunca. Me parece importante, sin embargo, hacer notar que dicho esfuerzo, aun suponiendo que tenga buen éxito, no podrá lograr por sí solo el desplazamiento del mal gobierno que tenemos. Se dice que hay dos y sólo dos vías para dejar atrás el sistema que nos rige: la lucha armada y la electoral. Unos afirman que como la pugna electoral no es sino un mero espectáculo teatral organizado con sumo cuidado por el régimen priísta, no queda otro camino que la lucha armada. Otros son de la opinión de que como esta última carece de viabilidad ya que el gobierno —asociado al de Estados Unidos— goza de un poder militar enorme frente a un pueblo inerme en lo fundamental y en donde una guerra civil no posee la menor simpatía

entre la sociedad civil, no hay más ruta que la de la contienda electoral. Hay además otra posición, que se autoconsidera escéptica: las dos formas mencionadas no conducen a un verdadero cambio y, por tanto, estamos condenados a seguir padeciendo el podrido régimen en que nos ha tocado vivir. Este escepticismo le viene como anillo al dedo al régimen, porque sus partidarios simplemente se abstienen de hacer algo y el poder, muy complacido, se frota las manos. Las acciones que los partidarios del Constituyente originario vayan emprendiendo para “refundar la nación”, van a chocar necesariamente con un sistema inamovible que, argumentando su supuesta legalidad y legitimidad, no permitirá que aquél nazca con el propósito de suplantarlo. La idea del Constituyente primario debe fundarse, a mi entender, en una fuerza material que le permita ir más allá de una nueva organización de lucha. Como esta fuerza material posibilitante del cambio no puede ser, de acuerdo con los promotores del mencionado Constituyente y de muchos otros, ni la lucha armada ni la lucha electoral, parece que se está tejiendo en el vacío. Pero no, porque hay una posible tercera manera de transformar un régimen: la huelga general. Esta última —que no tiene nada que ver ni con lo electoral ni con la violencia armada— es la forma superior de la desobediencia civil. Si y sólo si los partidarios del nuevo Constituyente, además de otros muchos sectores de la sociedad civil, son al mismo tiempo los promotores de la cuidadosa preparación de la huelga general y, por tanto, de la fuerza material capaz de desplazar al enemigo, estaremos en posibilidad de refundar la nación.

10 de febrero de 2015

MORENA Y LAS ELECCIONES EN GUERRERO

A reserva de tratar de manera más detallada el tema de la conveniencia o no de llevar a cabo el boicot electoral en los próximos comicios, es necesario insistir en que las elecciones intermedias y sexenales son una pieza esencial del régi-

men. La práctica electoral no es antisistémica, sino muy por lo contrario es el mecanismo idóneo y mejor aceitado de reproducirse la formación capitalista y neoliberal que nos rige. Se puede aducir que en algunas partes del país, por ejemplo en la ciudad de México, es necesaria una práctica reformista para impedir el paso a la derecha, lo cual parece acertado. Pero hay otros sitios —de manera elocuente el estado de Guerrero— donde la voluntad popular está desbordando el reformismo sistémico y promoviendo una vigorosa lucha centrada en el boicot electoral. Allí el pueblo, los de abajo, han decidido rechazar la “democracia representativa” como la entienden los de arriba y oponer a la heterogestión gubernamental la autogestión de los de abajo y a la izquierda.

Los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos forzosamente dicen: “Si no nos devuelven vivos a nuestros hijos, si no nos informan en verdad qué pasó con ellos y si no se castiga a los culpables, boicotearemos las elecciones en Guerrero”. También dicen: “No vamos a votar, además, ya que los candidatos de los diversos partidos que pretenden participar en la contienda pueden estar vinculados con el narcotráfico”. Como es lógico, los partidos de Estado harán todo lo posible —con el INE a la cabeza— para que haya elecciones en Guerrero. El triunfo del boicot electoral en esta parte de la República traería consecuencias negativas impredecibles para el gobierno peñista.

Mas ¿cuál va a ser la actitud de Morena, un partido que se presenta, si no como antisistémico, sí como democrático en serio y enemigo de la oligarquía en el poder? Se dice que ya tiene candidato y que la justificación que da para su intervención electoral en Guerrero es la de siempre: atajar a la derecha. Pero si continúa por esta línea, va a contraponerse no con el PRI, el PAN o el PRD —con los que competirá “en buena lid” electoralmente— sino con el pueblo, con un pueblo que le exige al Estado que diga la verdad y que, al no lograrlo, asume formas de lucha antisistémicas como es la autoorganización, el autogobierno y, claro es, el boicot electoral. Si Morena interviene con candidatos a la gubernatura y a los municipios en Guerrero traiciona al pueblo. Por eso creo que debe abstener-

se de hacerlo en este estado. Si tomara este camino, no sólo respetaría la decisión popular de los guerrerenses, sino que tendería un puente con la izquierda social del país. Si no lo hiciera, se desprestigiaría enormemente ante el pueblo en lucha y se colocaría en el mismo nivel de los partidos de Estado.

24 de febrero de 2015

REFLEXIONES SOBRE EL MÉXICO DE HOY

Cada vez se ahonda más la enorme distancia existente entre los de arriba y los de abajo —sobre todo los que se ubican abajo y a la izquierda— en nuestro país. En muchas regiones de la República ya no existe la vieja dicotomía de gobernantes/gobernados sumisos, sino que impera y tiende a acrecentarse la antítesis gobernantes/gobernados en lucha o, por lo menos, hermanados en una gran desconfianza por el sistema, sus instituciones y sus partidos políticos.

Los movimientos antigubernamentales surgen invariablemente a partir de una motivación (un repertorio de descontentos) y tienen un *flujo* (la rebeldía se halla en ascenso, presenta un carácter ofensivo y puede convertirse en peligro de mayor o menor relieve para los de arriba) y un *reflujo* (la protesta empieza a frenar, se pasa de lo ofensivo a lo defensivo y los gobernantes —que hacen todo lo posible para coadyuvar a esta desaceleración— ven gustosos alejarse el peligro).

Es de subrayarse que los movimientos contestatarios tienen un carácter *histórico* o sea que su dinámica está determinada no sólo por la voluntad de lucha, sino por la coyuntura y la conformación sociopolítica prevaleciente en un espacio particular (geográfico) y en un tiempo específico (momento que se vive). En el México actual, los ultrajes o los atropellos de todo tipo por parte de los gobernantes —para no mencionar el narcotráfico— se suceden con cierta regularidad: apenas ocurre un agravio, cuando se inicia otro: de ahí que al reflujo de una expresión de descontento se articula el flujo de otra, y la protesta de la primera se traslada en parte a la

segunda. Para no hablar sino de la historia reciente: a la imposición de las “reformas estructurales” —verdadera tropelía contra los mexicanos— sucedió la tragedia de Tlatlaya, a esta última le siguió la innombrable de Ayotzinapa, a la de Ayotzinapa el atraco contra la libertad de expresión en el caso de Carmen Aristegui o los sueldos de hambre de San Quintín, y muy pronto nos encontraremos con el problema de la Ley de Aguas.

El gobierno actual peñista no puede gobernar sin afrentar a su sociedad civil: dados los intereses empresariales mexicanos y extranjeros que defiende, gobierna a manotazos. Al calor de uno de esos furibundos golpeos infligidos por un gobierno (que es, en alguna medida, un narco-Estado y que se halla uncido al imperio) podría surgir un movimiento inédito que articulara en su motivación el cúmulo de ofensas perpetradas contra el pueblo durante décadas, y que emergiera con la capacidad de cambiar radicalmente la situación política dominante. Para que este insospechado movimiento pudiera hacerse realidad, habría que llevar a cabo tres tareas esenciales: *a)* la autoorganización y autogobierno de los de abajo o, si ya existe en algunas partes, pugnar por su confluencia y unidad, *b)* idear el contenido, carácter y forma organizativa del nuevo Constituyente y *c)* el cúmulo de tareas para llevar a cabo, en el momento oportuno, una huelga general de nuevo tipo. Esta forma de lucha tendrá que discutirse, analizarse y organizarse en la agrupación de los de abajo; ha de ser una de las finalidades de las marchas que serán un medio para elevar el nivel de lucha social y no un fin en sí mismas, debe ser el tema de revistas, panfletos, foros de todo tipo, etc. La huelga general no se improvisa y no hay nada peor que una huelga general abortada.

¿Por qué una *huelga general*? ¿Por qué una acción cuya demanda central sea la destitución de mandato? Porque, siendo el objetivo fundamental de la lucha social en este momento la conformación de un nuevo Constituyente, surgido de un movimiento nacional que se autoorganiza y se autogobierna, ello no sería posible sin el estallido de un profundo descontento generalizado y sin esa herramienta de lucha. Sin un *poder*

material que desplace al sistema constituido no es posible un congreso Constituyente, ya que su gestación presupone necesariamente la deconstrucción del régimen imperante.

Aun suponiendo que haya un movimiento organizado que conforme un congreso originario en que prevalezcan los intereses de los de abajo, tal institución no podrá legalizarse y regir a nivel nacional, si no se desplaza el régimen antipopular que nos rige. Este desplazamiento necesarísimo no puede llevarse a cabo ni mediante la lucha armada —el poder militar de los de arriba es enorme y se basa además en la asociación con los imperialistas— ni por medio de la pugna electoral. Las elecciones periódicas son en realidad el procedimiento demagógico (creador permanente de expectativas) por medio del cual se reproduce sin cesar el poder, el sistema capitalista en su modalidad neoliberal. Y en el México de hoy, no existe la menor posibilidad de que una oposición verdadera desplace al gobierno. La única manera de llevar a cabo tal desplazamiento, sin caer en la lucha armada ni en el sueño de un sufragio libre y democrático, es la huelga general que tiene como su esencia negar, desmovilizar, tornar ingobernable el poder público. Conviene reflexionar sobre las características que tendrá que poseer esta huelga general de nuevo tipo:

1. No va a ser de composición sustancialmente obrera ni campesina en su comienzo (como las huelgas generales del pasado en diversas partes del mundo) dado el sojuzgamiento en nuestro país de los proletarios y los campesinos pobres a las burocracias sindicales corruptas.
2. Será más que nada en su inicio un paro generalizado magisterial, estudiantil, universitario.
3. También abarcará —y esto es muy importante— a trabajadores de la circulación y los servicios que no sólo se hallan oprimidos por los patrones de sus respectivos giros, sino que están franca y decididamente explotados.

Si, a partir de la debida autoorganización de los sectores mencionados —sobre todo del magisterio y los estudian-

tes—, se lograra lo anterior, es probable arrastrar a los obreros y campesinos quienes romperían con sus dirigencias oportunistas y se solidarizarían con el movimiento impugnador. El principio de la lucha electoral, que es parte del sistema —y no un medio para superarlo— sólo puede y debe ser trascendido si y sólo si existe un movimiento orgánico ascendente o sea una rebelión autogestiva nacional de los de abajo que se proponga cambiar el régimen y que utilice como herramienta la huelga general que puede realizarse, como una revolución, en diversos actos.

La vinculación de la huelga general y el boicot electoral generalizado constituirán el *poder material* indispensable para desplazar el poder constituido y estar en posibilidad de llevar a cabo un nuevo Constituyente. Si no se logra conformar este movimiento orgánico ascendente a nivel nacional o, lo que tanto vale, si no se logra estructurar un movimiento transformador con claridad programática (nuevo Constituyente antisistémico) e instrumento material transformador (huelga general), el llamado a no votar —si tuviera éxito— saldría contraproducente, ya que llevaría al sector más derechista de la burguesía —PRIAN y PRD— a ganar en todas partes y en todos los niveles. Los partidarios incondicionales del boicot electoral arguyen dos cosas:

Primera: que “lo mismo es el pinto que el colorado”, es decir, que son iguales el PRI, el PAN, el Partido Verde, el PRD, Morena, etcétera.

Segunda: que votar es legalizar. Y que la abstención deliberada es retirarle la legalización a los supuestos representantes del pueblo.

En relación con el primer punto, es importante subrayar, coincidiendo en cierto nivel con los partidarios del boicot, que todos los partidos, sin excluir a Morena, participan de la misma esencia: son partidos del sistema (capitalista). Pero hay un matiz diferencial que no es posible dejar de lado. Mientras todos los partidos son suscriptores de hecho del neoliberalismo —incluyendo el PRD que colaboró con el PRIAN en el Pacto por México—, Morena ha tenido buen cuidado en deslindarse de esta vía, y sus representantes para los diversos

puestos públicos en las elecciones por venir traen consigo un sesgo reformista que no puede ser soslayado. En lo que alude a la segunda cuestión, es de notarse que, para el poder existente, es mucho más importante el incremento del voto a su favor que con el boicot se les entrega, que la acusación de ilegalidad o ilegitimidad que el rechazo a las urnas pretende conquistar. ¿Cuál es, entonces, la línea a seguir en las condiciones actuales? Intentaré responder a este interrogante con un juicio no categórico, sino hipotético. *Si, y sólo si*, en efecto, conformamos un movimiento organizado —en que nuestros representantes manden obedeciendo—, que levante como *idiarium* la creación de un nuevo Constituyente o pacto social y que emplee todas las formas de desobediencia civil incluyendo los paros activos y la huelga general, *entonces* se deberá hacer un llamado general al boicot electoral para arrebatarse al poder su inapreciable instrumento para reproducirse sin cesar y hacerlo en apariencia con la venia de los de abajo. Si, por desgracia, no acaece lo anterior —o se tarda demasiado en ocurrir—, el boicot electoral favorece al sector más reaccionario del sistema. Esto me lleva a la consideración de que, si es el caso, la gente progresista debe votar por Morena en todos aquellos lugares donde puede ganar o ganar algo (como en la ciudad de México). Hay una excepción: el estado de Guerrero, donde el pueblo se ha autoorganizado, se halla en lucha y en donde los padres de los muchachos de Ayotzinapa hacen el muy justo planteamiento de que no debe haber elecciones en dicha entidad federativa, entre otras razones, mientras no sepan lo sucedido con sus hijos. Si continuamos considerando la posible inmadurez del movimiento en pro de la gestación del nuevo pacto social, votar por Morena en todos los sitios en que puede triunfar; con el objeto de ponerle obstáculos a la derecha donde sea dable, no implica abandonar la lucha por formar el movimiento orgánico a favor del nuevo Constituyente y de preparar la huelga general en el sentido en que lo he dicho anteriormente. Si lograra irrumpir el mencionado movimiento orgánico y hubiera condiciones para pasar a una forma más profunda de lucha, quienes votemos por Morena —tomando en cuenta las razones

ya dichas—, nos sumaríamos al boicot electoral, ya que somos conscientes de que esta acción encarnaría un procedimiento efectivo para arrebatarle al poder una práctica que le es indispensable para su supervivencia. Una última observación: los diversos polemistas sobre las opciones de *necesidad de votar* o *boicot electoral*, las presentan como un dilema tajante y sin términos medios, lo cual es un planteamiento erróneo y metafísico. Como se muestra en este escrito, es posible trabajar, según las condiciones y el momento, en ambas pistas, aunque acabe por imponerse una. Ojalá que sea la que va por el lado de un cambio radical del sistema abyecto y denigrante en que vivimos.

5 de abril de 2015



ECUACIÓN NEOCOLONIAL



CHIRÍN

AYOTZINAPA Y LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS

Rafael Miranda Redondo

*La emergencia de un espacio público
significa que un ámbito público es creado,
que “pertenece a todos” (ta koina).
Lo “público” deja de ser un asunto
“privado” del rey, de los curas,
de la burocracia, de los hombres políticos,
de los especialistas, etcétera.*

Cornelius Castoriadis

Ante el crimen abominable de Iguala surgen interrogantes respecto a los culpables y respecto a la lucha de los familiares de los desaparecidos y de los amplios sectores de la sociedad mexicana que los apoyan, para esclarecer los hechos y hacer justicia. De manera inesperada, hemos asistido a la emergencia de un cuestionamiento radical con respecto a las instituciones del Estado y en algunos casos se ha planteado la creación de un proyecto social en donde esos actos de barbarie no tengan cabida. Sin dejar a un lado la indignación y el coraje, las numerosas marchas de los meses pasados han sacado a la luz una añeja crisis de sentido respecto a la sociedad existente, crisis que con anterioridad había sólo nutrido la indiferencia y el desencanto. En esta ocasión, sin embargo, gran parte de la población no ha dudado en culpar a todos los niveles de gobierno, a los cuerpos policiacos, al ejército, a la Procuraduría General de la República, a los gobiernos extranjeros y a los organismos internacionales que han, jubilosamente, apoyado las políticas del gobierno del presidente Peña Nieto.

UN RESPIRO

Sin perder de vista la urgencia de responder con acciones a todas esas interrogantes, hay un nivel de análisis, de los acontecimientos y su contexto que ha sido sólo marginalmente abordado y que nos proponemos ilustrar en las líneas a continuación. En efecto cuando señalamos la existencia de una crisis de sentido, la apatía respecto a la cosa pública y el desencanto, cuando no la masificación del clientelismo de importantes sectores de la población, hemos querido llamar la atención sobre ese nivel de análisis en el que los acontecimientos se presentan como la última manifestación de una extendida cultura de la simulación. Cultura compartida en importante medida por quienes dirigen y quienes ejecutan en todas las esferas de la sociedad mexicana.

Dicha cultura nos remite necesariamente a la dimensión imaginaria de la sociedad y en el caso particular del tema del que se ocupa el presente artículo, el abordaje de dicha cultura y su explicitación, aspira a dar cuenta de los aspectos que, en el movimiento actual en torno al caso Ayotzinapa —un potente analizador— nos remiten a la sociedad que queremos. Aspectos que nos hablan de la sociedad que queremos pero también, todavía, de aquellos rasgos que, en las filas del mismo movimiento, nos remiten a la sociedad que engendró ese crimen repulsivo.

Para asumir el propósito de dar cuenta de la centralidad de la dimensión imaginaria de la sociedad, como la entiende Cornelius Castoriadis, con el objeto de entender los procesos que la sociedad mexicana está viviendo en este momento, anoto algunas cuestiones conceptuales.¹ Enseguida doy algunas informaciones de contexto que me parecen importantes para poder sopesar el alcance del movimiento actual en torno al caso Ayotzinapa, recurriendo a una anotación somera —en calidad de *testigos*—, de algunos aspectos del movimiento del 68 en México, en Francia, del movimiento del 77 en

¹ Cornelius Castoriadis, *La institución imaginaria de la sociedad*, Buenos Aires, Tusquets, 2007.

Italia y del llamado “destape” en España.² Finalmente doy una semblanza de aquellos aspectos que, implícita o explícitamente, dan cuenta de *la sociedad que queremos*.

Sin ánimo de hacer sobrevuelos salvajes de una situación concreta a otra, mi intención es deslindar aquellos aspectos que, en el movimiento actual, como ocurriera en esos movimientos que retomo a título de testigos, repito, nos remiten a lo dado, lo existente y aquellos que emergen en el sentido de lo posible.

SIMULAR PARA OCULTAR EL CONFLICTO

Para empezar me permito una digresión de orden teórico. Al vincular en líneas anteriores la práctica de la simulación con la dimensión imaginaria de la sociedad, la referencia es directa a la institución que cada sociedad se da a sí misma. La simulación como práctica remite a sociedades que, al vincular la institución propia con aquello que siempre ha estado ahí, ocultan el conflicto diferenciándose radicalmente de sociedades en las que la institución propia es vinculada con lo que los hombres y las mujeres concretos han creado y por lo tanto es, como éstos, perecedera. La simulación sería un punto intermedio en el que no se concede legitimidad a la institución de la sociedad de la que se es parte, pero tampoco se asume la exigencia de cambio derivado de ese carácter obsoleto de aquello que está en el propio origen.

Ese primer deslinde de dos maneras como la dimensión imaginaria de la sociedad —la relación entre lo instituyente y la institución— se precipita históricamente en sociedades concretas, me permite dar contexto a la elección que hago para abordar la cuestión de la transformación social, para el caso de la sociedad mexicana. Digamos que hay sociedades que no sólo conciben la transformación de las instituciones que están en su origen sino que también valoran positivamente dicha transformación. Para estas sociedades la institución

² También llamado “la movida”.

propia es el resultado de la autoalteración por la sociedad misma. Otras sociedades al percibir la transformación como una amenaza la niegan, refugiándose en la repetición de lo existente.

Lo anterior no conlleva la carrera por lo nuevo como algo “bueno” *per se* ni el descarte de “lo viejo” como algo malo por naturaleza. Dicha distinción entre sociedades sólo nos permite dar cuenta de la relación distinta —explícita en un caso e implícita en el otro—, que se establece con la institución propia. Todas las sociedades se autoconstituyen, es decir se autotransforman, pero algunas lo hacen de manera explícita y la gran mayoría lo hace de manera implícita.

Al referirnos a las sociedades que ocultan el conflicto no sólo hacemos referencia a las sociedades religiosas, como ejemplo por excelencia de sociedades *de repetición*, también ello nos remite a aquellas sociedades en donde las “leyes del mercado”, la costumbre, el designio de los antepasados, la infalibilidad de lo que los filósofos llaman “determinidad”, es decir una manera de entender la historia y sus supuestas “leyes” como una sucesión de hechos incuestionables e infalibles, están por encima del hacer de los seres humanos concretos.³ Sociedades en las que la transformación de facto, en lugar de ser un aspecto del dominio público, es ámbito de control de representantes, expertos y líderes carismáticos. En el caso de estas sociedades el propósito de ocultar la contradicción y el conflicto —ocultar al otro como otro, a la alteridad, también “asimilándolos”— encuentra un capital sin precedentes en una *simulada continuidad entre lo que se hace y lo que se dice*.

Lo contrario a esa simulación, que hace posible decir una cosa y hacer otra, es una de las constantes que hemos visto emerger como legítima reivindicación de amplios sectores

³ La determinidad es la postura referida al *ser de las cosas* que profesa, desde la teología racional inaugurada por Platón —pasando por Hegel y Marx por supuesto—, que todo *lo que es*, es determinado, ocultando y oponiéndose así a la noción de creación, *poiesis*, como facultad del imaginario que hace emerger nuevas formas y que asume la alteridad radical.

de la sociedad mexicana en los últimos meses. Dicha constante, a pesar de convivir con aspectos que remiten a la sociedad existente, también da cuenta de una *sociedad otra* en la que los actos de barbarie, como es el del caso de Ayotzinapa, estén excluidos. Es pues ese renovado rechazo a seguir simulando lo que me parece más significativo respecto a lo que denomino en estas líneas *la sociedad que queremos*. A diferencia del capital, el Estado —como institución del poder político separado—, o la burocracia que son del orden de lo dado, la negativa respecto a la simulación, más allá del simple anticapitalismo,⁴ nos ha puesto en la carrera de aquello que vendrá a ocupar el lugar de lo que hoy existe.

Reconocer la enseñanza en este sentido de experiencias de movimientos que tuvieron lugar en otros momentos y en otras latitudes, me parece que es, en nuestro contexto mexicano y más en general latinoamericano, una asignatura pendiente. Asumir dicha asignatura, lejos de reivindicar un modelo, cualquiera que éste sea, tiene como propósito el de acceder a una dimensión negada de los procesos de transformación. Negación que remite a la imagen pública de la simulación como cultura y que, desde una postura analítica de la institución, nos habla de la manera como la dimensión imaginaria de la sociedad es el lugar en donde la repetición de las formas dadas, así como su transformación radical, tienen lugar.

EL INSTITUYENTE EN ACTIVO

El movimiento del 68 en México ha sido ampliamente documentado en sus aspectos más formales, menos son los estudios que han abordado los cambios que ese movimiento trajo para la sociedad mexicana. Sabemos que no se trataba de un movimiento sólo estudiantil —tampoco de un movimiento

⁴ Recordemos que este anticapitalismo fue una posición compartida por los más diversos personajes en la historia reciente, incluyendo los tristemente célebres Stalin y Pol Pot, y que esa posición es hoy igualmente profesada por el Estado Islámico.

limitado a las fronteras de México—, no obstante ese elemento dio los términos de referencia de la movilización. En un primer momento surge a la vista una paradoja, al menos desde el punto de vista de las posturas marxistas ortodoxas que desde entonces han prevalecido en la cultura oficial *de izquierda* en el país, que consiste en que quienes levantaron su voz en esa época no era la clase obrera en sentido estricto sino “los jóvenes”. Primer elemento cuyos efectos para dicha cultura han sido de proporción, a pesar de la simulación en contrario. En efecto si bien el movimiento declaraba sus simpatías por la Revolución cubana y en ese acto asumía las posturas del tercermundismo que había sustituido al proletariado por el campesino pobre del “tercer mundo” como “sujeto revolucionario” —en una operación de indigencia teórica sin precedentes—, su extracción no correspondía ni a la clase obrera en sentido estricto, ni al campesinado.

El movimiento del 68 en México fue un movimiento esencialmente urbano de jóvenes de la capital del país contra el autoritarismo del gobierno, que reivindicaba el derecho a manifestarse, el cese de la represión, la autonomía universitaria y la democratización de la educación, a lo que vendría a agregarse la libertad de los presos políticos. La supresión del delito de “disolución social” del Código Penal Federal así como la disolución del cuerpo antimotines de “granaderos” y la destitución de los jefes policiacos, se sumaban a los reclamos. El movimiento, después de registrar indicios claros de infiltrados violentos por parte del gobierno y con la participación consistente de francotiradores también de esa proveniencia, sería brutalmente reprimido el 2 de octubre en la tristemente célebre matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Hasta el día de hoy no se sabe el número de víctimas mortales.

El recuento en las líneas anteriores únicamente sugiere lo que ocurría en aquello que daba sentido a la movilización, como en el caso francés y estadounidense —el japonés lo conocemos menos—, el 68 mexicano era una toma de posición libertaria frente a una sociedad muy tradicional y muy católica. Las instituciones sobre las que reposaba esta sociedad, la

familia, la autoridad paterna, el rol de la Iglesia, la escuela, la sexualidad negada, el presidencialismo vendrían a ser fuertemente puestas en entredicho. Es en ese entonces cuando, en consonancia con las prácticas contraculturales del movimiento a nivel mundial y como método efectivo para mitigar la inhibición respecto a la sexualidad, se populariza en el país el consumo de marihuana y de otros psicotrópicos, producidos marginalmente por campesinos en las zonas rurales más apartadas del país.⁵ El México de hoy en sus aspectos más controvertidos, pero también en aquellos más prometedores respecto a una sociedad distinta, es tributario de esa puesta en entredicho de las instituciones.

En el contexto más amplio estaba a la vista la realización de las olimpiadas en el país, había que simular ante la opinión pública internacional que en México prevalecía el orden público. También y no menos importante tenía lugar en ese entonces un conflicto dentro del partido oficial, un conflicto soterrado por razones obvias, gracias —de nuevo—, a la simulación, en el que las viejas figuras de la clase política estaban siendo amenazadas por el empuje de nuevas generaciones, en algunos casos incluso ideológicamente hostiles⁶ a los llamados “dinosaurios”. Pero la mayor simulación por parte del gobierno de Díaz Ordaz, responsable de los hechos del 2 de octubre, consistía en que hizo creer a la opinión pública, local en particular, que en la manifestación de la Plaza de las Tres Culturas la agresión armada —gracias a los franco-

⁵ En México, irónicamente, antes de que el consumo de marihuana —“hierba prehispánica”—, se convirtiera en un “hábito contracultural”, en las décadas anteriores a los años sesenta este psicotrópico era consumido sobre todo por los soldados. El mundo descrito por Luis Buñuel en la película *El discreto encanto de la burguesía* (1972) —que debía haber sido filmada en España, cosa que no ocurrió debido a la censura franquista—, en donde sólo los soldados y uno que otro “burgués” fuman marihuana, pasó a la historia en el país en donde ese psicotrópico se popularizó después de los años setenta y es consumido masivamente por sectores, géneros, clases y edades indistintas.

⁶ Véase el caso concreto de Carlos Madrazo, quien falleció en un “accidente” aéreo en 1969 y que diversas versiones han considerado como un presumible atentado.

tiradores infiltrados que dispararon incluso contra el propio ejército—, había provenido de las filas de los manifestantes.

Con anterioridad y paralelamente había surgido en el seno del movimiento, particularmente entre la población preparatoria, la tentación de desafiar a las fuerzas del orden en su propio terreno, en acciones inspiradas del hartazgo por los excesos de parte de dichas fuerzas pero que, en la perspectiva de la hipótesis que aquí sostengo, fueron acciones que —al simular la beligerancia en el terreno del monopolio de la violencia en manos del Estado—, remiten a lo dado y por lo tanto lo confirman. En este mismo tenor, de reafirmación de lo existente como sentido en la simulación que repite su lógica, entran los posteriores pasajes de algunos miembros del movimiento a las filas de las guerrillas foquistas.

El movimiento de mayo de 68 en Francia tampoco se constituyó sólo de estudiantes, aunque también en ese caso fue dicho sector el que le dio su carácter. También ampliamente documentado este movimiento significó un parteaguas, en particular para la cultura política de izquierda no solamente en el país galo.⁷ La influencia de dos tradiciones fue decisiva en el movimiento, por un lado los situacionistas, herederos de la escuela de urbanismo de Estrasburgo y de Henri Lefebvre y en segundo lugar —según algunos como fuente de inspiración, incluso de las ideas centrales de los propios situacionistas—, la tradición de Socialismo o barbarie.⁸

El punto central de la propuesta en este sentido lo constituyó una crítica radical a la militancia, como hasta entonces se practicaba. El ejemplo más emblemático de aquello que la crítica de la vida cotidiana quiso mostrar respecto a la doble vida que solía ir aparejada a la militancia tradicional, lo constituye uno de tantos ejemplos que nos dejó la pareja Sartre-De Beauvoir. Emblemático y analizador de la historia social de la Francia de aquellos años, el caso de Simone de

⁷ Edgar Morin, Claude Lefort y Jean Marc Coudray, *Mayo de 68: la brecha*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2006 (Jean Marc Coudray es uno de los pseudónimos utilizados por Castoriadis).

⁸ <<http://agorainternational.org/toc.html>>.

Beauvoir, en su condición de profesora de liceo, ilustra magistralmente el desfase entre el hacer en la vida cotidiana y el decir “liberador”. Filósofa y escritora, compañera de Jean Paul Sartre, fue cómplice en la justificación de los crímenes del estalinismo y la revolución cultural en China.

De Beauvoir había crecido en una familia católica burguesa, ella misma en su juventud fue feligrés. Su padre hubiera deseado a un hijo en lugar de ella y su madre era muy creyente. En pleno derecho de ejercicio de su bisexualidad y ulterior feminismo —y por momentos de su homosexualidad oculta, entre otras cosas—, bajo el yugo polígamo de su pareja “necesaria”, De Beauvoir —en su condición jerárquica de profesora de preparatoria—, sería expulsada de esa función en virtud de haber establecido relaciones íntimas con menores de edad alumnas suyas.⁹ Vista, de nuevo, como una simulación, la militancia tradicional —aquella de los que se regodeaban con la revolución en los mítines y se llenaban la boca con la autonomía, pero en su casa ejercían un dominio férreo sobre su pareja y sus hijos— fue pasada por el tamiz de la crítica de la vida cotidiana. La revolución de las maneras de asumir y ejercer la propia sexualidad vino a poner en entredicho lo establecido de una sociedad, la del *espectáculo*, en donde había una minoría que montaba el espectáculo —esa gran simulación—, y una gran mayoría que asistía como espectadora pasiva.¹⁰

Castoriadis nos dice:

Para Marx, la “contradicción” inherente al capitalismo era que el desarrollo de las fuerzas productivas se volvía, pasado un punto, incompatible con las formas capitalistas de propiedad y apropiación privada del producto social y tenían que hacerlas estallar. Para nosotros, la contradicción inherente al

⁹ Michel Onfray, *Simone de Beauvoir necesaria y contingente*, 2014, <<https://www.youtube.com/watch?v=awwKkszaew&feature=em-hot-vrecc>>.

¹⁰ Raoul Vaneigem, *Tratado del saber vivir para el uso de las nuevas generaciones*, Barcelona, Anagrama, 1977 (edición original en francés 1967); Guy Debord, *La sociedad del espectáculo*, Valencia, Pre-Textos, 2001.

capitalismo se encuentra en el tipo de escisión entre la dirección y la ejecución que éste realiza y en la necesidad que se deriva para él de buscar simultáneamente la exclusión y la participación de los individuos respecto a sus actividades.¹¹

El segundo componente de proporción respecto a la crítica de la militancia por el movimiento de mayo de 68, como un efecto de la situación descrita anteriormente, era por supuesto el principio de que la revolución, entendida como toma del poder por un partido e incluso la propia “dictadura del proletariado”, venían asimiladas a la lógica de aquello contra lo cual esa revolución supuestamente luchaba. Una crítica informada subyacente, respecto a lo que la izquierda oficial había ocultado y simulado frente a lo que ocurría en la ex URSS, estaba a la orden del día en los sectores más avanzados. La revolución no era pues más los ríos de sangre ni la toma del Palacio de Invierno y sí la resignificación radical de lo dado, gracias a un hacer pensante como corolario de la subjetividad que reflexiona y delibera. No se podía más pretender luchar por la autonomía con métodos heterónomos, sin correr el riesgo de ser señalado, a lo que añadiríamos que empezaba a popularizarse la idea de que un “revolucionario” que se niega a mirar al otro que lo habita, el inconsciente, no podía ser considerado como tal.

Por supuesto que el propio movimiento recurrió a lógicas que muy rápido dieron cuenta de sus propios límites. Simular que no se podía estar con el movimiento y al mismo tiempo criticarlo era uno de los habituales tics que marcan el momento de la institucionalización. Por sólo citar un ejemplo tristemente célebre, se recuerda con cierto pesar el acto pusilánime por el cual a un profesor de la Universidad de Nanterre, Paul Ricoeur, que no necesariamente comulgaba con las posturas más radicales del movimiento, se le puso una papelera en la cabeza y se le tildó de reaccionario.

El movimiento del 68 que se verificó en varios países, México, Estados Unidos, Francia, Japón, tuvo para el caso italiano

¹¹ Cornelius Castoriadis, *L'Expérience du mouvement ouvrier, tome 2: Proletariat et organisation*, París, Union Générale d'Éditions, 2007.

una especie de réplica en 1977. Conocido como *il movimento*, el 77 italiano, había sido precedido de varias décadas en las que, paralelo al movimiento obrero, sectores de jóvenes y mujeres se habían organizado y emprendido una serie de experiencias de notable relevancia.¹² Lo que en el mayo francés se había conocido como la crítica de la vida cotidiana, en el movimiento del 77 italiano, en particular en algunos sectores de vanguardia como los autodenominados *indiani metropolitani*,¹³ esa agenda se había traducido a una contracultura con fuertes dejos de sátira política.

Esa interesante experiencia de base, mucho más cercana al entendido por Castoriadis de la revolución que mencionamos antes, iba a ser sacrificada por el enfrentamiento en plaza con las fuerzas del orden. En efecto paralelamente a la cultura descrita de los jóvenes y las mujeres, un sector obrerista de un leninismo reciclado¹⁴ había “subido encima del tigre”,¹⁵ ejerciendo como “vanguardia”, en la lucha por el poder. El desenlace de esta nueva simulación, en donde se desafía a la sociedad existente en su propio terreno y por métodos heterónomos —como la simulación del dominio por la violencia—, es ampliamente conocido: la conversión

¹² Piero Bernocchi, Enrico Compagnoni, Paolo D'Aversa y Raffaele Striano, *Movimento settantasette, storia di una lotta*, Turín, Rosenberg & Sellier, 1979; Diego Benecchi, Franco Lattanzio, Gianni Paonessa, Francesco Saglio y Claudio Torrero, *I non garantiti, Il movimento del'77 nelle università*, Roma, Savelli, 1977; Fabrizio Calvi (documentos reunidos por), *Italie 77. Le "mouvement", les intellectuels*, París, Seuil, 1977.

¹³ Egeria Di Nallo, *Indiani in città*, Bolonia, Nuova Universale Cappelli, 1977.

¹⁴ Antonio Negri (1984), por Rafael Miranda, entrevista a Toni Negri, Anexo 7 (p. 30): “Una aplicación de la noción de transferencia en política”, en *La noción de alteridad en Cornelius Castoriadis. Ahí en donde el yo es el ello debe también surgir*, tesis para optar al grado de doctor en Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos, bajo la dirección de Eduardo Chamorro, Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, Madrid, 2010, <<http://eprints.ucm.es/11034/>>.

¹⁵ *Cavalcare la tigre*, literalmente “cabalgar sobre el tigre”, era una expresión muy popular en la época para describir la manera como las supuestas vanguardias leninistas se ponían en la cúspide de los movimientos “para conducirlos” *au grand soir* de la revolución.

masiva a Hare Krishnas, “*gli arancioni*”, la heroína, la clandestinidad y la lucha armada, los arrepentimientos y finalmente Berlusconi.

En el origen de ese desenlace, la confrontación en plaza estaba inspirada de la estética de la violencia, otra manera de simular para ocultar la alteridad radical. Quienes simulaban en aquel entonces eran los revolucionarios profesionales inspirados del “centralismo democrático”, dirigiendo a quienes ejecutaban el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Esos jóvenes, antaño miembros de los centros sociales y los colectivos de mujeres autogestionados, habían abandonado la gestión autónoma en nombre de la lucha por el poder.

El caso español es para los fines de este escrito significativo por el retraso importante respecto a las temáticas que los movimientos descritos habían puesto sobre la mesa en décadas anteriores. Casi 40 años de dictadura franquista habían dejado mella en una sociedad muy católica, cuya constante —como suele ocurrir en sociedades tradicionales que se resisten al cambio— fue durante décadas la simulación y el ocultamiento en las dobles vidas y en las dobles morales y en donde las únicas reivindicaciones visibles y perseguidas sistemáticamente fueron aquellas de las minorías lingüísticas, también igualmente creyentes e inspiradas del sentimiento nacional separatista fomentado por las elites locales. La transición va a traer consigo el vuelco que todos conocemos como “el destape”. Originalmente en el cine, lo que había sido prohibido durante la dictadura ahora era permitido, los cuerpos desnudos, el erotismo, etcétera.

El destape trajo en España, con un cierto retraso respecto al resto de Europa repito y en particular respecto a los movimientos que aquí se analizan, también un esfuerzo por re-dimensionar, en el plano de la imaginación, la acción por la transformación social. Con anacronismo respecto, por ejemplo, al norte de Europa —en los años setenta las mujeres españolas hacían un verdadero peregrinaje para suspender sus embarazos en las clínicas de Ámsterdam, por ejemplo—, en España iban a aparecer algunos estereotipos como aquel

que —de nuevo ocultando la alteridad en el simulacro—, reivindica la elección sexual como una militancia comunitaria de alcance supuestamente holístico. Mientras el franquismo simuló la inexistencia de conflicto durante décadas, los movimientos emergentes, después de haber dejado su rastro en la entretela de la dimensión imaginaria de la sociedad española, iban a institucionalizarse y por lo tanto a *repetirse para no recordar*.

VIOLENCIA Y REPETICIÓN

Volvamos al fuerte efecto analizador del caso Ayotzinapa para la sociedad mexicana. La crisis de sentido que ha traído consigo la desaparición de los 43 normalistas ha puesto al pueblo de México ante un espejo.¹⁶ Ante un mundo de simulación en donde las autoridades hacen como que gobiernan y los “representados”, favorecidos por el nepotismo o fascinados por la televisión, hacen como que conceden; donde los maestros hacen como que enseñan y los alumnos hacen como que aprenden. Donde el presidente Peña Nieto dice que está combatiendo la corrupción al mismo tiempo que emergen escándalos de nepotismo y tráfico de influencias que lo involucran y también a sus allegados más cercanos.

El estatus que la simulación tiene en el contexto de este escrito, repitámoslo, es el de la repetición encubierta. Se repite para ocultar lo que emerge radicalmente otro. Es pues, como en el llamado de Peña Nieto a “superar” el trauma de ese horrendo crimen, esa voluntad, incansable en la clase política, de simular para que todo siga igual. La indignación ante esta imagen en el espejo, imagen ante la cual Ayotzinapa puso al pueblo de México, es irreprochable, los actos de violencia que la han acompañado, cuando no han sido la obra de provocadores infiltrados, son igualmente una manera de repetir

¹⁶ Los espejos no mienten..., dice Leonard Cohen (*Crazy to love you*, en *Old ideas*, México, Sony Music Entertainment México, Columbia, 2012).

lo dado para ocultar la emergencia de lo radicalmente nuevo que emerge.

Otro aspecto por supuesto incómodo de esa misma simulación en las filas de las mentes *progress* que se manifiestan en contra de las instituciones corrompidas que han solapado semejante crimen, no debe dejar de llamar nuestra atención. Algunas voces críticas proviniendo de sectores de avanzada lo han mencionado, no obstante, por razones que no son casuales como veremos, el seguimiento de esa reflexión ha sido igualmente desatendido. En el origen de la desaparición de los 43 normalistas está en efecto una sociedad en proceso acelerado de descomposición. Las autoridades municipales, estatales y federales por supuesto que tienen una responsabilidad de primer orden ineludible. No obstante lo anterior las investigaciones muestran que los presuntos autores de ese crimen son policías coludidos con el crimen organizado. Crimen organizado que desde hace varias décadas azota regiones enteras del país, plazas de despacho de estupefacientes, rutas de tráfico de drogas y de personas, regiones enteras sometidas a los secuestros y las extorsiones, con la complicidad de las autoridades locales.

Lo anterior se da en un contexto en el que el consumo de marihuana y otros psicotrópicos por jóvenes y no tan jóvenes, dejó de ser una práctica contracultural de una minoría, como lo fue en los años sesenta —práctica alimentada por la economía de traspasamiento de campesinos empobrecidos y mesiánicamente reivindicados por el tercermundismo—, para convertirse en una costumbre, totalmente banal y estandarizada, en amplios sectores de la población.¹⁷ Quienes hoy consumen cotidianamente esas sustancias no saben bien ni les importa de qué origen provienen, del Cártel de Juárez, de Guerreros Unidos, de los Zetas o del Cártel del Golfo, lo que sí no pueden dejar de saber, no obstante la simulación, es que

¹⁷ Al punto que el ex presidente Vicente Fox, en sus negociaciones recientes ante la comunidad internacional para despenalizar el consumo de marihuana, propuso que se vendiera en la cadena de tiendas OXXO, filial de Coca-Cola, empresa en la que él prestó sus servicios hasta ser electo presidente de la República.

el consumo de esas sustancias hace de quien lo ejerce un participante activo del negocio de las autoridades corrompidas y de las bandas criminales cuyos sicarios, también campesinos pobres indígenas o mestizos, desaparecieron a los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.¹⁸ Los casos meritorios sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en donde la marihuana que se consume también se produce legalmente son, por desgracia, contados con los dedos de las manos.¹⁹

Digámoslo con todas sus letras: en México hay amplios sectores de jóvenes y no tan jóvenes de medios pudientes, pero también de medios modestos, de ideología conservadora, pero también de ideas “de izquierda”, académicos por ejemplo —y muchos, con razón, activos en las actuales protestas—, que cotidianamente contribuyen con su cuota para que uno u otro de los cárteles sigan ejerciendo su actividad. ¿En qué medida —como para el caso de la violencia que ha acompañado a las protestas—, el caso de quienes consumen esas sustancias es otra muestra de la simulación que oculta la emergencia de la sociedad que queremos?,²⁰ es una pregunta cuya respuesta dejo para el lector.

En fechas recientes, y de manera a mi entender afortunada, se han organizado jornadas para no consumir gasolina

¹⁸ Esto no obstante lo que sostiene entre líneas una antropología inspirada de los estudios culturales y “poscoloniales” que profesa —esa especie de racismo positivo— que los indígenas son tales cuando hacen las cosas bien —ese “bien” que deciden esos antropólogos obviamente— y dejan de serlo cuando hacen las cosas “mal”.

¹⁹ Esa implicación, por consumo de sustancias ilícitas, en la actividad de los grupos del crimen organizado rebasa obviamente las fronteras de México. En algunas célebres experiencias, como Cristiania en Copenhague (http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/14/actualidad/1392402041_988527.html), debieron haberse preguntado, en un momento dado, sobre las implicaciones que tenía alimentar con recursos el mercado de la marihuana, para países productores como Nigeria, por ejemplo.

²⁰ Por ésta no entiendo una sociedad en donde haya total transparencia, pero sí entiendo una sociedad en la que la búsqueda de continuidad entre lo que se dice y lo que se hace es un valor positivo.

en un día, como manera de ejercer presión contra la industria petrolera y los aumentos del precio del combustible. Hasta ahora —teniendo frente el *analizador Ayotzinapa*— no ha habido una iniciativa que promueva jornadas en las que no se consuma el habitual porro, para protestar en contra del involucramiento del narco en las peores atrocidades. ¿Estamos de nuevo ante una simulación que dice una cosa y hace otra?

LO QUE LOS OTROS NOS ENSEÑAN

La experiencia de países como Holanda y Uruguay, por dar ejemplos notorios, respecto a la cuestión del uso de sustancias, no debe ser menospreciada. El principio más importante que esos dos casos nos enseñan consiste en que la búsqueda de soluciones y su materialización, aunque parcial, empieza cuando la cuestión es asumida explícitamente y se pospone cuando la misma es negada simulando que no existe. En la medida en que ese consumo se vincula con la actividad de mafias despiadadas, en contubernio con autoridades corruptas, con la banalidad de un producto distribuido por una cadena de tiendas que venden comida chatarra o idealmente con consumidores-productores despenalizados, la puesta sobre la mesa del asunto, en el contexto particular de México, me parece de primer orden.

Como en el caso de la simulación que conlleva inconformarse en los dichos con el curso que ha traído consigo la llamada “lucha contra el crimen organizado”, al tiempo que en la vida cotidiana se es cómplice de los actos de las mafias —que trafican con sustancias, seres humanos, armas, extorsionan y secuestran—, la *estética de la violencia* que se ha presentado paralela a las protestas, son importantes elementos que perpetúan la sociedad que no queremos.

La trágica farsa montada por el gobierno de Díaz Ordaz la noche del 2 de octubre del 68, es quizás el ejemplo más extremo de esa compulsión que busca que las cosas sigan estando como están. El cesto de la papelería, ejemplo cómico pero también trágico, en la cabeza de Ricoeur es, en el otro extre-

mo de la severidad, también un gesto claro en el sentido de simular la asimilación del otro a un sentido que es propio. Quizás el ejemplo que más nos puede enseñar sobre lo que ocurre hoy, de modo paralelo a las manifestaciones pacíficas del movimiento de protesta por el caso Ayotzinapa, sea el desenlace del movimiento del 77 en Italia.

No casualmente los pensadores más lúcidos de la segunda mitad del siglo XX habían señalado la cercanía entre la fe religiosa, que profesa el origen extrasocial de la institución de que se trata y que en la historia ha sido la fuente de inspiración de las peores atrocidades, con el marxismo, convertido en la ideología de una clase, la burocracia. “Las leyes de la historia” o la “infallibilidad del reflejo de la estructura en la superestructura”, en la retórica de dicha ideología o —para los medios ilustrados— la hipercategoría de la determinidad, tendrían de nuevo la función de ocultar la alteridad radical. Es ésta la esencia del llamado jacobinismo leninista de los sectores ligados al “área de la autonomía”, fascinados por el enfrentamiento en la plaza con las fuerzas del orden y por la llamada “estética de la violencia”. Violencia y determinidad serían pues, para el caso de nuestro argumento, dos formas de simular, aplazando así la emergencia de lo radicalmente nuevo. También el hábito del consumo banal de psicotrópicos, en la soledad de la vida cotidiana o en situaciones colectivas, en el contexto actual de México, pero también de muchos otros países productores, tendría ese mismo carácter de conservador ritual de repetición.

De manera contrastante la crítica de la vida cotidiana —el lugar de lo privado público, el ágora, como lo entiende Castoriadis—,²¹ que se dirige no sólo a los desfiguros que provienen de las instituciones en cuya creación no hemos participado y que ya no nos convienen, sino sobre todo que se dirigen a la propia institución —institución de la protesta por la vía de una militancia separada por ejemplo—, nos remite al lugar en donde la revolución, que es la resignificación radical

²¹ “El proyecto de autonomía no es una utopía”, en C. Castoriadis, *Una sociedad a la deriva*, Buenos Aires, Katz, 2006.

de lo existente antes de ser una manifestación de lo propiamente político, tiene lugar. Es en este sentido en el que el abandono de la “toma del poder” como objetivo ha ido cobrando popularidad en los mejores movimientos sociales.²² No interesa quitar a quien está en el poder, para uno instalarse, se trata de que, trabajando por lo que será la sociedad que queremos, quienes están en el poder, sobren.

LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS

¡Hagamos justicia! Es verdad que esa postura con respecto al poder ha sido reivindicada desde sus orígenes por la tradición libertaria. Más allá de los malentendidos —bien intencionados pero también tramposos—, la acción directa tiene esa postura frente al poder, como punto de partida. Es la esencia de la autogestión generalizada que reivindicaban los situacionistas del mayo del 68 francés, con o sin la influencia del grupo *Socialisme ou barbarie*. La tentación de la violencia ha acompañado a esa tradición desde sus orígenes y en este punto, sus perniciosas cercanías con el marxismo leninismo, han sido de proporción, el ejemplo italiano que narrábamos antes es uno entre miles.

La situación de México en los últimos meses es la culminación de una historia de larga data. La cultura de la simulación, entrañablemente vinculada con la historia y la idiosincrasia locales y el hartazgo al cual ésa ha conducido en los últimos tiempos, constituyen el dato cotidiano el día de hoy, pero no nos hablan todavía, o sólo marginalmente, de aquello que quisiéramos que estuviera en su lugar. Castoriadis nos dice: “No es lo que existe, sino lo que podría y debería existir, lo que necesita de nosotros”.²³ La sociedad que queremos, radical-

²² En conversación con un funcionario subalterno que argumentaba que si a los anarquistas no les importaba el poder, para qué poner atención en ellos, el presidente Calles habría dicho: “Es precisamente porque no les interesa el poder que los anarquistas son los más peligrosos”.

²³ Cornelius Castoriadis, *Hecho y por hacer. Pensar la imaginación*, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

mente otra respecto a dicha simulación como recurso para repetir lo dado, emerge ahí en donde la voluntad de ser el origen explícito de las propias normas irrumpe. Esta voluntad de autonomía, que no quiere decir que cada uno haga lo que le dé la gana sino que seamos todos capaces de autolimitarnos, de gobernarnos con las leyes que nosotros hemos creado, se perfila marginal pero de manera consistente en el movimiento en torno al caso Ayotzinapa.

La infiltración de los cárteles en los gobiernos locales, el nepotismo, los escándalos de corrupción que han privado en la historia moderna del país, dan cuenta de la ausencia de un proyecto social, tanto en los medios del partido oficial como en los medios de la oposición de derecha e izquierda. De nuevo la simulación de las elecciones amañadas por los corporativismos, por ejemplo en el caso tristemente célebre del magisterio nacional, el mismo que “forma” a las nuevas generaciones, hacen pensar —en el mejor de los casos— en la asimilación de la democracia a un procedimiento. En este mismo orden de cosas se sitúan sectores importantes de la oposición contestataria, militante o menos, que cotidianamente recurre al consumo de sustancias que han sido traficadas y puestas en el mercado por mafias asesinas coludidas con autoridades corruptas, como hemos ilustrado.²⁴ Las leyes en este sentido, como ocurre de hecho en el universo de las llamadas democracias representativas, sólo contribuyen a alimentar un estado de ilusión constitucional, todavía alejado del derecho. Los actos de violencia que se han suscitado a la hora de las manifestaciones pacíficas en torno al caso Ayotzinapa, no sólo permanecen en lo que existe, sino que lo consolidan.

²⁴ La abstinencia de consumo de sustancias ilícitas y de alcohol, impuesta por los zapatistas en sus territorios —abstinencia que no sabemos si se respeta por convicción o por temor a la exclusión y la sanción—, no obstante que tiene un impacto limitado respecto al problema global, sí constituye una medida loable de deslinde respecto a las actividades de esos grupos. Esta prohibición contrasta de manera sorprendente con la popularidad del consumo masivo en dichos territorios de Coca-Cola.

La sociedad que queremos tuvo un importante destello en los movimientos del 68 en México, Francia y otros países.²⁵ Su impostación, de espaldas al espectáculo de la militancia como esfera separada de lo privado público, al poner en la orden del día la crítica de la vida cotidiana, daba al traste con la certeza de que la “superestructura” era infaliblemente el reflejo de la estructura y que por lo tanto no importaba lo que hiciéramos porque el resultado de nuestros actos se había decidido ya, en otro lado. Es esa impostación la que resiste a la división entre quienes dirigen y quienes ejecutan, división que caracteriza los regímenes burocráticos de izquierda o de derecha. Es ella la que finalmente nos enfrenta a la exigencia de hacer explícito nuestro deseo de alterarnos, de autoalterarnos para dejar de ser lo que somos y convertirnos en otra cosa, rechazando radicalmente toda simulación y toda “política” como simulación.

Las normales rurales fueron una propuesta que en los dichos buscaba mitigar el rezago de la educación pública en regiones remotas del país. Los ires y venires de la clase política hicieron de esa iniciativa una estrategia sujeta a la voluntad de los funcionarios en ejercicio. Paralelamente se constituyó en esos espacios una cultura política contestataria, que en algunos casos excepcionales derivó en movimientos guerrilleros inspirados del foquismo. La evolución de la región, de tierra caliente en Guerrero en particular, pero —más en general— de vastos territorios en el país, en donde los poderes están en disputa entre los robustos grupos del crimen organizado y una clase política oportunista, da cuenta de la carencia de un proyecto social. Esta carencia no sólo compete a quienes representan las instituciones en ejercicio, también es pertinente respecto a la sociedad en su conjunto. La evolución de la zona de ser productora de marihuana a convertirse en productora de amapola, para la elaboración

²⁵ El reciente atentado terrorista al periódico *Charlie Hebdo* por los extremistas islámicos no hace más que corroborar lo que aquí sostenemos respecto a la violencia como simulación para ocultar la emergencia de la alteridad, que es concebida como amenaza mortal.

de heroína —el mercado de esas sustancias tiene un poder enorme que, irónicamente, depende de un gesto cotidiano y solitario que es el consumo—, es otro elemento que rebasa por mucho las capacidades de la cultura contestataria que se ha gestado en torno a las normales rurales. A esto se suma que, como he mencionado, los funcionarios coludidos, locales pero no solamente, provienen del partido oficial pero también del Partido de la Revolución Democrática, tradicionalmente considerado como un partido de izquierda.

Ante un movimiento como el que se ha gestado en torno al caso Ayotzinapa se presentan pues retos de proporción, mantenerse al margen de la habitual cultura de la simulación, a la que pertenecen funcionarios que hacen como que gobiernan ante representados que hacen como que viven en democracia, enseñantes que hacen como que enseñan a estudiantes que hacen como que aprenden y así sucesivamente, es sin duda el más complicado. Las expresiones de violencia que se han suscitado paralelas al movimiento son otro importante aspecto de dicha cultura de la simulación, de izquierda o de derecha, ante el cual el movimiento deberá cerrar filas.

La sociedad que queremos y que vive en nuestra manera de darle sentido a la existencia, pero también y sobre todo en la coherencia con lo que *hacemos pensando*, es lo que inspira la indignación del movimiento en torno al caso Ayotzinapa. El *nomos*, la norma de dicha sociedad no es algo que asumiremos de manera explícita después de que asaltemos el Palacio de Invierno, es algo que debemos ejercer aquí y ahora, es esa norma por la cual nos gobernamos, alejada de toda heteronomía, la que da la espalda a la simulación abriéndose a la alteridad de lo que seremos, cuando dejemos de ser lo que somos.

GÜELCOM



CHIRÍN

ANEXOS
CRONOLOGÍAS

EL REGRESO DE LA GUERRA SUCIA EN MÉXICO (1994-2014)

Claudio Albertani

La guerra sucia es una estrategia contra la “subversión interna” que hace del terror una política de Estado. A partir de finales de la décadas de los sesenta y hasta mediados de los ochenta, el Estado mexicano desencadenó un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver los movimientos de oposición política y armada. El número de muertos y desaparecidos de esa época es aún desconocido. El Comité Eureka, fundado por Rosario Ibarra de Piedra, maneja un total de 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 2001, de las cuales más de 530 corresponden principalmente al municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

1994

1 de enero

Entra en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México. Levantamiento indígena en el estado de Chiapas. El entonces desconocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levanta contra el gobierno mexicano (Primera Declaración de la Selva Lacandona) y toma cuatro municipios de Chiapas: San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo.

10-12 de enero

Multitudinarias manifestaciones en diferentes ciudades del país para exigir el fin de la guerra.

12 de enero

El gobierno federal decreta el cese del fuego y anuncia su intención de buscar una solución negociada al conflicto.

Febrero

Santa Cruz del Rincón, Guerrero. Nace el Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN) para impulsar proyectos en diferentes áreas: salud, educación, seguridad.

21 de febrero-2 de marzo

Diálogo de paz en la catedral de San Cristóbal de las Casas entre los dirigentes del EZLN (el subcomandante Marcos y 20 comandantes y miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, CCRI), el comisionado para la paz Manuel Camacho Solís y el mediador Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal.

23 de marzo

Asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato oficial a la presidencia de la República. El EZLN decreta el estado de alerta general.

18 de mayo

Nace un nuevo grupo guerrillero el Ejército Popular Revolucionario, EPR.

6-9 de agosto

Guadalupe Tepeyac, Selva Lacandona. Convocados por el EZLN (Segunda Declaración de la Selva Lacandona) seis mil representantes de organizaciones populares acuden a la Convención Nacional Democrática.

19 de diciembre

Chiapas. Los zapatistas rompen el cerco militar tomando temporalmente 38 cabeceras municipales en los Altos de Chiapas.

19-20 de diciembre

Crisis financiera, devaluación del peso (40%), seguida de una recesión económica marcada por la desaparición de miles de empresas y de un millón de empleos.

24 de diciembre

El EZLN y el gobierno federal reconocen a la Comisión Nacional de Intermediación, CONAI, presidida por el obispo Samuel Ruiz e integrada por reconocidas personalidades del mundo académico y la sociedad civil.

1995**1 de enero**

En la “Tercera Declaración de la Selva Lacandona”, el EZLN después de romper el cerco militar, llama a las distintas fuerzas y ciudadanos a construir un amplio frente opositor: el Movimiento para la Liberación Nacional. La iniciativa no cuaja.

Enero

El Fondo Monetario Internacional y bancos norteamericanos otorgan un préstamo de 50 mil millones de dólares al gobierno mexicano. Cláusula secreta: sacar al EZLN de la Selva Lacandona.

9 de febrero

El presidente Zedillo ordena una ofensiva del Ejército federal, contra los territorios zapatistas de la Selva Lacandona. El EZLN se repliega sin novedad.

11 de febrero

México, D.F.: 100 000 personas se manifiestan contra la nueva ofensiva antizapatista. Detenciones en todo el país.

11 de marzo

Creación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) integrada por diputados y senadores de la República.

Abril

Reanudación en el ejido San Miguel (Ocosingo) del diálogo entre los zapatistas y la delegación gubernamental. La negociación se prolongaría durante meses en un poblado de los Altos de Chiapas, San Andrés Larráinzar que los indígenas llaman San Andrés Sakam'chen de los pobres.

29 de junio

Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur son masacrados por agentes de la policía guerrereña.

4 de septiembre

Tepoztlán, Morelos. Los pobladores que luchan contra la instalación de un campo de golf levantan barricadas. En los siguientes dos años y medio, el pueblo vivirá, sin policía, sin pagar impuestos, y rigiéndose por un sistema de autogestión.

15 de octubre

26 pueblos *me' phaa* y *na savi* de los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec en la Costa Chica-Montaña de Guerrero, acuerdan constituirse como Policía Comunitaria.

1996**1 de enero**

El EZLN lanza la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona planteando su decisión de ayudar a construir una nueva política no partidaria que no luche por el poder, independiente, autónoma, pacífica.

5 de enero

El subcomandante Marcos abandona su escondite en la selva y viaja a San Cristóbal para participar en el Foro Nacional Especial de Cultura y Derechos Indígenas.

10 de enero

Se clausura el Foro Nacional Indígena con la propuesta de integrar una nueva organización que posteriormente se conocerá como Congreso Nacional Indígena.

16 de febrero

Al cabo de cinco meses de negociaciones, el gobierno y el EZLN firman en San Andrés, el primer acuerdo sobre Derechos y Culturas Indígenas.

10 de abril

Tlaltizapán, Morelos. Pobladores de Tepoztlán son agredidos por granaderos cuando se trasladan en autobús a la conmemoración del 77 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata. Saldo: un muerto y seis heridos.

13 de abril

Anulación del proyecto del campo de golf en Tepoztlán.

1 de mayo

Nace el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), que aglutina a 14 agrupaciones guerrilleras.

28 de junio

Guerrero. Una columna de hombres armados pertenecientes al EPR irrumpe en la conmemoración del primer aniversario de la matanza de Aguas Blancas.

16 de julio

Guerrero. Enfrentamiento entre EPR y Ejército en la carretera Tlapa-Chilpancingo. Muere el civil Gonzalo Pineda Morales.

27 de julio-3 de agosto

La Realidad, Chiapas: convocado por el EZLN, se celebra el primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y el Neoliberalismo. Acuden activistas de México y de todo el mundo.

8 de agosto

Conferencia de prensa del EPR. Desde la clandestinidad, cuatro comandantes dan a conocer el Manifiesto de la Sierra Madre Oriental.

28 de agosto

Oaxaca. Comando del EPR ataca el cuartel de los marinos de la VI Región Naval Militar en La Crucecita, Huatulco. Saldo: 12 muertos. Entre ellos: cuatro marinos, tres policías judiciales y cinco guerrilleros.

30 de agosto

Oaxaca. Detenidos en Pochutla, ocho indígenas zapotecos de la región Loxicha, acusados de ser miembros del EPR.

2 de septiembre

El EZLN decide retirarse de la mesa de negociación hasta cumplirse lo pactado por el gobierno.

25 de septiembre

Oaxaca. Fuerzas militares y policiacas detienen a todas las autoridades de San Agustín y San Francisco Loxicha.

1997**27 de febrero**

Guerrero. Benigno Guzmán García, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), es detenido y torturado. Se busca implicarlo con el EPR.

14 de marzo

Chiapas. La policía irrumpe en San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque. Saldo: cuatro muertos, muchos heridos, 27 detenidos y 300 desplazados, todos simpatizantes del EZLN.

24 de mayo

Guerrero. Enfrentamiento entre Ejército y eperristas en Chilapa. Dos guerrilleros y dos militares pierden la vida; 20 soldados heridos.

13-16 de septiembre

Marcha de 1 111 zapatistas a la ciudad de México.

22 de diciembre

Chiapas. Paramilitares afiliados al PRI ejecutan a 45 personas (21 mujeres, 15 niños y nueve hombres) en Acteal, municipio de Chenalhó.

1998

8 de enero

Nace el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), de una escisión con el EPR.

22 de enero

Guerrero. La policía comunitaria decide encargarse no sólo de la seguridad, sino también de la impartición de justicia mediante la construcción de un sistema jurídico propio. Nace la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Febrero

Guerrero. Campesinos ecologistas crean la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán (OCEP), contra la tala de bosques por parte de los caciques locales.

16-28 de febrero

La recién creada Comisión Civil Internacional para la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), integrada por 210 personas procedentes de 11 países, visita Chiapas. Entre sus conclusiones destacan: 1) intensa militarización de la región; 2) impunidad con que el Estado viola los derechos humanos; 3) miseria estructural de los habitantes indígenas; 4) ausencia de voluntad política del gobierno para llegar a un acuerdo de paz.

11 de abril

Operativo conjunto para dismantelar al municipio autónomo Ricardo Flores Magón (Taniperlas, municipio de Ocosingo). Nueve mexicanos detenidos y doce extranjeros expulsados del país.

1 de mayo

Chiapas. Operativo contra el municipio autónomo Tierra y Libertad. Detención de 53 personas y destrucción de la oficina municipal.

3 de junio

Chiapas. Operativo contra el municipio autónomo Nicolás Ruiz. Cateo de casas e iglesias. Detención de unas 100 personas.

7 de junio

Guerrero. Tropas del Ejército se enfrentan con guerrilleros del ERPI en El Charco, municipio de Ayutla. Saldo: 11 guerrilleros muertos, cinco lesionados y 21 detenidos, entre ellos la estudiante Erika Zamora Pardo.

7 de agosto

La presidenta del Grupo de Trabajo para los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Erica Irene A. Daes, declara que México es el país que más viola los derechos humanos de los pueblos indígenas.

30 de octubre

Benigno Guzmán Martínez, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) es sentenciado a 13 años de prisión.

Noviembre

Chiapas. Suman ya 22 mil los desplazados. Se ubican principalmente en las regiones Altos y Norte.

1999**6 de enero**

Caso Acteal. Seis ex policías de Seguridad Pública implicados en la matanza son sentenciados por el delito de transportación de armas de fuego de alto calibre.

8 de marzo

El informe de Amnistía Internacional, “A la Sombra de la Impunidad” denuncia la situación de los derechos humanos en México. Violaciones particularmente agudas en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, los estados con mayor porcentaje de población indígena.

20 de julio

Un juez sentencia a 35 años de prisión a 20 presuntos integrantes del grupo que asesinó a los 45 indígenas de Acteal.

29 de septiembre

Digna Ochoa y Plácido, connotada defensora de los derechos humanos y abogada de los presos políticos zapatistas, es secuestrada e interrogada en su domicilio de la ciudad de México.

2000**8 de febrero**

Asma Jahangir, Relatora Especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, afirma ante la ONU, que los gobiernos federal y local, el Ejército, paramilitares y grupos armados de oposición realizan ejecuciones de inocentes en todo el país, principalmente en Chiapas y Guerrero.

12 de junio

Simojovel, Chiapas. Policías son emboscados en la carretera por un grupo armado con un saldo de siete muertos: seis policías estatales y uno municipal.

19 de junio

Alberto Patishtan, profesor y activista tzotzil, es detenido bajo la acusación de participar en la emboscada. Es totalmente ajeno a los hechos, pero pasará 13 años en la cárcel.

2 de julio

Vicente Fox, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), gana las elecciones presidenciales con el 43.43% de votos. Afirma que resolverá el problema de Chiapas “en 15 minutos”.

26 de octubre

Guerrero. Primer Encuentro por la Defensa de los Bosques de Guerrero, convocado por la OCEP.

11 y 12 de noviembre

Oaxaca. En Tierra Blanca Loxicha, se celebra el Foro por la Autonomía, el Trabajo y la Esperanza. Las comunidades indígenas exigen la desmilitarización de la región.

1 de diciembre

El mismo día de la toma de posesión de Vicente Fox, la comandancia zapatista informa que realizará la Marcha del Color de la Tierra hacia la capital mexicana en exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

2001**Febrero**

Arranca la Marcha del Color de la Tierra, movilización sin precedentes en la historia de México.

5 de marzo

Michoacán. Cinco mil delegados participantes del Congreso Nacional Indígena deciden realizar un levantamiento indígena nacional pacífico para demandar la aprobación de la Ley Cocopa.

7 de marzo

Benigno Guzmán Martínez, directivo de la OCSS sale libre del Penal de Puente Grande, Jalisco.

11 de marzo

Un millón de personas reciben a la delegación zapatista en el Zócalo de la ciudad de México. El evento marca el punto más alto de la popularidad del EZLN en el mundo entero.

28 de marzo

Histórica presencia de 23 comandantes del EZLN en el Congreso de la Unión para pregonar la causa de los indígenas. No acude el sub Marcos.

19 de abril

Venustiano Carranza, Chiapas. Ocho campesinos asesinados en una emboscada perpetrada por un grupo de encapuchados.

25-27 de abril

Traición. El Congreso de la República aprueba una reforma constitucional en materia indígena que desvirtúa el planteamiento original. El Congreso Nacional Indígena desconoce la Ley Indígena aprobada.

Julio

Aparece una nueva coalición de grupos armados: la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos, integrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP) y el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio (CCRP-CJ).

21 de julio

La Cruz Roja Internacional señala que todavía hay siete mil desplazados en Chiapas.

8 de agosto

Ciudad de México. Estallan tres bombas en distintos bancos de la ciudad. Los atentados son reivindicados por las FARP.

12 de agosto

Ciudad de México. La PGR y el Ejército detienen a Sergio Galicia Max, Pablo Flores Alvarado y los hermanos Antonio, Héctor y Alejandro Cerezo Contreras. A todos se les acusa de ser miembros del EPR.

19 de octubre

Digna Ochoa es asesinada en su despacho de la calle Zaca-tecas 31-A, colonia Roma, en la ciudad de México. Llevaba el caso de los campesinos ecologistas de Guerrero, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, y de los hermanos Cerezo. La versión oficial (evidentemente falsa) es que se suicidó.

22 de octubre

El presidente Vicente Fox anuncia la construcción de un nuevo aeropuerto en los terrenos ejidales de San Salvador Atenco, Estado de México. En respuesta, surge el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, encabezado por Ignacio del Valle.

8 de noviembre

Iguala, Guerrero. Teodoro Cabrera Flores y Rodolfo Montiel García, campesinos ecologistas presos desde el 2 de mayo de 1999, salen libres “por razones humanitarias”.

27 de noviembre

En respuesta al reclamo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, el gobierno panista de Vicente Fox (2000-2006) crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) con el propósito de investigar los casos de personas detenidas desaparecidas, enjuiciar a ex funcionarios gubernamentales, esclarecer la historia oculta de la Guerra Sucia y compensar a las víctimas y sus familias.

2002**20 de enero**

Chiapas. Paramilitares detienen y torturan a cinco zapatistas del municipio autónomo Ricardo Flores Magón.

2 de febrero

Chiapas (zona norte): paramilitares de Paz y Justicia intentan desalojar a indígenas de la comunidad Progreso Agrario.

Abril

Chiapas: a lo largo del mes crece el hostigamiento contra las poblaciones de Montes Azules y se registra una nueva escalada de militarización en la zona norte.

20 de abril

En diferentes cárceles, 87 presos políticos inician una huelga de hambre que durará entre 34 y 61 días. Exigen una ley de amnistía. Entre ellos se encuentran: indígenas de los Loxichas; Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, sobrevivientes de la Masacre de El Charco; Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas, dirigentes del ERPI.

14 de mayo

Estrasburgo, Francia. La CCIODH presenta un informe sobre la situación en Chiapas al Parlamento Europeo. Diagnóstico: 1) persiste la militarización; 2) el problema de los desplazados sigue sin resolverse; 3) no se ha frenado la presencia de grupos paramilitares cuyos dirigentes han sido liberados; 4) la reforma constitucional aprobada no considera los pueblos indígenas como sujetos de derecho, ni les otorga la autonomía política; 5) los programas antipobreza son discriminatorios y contrainsurgentes; 6) el Plan Puebla-Panamá amenaza la integridad de las comunidades indígenas; 7) nueve zapatistas permanecen presos (tres en Chiapas, seis en Tabasco y Querétaro).

17 de mayo

Chiapas. El Centro Fray Bartolomé de las Casas presenta el informe *Caminando hacia el amanecer*. Conclusiones: 1) la paramilitarización iniciada en 1995 ha dejado al menos 122 personas asesinadas y 28 desaparecidas; 2) “en acción conjunta con los cuerpos policiacos y castrenses”, los paramilitares entraron a zonas de la Selva y Altos, tomando control del territorio, ubicándose en las entradas y las salidas de los

pueblos; 3) más de 12 mil indígenas chiapanecos permanecen refugiados fuera de sus tierras.

7 de junio

Michoacán. Enfrentamiento entre soldados y comuneros de Huecato (Cañada de los Once Pueblos). Saldo: tres comuneros y dos militares muertos.

19 de junio

Casi al borde de la muerte, Jacobo Silva Nogales levanta la huelga de hambre.

1 de agosto

Al cabo de una lucha áspera y combativa, el FPDT logra que el presidente Fox anuncie la cancelación del aeropuerto.

19 de diciembre

Integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Policía Federal Preventiva (PFP) desalojan a choles de la comunidad Lucio Cabañas, en Montes Azules.

2003

24 de enero

Ciudad de México. Tras un controvertido juicio, los hermanos Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, así como Pablo Alvarado Flores son condenados a 13 años de prisión.

25 de enero

“La tortura es práctica común en el gobierno de Fox”, señala la ONG Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT).

3-6 de febrero

Marcha desde la Sierra Mixteca a la capital de Oaxaca para exigir que cesen las agresiones contra comunidades de la sierra.

11 de abril

Ginebra, Suiza. Organizaciones indígenas denuncian ante la plenaria de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU que continúan en México “graves, sistemáticas y reiteradas violaciones de las libertades y de los derechos de los pueblos indígenas”.

26 de julio

El EZLN anuncia el nacimiento de los Caracoles, nuevas estructuras de poder regional para fortalecer las autonomías indígenas.

7 de agosto

Huehuetla, sierra norte de Puebla. Asesinato de la defensora de los derechos humanos y fundadora de la Organización Independiente Totonaca (OIT), Griselda Tirado Evangelio.

17 de agosto

Juchitán, Oaxaca. Asesinato de Carlos Sánchez López, abogado de los presos políticos de Unión Hidalgo.

27 de noviembre

San Agustín Loxicha, Oaxaca: Andrés Enríquez Hernández, ex integrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR), es ejecutado por desconocidos.

4 de diciembre

Atoyac de Álvarez, Guerrero. Es torturado y asesinado Horacio Zacarías Barrientos Peralta, testigo clave de la guerra sucia en Guerrero en los años 70 y 80.

31 de diciembre

Chiapas: los caracoles celebran el décimo aniversario del levantamiento zapatista.

2004**21 de enero**

Chiapas. La Marina y policías estatales desalojan, destruyen

e incendian 23 viviendas en la comunidad Nuevo San Rafael, que se ubica en la reserva de la biosfera de Montes Azules, propiedad de indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

2006

26 de febrero

La organización no gubernamental estadounidense Archivo Nacional de Seguridad Pública publica en su página de internet el borrador de un informe sobre la “guerra sucia” en México. El documento es el resultado del trabajo de cuatro años de la FEMOSPP, pero no se hace público en México. Gran parte de los crímenes enumerados en dicho informe fueron cometidos durante las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), cuando cientos de ciudadanos —no sólo militantes armados, sino también civiles inocentes— fueron torturados, asesinados o desaparecidos por fuerzas militares y de seguridad.

4 de mayo

Ataque militar contra el pueblo de Atenco, Estado de México que en 2002 había ganado una lucha contra la instalación de un aeropuerto en terrenos ejidales. Efectivos de la policía estatal (el gobernador es Enrique Peña Nieto) federal y del ejército irrumpen en el pueblo con lujo de violencia. El saldo es de dos muertos, decenas de heridos y 211 detenidos que, según informes de la Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos, sufrirán tortura, violaciones y malos tratos. Cinco ciudadanos extranjeros que laboraban en medios alternativos de comunicación son expulsados del país de manera irregular.

14 de junio

Oaxaca. Hacia las 4:50 de la madrugada, agentes de varias corporaciones auxiliados por helicópteros que arrojan gra-

nadas tóxicas desalojan con lujo de violencia un plantón de profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), instalados en el centro histórico de la ciudad. El saldo es de 200 heridos y un número indeterminado de desaparecidos.

16 de junio

Oaxaca. 300 mil personas marchan para exigir la renuncia del gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz (URO).

18 de junio

Nace la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que pronto agrupará a unas 300 organizaciones en la ciudad y en el campo.

2 de julio

Fraude electoral. Felipe Calderón roba la presidencia al candidato de centro-izquierda Andrés Manuel López Obrador.

11 de julio

Violación masiva ejercida por militares contra 13 mujeres en Castaños, Coahuila.

Julio-octubre

La APPO convoca a numerosas manifestaciones por las principales calles de la capital oaxaqueña, logrando reunir a más de 800 mil personas. En julio, la APPO boicotea la Guelagueta oficial y organiza festejos populares alternativos. Conforme crece la violencia oficial, ocupa medios de comunicación estatal (como el Canal 9) y Radio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (*Radio Universidad*). El Gobierno de URO huye del palacio de gobierno.

28 de octubre

La Policía Federal Preventiva y el ejército ocupan Oaxaca.

2 de noviembre

Victoria histórica. La APPO logra repeler el ataque de la PFP contra la ciudad universitaria.

25 de noviembre

Represión en Oaxaca. La PFP y los cuerpos de la policía local reprimen con lujo de violencia una marcha de la APPO. El saldo es de tres muertos, 152 detenidos y un número indeterminado de desaparecidos.

8 de diciembre

El presidente Felipe Calderón declara su “guerra” contra el narcotráfico. Comienza lanzando el Operativo Conjunto Michoacán que incluye el despliegue de 4 mil 200 elementos del Ejército, mil elementos de la Armada, mil 400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público.

2007-2010

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó 156 medidas de protección a más de 200 activistas mexicanos, de las cuales 67.7 por ciento se concentran en el estado de Guerrero.

2007**26 de febrero**

Ernestina Ascensión Rosario, indígena nahua de 73 años, es violada y asesinada por efectivos del ejército. La anciana, originaria de la congregación Tetlazinga, municipio de Soledad Atzopam, Veracruz, es encontrada por sus familiares amordazada y atada en su casa de madera y cartón. Sus últimas palabras antes de perder la conciencia son: “Los soldados se me echaron encima”.

13 de marzo

Antes de que concluyan las investigaciones, el presidente Calderón afirma que la señora Ascencio murió por “gastritis crónica”.

26 de marzo

La FEMOSPP concluye sus actividades sin haber conseguido una sola sentencia condenatoria. Costó más de 300 millones de pesos en gasto corriente incluyendo un salario mensual de 213 mil 190.89 pesos al jurista Ignacio Carrillo Prieto, su titular. Según Katy Doyle, responsable del Archivo Nacional de Seguridad, la Fiscalía detectó el material más “peligroso” de los archivos históricos no para promover la justicia, sino para neutralizarlo.

30 de marzo

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, declara que en el caso de Ernestina Ascencio Rosario no hubo violación, ni homicidio. Murió de gastritis.

30 de abril

El fiscal especial de la indagatoria, Juan Alatraste cierra el caso de Ernestina Ascencio Rosario. La indígena, “no fue violada sexualmente”, sino que murió de “parasitosis”.

4 de mayo

Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, líderes del movimiento de Atenco son condenados por el juez primero de lo penal con sede en Toluca, Alfredo Blas Hernández, a 67 años y seis meses de prisión cada uno. Otros diez atenguenses son condenados a 32 años.

24 de mayo

Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, militantes de la organización guerrillera Ejército Popular Revolucionario (EPR) son detenidos y sucesivamente desaparecidos en Oaxaca.

20 de octubre

Integrantes de agrupaciones magisteriales, campesinas y obreras de distintas partes del país denuncian que está en marcha una reedición de la guerra sucia en México.

15 de noviembre

El escritor Miguel Montemayor advierte que la Iniciativa Mérida, un tratado internacional de seguridad establecido entre Estados Unidos, México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, implica el sometimiento del Ejército mexicano al de Estados Unidos y tendrá como resultado “una catastrófica guerra sucia”.

2008**15 de septiembre**

Morelia, Michoacán. Dos granadas lanzadas a un numeroso grupo de personas que asisten a la verbena del “grito de la independencia” dejan un saldo de 8 muertos y 132 lesionados. Este atentado terrorista marca un nuevo viraje en la guerra sucia.

16 de septiembre

Felipe Calderón llama “traidores a la patria” a terroristas y opositores políticos.

2009**11 de febrero**

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve que el gobernador Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora, secretario federal de Seguridad Pública (y actualmente integrante de la SCJN), no tuvieron responsabilidad en las violaciones de garantías en San Salvador Atenco.

23 de noviembre

Después de una larga lucha por parte de familiares y organizaciones no gubernamentales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara al Estado mexicano culpable por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, luchador social detenido ilegalmente el 25 de agosto de 1974 en un retén mi-

litar cerca de Atoyac de Álvarez, Guerrero. El caso tiene un gran impacto porque es la primera vez que la Corte IDH condena al Estado mexicano y porque exige la realización de cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país.

2010-2011

63 activistas y luchadores sociales son asesinados. Destacan los casos de Nepomuceno Moreno, Marisela Escobedo, Susana Chávez, Javier Torres Cruz, Quetzalcóatl Leija y José Trinidad de la Cruz. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, si bien en el 51 por ciento de los casos no se pudo identificar a los agresores y en el 22 por ciento se trató de actores no estatales, en el 14 por ciento los responsables fueron operadores de justicia, en el ocho por ciento, autoridades municipales, y en el restante cinco por ciento, autoridades militares.

2010

30 de enero

Un comando armado asesina a 15 personas, 12 jóvenes y tres adultos, en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Diez personas más resultan heridas por balas de fuego. Los jóvenes estaban reunidos para festejar un cumpleaños y el triunfo de un equipo de fútbol americano.

2 de febrero

El presidente Felipe Calderón vincula los acontecimientos con rivalidades entre pandillas de narcotraficantes.

11 de febrero

Luz María Dávila, madre de dos de las víctimas de Villas de Salvárcar, increpa al presidente Calderón exigiendo justicia y que se retracte por vincular a los jóvenes asesinados con el narco.

22-23 de agosto

58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría inmigrantes centroamericanos, son bárbaramente ejecutados en el ejido El Huizachal, municipio de San Fernando (Tamaulipas). Habían sido secuestrados por el grupo delictivo Zeta y no tenían con qué pagar el rescate que les exigían.

28 de noviembre

La Procuraduría General de Justicia del DF concluye que Digna Ochoa no fue asesinada sino que ella misma se quitó la vida.

2011**1 de abril**

Segunda masacre de San Fernando. Se hallan otros 193 cadáveres. Luego se sabrá que entre 2010 y 2012 fueron “ejecutados” más de 400 personas que son parte de una tercera masacre que se suma a la de los 72 inmigrantes y los jóvenes asesinados que fueron bajados de los autobuses foráneos.

2012**14 de junio**

El candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, presenta al general colombiano Óscar Naranjo, ex director general de la Policía Nacional de Colombia, como “asesor externo” de su gobierno en materia de combate al crimen organizado. Vinculado a grupos paramilitares, acusado de secuestros, desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales y nexos con el narcotráfico en su país, Naranjo es colaborador estrecho del Departamento de Estado, la CIA y la DEA y es uno de los arquitectos de la narcodemocracia colombiana. Se le atribuye el concepto de “falsos positivos”, es decir las personas ejecutadas por las fuerzas del Estado que son presentadas como delincuentes, a pesar de ser inocentes.

30 septiembre

La prensa vincula las armas de fuego que se usaron en la masacre de Villas de Salvárcar con “Rápido y Furioso”, un operativo del gobierno estadounidense para introducir ilegalmente a México más de 1 700 armas de fuego que acabaron en manos del crimen organizado.

1 de diciembre

Final sin gloria del gobierno panista de Felipe Calderón y regreso sangriento del PRI a la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México con un negro historial en materia de derechos humanos. Las protestas contra la toma de posesión dejan un saldo de 105 personas lesionadas, entre las cuales el más grave es Juan Francisco Kuykendall, de 67 años, director de teatro, quien tiene un traumatismo craneoencefálico causado por un aparato explosivo. Uriel Sandoval, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pierde un ojo.

2013**20 de febrero**

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Li-món, informa que, al terminar el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), la lista de desaparecidos ascendía a cerca de 27 mil personas.

24 de marzo

El activista Teodulfo Torres Soriano, *El Tío*, único testigo de los hechos del primero de diciembre de 2012 en el exterior de la Cámara de Diputados, que derivaron en la muerte de Francisco Kuykendall, es desaparecido de manera forzada por elementos federales.

3 de junio

Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, tres activistas perteneciente a un

grupo local, el Frente de Unidad Popular (FUP), secuestrados días antes, son asesinados en Iguala, Guerrero. Habían organizado diversas protestas en contra del presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez. El FUP estaba integrado, entre otras organizaciones, por la Normal Rural Isidro Burgos y había apoyado la lucha de los mineros de Carrizalillo.

31 de julio

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informa que la guerra contra el crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón dejó un saldo de 121 683 muertes violentas. ¿Cuántas de ellas son “falsos positivos”? Nunca se sabrá. El rasgo principal de las desapariciones es su aparente casualidad, junto a la criminalización de las víctimas.

3 de junio

Días después de ser secuestrados, son encontrados muertos Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, dirigentes del Frente de Unidad Popular de Iguala, en el tramo Mezcala-Iguala de la carretera federal México-Acapulco.

5 de agosto

Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, y sus dos acompañantes son asesinados a las afueras de Coyuca de Benítez.

21 de agosto

Con el apoyo del ejército y la marina, detención de Nestora Salgado, jefa en Olinalá, Guerrero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria (CRAC-PC), bajo los cargos (falsos) de secuestro y tortura.

18 de octubre

Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), es asesinada a balazos en las inmediaciones de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande.

2014**5 de enero**

El doctor José Manuel Mireles Valverde, coordinador de los grupos de autodefensa de las regiones de la Sierra y Tierra Caliente de Michoacán, resulta gravemente herido cuando la avioneta en que viajaba se desploma cerca de la cabecera municipal de La Huacana.

28 de enero

La defensora de los derechos humanos Pilar Noriega García y el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García, ambos integrantes de la Comisión de la Verdad, son víctimas de un atentado en las inmediaciones de Chilpancingo.

25 de enero

Muere el activista Kuykendall, a consecuencia de la lesión sufrida en el operativo policiaco del 1 de diciembre de 2012.

26 de enero

Acusado de fomentar el paramilitarismo a través de las auto-defensas, el general Óscar Naranjo Trujillo regresa a Colombia.

Mediados de abril

Ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, demandan ante el Tribunal Agrario la restitución de sus tierras a la compañía minera canadiense Goldcorp con presencia en la zona desde el año 2007. Los ejidatarios han señalado en distintas ocasiones que sufren de afecciones neurológicas, de la piel, los ojos, la respiración, así como problemas de parto. Además, calculan que el 83 por ciento de sus tierras quedaron inutilizables. De acuerdo con la Ley Federal de Residuos Peligrosos, los propietarios son corresponsables de la reparación de los daños.

23 de mayo

Nueva contabilidad: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informa que la cifra de desaparecidos ha bajado a ocho mil personas.

Principios de junio

Más de 250 personas abandonan tres comunidades del municipio de San Miguel Totolapan, en la tierra caliente de la Sierra Madre del Sur. Huyen de las acciones violentas de grupos narcotraficantes.

9 de junio

Familiares de desaparecidos centroamericanos en México estiman que son 80 mil los migrantes indocumentados desaparecidos en los últimos diez años.

16 de junio

Osorio rectifica nuevamente: los desaparecidos no son ocho mil, sino 16 mil.

17 de junio

Acapulco. Policías ministeriales del estado detienen al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.

27 de junio

Detención del doctor José Manuel Mireles, junto con otras 82 personas en La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El montaje es evidente pues su principal delito es no haberse prestado al montaje urdido por el general Naranjo.

30 de junio

La Sedena informa que el ejército “abatió” a 22 personas en un enfrentamiento en el municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México, cerca de la frontera con Guerrero (no lejos de Iguala).

8 de julio

Una nota de la agencia AP pone en duda el presunto enfrentamiento y señala inconsistencias entre el reporte oficial y las marcas de bala en el lugar de los hechos.

15 de julio

La PGJ del Estado de México afirma que en el supuesto en-

frentamiento no hubo disparos a corta distancia y que ambos bandos hicieron uso de armas de fuego.

2 de agosto

La cámara de diputados aprueba el último dictamen de la reforma que entrega los recursos energéticos a los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

3 de agosto

Soldados, marinos y policías irrumpen en el poblado La Concepción, donde el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) acababa de terminar su asamblea semanal.

14 de agosto

Surge el Comité de Mujeres por la libertad de Nestora Salgado, presa desde hace casi un año.

15 de agosto

Miles de campesinos marchan en Acapulco acompañados de organizaciones sociales nacionales y estatales, exigen la liberación de Marco Antonio Suástegui Muñoz.

8 de septiembre

Enrique Peña Nieto afirma que para combatir la corrupción se debe partir de reconocer que “es un asunto de orden cultural”. Por su parte, el perredista Silvano Aureoles asevera que “en un marco de pluralidad, inclusión, apertura, de disposición para el diálogo y para la construcción de acuerdos, habremos de cimentar la base de un país más eficaz, más próspero, más igualitario y más incluyente”.

11 de septiembre

Ciudad Obregón, Sonora. Detención de Mario Luna, vocero de la tribu yaqui. Es el principal dirigente de la lucha contra el acueducto Independencia que extrae agua del río Yaqui poniendo en peligro los medios de vida tradicionales.

19 de septiembre

Declaración de un testigo presencial a la revista *Esquire*: en Tlatlaya no hubo enfrentamientos, sino una ejecución extrajudicial. Entrevistado por la periodista Carmen Aristegui, Pablo Ferri, autor del reportaje, afirma que el 30 de junio los militares ejecutaron a 22 presuntos delincuentes —21 hombres y una mujer menor de edad— quienes ya se habían rendido, lo cual contradice la versión oficial según la cual los elementos del ejército respondieron a una agresión.

19 de septiembre

La Sedena reitera que el personal militar repelió una agresión armada. Human Rights Watch define a la masacre de Tlatlaya como la peor del sexenio. El caso se vuelve mundial.

25 de septiembre

Luis Estrada, director de *La dictadura perfecta*, de próximo estreno, afirma que su película es “la crónica del apocalipsis nacional”. No sabe que lo peor está por venir y que la realidad rebasa la ficción.

FUENTES

La guerra sucia en México, <<http://guerrasuciamexicana.blogspot.mx/2009/01/cronologia-de-la-represion-en-mexico-2a.html>>.

Informes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, <<http://cciodh.pangea.org/index/>>.

H.I.J.O.S. México, <<http://www.hijosmexico.org>>.

Periódicos: *La Jornada*, *Excélsior*, *Milenio*, *Proceso* y *Contralínea*.

Fuentes digitales: *Animal Político*, *Somos el Medio*, *Revolución.0*, *Desinformémonos*, *Sin Embargo*, *Serapaz*.

LAS NORMALES RURALES Y LA LUCHA
POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
(1917-2015)

Claudio Albertani

Lo que diferencia a las normales rurales de las otras instituciones normalistas —y de todas las instituciones de educación superior, incluyendo universidades e institutos— está basada en una educación integral de cinco ejes: político, académico, cultural, módulos de producción y deportivo. El objetivo de una normal rural no es sólo formar docentes capacitados en la enseñanza de la educación primaria, sino de cubrir las necesidades que se requieren en una comunidad rural.

Federación de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México

Abandonadas, y con frecuencia atacadas por el gobierno, su terquedad posee aires épicos. Su voluntad de persistir se ve reflejada en las dramáticas acciones de sus alumnos que, con frecuencia, son apoyadas por las comunidades aledañas también comprometidas con la preservación de estas instituciones. Suelen ser pocos los medios de comunicación que cubren las luchas de los normalistas rurales y, cuando lo hacen, se recurre a una fórmula conocida: estudiantes revoltosos, jóvenes holgazanes, instituciones que pertenecen al mundo de ayer.

Tanalís Padilla

*Mientras la pobreza exista,
las normales rurales tendrán razón de ser.*

Mural en la Escuela Normal Rural
“Gral. Emiliano Zapata”,
Amilcingo, Morelos

1917

Junto con el reparto agrario, el acceso a la educación es una de las conquistas sociales más importantes de la Revolución. El artículo tercero constitucional establece los criterios que deben orientar la educación impartida por el Estado contemplando la enseñanza libre, gratuita y laica.

Década de los años veinte del siglo XX. Surge un gran número de escuelas rurales con el objetivo de formar maestros que se conviertan en líderes de las comunidades indígenas y campesinas. Cuentan con internados mixtos y, aunque carecen de recursos, salen adelante gracias al empeño de maestros y estudiantes.

1921

Bajo la dirección de José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública, SEP, que busca fortalecer la enseñanza rural e indígena.

1922

Se funda la primera Escuela Normal Rural en Tacámbaro, Michoacán, con base en las ideas pedagógicas de John Dewey y un plan de dos años que articula las materias académicas con el aprendizaje de labores agrícolas, artes y oficios.

1923

La SEP decreta que todas las escuelas deben ser “escuelas de acción” según la filosofía de Dewey.

1924

Diego Rivera pinta el mural “La maestra rural” en la Secretaría de Educación Pública (SEP) que simboliza el papel que debía jugar la educación dentro del nuevo orden revolucionario.

1926

El profesor Rodolfo A. Bonilla funda una Normal Rural en Tixtla, Guerrero. En una primera etapa, la escuela no tiene un edificio propio y funciona en diferentes barrios de la ciudad.

1927

Ya existen 10 Normales Rurales: San Antonio de la Cal (Oaxaca), Tixtla (Guerrero), Xocoyucan (Tlaxcala), Río Verde (San Luis Potosí), Actopan (Hidalgo), Oaxtepec (Morelos), Izúcar de Matamoros (Puebla), San Juan del Río (Querétaro), Erongarícuaro (Michoacán) y La Paz (Baja California Sur). La nueva legislación establece que todas las normales tendrán internado y que los alumnos contarán con becas. Los estudiantes participan activamente en el funcionamiento y mantenimiento de las normales, lo cual les hace desarrollar un fuerte sentimiento de identidad y refuerza sus compromisos.

1929

La Universidad Nacional conquista la autonomía.

1933

30 de marzo

El profesor Rodolfo A. Bonilla pone la primera piedra de la sede definitiva de la Normal Rural de Tixtla en los terrenos de la ex hacienda de Ayotzinapa. La termina el profesor Raúl Isidro Burgos que le dará el nombre. La escuela empieza a funcionar con secundaria y normal con un internado mixto.

1934**Octubre**

Dos meses antes de que Lázaro Cárdenas asuma la presidencia, se aprueba una reforma al artículo tercero constitucional cuya parte medular establece que “la educación que imparta el Estado será socialista”. Al margen de las polémicas ideológicas, una parte importante del magisterio, especialmente en el campo, simpatiza con el proyecto pues lo considera un intento rescatable de cambiar radicalmente el sistema educativo y, por esa vía, un apoyo al proceso de cambio social.

1934-1940

El presidente Lázaro Cárdenas consolida el proyecto de las normales rurales y de la educación socialista.

1935

Nace la “Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México” que todavía existe y es la organización estudiantil más antigua del país. Su lema es: “¡por la liberación de la juventud y la clase explotada!”. A lo largo de los años, la FECSM mantiene viva la idea de que la educación es una vía para lograr una sociedad más justa.

1936**1 de enero**

Mediante decreto presidencial, el general Lázaro Cárdenas, crea el Politécnico con el objetivo de brindar educación profesional superior a las clases más desprotegidas. El aumento del presupuesto para la enseñanza técnica es espectacular pasando de 2330937 pesos en 1934 a nueve millones en 1940.

1940**20 de julio**

La FECSM presenta un pliego petitorio: aumentar la pensión

de 65 a 75 centavos diario, dotar de equipos los dormitorios, dotación de ropa, reparar y construir edificios, reparar los servicios de agua potable y luz eléctrica. Ante la negativa de la SEP, la FECSM se declara en huelga recibiendo el apoyo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana (STERM) y de la Confederación de la Juventud Mexicana (CJM).

1 de agosto

Los estudiantes ganan la huelga: la SEP se compromete a subir la pensión a 75 centavos y a comprar ropa y equipo para las escuelas.

1940-1946

El presidente Ávila Camacho decide acabar con el proyecto educativo cardenista. En adelante, la escuela ya no sería un instrumento de transformación de la sociedad, sino el “medio propicio para lograr la unión entre los mexicanos”. Las normales rurales dejan de formar a técnicos agrícolas, se clausuran los internados mixtos y el presupuesto es reducido al mínimo. Los periódicos gubernistas empiezan a caracterizar a la educación rural como un fracaso culpando a los maestros de haberla convertido en foco de agitación, delito y “basura social”. Comienza así el patrón de conflicto que se prolonga hasta nuestros días: la SEP regatea los recursos y los estudiantes los exigen.

1941

Mayo

Huelga en la escuela de Ayotzinapa para reclamar los recursos no entregados que se han prometido desde el año anterior. Interviene el ejército que sitia la escuela y detiene a seis estudiantes y tres profesores. La prensa aprovecha para criticar la educación socialista y alegar que, en el transcurso del conflicto, los estudiantes han quemado la bandera nacional,

lo cual es falso. Una estudiante le expresa al coronel que la lleva presa: “debe usted saber que somos hijos de campesinos agraristas, que nuestros padres lucharon con las armas a la mano en esa gran revolución”.

1943

Nace el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, subordinado al Estado que en adelante funcionará como co-rea de transmisión de las políticas educativas del régimen.

1945

Se implanta un plan de estudios que homologa a las normales rurales con las urbanas. A la par, el Estado renuncia a la idea de formar maestros especializados en atender las necesidades educativas del campo.

1946

Una nueva reforma al tercero constitucional suprime el término socialista reflejando el viraje del clima político hacia la derecha.

Década de los cincuenta y sesenta

A pesar del cambio de rumbo, aumenta la matrícula y se abren nuevas normales rurales que llegan a ser 29.

1960

30 de diciembre

Matanza en Chilpancingo, Guerrero, cometida por el ejército federal contra el movimiento estudiantil que había dado una formidable pelea en los meses anteriores contra el gobierno tiránico del general Raúl Caballero Aburto.

1964-1970

Nuevos embates contra las normales durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

1967

24 de junio

Un documento de la Dirección Federal de Seguridad, firmado por su titular, Fernando Gutiérrez Barrios, y recién descubierto por el periodista de *Contralínea*, Zósimo Camacho, revela que el gobierno ya ha decidido terminar con el modelo del normalismo rural.

1968

Febrero

Las normales rurales se encuentran movilizadas. La agitación estudiantil empieza en la provincia donde las normales rurales se encuentran en lucha por mejorar sus condiciones materiales.

Octubre

La represión militar contra estudiantes no se limita a la Noche de Tlatelolco: más de la mitad de las normales rurales son ocupadas por militares y la FECSM pasa a la clandestinidad.

19 de noviembre

La normal de Ayotzinapa se encuentra sitiada por el ejército mexicano.

1969

Gustavo Díaz Ordaz cierra 15 de las 29 normales que todavía existen. Las acusa de ser nidos comunistas. Gutiérrez Barrios controla las relaciones que los alumnos de cada escuela mantenían con las comunidades agrarias circunvecinas.

En visita a Ayotzinapa, el funcionario de la SEP, Ramón Bonfil, advierte a los estudiantes que si se les sorprende “agitando” se les suspenderán sus raciones de comida y se les cortaría el agua y la luz.

Años setenta

La FECSM se mantiene en la semiclandestinidad, condición en

la que permanece hasta el día de hoy. Sigue la persecución política y represión de los líderes estudiantiles de las normales rurales por sus vínculos con movimientos políticos radicales y la guerrilla.

1974

20 de junio

Detención por parte de agentes federales y posterior asesinato del profesor Inocencio Castro Arteaga, egresado de la normal rural de Ayotzinapa.

2 de septiembre

Secuestro y desaparición forzada de Jacob Nájera Hernández, egresado de la normal rural de Ayotzinapa, profesor de escuela primaria y líder del Movimiento Revolucionario del Magisterio. Permanece desaparecido.

1979

9 de abril

En Torreón, Coahuila, en una emboscada montada por la Brigada Blanca caen Elín Santiago Muñoz y José Luis Martínez Pérez, maestros normalistas, militantes del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), ambos egresados de la normal rural de Ayotzinapa.

1993-1998

En un claro intento por desaparecerla, el gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, reduce significativamente la matrícula de la escuela normal rural Luis Villarreal, de la comunidad El Mexe, municipio de Tepatepec, Hidalgo.

1993

Se promulga la reforma educativa salinista que introduce criterios neoliberales en la escuela. La iniciativa privada asume el papel que en un principio jugó el Estado.

1998

Michoacán. Los purépechas logran la apertura de la Escuela Normal Indígena de Cherán.

1999**11 de febrero**

El rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, propone un Reglamento General de Pagos (RGP) en el que se suben las cuotas por concepto de inscripción y colegiatura.

24 de febrero

En asamblea, estudiantes de la UNAM rechazan el incremento de las cuotas. Bajo la dirección del Consejo General de Huelga (CGH), inicia una larga lucha por una educación pública y gratuita.

25 de febrero

18 mil estudiantes marchan contra el aumento de cuotas.

Marzo

Por solicitud del rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, el Consejo Universitario modifica el Reglamento General de Pagos incrementando significativamente las erogaciones por conceptos de inscripción, cuota semestral y servicios.

18 de marzo

Multitudinaria marcha de Electricistas y Estudiantes en defensa de la industria eléctrica y la educación gratuita.

19 de abril

¡Ya basta! del México urbano. 27 de 36 planteles de la UNAM se declaran en paro contra el alza de cuotas en la UNAM.

11 de mayo

Barnés anuncia la creación de la Comisión de Encuentro (CE) sin carácter resolutivo, integrada por diez directores e investigadores de la UNAM.

12 de mayo

El CGH exige: 1) abrogación del Reglamento de Pagos; 2) derogación de las normas que impiden el pase automático de bachillerato a licenciatura; 3) desmantelamiento del aparato policiaco; 4) apertura de un espacio democrático en la universidad; 5) anulación de los vínculos con organismos externos de control (Ceneval); 6) recorrer el calendario escolar para recuperar los cursos perdidos.

2 de junio

Primer contacto entre paristas y la CE. El CGH entrega un documento con agenda y formato de diálogo, que es rechazado por los representantes del rector.

3 de junio

Barnés anuncia que “las cuotas semestrales tendrán carácter de aportaciones voluntarias”.

26 de julio

90 mil personas marchan del Museo de Antropología al Zócalo, en apoyo al CGH.

11 de noviembre

Marcha del CGH de Televisa San Ángel a Los Pinos. Represión.

12 de noviembre

Renuncia del rector de la UNAM, Barnés de Castro.

11 de diciembre

Marcha del CGH a la embajada estadounidense. El gobierno de la ciudad la reprime.

2000**5 de enero**

Estudiantes de la normal rural Luis Villarreal de “El Mexe”, Hidalgo, ocupan la escuela en demanda de un aumento de

becas. El gobierno del estado responde cortando el agua, el gas y la comida al internado.

6 de enero

El nuevo rector, Ramón de la Fuente, presenta una propuesta para reabrir la UNAM. De la Fuente considera resueltos los seis puntos del pliego petitorio. El CGH no acepta y de la Fuente convoca a un plebiscito para el 20 de enero.

20 de enero

Plebiscito en la UNAM. De los 180 mil sufragios (sobre una población total de 300 mil universitarios), el 80 por ciento se expresa en favor de la propuesta del rector. El CGH denuncia fraude.

6 de febrero

Con la tácita aprobación del gobierno del Distrito Federal y del nuevo rector, Juan Ramón de la Fuente, 2 mil elementos de la PFP irrumpen en las instalaciones de la UNAM violando la autonomía. 732 detenidos entre ellos los principales dirigentes del CGH.

9 de febrero

La policía sale de la UNAM. 85 integrantes del CGH permanecen detenidos. Marcha de 100 mil personas exige su liberación.

12 de febrero

Encarcelan a otros 50 integrantes del CGH.

19 de febrero

El gobernador priísta de Hidalgo, Miguel Ángel Núñez manda a desalojar a los estudiantes de "El Mexe" que cumplen una semana en huelga de hambre a las puertas del palacio de gobierno, en Pachuca. Al mismo tiempo, granaderos toman por asalto la normal. Sin embargo, cientos de estudiantes y familiares armados con palos y piedras someten a 68 policías y sólo los liberan a cambio de los 350 detenidos.

2001

Como producto de la lucha del CGH y de los colonos de Santa Martha Acatitla (delegación Iztapalapa) nace la Universidad de la Ciudad de México (UCM), institución de educación pública superior que atiende las necesidades de los sectores más desfavorecidos.

2003**16 de diciembre**

Desaparece el sistema de internado en las normales con el argumento de que existe un autogobierno de estudiantes encabezados por un comité, que abusaba de alumnos de nuevo ingreso.

2005-2011

A lo largo del sexenio, Zeferino Torreblanca, gobernador perredista de Guerrero, intenta —sin lograrlo— reducir la matrícula de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa (540 estudiantes en ese momento).

2007**1 de diciembre**

Acapulco. Al pedir una cooperación de 50 pesos en la caseta de cobro La Venta de la Autopista del Sol, estudiantes de Ayotzinapa son desalojados violentamente por la Policía Federal Preventiva (PFP). 56 detenidos.

2008**Enero**

Michoacán. Incendio en la normal de Tiripetío. Dos jóvenes mueren calcinados en los dormitorios de la escuela.

6 de julio

Bajo la argumentación de que ya no se necesitan maestros ru-

rales, el gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, logra el cierre definitivo de la escuela normal rural Luis Villarreal de la comunidad El Mexe.

31 de agosto

José Luis González de la Vega, el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), suspende el servicio del comedor de la normal de Ayotzinapa en represalia por las protesta en contra de la Alianza por la Calidad Educativa.

27 de noviembre

Cientos de estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío son reprimidos por la policía en el kilómetro 11 de la carretera Pátzcuaro-Morelia, con un saldo de 133 detenidos.

2010-2013

Estudiantes y trabajadores de la UACM luchan contra un intento de contrarreforma impuesto por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard y la rectora Esther Orozco, su operadora política.

2010

Agosto

Elba Esther Gordillo, secretaria general del SNTE, aboga por la desaparición de las normales por ser “semilleros de guerrilla”. Propone convertirlas en instituciones para formar “técnicos de turismo”.

2011

22 de junio

En el contexto de los trabajos del quinto Congreso Nacional de Educación, el presidente de la Fundación Televisa y de Mexicanos Primero, Claudio X. González, pide el cierre de las escuelas normales rurales ya que “son un hervidero de política y de grilla”.

12 de diciembre

500 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa toman la Autopista del Sol México-Acapulco a la altura de Chilpancingo. Rechazan la imposición de un director afín a Elba Esther Gordillo, exigen el aumento de la matrícula escolar y piden audiencia con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero. En el violento desalojo, son asesinados los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús y un empleado de la gasolinera aledaña a la caseta México-Acapulco. Hay más de cincuenta detenidos y un número indeterminado de heridos.

2012**9 de enero**

La CNDH publica un informe en el que afirma que la Policía Federal provocó el enfrentamiento del mes pasado y que fueron los ministeriales quienes dispararon a los estudiantes.

Octubre

Michoacán. Normalistas ocupan las escuelas de Tiripetío, Cherán y Arteaga. Demandan posponer un año la reforma curricular.

15 de octubre

Policías federales y estatales desalojan las tres normales con lujo de violencia. 200 detenidos.

7 de diciembre

Entrega del Premio Nacional Carlos Montemayor a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

20-21 de diciembre

La Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, aprueban una reforma educativa privatizadora.

2013

A lo largo del año se registran marchas y acciones demostrativas del movimiento magisterial contra la reforma educativa, particularmente en Oaxaca (sección 22) y en Guerrero (CETEG).

25 de febrero

El Poder Legislativo Federal declara constitucional la reforma educativa.

7 de marzo

Victoria definitiva de la UACM contra Orozco. El GDF reconoce a Enrique Dussel, el rector interino nombrado por el Consejo Universitario.

23 de abril

Los agentes acusados del asesinato de los dos estudiantes de Ayotzinapa (diciembre de 2011) son liberados por orden de un juez federal.

18 de agosto

Más de 20 mil maestros provenientes de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, principalmente, instalan un plantón en el Zócalo capitalino para manifestarse contra la reforma educativa privatizadora que pretende imponer el gobierno de Peña Nieto.

25 de agosto

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, declara que la reforma educativa no se detendrá.

10 de septiembre

Peña Nieto promulga la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

13 de septiembre

Violento desalojo del plantón magisterial en el Zócalo capitalino.

2014

7 de enero

Fredy Fernando Vázquez Crispín y Eugenio Tamarit Huerta, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, mueren al ser atropellados por un tractocamión, mientras recolectan dinero entre los automovilistas que circulaban por la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. Tres jóvenes más resultan heridos.

24 de mayo

Aurora Tecoluapa, estudiante de la Normal Rural “General Emiliano Zapata”, de Amilcingo, Morelos, es atropellada por un coche en la carretera México-Oaxaca y muere, en tanto que seis de sus compañeras quedan lesionadas.

24 de septiembre

El Consejo General Consultivo del Instituto Nacional Politécnico (IPN) aprueba un nuevo Reglamento Interno y una reforma a los planes de estudio que pone en peligro el proyecto educativo original.

25 de septiembre

Primera mega manifestación de estudiantes del Poli. Exigen la derogación de las reformas.

26 de septiembre

Se consuma el crimen de Iguala.

29 de septiembre

Todas las escuelas del Poli entran en paro y son ocupadas por los estudiantes.

30 de septiembre

Los estudiantes exigen la destitución de la directora del Poli, Yoloxóchitl Bustamante. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dialoga con ellos y se instala una mesa de negociación.

3 de octubre

Victoria del movimiento politécnico. Osorio Chong da a conocer la destitución de Yoloxóchitl Bustamante como directora del IPN, la cancelación de planes y programas de estudio; así como la abrogación del reglamento interno.

2015**24 de febrero**

Acapulco. El profesor Claudio Castillo Peña, egresado de la normal rural de Ayotzinapa en 1974, es asesinado por la policía federal en el curso de una movilización magisterial para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de la misma escuela.

FUENTES

Civera Cerecedo, Alicia, *La escuela como opción de vida. La formación de maestros normalistas rurales en México, 1921-1945*, México, El Colegio Mexiquense, 2013.

Padilla, Tanalís, “Las normales rurales: historia y proyecto de nación”, <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512736009>>.

Raby, David L., “La educación socialista en México”, en *Cuadernos Políticos*, núm. 29, México, Era, julio-septiembre de 1981, pp. 75-82.

Tanck de Estrada, Dorothy (coord.), *Historia mínima ilustrada. La educación en México*, México, El Colegio de México, 2011.

Periódicos: *La Jornada*, *Excélsior*, *Milenio*, *Proceso* y *Contralínea*.

Fuentes digitales: *Animal Político*, *Somos el Medio*, *Revolución.0*, *Desinformémonos*, *Sin Embargo*, *Telesur*.

LUCHARÉ HOY PORQUE
NO QUIERO VERTE
MORIR MAÑANA



ACCION GLOBAL POR
X
AYOTZINAPA

Norberto

CRÓNICAS DE REPRESIÓN Y RESISTENCIA
(26 DE SEPTIEMBRE DE 2014-26 DE MARZO DE 2015)

Claudio Albertani

*Los quisieron desaparecer
y están en todas partes.*

Pinta mural

El dolor nos enseñó a hablar.

Madre de un desaparecido

Ya le perdimos el miedo al maldito gobierno.

Padre de un desaparecido

2014

26 de septiembre

Se consuma la masacre de Iguala, crimen de Estado y de lesa humanidad.

27 de septiembre

En conferencias por separado, el comité de padres de familia, el de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) exigen la presentación con vida de 25 estudiantes normalistas (sólo después se supo que son 43) privados de su libertad por policías de Iguala. El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) convoca a movilizaciones en todo el estado y a realizar acciones “contundentes”. Exigen la destitución del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, del presidente muni-

cipal de Iguala, José Luis Abarca, y del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Vázquez.

28 de septiembre

El comandante del 27 batallón de infantería, coronel José Rodríguez Pérez, se entrevista con un grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos, a quienes asegura que en el cuartel militar no saben nada de los estudiantes.

29 de septiembre

Sebastián de la Rosa, dirigente estatal de la corriente Nueva Izquierda del PRD (mejor conocida como “Los Chuchos”), refrenda el apoyo del partido al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

29 de septiembre

La PGJE detiene a 22 policías del estado por haber participado en el asesinato de seis personas en Iguala. Se comienza a mencionar al grupo criminal Guerreros Unidos como ejecutor material de la masacre.

30 de septiembre

Abarca solicita licencia para separarse del cargo y, poco después, se esfuma junto a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

2 de octubre

El Gobierno Federal ordena el envío del Ejército a Iguala y algunas zonas de Guerrero.

2 de octubre

La protesta se extiende a la ciudad de México. En la marcha para conmemorar las víctimas de la matanza de 1968, los manifestantes exigen la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos en Iguala.

3 de octubre

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica la desa-

parición de los 43 estudiantes como uno de “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.

4 de octubre

Después de haber considerado durante más de una semana los hechos de Iguala como un “asunto local”, la Procuraduría General de la República (PGR) atrae la investigación. Se encuentran las primeras fosas clandestinas en las inmediaciones de Iguala. No se precisa el número ni la identidad de los cadáveres exhumados.

5 de octubre

Comunicado del Ejército Popular Revolucionario (EPR): la persecución de normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala fue un crimen de Estado.

6 de octubre

Mensaje presidencial de Peña Nieto sobre lo ocurrido en Iguala: “Se trata de un hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie”.

6 de octubre

Comunicado del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI): “se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada popular de ajusticiamiento 26 de septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del *narcoEstado* mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del estado, mal llamado Guerreros Unidos”.

7 de octubre

Cuauhtémoc Cárdenas, “líder moral” del PRD, publica un artículo en *La Jornada* en repudio al crimen de Iguala, sin mencionar la responsabilidad política de su partido y sin exigir el juicio político al gobernador Aguirre Rivero.

8 de octubre

Primera Jornada de Acción Global por Ayotzinapa. En al me-

nos 25 estados de la República mexicana y en diversas ciudades de América y Europa, millones de personas marchan en demanda de la aparición con vida de los 43. Al final de la marcha, Cuauhtémoc Cárdenas es increpado por un grupo de manifestantes que lanzan piedras y gritan: “¡cobarde!”, “¡traidor!” y “¡asesino!”.

9 de octubre

El gobierno federal filtra a los medios la detención de Salomón Pineda Villa por la Marina en Cuernavaca. Sin embargo, días después la noticia será desmentida por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez y, a solicitud expresa de la revista *Proceso*, la SEIDO niega tenerlo e informa que sería ilegal si lo tuviera la Marina. En la actualidad, se ignora su paradero.

9 de octubre

Se instala plantón de maestros en Chilpancingo.

10 de octubre

Miembros del Parlamento Europeo expresan su consternación por los acontecimientos de Iguala: “ya es hora de acabar con la impunidad en México. (...) Exigimos firmemente que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa.

10 de octubre

En la Facultad de Economía de la UNAM, nace la Asamblea Interuniversitaria que incluye las principales universidades públicas de la zona metropolitana.

10 de octubre

Murillo Karam informa sobre la detención de otras cuatro personas y la localización de cuatro fosas clandestinas en Iguala. Hasta el momento van 34 personas detenidas —26 policías de Iguala, cuatro miembros del grupo delincencial Guerreros Unidos y los cuatro anunciados hoy— y nueve fo-

sas clandestinas localizadas en el municipio guerrerense donde la policía municipal desapareció a los jóvenes.

13 de octubre

Chilpancingo. Normalistas y maestros incendian las instalaciones del Ayuntamiento y varias oficinas que se encuentran en el interior del Palacio de Gobierno.

15 de octubre

Chilpancingo. La Comisión de la Verdad sobre las secuelas de la guerra contrainsurgente en Guerrero entre 1969 y 1979 presenta su informe final. El fallo no deja lugar a dudas: la impunidad que subsiste hoy se gestó en esos años.

15 de octubre

Segunda Jornada de Acción Global por Ayotzinapa. Crece la movilización estudiantil; paros en 40 universidades del país. Marchas multitudinarias en el DF y en los estados. En Guerrero, integrantes de la CETEG, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, anuncian la toma de los 81 palacios municipales de la entidad. En la normal de Ayotzinapa nace la Asamblea Nacional Popular (ANP), integrada por 44 organizaciones guerrerenses y 9 nacionales con el propósito de coordinar un plan de lucha común.

17 de octubre

Montevideo, Uruguay. Miles de manifestantes marchan hasta la embajada de México para exigir la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa.

17 de octubre

Padres de los estudiantes lideran una marcha multitudinaria en Acapulco, la ciudad más turística y poblada de Guerrero.

17 de octubre

Detención de Sidronio Casarrubias Salgado, *El Chino*, supuesto líder de Guerreros Unidos. 27 elementos más de las policías

municipales de Iguala y Cocula son consignados por haber participado de diversas maneras en la detención y desaparición de los normalistas. Éstos se suman a los 22 policías de Iguala que fueron consignados el 30 de septiembre por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.

20 de octubre

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se reúnen (tardíamente) con los familiares de los estudiantes desaparecidos.

20 de octubre

Noam Chomsky, Edgardo Buscaglia y más de dos mil académicos de todo el mundo exigen la aparición con vida de los 43. Y escriben una carta abierta al gobierno mexicano: “los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 son una de sus manifestaciones más execrables en la historia del país. No hay palabras para expresar el horror y la rabia que sentimos”.

22 de octubre

Iguala, la multitud enardecida saquea la lujosa Plaza Comercial Galerías Tamarindos, construida en 2008 con dinero de Abarca.

22 de octubre

Marchas en decenas de ciudades del mundo. En la ciudad de México, participan al menos 100 mil personas. Las principales universidades públicas suspenden actividades: UNAM, UAM, UACM, Pedagógica; el IPN ya se encuentra en paro. Aparece la consigna: ¡Fue el Estado! Hay marchas en 18 estados. En Iguala, 20 mil manifestantes, ovacionados por la ciudadanía, recorren el mismo camino seguido por los normalistas antes de ser atacados por la policía. La marcha deriva en la quema de la alcaldía. En Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lleva a cabo una. Miles de ciudadanos, entre ellos estudiantes, maestras y maestros participan en la manifestación en varias ciudades en el estado. Marchas en diferentes países.

23 de octubre

Aguirre Rivero solicita licencia al gobierno de Guerrero “con el fin de coadyuvar a la distensión política necesaria para la solución del caso de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa”. Durante los 42 meses de su gestión 18 activistas han sido asesinados, 53 detenidos desaparecidos y 17 se encuentran presos por motivos políticos.

23 de octubre

Seis alcaldías clausuradas en Guerrero, entre ellas la de Acapulco.

23 de octubre

Marcha de 43 ciudadanos representantes de igual número de organizaciones civiles desde Iguala a la ciudad de México para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos.

26 de octubre

Chilpancingo. Integrantes de la FECSM, de la CETEG y padres de familia bloquean la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco.

26 de octubre

Manifestaciones de indignación internacional por la desaparición de los 43 en Buenos Aires, Rosario, Santiago de Chile, Bogotá, Lima, Montevideo, Managua, Tegucigalpa, San José, Neuquén, São Paulo, San Salvador, Austin, Nueva York, Chicago, Houston, Los Ángeles, Seattle, Montreal, Barcelona, Milán, Ginebra, Madrid, Valencia, Edimburgo, Londres, Manchester, York, Helsinsky, Nancy, París, Rennes, Marsella, Oslo, Copenhague, Lisboa, Praga, Estocolmo, Ginebra, Nueva Delhi, Tokio y Sidney, entre otras ciudades del mundo.

29 de octubre

Enrique Peña Nieto se reúne con familiares de los estudiantes desaparecidos. Tras cinco horas de reunión, los padres exigen resultados.

30 de octubre

Estudiantes de diversas instituciones marchan del IPN a Gobernación.

3 de noviembre

El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, declara ante medios que ha buscado el acercamiento con los familiares de los estudiantes desaparecidos pero que grupos “radicales” —como el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y la CETEG— impiden el diálogo.

4 de noviembre

El matrimonio Abarca es detenido en la ciudad de México. Se había refugiado en una bodega de la delegación Iztapalapa.

5 de noviembre

Tercera Jornada de Acción Global por Ayotzinapa. En Guerrero, 29 alcaldías se encuentran tomadas. Manifestaciones en todo el mundo y paro en más de ochenta instituciones académicas de México. ¡Fuera Peña!, exigen decenas de miles de personas en el Zócalo de la capital. Manifestaciones en 22 estados. En Guerrero, se inicia el paro de 72 horas convocado por la ANP. Maestros, estudiantes y campesinos bloquean las principales carreteras del estado. Manifestación de solidaridad en Argentina.

6 de noviembre

DF. Estudiantes clausuran la sede de la PGR en solidaridad con los normalistas.

7 de noviembre

Conferencia de prensa de Murillo Karam. La versión oficial es que los 43 fueron asesinados por integrantes de Guerreros Unidos y luego calcinados en el basurero del municipio de Cocula. Al terminar, el procurador pronuncia su famoso “Ya me cansé” que indigna al país. Respuesta de los padres: “no hay pruebas contundentes ni científicas; la búsqueda debe continuar”. Las redes sociales truenan contra el gobierno.

8 de noviembre

Arde por segunda vez el palacio de gobierno de Guerrero. Molestos por el informe de Murillo Karam, más de 600 integrantes de la FECSM, apoyados por la Coordinadora de Egresados en Defensa de Ayotzinapa, apedrean la fachada del palacio de gobierno e incendian unos 20 vehículos oficiales. Los padres, madres y demás familiares miran en silencio las llamas. En el Zócalo de la ciudad de México, cientos de manifestantes corean: “Su rabia es nuestra rabia”.

12 de noviembre

Comienza la campaña nacional para destituir a Peña Nieto. En Chilpancingo, estudiantes y maestros de la CETEG prenden fuego a inmuebles de gobierno.

13 de noviembre

Con el propósito de romper el cerco informativo, salen tres caravanas integradas por padres de familia y normalistas. Llevan los nombres de los tres estudiantes asesinados el 26 de septiembre: la “César Mondragón Fuentes”, recorre el norte; la “Daniel Solís Gallardo” enfila hacia el sureste y la “Julio César Ramírez Nava” visita las regiones Costa y Montaña de Guerrero. En los días siguientes celebrarán eventos informativos en plazas públicas, universidades, escuelas y caracoles zapatistas.

15 de noviembre

El juzgado quinto de distrito en materia de procesos penales dicta auto de formal prisión a José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, por la comisión de cuatro delitos graves (una acusación de homicidio, dos de secuestro y por delincuencia organizada).

15 de noviembre

Provocación policial. Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal agreden a un grupo de estudiantes de la UNAM en las inmediaciones del Auditorio Che Guevara. El mismo día, policías federales vestidos de civil detienen

a Bryan Reyes y Jacqueline Santana cuando salen de su casa para comprar alimentos. Lo que en un principio es un intento de desaparición forzada por parte de los federales, termina con el traslado de los compañeros a reclusorios del DF acusados de robo.

15 de noviembre

Estudiantes *toman* casetas de las autopistas que van del DF a Cuernavaca y Querétaro en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa.

16 de noviembre

En el *caracol* de Oventic, Chiapas, familiares y compañeros de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa son recibidos por la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): “han conseguido, con la fuerza de su dolor convertido en rabia digna y noble, que muchas y muchos en México y el mundo despierten, pregunten, cuestionen”.

17 de noviembre

Oaxaca. Encapuchados atacan con botellas molotovs la sede del PRI, en el marco de una manifestación en la capital oaxaqueña por el caso Iguala.

19 de noviembre

Ante el mandatario Enrique Peña Nieto y parte de su gabinete económico y social, el presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, pide justicia para los 43 desaparecidos.

20 de noviembre

Cuarta Jornada de Acción Global por Ayotzinapa. Paros universitarios y manifestaciones en toda la República. Las tres caravanas que partieron el 13 convergen en la ciudad de México. En la mañana, un grupo de estudiantes intenta bloquear el aeropuerto sin lograrlo. La marcha principal se desarrolla pacíficamente entre el Ángel de la Independencia y el Zócalo convocando a un millón de personas según estimaciones independientes. Hacia las 21 horas, cuando la plancha del Zó-

calo se está vaciando, un grupo de infiltrados intenta quitar las vallas que resguardan Palacio Nacional y arroja objetos contra los policías, con la finalidad de justificar la represión. Se desata entonces la furia policial (federal y local) según un esquema bien conocido: golpear y detener a personas completamente ajenas a los hechos para luego fincarles delitos graves. La prensa sataniza a los anarquistas.

22 de noviembre

Los presos del día 20 son trasladados a penales federales de Veracruz (hombres) y Nayarit (mujeres), bajo cargos federales de motín y tentativa de homicidio.

26 de noviembre

Estudiantes y profesores bloquean la Autopista del Sol durante seis horas a la altura del Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.

26 de noviembre

Italia. La red Libera, que desde hace 20 años lucha contra la mafia, solicita la creación de una comisión internacional de investigación para la búsqueda con vida de los 43.

26 de noviembre

Buenos Aires, Argentina. Cientos de manifestantes participan en un homenaje a los 43 normalistas de Ayotzinapa, en solidaridad con los familiares y la lucha del pueblo mexicano por justicia y verdad.

27 de noviembre

Un día después de que se cumplieron dos meses de la desaparición forzada de los 43, el presidente Enrique Peña Nieto anuncia 10 acciones en materia de seguridad pública, que auguran un nuevo giro autoritario del régimen (por ejemplo con la creación obligatoria de policías únicas estatales) y no implican acciones inmediatas para avanzar en la investigación de las miles de desapariciones forzadas.

28 de noviembre

Provocación policial. Luego de participar en una asamblea del movimiento en la UNAM, el activista Sandino Bucio Dovalí es detenido con lujo de violencia por elementos de la PGR en las inmediaciones del metro Copilco. Será puesto en libertad pocas horas después gracias a la pronta reacción de sus compañeros que, al percatarse, dan la alarma.

29 de noviembre

Chilpancingo. Representantes de 69 universidades del país acuerdan conformar la Coordinadora Nacional Estudiantil (CNE).

1 de diciembre

Quinta Jornada de Acción Global por Ayotzinapa. Marchas en varias ciudades de la República. En Acapulco, los manifestantes cierran la Autopista del Sol y obligan a las tiendas comerciales Sam's Club, Soriana Costera, y Walmart Icacos a cerrar sus puertas. En Chilpancingo, la multitud enardecida causa destrozos en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), incendia cinco vehículos y daña otros 14. En la ciudad de México, agentes provocadores del GDF disfrazados de anarquistas provocan destrozos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, al finalizar la marcha. Una vez más, la policía detiene a personas inocentes que días después serán liberadas al carecer de elementos contra ellas.

1 de diciembre

José Félix, familiar de uno de los estudiantes secuestrados, señala que 17 de los 43 pertenecen a la policía comunitaria o son hijos de uno de sus integrantes. Ocho de ellos son originarios del municipio de Tecoaapa, región Costa Chica: Abel García Hernández, Dorian González Parral, José Luis González Parral, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Alexander Mora Venancio, Saúl Bruno García, Leonel Castro Abarca y Marcial Pablo Baranda.

2 de diciembre

Peña Nieto cancela (por segunda vez) una visita a Iguala.

6 de diciembre

Sexta Jornada de Acción Global por Ayotzinapa. Ciudad de México. Paro universitario y nueva movilización en favor de la presentación con vida de los 43. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y activistas estudiantiles retienen a 12 infiltrados, tras detectarlos en la caseta México-Cuernavaca.

12 de diciembre

Clemente Rodríguez —padre de Christian Alfonso, uno de los normalistas desaparecidos— revela en entrevista con el periodista Roberto Rock del programa “La silla rota” que, cuando él y otros padres fueron a pedir el apoyo del 27 batallón destacado en Iguala, para buscar a los muchachos, les respondieron que afrontaran las consecuencias de sus actos, porque “se lo merecían”. Este mismo día, durante una protesta en la autopista México-Acapulco, efectivos de la Policía Federal (PF) disparan contra estudiantes que protestan y se llevan detenidos a 17 de ellos al Cuartel Regional Federal, en Chilpancingo, donde los golpean brutalmente.

14 de diciembre

Chilpancingo. Policía Federal, CETEG y estudiantes se enfrentan en Guerrero. Hay 22 heridos —14 entre maestros, padres y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y de la Universidad Nacional Autónoma de México.

15 de diciembre

El comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo, admite que la noche del 26 de septiembre fuerzas federales supieron en tiempo real que un grupo de normalistas estaba sufriendo una agresión a balazos.

18 de diciembre

Padres de normalistas protestan frente al 27 batallón de infantería. Exigen la aparición con vida de sus hijos.

19 de diciembre

Los Ángeles, California. Manifestación frente al consulado mexicano para exigir la presentación con vida de los 43.

19 de diciembre

El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio Alcocer, admite que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) participan en la indagatoria forense sobre el crimen de Iguala. Acusado de delincuencia organizada, es detenido el presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana.

22 de diciembre

Documentos desclasificados a pedido del National Security Archive (NSA) de Estados Unidos, revelan que hubo complicidad del Estado en la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, tanto en la de los 72, ocurrida en agosto de 2010, como en la de otros 193, en abril de 2011. La evidencia muestra, entre otras cosas, un *modus operandi* similar al que se empleó contra los normalistas de Ayotzinapa. En uno y otro caso los policías actuaron en colusión con grupos delincuenciales.

24 de diciembre

Mitin de los padres de los jóvenes desaparecidos en las inmediaciones de la residencia presidencial de Los Pinos para decirle a Enrique Peña Nieto “que si no hay navidad para nosotros, tampoco para él”.

25 de diciembre

Los padres de los jóvenes desaparecidos se plantan a las afueras de la embajada de Alemania para exigir al gobierno de ese país que deje de vender a México las armas con las que —dicen— fueron atacados sus hijos el pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala.

26 de diciembre

Séptima Jornada de Acción Global por Ayotzinapa. Los pa-

dres y los compañeros de los normalistas desaparecidos llaman a no votar en las elecciones del próximo año, hasta que los jóvenes desaparecidos sean encontrados con vida y a subir el tono de las protestas para exigir justicia y castigo a los responsables. En Iguala, estudiantes y maestros tiran una de las puertas de la sede del 41 batallón de infantería.

27 de diciembre

César Miguel Peñalosa Santana es puesto en libertad. La PGR no pudo comprobar sus vínculos con la desaparición de los 43.

28 de diciembre

Luis Raúl González, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), confirma que el organismo integra dos expedientes: uno relacionado con una recomendación al presidente Enrique Peña Nieto por los hechos del 26 de septiembre en Iguala, y el otro para indagar posibles actos de violación a los derechos humanos cometidos por elementos del 27 batallón de infantería del Ejército mexicano.

29 de diciembre

Acapulco. La CETEG toma la caseta de cobro de La Venta. 42 de las 81 alcaldías de Guerrero siguen en manos del movimiento popular. En el zócalo de Chilpancingo se consolida el Plantón por los 43.

30 de diciembre

Chilpancingo. Padres de los 43 desaparecidos, apoyados por estudiantes *toman* las estaciones ABC Radio y Capital Máxima.

31 de diciembre

Oventic, Chiapas. Una comisión de padres, familiares y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llega a esta comunidad del municipio de San Andrés Larráinzar, en la región de Los Altos, para participar en la fiesta de la rebeldía y la resistencia anticapitalista, a la que asisten delegaciones de 26 países.

2015

1 de enero

Oventic, Chiapas. El EZLN anuncia que acompañará a los padres y familiares de los 43 en la lucha por encontrarlos y en búsqueda por la verdad y la justicia.

2 de enero

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Familiares de los normalistas solicitan apoyo a mil 300 delegados del Congreso Nacional Indígena (CNI) para encontrar a sus hijos.

4 de enero

Chilpancingo. Estudiantes y padres de los 43 toman la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol México-Acapulco, donde informan sobre los objetivos de su movimiento.

5 de enero

Policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de Apatzingán y dispararon contra civiles, lo que causa la muerte de por lo menos 16 personas y decenas de heridos. Alfredo Castillo, comisionado federal de Seguridad en Michoacán, sostiene que tales hechos son el producto de un “fuego cruzado”.

9 de enero

En el foro *A cuatro meses de Ayotzinapa: ¿caso cerrado?*, Melitón Ortega, uno de los padres de los 43, informa que la PGR rompió el diálogo con ellos y con los abogados de la coadyuvancia.

10-15 de enero

Jornadas de búsqueda de los 43 encabezadas por miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

12 enero

Después de un enfrentamiento, un grupo de manifestantes,

entre los que hay algunos padres de los 43, logra entrar al 27 Batallón de infantería de Iguala.

14 de enero

Iguala. Parten tres contingentes de brigadistas en busca de los muchachos, uno rumbo a Taxco, otro se queda en los cerros de esta ciudad y el tercero, toma camino a Tepecoacuilco y para en la comunidad de Tetelilla, donde tiene lugar una reunión con las autoridades del pueblo. En la ciudad de México, los padres exigen investigar al Ejército.

15 de enero

Las autoridades niegan el ingreso de los padres de los 43 a otros cuarteles de Guerrero. Por la noche, unas 30 personas encapuchadas destruyen la antena repetidora de Televisa, ubicada en el barrio de El Fortín, en Tixtla.

16 de enero

Familiares de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada en mayo de 2007, exigen también inspeccionar sedes del ejército.

17 de enero

Ayotzinapa. Después de cuatro días de búsqueda, regresan los padres de los 43. No hallaron rastro de los muchachos. Al terminar la reunión de la ANP se acuerda *tomar* la ciudad de México, el próximo 26 de enero, con la movilización de varios sectores.

19 de enero

Chilpancingo. Un grupo de jóvenes con el rostro cubierto irrumpe en las oficinas del distrito 24 del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, con sede en Tixtla, donde quedan mobiliario y papelería. Dejan una pinta: “Como faltan 43, no habrá elecciones. Somos el pueblo organizado”.

26 de enero

Octava Jornada Global por Ayotzinapa. En la ciudad de Mé-

xico y en decenas de lugares del país y del extranjero, se repiten marchas, mítines por la aparición con vida de los 43 desaparecidos. En el mitin final, el mensaje de los padres de los normalistas es que no aceptarán que sus hijos están muertos, mientras no haya pruebas científicas que lo demuestren y advierten que no permitirán que haya elecciones en Guerrero.

28 de enero

Murillo Karam repite su verdad: Guerreros Unidos asesinó a los 43 normalistas luego incineraron los cuerpos y arrojaron los restos al río San Juan. La investigación para la PGR está cerrada. Los familiares contestan que el gobierno federal pretende cerrar el caso por razones políticas, a pesar de que la indagatoria no es concluyente.

29 de enero

Familiares de los 43 visitan la UAM-Xochimilco.

1 de febrero

Guerrero. La ANP exige el retorno de los elementos del ejército mexicano a sus cuarteles. Tijuana, B.C. Estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos denuncian que les ofrecieron dinero a cambio de frenar las movilizaciones y protestas.

4 de febrero

Berlín. Decenas de personas se manifiestan hoy frente al Ministerio del Interior de Alemania contra un previsto acuerdo de seguridad entre este país y México.

5 de febrero

Chilpancingo. Convención Nacional Popular, para coordinar manifestaciones a escala nacional. 15 mil maestros entre campesinos, maestros y estudiantes, encabezados por los padres de los 43 desaparecidos bloquean la Autopista del Sol México-Acapulco.

2-7 de febrero

Ginebra, Suiza. En las audiencias del Comité de Naciones Uni-

das contra las Desapariciones Forzadas, los padres de los normalistas denuncian la ausencia de justicia en México y exigen investigar al Ejército mexicano por la desaparición de sus hijos. “Venimos a solicitar la ayuda de la ONU”, declara Bernabé Abraján, padre de una de las víctimas.

6 de febrero

Bruselas. La “verdad histórica” del gobierno federal sobre la desaparición de los 43 no convence a la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que exige a las autoridades mexicanas no dar por concluidas las investigaciones y propone que parte de los recursos que la Unión Europea destina a México se utilicen en una investigación independiente, así como para la protección y apoyo a los familiares de los normalistas y a sus abogados.

7 de febrero

Integrado por 30 peritos de ocho países (México, Argentina, Uruguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Francia y España), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) cuestiona la “verdad histórica” de la PGR y argumenta que Murillo Karam manipula las evidencias para que el caso de Ayotzinapa cuadre.

13 de febrero

Iguala. Familiares de víctimas de *levantones* aseguran que nadie está a salvo: desde hace años gobierna una coalición de políticos, policías y *narcos*.

21 de febrero

Chilpancingo. Integrantes de la CETEG toman la Secretaría de Finanzas de Guerrero.

24 de febrero

Acapulco. Enfrentamientos en el curso de la movilización magisterial en solidaridad con los 43. Iguala. Hay 106 detenidos y 500 lesionados de los cuales 30 requieren de atención hospitalaria. El profesor Claudio Castillo Peña, de 65 años y

afectado de poliomielitis, es bajado de la camioneta en la cual se encontraba arengando a la muchedumbre y matado a golpes por la policía federal. Era egresado de la normal de Ayotzinapa.

Iguala. En el contexto del 184 aniversario de la creación de la bandera nacional, un grupo de manifestantes sube el cerro donde se encuentra el enorme estandarte y lo bajan para colocarle una hoja con la leyenda “Nos faltan 43”, escrita con sangre de estudiantes, padres de familia y otros participantes en la protesta.

26 de febrero

Ciudad de México. Al cumplirse cinco meses de la desaparición de los 43 la marcha que arranca en el Ángel de la Independencia concluye con un llamado a la sociedad civil a no permitir que el caso quede en el olvido y a boicotear las elecciones de junio. El mitin concluye con un minuto de aplausos en memoria del profesor Claudio Castillo Peña. La policía detiene a cinco estudiantes.

2 de marzo

Londres. En el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto, Amnistía Internacional protesta contra la tortura en México.

7 de marzo

En la marcha por el Día Internacional de la Mujer se escucha la voz de las madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, llamando a la sociedad a anular su voto en las próximas elecciones, poniendo: “faltan 43”.

9 de marzo

Reunión de padres de los 43 con estudiantes y profesores de la UACM, plantel San Lorenzo Tezonco.

14 de marzo

Salen tres caravanas a diferentes ciudades de Estados Unidos con el objetivo de informar sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en México. Denominada “Ca-

ravana 43", la gira tiene tres puntos de partida: San Antonio, McAllen y El Paso (Texas). Una recorrerá el centro, las otras la costa este y oeste, respectivamente.

18 de marzo

Universidad de York (Toronto, Canadá). Memorial en honor a los 43, seguido de un panel al que hablan periodistas y académicos de México, Canadá y Reino Unido.

21 de marzo

Nueva York. Los padres de los 43 asisten a la asamblea anual de Amnistía Internacional (AI). Solicitan emitir recomendaciones sobre el caso al gobierno mexicano.

22 de marzo

Manifestaciones en Nueva York (Union Square) y Los Ángeles (parque McCarthur) para reclamar la aparición con vida de los 43.

22 de marzo

Pachuca, Hgo. En un acto multitudinario, Rafael López, padre de Julio César López Patotzin, uno de los 43, advierte que si el gobierno federal recurre al Ejército para las protestas, también habrá muertos por el lado del gobierno.

26 de marzo

Novena Jornada de Acción Global por Ayotzinapa. Hay marchas en la ciudad de México y en 10 estados. En Chilpancingo, los manifestantes protestan frente a las oficinas del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el Congreso del estado y el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla. En Acapulco, *toman* el módulo del INE en el edificio Costera 125. La consigna es clara: no hay condiciones para celebrar el proceso electoral. Los de arriba respiran; piensan que el tiempo apaga la rabia, que la protesta baja, que la normalidad vuelve. Pero a seis meses del crimen de Iguala, el movimiento sigue responsabilizando a todos los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, Verdes, etc.) y denuncia que todo el régimen está podrido.

28 de marzo

Tixtla. Tras ser reprimidos por policías a la entrada de la ciudad, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa incendian dos camionetas, tres motocicletas y oficinas de la comandancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

1 de abril

Chilpancingo, Gro. En el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, activistas de la Asamblea Nacional Popular (ANP) invitan a las amas de casa a no votar en las próximas elecciones del 7 de junio.

1 de abril

Enfrentamiento entre integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo Social de Guerrero (Fusdeg). Saldo: siete muertos, cinco desaparecidos y 11 heridos.

5 de abril

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) informa que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército enfrentan 1 254 juicios por prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, infligidos a civiles detenidos.

10 de abril

Convención Nacional Popular (CNP), en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, en la que participan 214 delegados de distintas organizaciones sociales.

11 de abril

Una caravana de padres de familia llega a Canadá, para realizar actividades informativas con legisladores, estudiantes, académicos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales sobre los hechos de Ayotzinapa.

16 de abril

Una comitiva de padres de familia parte a Europa para recorrer, en poco más de un mes, 13 países.

21 de abril

Nueva York. Familiares de los desaparecidos hablan ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir al gobierno mexicano abrir nuevas líneas de investigación que permitan encontrar a los 43 jóvenes.

21 de abril

Helsinki, Finlandia. Demostración en solidaridad con los desaparecidos de Ayotzinapa.

21 de abril

Nueva York. En la mañana, María de Jesús Tlatempa Bello, Clemente Rodríguez Moreno y Cruz Bautista Salvador, padres y familiares de los 43, ofrecen una entrevista a *Democracy Now!*, prestigioso programa de radio y televisión, dirigido por Amy Goodman. En la tarde, exponen la situación de los derechos humanos en México ante consejeros de la ciudad de Nueva York pertenecientes al Hispanic Caucus.

22 de abril

Quebec, Canadá. Diputados de la Asamblea Nacional de Quebec reciben a la delegación de la Caravana por Ayotzinapa.

23 de abril

Nueva York. Padres de los 43 participan en la marcha desde East Harlem hasta West Harlem para unir simbólicamente a los pueblos latinos con los afroamericanos.

24 de abril

Nueva York. Padres y familiares de los 43 que conforman las caravanas del Atlántico, Centro y el Pacífico ofrecen su testimonio ante expertos en derechos humanos.

25 de abril

Nueva York. Marchas en Queens, Brooklyn y en el Bronx encabezadas por los padres y familiares de los 43.

26 de abril

Décima Jornada de Acción Global por Ayotzinapa. En la ciudad de México, marcha para conmemorar un mes más de la

desaparición de los 43. Se instala el “antimonumento” en el cruce de Reforma y Bucareli, una escultura roja de metal de más de tres metros de altura donde se lee “+43”. En Chilpancingo hay choques entre la policía e integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Movilizaciones en Olinalá, en la Montaña Alta y en Ayutla de los Libres. Asimismo, elementos de la policía comunitaria de la Casa de Justicia La Patria es Primero bloquean la carretera Chilpancingo-Chilapa en apoyo a los padres de los 43 desaparecidos. En Cuernavaca, integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) marchan al zócalo de la ciudad, para exigir la aparición con vida de los 43.

28 de abril

Familiares de los desaparecidos testifican ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento canadiense en Ottawa.

28 de abril

Milán, Italia. Acto de protesta frente al consulado mexicano.

29 de abril

Roma, Italia. Acto de protesta frente a la embajada mexicana.

Mayo

Muestra fotográfica *Todos somos Ayotzinapa*, en el Pabellón Rojo de la 41 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en solidaridad con los normalistas rurales desaparecidos.

4 de mayo

París, Francia. Con motivo de la llegada de la Eurocaravana 43, marcha por los estudiantes desaparecidos.

5 de mayo

Nestora Salgado, ex coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, falsamente acusada de participar en 48

secuestros, comienza una huelga de hambre en el penal de alta seguridad de El Rincón, Nayarit.

9 de mayo

Chilapa de Álvarez, Guerrero. 300 pobladores que se dicen policías comunitarios toman la cabecera del municipio.

10 de mayo

Día de la Madre. En la ciudad de México, familiares de desaparecidos se manifiestan frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir a las autoridades federales encontrar a sus hijos e investigar a los responsables de su desaparición forzada. Al mismo tiempo se realiza una marcha del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia para exigir la presentación con vida de los 26 mil desaparecidos que se contabilizan en el país.

11 de mayo

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rinde su tercer informe. La conclusión es que la investigación oficial tiene muchas fallas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insiste en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 Batallón de Infantería del Ejército para entrevistar directamente, y no por intermediación de la PGR, a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes.

11-22 de mayo

La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, organizada por el pueblo yaqui que lucha contra la expropiación de sus manantiales, recorre el país con los siguientes objetivos: 1) visibilizar las múltiples crisis en toda la república; 2) fortalecer las luchas de resistencia popular en contra del modelo neoliberal; 3) organizarse en torno a la defensa del agua, su reapropiación por parte de la población y contra la propuesta de ley privatizadora.

12 de mayo

En respuesta a una solicitud de información pública, la PGR reserva 12 años los datos sobre cada implicado en desaparición de los normalistas.

15 de mayo

Día del maestro. En la ciudad de México y en diversas ciudades de la república, se registran marchas de maestros por la abrogación de las modificaciones al artículo tercero y 73 constitucionales y la aparición con vida de los 43. En Guerrero, integrantes de CETEG marchan desde la Normal de Ayotzinapa hasta Tixtla para rechazar la reforma educativa, exigir la presentación con vida de los normalistas y advertir que boicotarán las elecciones.

16 de mayo

La Caravana 43 Sudamérica, integrada por padres de familia de los 43, inicia una gira continental.

19 de mayo

La Eurocaravana 43 visita Londres.

19 de mayo

Miguel Ángel Osorio Chong declara que no se abrirá cuartel del Ejército en Iguala a expertos de la CIDH, pues ello significaría someter a las fuerzas castrenses a un proceso de desgaste.

19 de mayo

Córdoba, Argentina. Padres y familiares de los 43 encabezan una marcha por las calles de la ciudad y ofrecen entrevistas de radio y prensa.

20 de mayo

Tras recorrer Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, Italia, Suiza, Francia, España, Holanda, Bélgica, Inglaterra, entre otros países, la Eurocaravana 43 regresa a México.

20 de mayo

Rosario, Argentina. Padres y familiares de los 43 son recibidos en La Otra Casa en donde celebran encuentros con estu-

diantes de las Escuelas Normales y participan en la ronda que organizan cada jueves las madres de los jóvenes desaparecidos.

21 de mayo

Guerrero. Integrantes del MPG boicotean la gira electoral de Andrés Manuel López Obrador en Chilapa y Tlapa de Comonfort.

21 de mayo

Ciudad de México. En conferencia de prensa, el Comité de Madres y Padres de los 43 insiste en que no hay condiciones para que el próximo 7 de junio se celebren elecciones federales y locales.

22 de mayo

Chilpancingo. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de los 43, denuncia que el gobierno de Rogelio Ortega Martínez les ofreció dinero para que dejaran de luchar por la presentación de sus hijos.

22 de mayo

Michoacán. Otra masacre que lleva el sello de Tlatlaya, Apatzingán e Iguala: elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PGR y la Policía Federal atacan un rancho que se localiza en el municipio de Tanhuato, en las inmediaciones de la frontera con Jalisco. Saldo: 42 braceros y un policía municipal muertos. Los cadáveres presentan signos de torturas.

24 de mayo

Chilapa de Álvarez, Guerrero. Familiares denuncian la desaparición de al menos 30 personas entre el 9 y el 14 de mayo, durante la incursión de supuestos policías comunitarios.

26 de mayo

Buenos Aires, Argentina. Marcha a la Embajada de México encabezada por padres y familiares de los 43.

26 de mayo

Onceava Acción Global por Ayotzinapa. En el DF, la marcha concluye en medio de una trifulca entre elementos de la policía capitalina y manifestantes. Movilizaciones en Chiapas, Oaxaca, Morelos y Guerrero.

29 de mayo

Montevideo, Uruguay. La Caravana 43 Sudamérica protesta frente a la embajada de México.

29 de mayo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspende indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la educación básica y media superior.

29 de mayo

Guerrero. Policías antimotines estatales desalojan violentamente a padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a estudiantes de ese plantel cuando retiran propaganda electoral en Chilpancingo. Alumnos de ocho normales públicas de Guerrero toman durante cuatro horas la caseta de cobro de Palo Blanco.

29 de mayo

Nestora Salgado es trasladada del penal de El Rincón, Nayarit a la Torre Médica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, Distrito Federal.

31 de mayo

Las organizaciones patronales Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) y Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reaccionan airadas llamando a cumplir con la reforma educativa pues México tiene que ser “competitivo a escala internacional”.

2 de junio

San Pablo, Brasil. La Caravana 43 Sudamérica, llega a esta capital para dar a conocer el caso Ayotzinapa.

3 de junio

Guerrero. Policías federales y estatales se enfrentan con normalistas en la carretera de cuota entre Tixtla y Chilpancingo, con un saldo de cuatro uniformados y dos estudiantes lesionados. Al mismo tiempo, padres de los 43 toman la caseta de Palo Blanco ubicada en la Autopista del Sol.

4 de junio

Tras la petición de su familia, Nestora Salgado acepta levantar la huelga de hambre que sostuvo durante un mes. Su estado de salud es delicado.

4 de junio

Los jornaleros de San Quintín consiguen para todos los trabajadores agrícolas del estado de Baja California incrementos salariales que se establecen en tres sueldos base de 150, 165 y 180 pesos diarios.

5 de junio

Xalapa, Ver. 10 sujetos con pasamontañas y chalecos policiales irrumpen en un domicilio y atacan con machetes, bates y armas largas a jóvenes alumnos de la Universidad Veracruzana, con saldo de ocho heridos, tres graves. Son activistas de la organización ecologista Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y el Territorio.

5 de junio

Puebla, Pue. Agentes de la policía ministerial del estado detienen a siete estudiantes de las facultades de Sociología y Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP). Buscan incriminarlos en bombazos ocurridos en días anteriores contra instalaciones del gobierno federal, del Instituto Nacional Electoral (INE) y del gobierno del estado.

6 de junio

Puerto Alegre, Brasil. La Caravana 43 Sudamérica celebra encuentros con los movimientos indígenas y sociales. Repudian la farsa electoral que se efectúa en México al día siguiente.

6 de junio

Xolapa (inmediaciones de Acapulco). Mueren 16 personas en un enfrentamiento a balazos entre miembros de la policía comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg) y presuntos delincuentes.

6 de junio

Puebla, Pue. Son liberados, con reservas de ley, los siete estudiantes de la UAP detenidos el día anterior.

7 de junio

Sangrienta jornada electoral. Antonio Vivar Díaz, de 28 años, dirigente del MPG y estudiante de la carrera de pedagogía, es vilmente asesinado en Tlapa, Guerrero, a raíz del allanamiento a la Ceteg, por parte de policías federales. En las semanas anteriores, la vieja política al servicio de los amos de México ha desplegado toda su violencia. 20 precandidatos, candidatos o personal asociado a las campañas han sido asesinados. La indignación popular se ha expresado en bloqueos carreteros, quema de propaganda electoral, marchas y mítines en la ciudad de México y diversos municipios de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Estado de México.

8 de junio

Nueva York. Un largo reportaje sobre la desaparición de los 43 (el sexto de una serie comenzada en octubre de 2014) de Francisco Goldman, publicado por el influyente *The New Yorker* cuestiona abiertamente la llamada “verdad histórica” del gobierno.

11 de junio

Chilpancingo, Guerrero. Dos mil integrantes de la Ceteg, padres de los 43 y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, marchan para exigir castigo a los responsables de los asesinatos de los profesores Antonio Vivar Díaz, ocurrido el 7 de junio en Tlapa y de Claudio Castillo Peña, ocurrido el 24 de febrero en Acapulco.

12 de junio

Río de Janeiro, Brasil. Concluye la gira de la Caravana 43 Sudamérica en la ciudad carioca en donde representantes de los pueblos indígenas de Brasil y de los habitantes de la Favelas de Maré se solidarizan con los desaparecidos.

14 de junio

Desde su exilio en Estados Unidos (está falsamente acusado de ser uno de los responsables del secuestro de los estudiantes), el exjuez Ulises Bernabé García, quien la noche del 26 de septiembre de 2014 fungía como juez de barandilla en la base de la policía municipal de Iguala, contradice la explicación oficial: ningún estudiante fue ingresado a la sede policial esa noche.

16 de junio

Padres de los 43 inician una caravana por el sureste del país. Visitan Oaxaca, Campeche, Yucatán, Chiapas y Veracruz.

20 de junio

Tixtla, Gro. 400 personas realizan una marcha informativa, en la cual los padres de los 43 insisten en responsabilizar al Ejército mexicano por los hechos ocurridos en septiembre pasado en Iguala.

26 de junio

A casi un año de la desaparición de los 43 normalistas, las investigaciones se encuentran sin avances.

La lucha por la aparición con vida de los 43 no ha terminado.

FUENTES

González Villarreal, Roberto, *Ayotzinapa. La rabia y la esperanza*, México, Editorial Terracota, 2015.

Periódicos: *La Jornada*, *Excélsior*, *Milenio*, *Proceso* y *Contra línea*.

Publicaciones digitales: *Animal Político*, *Somos el Medio*, *Revolución.0*, *Desinformémonos*, *Sin Embargo* y *Telesur*.

DESPAÑADERO

MÉXICO
NO SERÁ EL MISMO
DESPUÉS
DE LO OCURRIDO
EN IGUALA.



CAIRÍN

POEMAS

AYOTZINAPA

David Huerta

Mordemos la sombra
Y en la sombra
Aparecen los muertos
Como luces y frutos
Como vasos de sangre
Como piedras de abismo
Como ramas y frondas
De dulces vísceras

Los muertos tienen manos
Empapadas de angustia
Y gestos inclinados
En el sudario del viento
Los muertos llevan consigo
Un dolor insaciable

Esto es el país de las fosas
Señoras y señores
Este es el país de los aullidos
Este es el país de los niños en llamas
Este es el país de las mujeres martirizadas
Este es el país que ayer apenas existía
Y ahora no se sabe dónde quedó

Estamos perdidos entre bocanadas
De azufre maldito
Y fogatas arrasadoras

Estamos con los ojos abiertos
Y los ojos los tenemos llenos
De cristales punzantes

Estamos tratando de dar
Nuestras manos de vivos
A los muertos y a los desaparecidos
Pero se alejan y nos abandonan
Con un gesto de infinita lejanía

El pan se quema
Los rostros se queman arrancados
De la vida y no hay manos
Ni hay rostros
Ni hay país

Solamente hay una vibración
Tupida de lágrimas
Un largo grito
Donde nos hemos confundido
Los vivos y los muertos

Quien esto lea debe saber
Que fue lanzado al mar de humo
De las ciudades
Como una señal del espíritu roto

Quien esto lea debe saber también
Que a pesar de todo
Los muertos no se han ido
Ni los han hecho desaparecer

Que la magia de los muertos
Está en el amanecer y en la cuchara
En el pie y en los maizales
En los dibujos y en el río

Demos a esta magia
La plata templada
De la brisa

Entreguemos a los muertos
A nuestros muertos jóvenes
El pan del cielo
La espiga de las aguas
El esplendor de toda tristeza
La blancura de nuestra condena
El olvido del mundo
Y la memoria quebrantada
De todos los vivos

Ahora mejor callarse
Hermanos
Y abrir las manos y la mente
Para poder recoger del suelo maldito
Los corazones despedazados
De todos los que son
Y de todos
Los que han sido

2 de noviembre de 2014, Oaxaca

Una luz x Ayotzinapa



Noberfo

Y VIVOS LOS QUEREMOS

Enrique González Rojo Arthur

La **incertidumbre** prende fuego
en las partes inflamables del afán de justicia.
Duele en la carne viva del espíritu.
Hace que las lágrimas se introduzcan en las venas
y lleguen a los puños, transmudando
su líquida congoja en sólida iracundia,
y es el hilo enmarañado que, nudo en la garganta,
se halla a punto, carajo, de asfixiar
las sílabas guerreras
que porta en su cartuchera de metáforas
mi canto.
Con los padres de las víctimas, sostengo:
no hay nada peor
que estar enfermo de incertidumbre,
que cargar la duda —enquistada y purulenta—
en medio de la frente, de si los hijos viven
o si el homicidio, mudando su obsoleta guadaña
por hornos crematorios, los ha vuelto
puñados de ceniza que manos criminales,
con líneas de la muerte en cada palma,
arrojaran al despeñadero del anonimato.
Pero no hay duda ya
de quiénes son los responsables:
los talleres plebeyos de la sospecha,
movidos por la fuerza motriz de la iracundia,
dibujan a todo vapor y a cielo abierto
el fantasma inconfundible del culpable.

Ha tiempo, los de arriba
—poniéndole veladoras de azufre
a la malevolencia—
han otorgado la ciudadanía mexicana
a la impunidad. Ha tiempo.
El crimen sin castigo, ha terminado por ser
el principio rector de nuestro México.

Como siempre, se nos fabula,
en algo que llaman la *verdad histórica*,
un cuento de hadas corrompidas, malolientes,
que buscan a toda prisa,
a carpetazo impúdico, contagiar
la supuesta ingenuidad de los padres de familia
y a quienes cerramos filas con su angustia
el virus del engaño. El basurero de Cocula,
donde el poder ha sembrado con ahínco
su versión de las cosas,
es el mayor yacimiento de mentiras
de nuestra historia actual.

Ni la miseria, ni las enfermedades,
ni las tarascadas de la mala suerte,
ni siquiera las versiones mentirosas
que tienen arrinconada a una esperanza
que se defiende como acosado lobezno,
pueden asimilarse
a las verdades con pies de barro,
al agua sucia de lo ambiguo
que convierte el suelo firme
en tierra movediza y en riesgo de naufragio.
No pueden compararse con el tumor de lo incierto,
que se expande como cosmos canceroso en miniatura
y roe las entrañas de los padres y las madres
de los 43 muchachos secuestrados
y enluta el corazón de millones de personas
de buena voluntad.
A esta tierra movediza

hay que añadir la ignorancia que tenemos de la identidad —las huellas dactilares— de los autores de la desaparición forzada de los jóvenes, la ignorancia de los promotores de la ignominia, el nombre y apellido de los pinches demiurgos de este infierno.

*26 de febrero de 2015,
a los cinco meses de la desaparición forzada
de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa*

EL PRÓSPERO DAÑO NUEVO





POSFACIO
¿DESPERTÓ MÉXICO?

UN BALANCE DE LAS ELECCIONES DEL 7 DE JUNIO

Manuel Aguilar Mora
Claudio Albertani

*Vota, sí, vota; pero escucha. Tu primer deber
es salir de aquí y seguidamente actuar
por cuenta propia. Ve y en cada barrio
abre una escuela laica, funda un periódico,
una biblioteca; organiza un centro de cultura,
un círculo obrero, una cooperación,
algo de lo mucho que te queda por hacer.*

Ricardo Mella, 1909

¿Cómo descifrar los resultados de las elecciones del 7 de junio de 2015? Los hechos se prestan a interpretaciones distintas e, incluso, contradictorias. Nosotros los entendemos como un momento de legitimación en el contexto de un régimen autoritario en el cual la democracia se ha vuelto un recurso retórico vaciado de todo contenido. Al igual que en otras ocasiones, las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente caracterizado por innumerables hechos ilegales y criminales y por el despliegue de un aparato propagandístico abrumador, en el cual los medios de comunicación masivos volvieron a jugar un papel nefasto. En esta ocasión, hubo un ingrediente más: las circunstancias de gravedad extrema que en las páginas anteriores describimos, mismas que forzaron al partido dominante y a sus cómplices a actuar como si no se tratara de las tradicionales e insignificantes elecciones intermedias, sino de elecciones presidenciales o, incluso, de una suerte de plebiscito de la salud y la viabilidad del sistema político mexicano. A

pesar de que el balance no favorece al movimiento social, tampoco es —ni de lejos— una victoria del oficialismo.

EL DOMINGO 7 DEL PUEBLO MEXICANO

Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Tanhuato... la caída de los precios del petróleo, el brutal recorte presupuestario, el fracaso de la reforma educativa, los escándalos de corrupción, la economía criminal, la militarización creciente, el desprestigio internacional, la carestía... Todo esto representaba una carga excesiva para el gobierno y por ello las elecciones implicaron una apuesta enorme: Enrique Peña Nieto necesitaba desesperadamente salir bien librado de ellas para concentrarse en la difícil segunda mitad de su sexenio, mismo que —no hace falta ser profeta para pronosticarlo— seguirá marcado por el descontento de una población cada vez más harta, numerosa y demandante.

Al conocerse los resultados preliminares, el presidente y sus personeros celebraron inmediatamente una supuesta “revitalización de la democracia”, así como “la modernización del sistema de partidos”. A la postre, el desenlace no fue el que él esperaba, ya que su partido sólo logró ser la minoría más grande con 29.17 por ciento, porcentaje sensiblemente menor al que obtuvo en 2012. Al Partido Acción Nacional (PAN), con 21.0 por ciento, tampoco le fue bien, pero el más castigado de los tres partidos que integraron el Pacto por México fue el PRD que, definitivamente, se colapsó con 10.82 por ciento.¹

Es verdad que la votación lograda por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados —el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal)— le permiten lograr, aunque con un margen muy estrecho, la mayoría absoluta con unos 260 diputados sobre un total de 500. Además, tiene de reserva a un PAN dependiente —ahora más que nunca— de las dádivas del gobierno. Sin

¹ Judith Amador Tello, “La mayoría pasiva”, *Proceso*, núm. 2015, 14 de junio de 2015.

embargo, el PRI perdió las gubernaturas de Nuevo León, Querétaro, Baja California y Michoacán; estuvo a punto de perder la de Colima, conservó la de San Luis Potosí, pero perdió alcaldes y diputados en el estado, aunque al mismo tiempo conservó la de Campeche y recuperó las de Sonora y Guerrero. En el rubro de las alcaldías importantes, las pérdidas incluyen a Guadalajara, Morelia, Zapopán, Celaya y León. Como lo admitió el mismo presidente del partido, César Camacho en las elecciones: “hubo claroscuros”.²

Uno de esos claroscuros es la farsa que armó el (todavía) titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, en torno a la evaluación docente que oportunistamente “suspendió” días antes del 7 de junio, para reanudarla la semana sucesiva, mientras Peña Nieto declaraba, desde Italia, que la reforma educativa es la “de mayor calado” de su gestión.³ Como sea, el presidente más cuestionado de la historia reciente se prepara a concluir su tarea: poner en marcha las llamadas “reformas estructurales” y —cueste lo que cueste— imponer a su sucesor para cubrirse las espaldas, después de los terribles hechos acontecidos en el primer tramo de su mandato.

LA DEMOCRACIA DE LOS RICOS

La democracia electorera cuesta cara. En esta ocasión fueron unos 22 mil millones de pesos a cargo del erario público, lo cual implica que son los comicios intermedios más caros de la historia de México, sin incluir otros miles de millones —todavía no contabilizados— provenientes de financiamiento privado.⁴ Al INE se le destinó la abrumadora mayoría de tales recursos (casi 19 mil millones), los cuales se distribuyeron

² César Camacho, entrevista en el Canal 11, 8 de junio de 2015 (citada en *Proceso*, núm. 2015, 14 de junio de 2015, p. 13).

³ Enrique Sánchez, “Peña Nieto destaca en Italia reformas estructurales”, *Excélsior*, en línea, 13 de junio de 2015, <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/13/1029148>>.

⁴ “Elecciones costarán cerca de 22 mil millones de pesos”, *El Punto sobre la i*, en línea, 5 de junio de 2015, <<http://elpuntosobrelai.com/elecciones-costaran-cerca-de-22-mil-millones-de-pesos/>>.

entre los partidos “registrados” y los gastos administrativos, incluido un escandaloso medio millón de pesos mensuales a su presidente y un monto cercano a los demás consejeros.

El papel desempeñado por el INE fue aún más vergonzoso que en ocasiones anteriores, empezando por la lluvia de anuncios publicitarios en horas estelares y el triste comportamiento de su presidente, Lorenzo Córdova, típico funcionario soberbio, grosero y torpe que aspira a ser títire de Los Pinos. Recordemos —es un ejemplo entre muchos— su actitud pusilánime ante el escandaloso dispendio incontrolado en propaganda del Partido Verde Ecologista, o sus “técnicos” en computación que presentaron datos que... ¡rebasaban el 100 por ciento de las casillas!

Locutores, reporteros, cronistas, los eternos intelectuales orgánicos dentro y fuera de la academia, artistas del espectáculo y hasta el entrenador técnico de la selección nacional de fútbol participaron en una avalancha de propaganda convocando a la gente a votar y a declararse tajantemente contra el anulismo y el boicot. El sistema de los partidos exigía mantener su tinglado electoral y no dudó en recurrir a las amenazas y a tácticas de amedrentamiento. Resultado: por primera vez logró reducir unos puntos el abstencionismo, siempre por arriba de 60 por ciento.

Fue así como culminó un proceso electoral caracterizado por un clima de tensiones y conflictos que incluyeron los asesinatos de tres candidatos a diferentes puestos, un precandidato, un coordinador delegacional del DF y un estudiante de Tlapa, Guerrero. Hubo, asimismo, bombazos contra instalaciones electorales, peleas físicas entre diferentes militantes de partidos e incluso entre militantes de un mismo partido, amenazas directas contra políticos y aspirantes a ocupar puestos de elección popular en diversos estados: Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Estas dos últimas entidades fueron ocupadas militarmente con el objetivo de reprimir e impedir que el boicot promovido por los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) prospera-

ra masivamente. Según el jurista y ex procurador de la república Diego Valadés, las autoridades dejaron de utilizar los instrumentos institucionales y suspendieron las garantías constitucionales *de facto*, aun cuando nunca lo dijeron explícitamente.⁵

Hay que destacar la acción militante de numerosos activistas y agrupamientos que defendieron una posición independiente y revolucionaria promoviendo el boicot electoral, bajo diversas modalidades y según la relación de fuerzas concreta en sus localidades, como una expresión de oposición y protesta. Especialmente significativas fueron las acciones mencionadas de los profesores democráticos en Oaxaca y Guerrero, así como las de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzina. Su actitud fue ejemplar y representa el embrión de un combate decisivo que apenas comienza.

Recordemos que la CNTE es una tendencia opositora que agrupa a cientos de miles de maestros fuera del gigantesco Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con su millón y medio de afiliados. En la asamblea general realizada inmediatamente después de las elecciones, la CNTE decidió: “emprender una oleada de protestas nacionales en defensa de la educación pública, contra la mal llamada reforma educativa, por la estabilidad laboral y para detener el proceso de la evaluación punitiva”.⁶ La lucha de los maestros vuelve así a ocupar un lugar destacado en el contexto de los movimientos sociales antagonistas. Los maestros saben que son chivos expiatorios y que una verdadera reforma educativa es imposible en el contexto de las deplorables condiciones socioeconómicas en que laboran los profesores: 23 283 escuelas sin sanitarios (11.21 por ciento) y 20 111 sin luz eléctrica (9.68 de cada 100), una de cada cinco no tiene mobiliario para los maestros y en 14 por ciento para los alumnos.⁷

⁵ *Proceso*, núm. 2013, 31 de mayo de 2015, p. 7.

⁶ Laura Toribio, “CNTE anuncia que mantendrá protestas”, *Excelsior*, en línea, 14 de junio de 2015, <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/14/1029439>>.

⁷ Tania L. Montalvo, “Cuatro de cada diez escuelas en México no tienen drenaje”, *Animal Político*, en línea, 24 de abril de 2014, <<http://>

SALDOS DE LA FARSA ELECTORAL

Dentro del rutinario quehacer electoral de la “democracia bárbara mexicana” (Revueles *dixit*), el 7 de junio sólo reflejó pálidamente los cambios profundos que se están gestando en la población. Los aspectos novedosos que aparecieron como resultado de la nueva ley electoral son mínimos e insustanciales. Uno es, sin duda, el triunfo del candidato “independiente” Jaime Rodríguez, El Bronco, en la elección para la gubernatura de Nuevo León, sede de la oligarquía industrial y financiera más conservadora e influyente del país. Este personaje viene del PRI, en donde militó durante casi tres décadas y sus lazos con los grupos poderosos de Monterrey son notorios. Su “independencia” está por verse.

Los otros candidatos independientes electos en Jalisco y en Sinaloa responden a situaciones locales cada vez más generalizadas, pero hoy como diputados que no pasan de diez, no tienen ninguna posibilidad de cambiar un sistema atornillado con cientos, miles de funcionarios y políticos oportunistas que son el cuerpo mismo de la casta política dominante, represiva y corrupta. El cambio radical del sistema político se dará desde abajo con la acción de la fuerza social revolucionaria e independiente integrada por los trabajadores y sus aliados, la masa de empobrecidos y oprimidos.

Al “claroscuro” del resultado electoral priísta deben agregarse los partidos favorecidos y el de los castigados. Empecemos por los últimos. Los más sancionados fueron los dos acompañantes del PRI en el Pacto por México del 2013-2014: el PAN y el PRD. Con 21 por ciento, el primero bajó diez puntos con respecto a 2012 y perdió decenas de diputados y piezas clave como la gubernatura de Sonora. La tendencia que se anuncia para el panismo es desastrosa, pues es el escenario de una disputa feroz por el control de la dirección entre su actual dirigente, Gustavo Madero y el ex presidente de la República, Felipe Calderón.

Con el citado 10.82 por ciento, el otro integrante del Pacto, el PRD, perdió más de 20 puntos con respecto a 2012, pagando así su nefasto papel como cómplice del PRI y protagonista central en la crisis estallada a partir de la noche de Iguala. La perspectiva para 2018 es de una casi liquidación del partido, pues perdió la que fue la joya de su corona, la mayoría absoluta en el Distrito Federal, además de la gubernatura de Guerrero y varios distritos electorales en diversos estados.⁸ La “izquierda oficial” encabezada por la conciliadora y torpe dirección de los llamados Chuchos no tuvo la menor posibilidad de enfrentarse al vendaval al que la arrojó la crisis de Iguala. Encubriendo toda clase de abusos, instrumentando fraudes electorales (especialmente donde podía, como en el Distrito Federal) y cometiendo un error tras otro, mostraron que en esta crisis, que puede ser terminal, el peor enemigo del PRD es el propio PRD.

Los dos partidos que salieron beneficiados fueron el PVEM y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado y dirigido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace tres años tras su ruptura con el PRD. En el caso del PVEM, su exitosa cosecha de diputados es el resultado de la operación directamente dirigida por Los Pinos para que su aliado incondicional lograra conseguir las fuerzas necesarias para darle al PRI la necesaria fracción parlamentaria mayoritaria que no podía conseguir por sí solo. El Verde es un engendro cuyos gastos escandalosos en propaganda han provocado una indignación tal como para que surgiera un movimiento con el fin de quitarle el registro. Representa siniestramente un ejemplo perfecto de una franquicia política, concebida por varios riquísimos empresarios con el único objetivo de influir en las decisiones gubernamentales. Su nombre de “verde” no tiene nada que ver con algún compromiso ecológico. Baste señalar que se ha hecho tristemente famosa su demanda de instaurar la pena de muerte.

⁸ Judith Amador Tello, *op. cit.*

EL CASO DE MORENA

El inusitado éxito de Morena es el reverso del colapso perredista. Los tres millones de votos que consiguió —posiblemente muchos más, dadas las impugnaciones en varias delegaciones de la capital— fueron depositados de manera abrumadora en las urnas del Distrito Federal. En la provincia, Morena logró algunas victorias, pero ninguna comparable con la de la capital, baluarte del voto de izquierda. Los votos para Morena pertenecen en gran parte a la tremenda votación de castigo al PRD. Al perder la mitad de su electorado en el Distrito Federal, se le escapó su mayoría en la Asamblea Legislativa y convirtió a Morena en la directa beneficiaria: 22 asambleístas contra 19 del PRD.⁹ Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logró importantes avances para su meta fundamental: conseguir la victoria en la elección presidencial de 2018, algo que ratificó inmediatamente después del 7 de junio, corroborando así la naturaleza básicamente electoralista de Morena.

No se necesita mucha clarividencia para prever que las labores de Morena en los próximos tres años estarán prioritariamente dedicadas a preparar la campaña presidencial de AMLO. Una nueva versión de la tarea de Sísifo a la que el progresismo político, sindical, intelectual y académico ha subordinado a las masas rebeldes de manera sistemática en los últimos 25 años. El programa de Morena no es cualitativamente diferente al del PRD, su diferencia sustancial es la propia personalidad de AMLO, un líder que se inscribe en la genealogía de la larga tradición del caudillismo político. Su colocación dentro del espacio de lo que en México se ha llamado izquierda en las tres últimas décadas es la consecuencia directa de la crisis gravísima del movimiento de los trabajadores y de las organizaciones socialistas y comunistas.

El fundamento de la estrategia política obradorista, religiosamente respetuoso de la legislación vigente, consiste en

⁹ “Morena obtiene 22 diputaciones en la ALDF”, *La Jornada*, en línea, 14 de junio de 2015, <<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/14/iedf-asigna-26-diputaciones-de-representacion-proporcional-8654.html>>.

preparar la movilización de millones de votantes el día de las elecciones para —supuestamente— garantizar la victoria. No hay sitio en su estrategia para las huelgas, los paros nacionales y parciales, la organización proletaria para la conquista de los objetivos clasistas. Los fraudes colosales de 1988, 2006 y 2012 —que en las dos últimas ocasiones fueron perpetrados contra su propia candidatura— no le han enseñado mucho, pues parece creer que Peña Nieto será diferente a Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón y que —ahora sí— podrá alcanzar la victoria en las próximas elecciones presidenciales.

No olvidemos que su discurso es profundamente conservador en cuestiones clave como el feminismo y los derechos de los homosexuales. Su defensa *light* de los derechos humanos se demostró palmariamente con su ligereza con motivo de la desaparición de los 43 normalistas. Finalmente, su liberalismo nacionalista es de un arcaísmo que simplemente no se adecúa al mundo globalizado de hoy en el cual México está profundamente inserto. Es evidente, por otro lado, que en Morena militan o simpatizan muchas mujeres y hombres valiosos y es de esperarse que tarde o temprano se percatarán de la realidad. Muchas de estas personas serán afines a posturas de acuerdo con una nueva izquierda organizada, hoy más necesaria que nunca.

Los sectores que promovieron el boicot electoral fueron en mayor parte grupos del DF, Oaxaca y Guerrero pero, aunque en dimensiones menores, se expresaron en toda la República. Contrario a lo que piensan, por ejemplo, Armando Bartra y Octavio Rodríguez Araujo, los que optaron por el boicot no son extremistas trasnochados, sino las semillas de la izquierda auténtica e independiente que necesita el país.¹⁰ El anulismo también está vinculado de alguna forma con el boicot, ya que la anulación del voto se puede contabilizar y sus dimensiones ofrecen un panorama indirecto del boicot. Se-

¹⁰ Entrevista con Armando Bartra. Judith Amador Tello, *op. cit.*; Octavio Rodríguez Araujo, “Reflexión preliminar sobre las elecciones”, *La Jornada*, 11 de junio de 2015.

gún el INE, los votos nulos fueron 4.7 por ciento en la escala nacional —por un total de 1 900 881—; sin embargo, en el DF el porcentaje fue mayor alcanzando 7.0 por ciento, un dato que debería de poner a pensar a sus detractores.¹¹ ¿Cómo es posible que en la ciudad baluarte de la izquierda institucional, el voto se desplome de esta manera?

La respuesta es fácil. En el DF, Guerrero, Oaxaca y en algunas otras partes del país existe ya una base de masas con una conciencia clara de lo que significa la verdadera lucha revolucionaria. Los votos nulos significaron más de la mitad de los obtenidos por Morena. Todo esto según las cifras del INE, que no es especular considerar que están disminuidas. Si a esto se agregan quienes optaron por un boicot directo, los cuales son, por supuesto, muy difíciles de cuantificar, el resultado nos permite considerar que en el país hay más de dos millones de hombres y mujeres que entienden que el combate contra el Estado burgués mexicano y todo lo que representa debe darse a partir de una estrategia revolucionaria, independiente, sin ninguna ilusión en las negociaciones con el gobierno.

¿ADÓNDE VA MÉXICO?

Escribimos las líneas de este epílogo sobre las elecciones de 2015, circunstancia política determinada en gran medida por la noche de Iguala, cuando se cumplen nueve meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En unas cuantas semanas, un año habrá transcurrido y la sombra nefasta de ese crimen de Estado sigue irguiéndose sobre el panorama nacional. Mientras tanto, nuevos hechos ominosos ratifican nuestro análisis. Otra terrible matanza ocurrió en Tanhuato, Michoacán, con modalidades similares a las que vimos en Tlatlaya, Apatzingán e Iguala.¹²

¹¹ “Anuncian los resultados electorales oficiales”, *Excélsior*, en línea, 14 de junio de 2015, <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/14/1029431>>.

¹² “11 de los 43 muertos en Tanhuato presentaban signos de tortura, dicen familiares al *Washington Post*”, *Animal Político*, en línea, 30 de mayo de 2015, <<http://www.animalpolitico.com/2015/05/11-de-los-43->

Hay más. Una pieza clave de la versión difundida por la PGR sobre la desaparición de los 43 —misma que hemos intentado desmontar pieza por pieza en el ensayo introductorio— es que los estudiantes fueron detenidos y llevados a la base de la policía municipal de Iguala *antes* de ser entregados al cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, recientes investigaciones de la revista *Proceso* cuentan otra historia. La persona que debió haber recibido a los estudiantes en la comandancia de policía la noche del 26 en Iguala, el juez de barandilla Ulises Bernabé García declara tajantemente que no recibió a ningún estudiante y lo hace desde Arizona, en donde se encuentra esperando respuesta a su petición de refugio como perseguido político, pues teme ser encarcelado o asesinado por haber testificado lo anterior ante el Ministerio Público.¹³ Así las cosas, la famosa “verdad histórica” de la PGR se cae como castillo de naipes y cobra consistencia nuestra hipótesis inicial: el negro historial del matrimonio Abarca sirvió para encubrir a un crimen de Estado, como no se cansan de repetirlo los padres de los 43 normalistas.¹⁴

Dicho esto, podemos volver a la pregunta inicial: ¿se ha producido el despertar de México que tanto hace falta? Sí y no. No en la medida que deseábamos, pero sí en la medida en que la demanda del boicot de las elecciones no sólo como castigo a un sistema de gobierno corrupto y represivo, sino como una convocatoria a luchar de manera firme e intransigente, surgió de la justa ira de los compañeros y los familiares de los 43 normalistas ante el cinismo, la hipocresía y la mentira de gobernantes, medios de comunicación y partidos políticos.

Muchas organizaciones de trabajadores, miles de hombres y mujeres en todo el país hicieron suya esta lucha. El gran miedo de los personeros del sistema político imperante que se alzó sobre sus cabezas durante las pasadas jornadas electo-

muertos-en-tanhuato-presentaban-signos-de-tortura-dicen-familiares-al-washington-post/>.

¹³ Anabel Hernández y Steve Fisher, “Los normalistas nunca llegaron a la comandancia”, *Proceso*, núm. 2015, *op. cit.*

¹⁴ Sergio Ocampo Arista, “El ejército tiene la responsabilidad, insisten padres de los 43 desaparecidos”, *La Jornada*, 21 de junio de 2015.

rales fue precisamente el boicot al que conjuraron con la avalancha propagandística. Ha sido para los sectores democráticos y revolucionarios independientes una gran experiencia de lucha que queda como lección para el futuro. El propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo admitió al reconocer que “en las elecciones presidenciales de 2018, el discurso del boicot a las elecciones puede ser más atractivo y sería una situación más compleja para el sistema democrático mexicano”.¹⁵

Vienen tiempos turbulentos, tiempos confusos, llenos de imprevistos, dudas y retos en los que sólo la capacidad creativa y la imaginación de las masas populares podrá confrontarlos y superarlos, en el proceso de la vida misma. Ése, precisamente ése, es el miedo de las clases dominantes. Elocuente al respecto es la última y póstuma entrevista de Manuel Camacho Solís, uno de los políticos más lúcidos entre los que ocuparon la cumbre del poder. Preguntado sobre el futuro de la izquierda institucional, contestó, entre otras cosas:

Nadie va a poder arreglar esto bien, porque sigue habiendo un mal resultado económico, porque la seguridad sigue siendo difícil y, por más exitoso que sea, va a ser muy poco lo que va a llegar abajo. [...] Es absolutamente impredecible para mí el 2018.¹⁶

Este miedo de los políticos oficialistas es una señal muy significativa. Las perspectivas del surgimiento de un México y un mundo nuevos *por venir* no pueden pertenecer a quienes medran y se benefician del actual estado de cosas, sino a los trabajadores y sus aliados, los oprimidos de todo tipo y género que son la mayoría abrumadora de la población, aquellos que como han dicho los clásicos: “no tienen nada que perder sino sus cadenas y en cambio tienen un mundo que

¹⁵ Alonso Urrutia, “Los comicios fueron rehenes de demandas sociales, dice Córdova”, *La Jornada*, 16 de junio de 2015.

¹⁶ Héctor de Mauleón, “Lo que define a la oposición es el régimen. Una entrevista con Manuel Camacho Solís”, *Nexos*, en línea, 5 de junio de 2015, <<http://www.nexos.com.mx/?p=25176>>.

ganar”. Los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pertenecen a esa juventud que sabe que con la lucha firme, lúcida y solidaria se puede abrir este oscuro panorama que se abate sobre el pueblo mexicano. Para que ese combate triunfe hay que unirlo con el de los trabajadores, quienes más tarde que temprano asaltarán el cielo como ya lo han hecho varias veces en la historia del país. Y entonces la victoria será nuestra.

México, D.F. 26 de junio de 2015

SOBRE LOS AUTORES

MANUEL AGUILAR MORA. Fundador y dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1976 y de la Liga de Unidad Socialista (LUS) en 1996. Actualmente es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Ha ejercido la labor periodística en varias publicaciones nacionales y extranjeras; es autor y coautor entre otros libros de: *El bonapartismo mexicano* (dos tomos) y *El escándalo del Estado. Una teoría del poder político en México*. Actualmente prepara un libro sobre sus memorias.

CLAUDIO ALBERTANI. Activista, periodista y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Colaborador de varias revistas en México, Estados Unidos y Europa; es autor entre otras obras de *El espejo de México. Crónicas de barbarie y resistencia* (Alter Costa-Amic, 2008). Coordinador del libro *Pienso luego estorbo. Textos en defensa de la UACM* (Juan Pablos, 2012; 2a. edición, 2013) y la edición crítica en francés de los *Carnets (1936-1947)* de Victor Serge, de próxima publicación en México. En la actualidad es responsable del Centro Vlady de la UACM.

FLAVIANO BIANCHINI. Ambientalista y activista de los derechos humanos. Fundador y director de Source International, organización internacional que se ocupa de los derechos ambientales y los derechos indígenas con proyectos en todo el mundo.

RAMÓN ESPINOSA CONTRERAS. Egresado de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) de cuya Facultad de Filosofía y Letras ha sido director. Autor y coautor entre otros libros de *Diálogo entre Hegel y Marx sobre el método*; *Kant, ética y filosofía de la violencia en la modernidad* y *El hombre del siglo XXI. Educar para la paz y la convivencia humana*. Actualmente prepara dos libros, uno de la historia y la sociedad de Guerrero y otro de sus memorias.

CARLOS FAZIO. Periodista de investigación y académico. Es profesor-investigador del posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su último libro, *Terrorismo mediático en México. La construcción social del miedo en México*, recibió una mención honorífica en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013, organizado por el Ministerio de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela.

FLOR GOCHE. Periodista de investigación. Desde 2009 publica en las revistas *Contralínea* y *Fortuna. Negocios y Finanzas*. Estudió Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cursó el diplomado en Derechos Humanos para Periodistas y Profesionales de la Comunicación que imparte la Universidad Iberoamericana. Sus principales líneas de investigación son: educación básica, media superior y superior; derechos humanos; desapariciones forzadas; feminicidios, y movimientos estudiantiles y sociales.

ENRIQUE GONZÁLEZ ROJO ARTHUR. Poeta que ha dedicado su vida al magisterio, la filosofía, la literatura y el compromiso político con las clases explotadas y oprimidas. Es autor, entre otras obras, de *Para deletrear el infinito*, colección de poemas; *Obra filosófico-política* en seis tomos (1986); *La actualidad de*

Marx en el siglo XXI (1999); *Manifiesto autogestionario* (2003, inédito), y *En marcha hacia la concreción. En torno a una filosofía del infinito* (2007). Recibió el premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores (1976) y el premio Nacional de Poesía y Cuento “Benemérito de América” (2002), entre otras preseas.

NORBERTO HERNÁNDEZ. Pintor y muralista. Algunas de sus obras se encuentran en el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO. Coordinador de la sección de Opinión del diario *La Jornada*. A mediados de los años setenta fue uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y asesor de organizaciones campesinas y cafetaleras. Participó en los Diálogos de San Andrés y fue secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación para los Acuerdos de Paz en Chiapas.

DAVID HUERTA. Poeta. Imparte clases de literatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su obra reunida, con el título *La mancha en el espejo*, fue publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2013. En 2005 le otorgaron el premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores por su trayectoria en las letras de México. El poema “Ayotzinapa”, que incluimos en la presente edición, ha sido traducido a 23 lenguas y ha circulado con éxito por internet y en diversas publicaciones en papel.

MARIO MARLO. Director de la revista *Somos el Medio* y fotoperiodista. Ha cubierto la migración centroamericana en la frontera sur y los hechos de Iguala.

RAFAEL MIRANDA REDONDO. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Alumno titular del diplomado de la EHESS (París), con la dirección de Cornelius Castoriadis. Profesor invitado, conferencista y responsable de semina-

rios. Coordinador de la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis. Miembro del colectivo de bibliógrafos de Cornelius Castoriadis/Agora International.

ROMÁN MUNGUÍA HUATO. Profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado como académico en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Xochimilco y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es articulista en diversos diarios, suplementos y revistas académicas y políticas.

OMAR RESÉNDIZ, *CHIRÍN*. Andante de los cuatro rumbos. Vigilante y curioso, para no decir chismoso, de la escena social y política, de ahí el oficio de monero y humorista gráfico. Testigo de su tiempo, se define de corazón canino que sabe ser amigo.

*La noche de Iguala
y el despertar de México.*
Textos, imágenes y poemas contra la barbarie
se terminó en julio de 2015
en Imprenta de Juan Pablos, S.A.
2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19
Colonia del Carmen, Del. Coyoacán
México 04100, D.F.
<juanpabloseditor@gmail.com>

1 000 ejemplares



AYOTZINAPA

43

Textos de:

*Manuel Aguilar Mora ↻ Claudio Albertani ↻ Flaviano Bianchini
Ramón Espinosa Contreras ↻ Carlos Fazio ↻ Flor Goche
Enrique González Rojo Arthur ↻ Luis Hernández Navarro
David Huerta ↻ Rafael Miranda Redondo ↻ Román Munguía Huato*

Imágenes de:

Norberto Hernández ↻ Mario Marlo ↻ Omar Reséndiz, Chirín

